UNIVERSIDAD DE MENDOZA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

CICLO: DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS

Patrimonio cultural inmaterial.

Su protección en la legislación de Mendoza.

Nombre del doctorando: Abog. Pablo Darío Ortiz Scilipoti

Director: Dr. Mauricio Pinto

Mendoza, agosto de 2021

Esta tesis está dedicada a mis hijas Lara Martina y Paulina Luján; a mi papá y a mi hermano; a las memorias de mi mamá Loly, de mi hermana Daniela y de mis abuelos Ñata, Donato, Carlos y Chicha; a mis amigos; a todas las personas que me fueron alentando en cada una de las etapas y a las que se alegraron conmigo.

Quiero agradecer especialmente a mi director de tesis, Dr. Mauricio Pinto por la paciencia y la dedicación. Es un honor para mi haber contado con su guía académica.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL..... 5

ABREVIACIONES..... 19

INTRODUCCIÓN..... 23

a).- Estado de la investigación sobre el tema..... 24

b).- Justificación y fundamentación del problema a investigar. Objetivos..... 25

- Objetivo General..... 27
- Objetivos Específicos..... 27

c).- Sustento teórico y formulación de hipótesis..... 27

d).- Metodología de la investigación. Delimitación..... 28

CAPÍTULO 1 – Consideraciones generales..... 33

a).- Ambiente y Cultura. Algunas aproximaciones..... 33

b).- Patrimonialización de la cultura: Incorporación de los bienes al patrimonio cultural..... 35

c).- Los valores del patrimonio cultural..... 41

d).- Consideración económica de los bienes culturales..... 43

e).- Las características económicas del patrimonio cultural..... 44

- Bienes únicos. Bienes frágiles..... 44
- Bienes públicos..... 47
- Bienes generadores de externalidades..... 48
- Bienes colectivos..... 49

f).- Consumo de patrimonio cultural..... 52

g).- Patrimonio cultural y desarrollo sostenible..... 53

- Relación entre cultura y desarrollo..... 53
- Surgimiento de la noción de desarrollo sostenido o sostenible..... 55
- Contribuciones del patrimonio cultural al desarrollo sostenible..... 57

h).- Necesidad y justificación de la protección..... 60

CAPÍTULO 2 - Antecedentes de la protección cultural en el ámbito internacional hasta el surgimiento de la UNESCO 63

a).- Desarrollo del expolio cultural y los intentos de protección..... 63

- Desde la Antigüedad hasta el siglo XIX..... 63

- Desde el siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914)..... 69

i. Código Lieber..... 70

ii. Declaración de Bruselas..... 72

iii. Manual de Oxford..... 73

iv. Convenciones de La Haya de 1899 y 1907..... 74

- Desde el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) hasta el comienzo de la Segunda (1939). Período entre guerras..... 78

i. Algunos intentos fallidos. Sociedad de las Naciones..... 79

ii. Cláusulas de restitución de objetos de arte e históricos contenidas en los tratados de finalización de la guerra..... 80

iii. Resolución para la Protección de Documentos Arqueológicos..... 81

iv. Carta de Atenas..... 82

v. Tratado de Washington o Pacto Roerich..... 84

vi. Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico..... 85

vii. Recomendación para la Conservación de Regiones Naturales y Lugares Históricos..... 86

b).- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)..... 91

- Antecedentes..... 88
- Nacimiento de la UNESCO..... 88
- Propósitos y funciones..... 89
- Miembros..... 90
- Órganos..... 91

i. La Conferencia General..... 91

ii. Consejo Ejecutivo..... 93

iii. Secretaría..... 94

iv. Comisiones Nacionales de Cooperación..... 95

- Relaciones con la ONU..... 96

i. Representación recíproca..... 96

ii. Recomendaciones de las Naciones Unidas..... 97

iii. Intercambio de información y de documentos..... 98

iv. Ayuda al Consejo de Seguridad, al Consejo de Administración Fiduciaria y relaciones con la Corte Internacional de Justicia..... 98
v. Centros regionales..... 99
vi. Servicios de estadística, administrativos y técnicos..... 99
- Relaciones con otros organismos y organizaciones intergubernamentales especializados..... 100
i. Algunos colaboradores de la UNESCO en la protección del patrimonio mundial..... 101
- Condición jurídica de la UNESCO..... 103
- Actividad normativa internacional de la UNESCO..... 103
i. Convenciones..... 104
ii. Recomendaciones..... 105
iii. Declaraciones..... 105
CAPÍTULO 3 – La protección del PCI..... 107
a).- Consideraciones sobre el PCI..... 107
b).- Hacia la protección del PCI..... 108
- De 1946 a 1960. Inexistencia de la noción de bienes patrimoniales inmateriales..... 109
- De 1960 y 1970. Aparición de la noción de patrimonio de la humanidad... 113
- De 1970 a 1980. Consolidación de la noción de patrimonio cultural de la humanidad..... 116
- De 1980 y 2000. Enfoque hacia la faz inmaterial de la cultura..... 120
- Desde el año 2000 al 2003. Del folclore al PCI 126
c).- La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y sus normas complementarias..... 129
- Disposiciones Generales..... 131
i. Finalidades de la Convención..... 131
ii. Definiciones..... 131
- ¿Qué se entiende por PCI?..... 131
- ¿Cuáles son los ámbitos o manifestaciones del PCI?..... 131
- ¿Qué se entiende por salvaguardia?..... 134
iii. Relación con otros instrumentos internacionales..... 135
- Órganos de la Convención..... 135

i. Asamblea General de los Estados Partes..... 135
ii. Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI..... 136
- Salvaguardia del PCI en el plano nacional..... 138
  i. Funciones de los Estados Partes..... 138
  ii. Inventarios. Identificar para salvaguardar..... 138
  iii. Participación de las comunidades, grupos e individuos..... 139
  iv. Otras medidas de salvaguardia..... 141
  v. Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades..... 142
- Salvaguardia del PCI y desarrollo sostenible en el plano nacional..... 143
  i. Desarrollo social inclusivo..... 144
  ii. Seguridad alimentaria..... 144
  iii. Atención médica y sanitaria..... 145
  iv. Educación de calidad..... 146
  v. Igualdad de género..... 146
  vi. Acceso al agua potable y gestión sostenible del agua..... 147
  vii. Desarrollo económico inclusivo..... 148
  viii. Generación de ingresos y medios de subsistencia sostenibles, empleo productivo y trabajo decente..... 149
  ix. Impacto del turismo en la salvaguardia del PCI y viceversa..... 149
  x. Sostenibilidad medioambiental..... 150
  xi. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo..... 151
  xii. Impactos medioambientales en la salvaguardia del PCI..... 152
  xiii. Resiliencia de las comunidades frente a los desastres naturales y el cambio climático..... 152
  xiv. PCI y paz..... 152
  xv. Cohesión social y equidad..... 153
  xvi. Prevención de litigios y solución de conflictos..... 154
  xvii. Restablecimiento de la paz y la seguridad..... 154
  xviii. El logro de una paz duradera..... 155
- Salvaguardia del PCI en el plano internacional..... 155
  i. Lista representativa del PCI de la humanidad..... 155

ii. Lista del PCI que requiere medidas urgentes de salvaguardia..... 156
iii. Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del PCI..... 157
iv. Traspaso de un elemento de una Lista a la otra o supresión de un elemento de una de ellas. Modificación del nombre de un elemento inscripto..... 159
- Cooperación y asistencia internacionales..... 159
i. Cooperación..... 160
ii. Objetivos de la asistencia internacional..... 160
iii. Formas de asistencia internacional..... 160
iv. Solicitudes y requisitos para la prestación de asistencia internacional..... 161
v. Papel de los Estados Partes beneficiarios..... 162
- Fondo para la salvaguardia del PCI..... 163
i. Contribuciones de los Estados Partes al Fondo..... 164
ii. Campañas internacionales de recaudación de fondos..... 165
- Presentación de Informes..... 165
i. Informes de los Estados Partes al Comité..... 165
ii. Informes de los Estados Partes sobre los elementos inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia..... 167
iii. Informes del Comité..... 168
d).- Utilización del emblema de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial..... 169
- Normas respectivamente aplicables a la utilización del emblema de la UNESCO y del emblema de la Convención..... 169
- Derechos de utilización..... 169
- Autorización del uso..... 170
- Criterios y condiciones de utilización del emblema a efectos de un patrocinio..... 170
- Normas gráficas..... 171
- Protección..... 171

e).- Principios éticos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial..... 172

CAPÍTULO 4 - Políticas de salvaguardia del PCI en América Latina..... 175

a).- Antecedentes y situación de las políticas nacionales de salvaguardia del PCI. 176

b).- Desarrollo del marco legal..... 181

c).- Institucionalidad..... 184

d).- Impacto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial..... 186

e).- Aspectos conceptuales..... 188

f).- Aspectos metodológicos..... 192

g).- Aspectos presupuestarios..... 195

h).- PCI de países latinoamericanos inscripto en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad..... 196

- Argentina..... 197
  - i. El tango..... 197
  - ii. El filete porteño de Buenos Aires..... 197
- Bolivia..... 198
  - i. La cosmovisión andina de los kallawayas..... 198
  - ii. El carnaval de Oruro..... 199
  - iii. Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos... 200
  - iv. El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura yampara..... 201
  - v. Recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita... 201
- Brasil..... 202
  - i. Las expresiones orales y gráficas de los wajapi..... 202
  - ii. La Samba de Roda de Recôncavo de Bahía..... 203
  - iii. Frevo: arte del espectáculo del carnaval de Recife..... 204
  - iv. El "Círio de Nazaré": procesión de la imagen de Nuestra Señora de Nazaret en la ciudad de Belem (Estado de Pará)..... 205
  - v. El círculo de capoeira..... 206
- Chile..... 207
  - i. El baile chino..... 207
- Colombia..... 208
  - i. El espacio cultural de Palenque de San Basilio..... 208

ii. El carnaval de Barranquilla..... 209
iii. Las procesiones de Semana Santa de Popayán..... 210
iv. El Carnaval de Negros y Blancos..... 210
v. El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü'üi ("palabrero")..... 211
vi. Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí..... 212
vii. Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó..... 213
viii. Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas..... 213

- Costa Rica..... 214
  i. La tradición del boyeo y las carretas..... 214
- Cuba..... 215
  i. La Tumba Francesa..... 216
  ii. La rumba cubana..... 217
  iii. El punto..... 217
  iv. Las Parrandas de la región central de Cuba..... 218
- Ecuador..... 219
  i. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara..... 219
  ii. Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla..... 220
  iii. Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas..... 220
- Guatemala..... 220
  i. La tradición del teatro bailado Rabinal Achí..... 220
  ii. La lengua, la danza y la música de los garífunas..... 222
- México..... 222
  i. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos..... 222
  ii. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado..... 223

iii. La ceremonia ritual de los Voladores..... 224
iv. Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo..... 225
v. La pirekua, canto tradicional de los p'urhépechas..... 226
vi. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán..... 226
vii. El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta..... 227
viii. La charrería, tradición ecuestre en México..... 228
ix. La romería de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada de la Virgen..... 229

- Perú..... 229
  i. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara..... 229
  ii. El arte textil de Taquile..... 229
  iii. La huaconada, danza ritual de Mito..... 230
  iv. La danza de las tijeras..... 231
  v. La peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit'i..... 232
  vi. Conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Q'eswachaka..... 233
  vii. La fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno..... 234
  viii. La danza del wititi del valle del Colca..... 234
  ix. Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo..... 235
- Uruguay..... 236
  i. El tango..... 236
  ii. El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria..... 236
- Venezuela..... 237
  i. Diablos Danzantes de Venezuela..... 237
  ii. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire..... 238
  iii. Conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua..... 239
  iv. El Carnaval de El Callao: representación festiva de una memoria e identidad cultural..... 239

CAPÍTULO 5 - El PCI en el orden nacional argentino..... 241

a).- Evolución de la normativa de regulación de patrimonio cultural en la República Argentina antes de la reforma constitucional de 1994..... 242

- La normativa patrimonial antes de la creación de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos..... 243
- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y su continuadora: La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos..... 246
- La normativa patrimonial después de la creación de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos: La primera constitucionalización del patrimonio cultural..... 250

b).- La reforma de 1994: Nueva constitucionalización del patrimonio cultural en Argentina..... 253

- Sustentabilidad cultural..... 256
- Leyes de Presupuestos Mínimos..... 257
- Concepto y contenido de las leyes de Presupuestos Mínimos..... 259
- Leyes de Presupuestos Mínimos en materia de patrimonio cultural en Argentina. Posibles contenidos de *lege ferenda*..... 260
    i. Inventario o Registro de bienes culturales..... 261
    ii. Uniformidad de la legislación aplicable..... 263
- ¿La Ley 25.675 puede considerarse una ley de presupuesto mínimo de protección del patrimonio cultural?..... 264
    i. Operatividad de sus disposiciones..... 267

c).- Legislación especial reguladora de actividades o expresiones culturales..... 268

- Ley 24.633: Regulación de la circulación de obras de arte..... 269
- Ley 24.684: Declaración del tango como patrimonio cultural..... 270
- Ley 24.800: Ley Nacional del Teatro..... 270
- La Ley 24.993: Aprobación del Protocolo de Integración Cultural del Mercosur..... 270
- Ley 25.197: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural..... 271
- Ley 25.257: Aprobación de la Convención del Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente..... 274
- Ley 25.517: Disposición de restos mortales de aborígenes..... 275

- Ley 25.568: Aprobación de la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas..... 276
- Ley 25.675: Ley General del Ambiente..... 276
  i. Principios de la política ambiental..... 276
  ii. Competencia judicial..... 282
  iii. Instrumentos de la política y la gestión ambiental..... 284
    - El ordenamiento ambiental del territorio..... 284
    - La evaluación de impacto ambiental y el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas..... 285
    - La educación ambiental..... 286
    - El sistema de diagnóstico e información ambiental.....287
    - El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable..... 287
  iv. Participación ciudadana..... 288
  v. Seguro ambiental y fondo de restauración..... 289
  vi. Daño ambiental..... 289
  vii. Del Fondo de Compensación Ambiental..... 292
- Ley 25.743: Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico..... 292
- Ley 26.118: Aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial..... 294
- Ley 26.305: Aprobación de la Convención sobre la Protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales..... 294
- Ley 26.852: Día Nacional de los afroargentinos y de la cultura afro..... 295

d).- Autoridad de aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y demás organismos relacionados..... 295

- Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales..... 295
- Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano..... 296
- Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"..... 297

- Sistema de Información Cultural de la Argentina..... 298
- Fondo Nacional de las Artes..... 299
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas..... 299

e).- Relevamiento de manifestaciones del PCI en Argentina..... 300

- Buenos Aires..... 300
  i. Confección de trajes tradicionales para ceremonias de candomblé...300
  ii. El Pato.....301
  iii. Fiesta de La Pastora..... 301
  iv. Torta Argentina de Dolores..... 301
- Catamarca..... 301
  i. Seda del coyoyo..... 302
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires..... 302
  i. Baile social milonguero..... 302
  ii. Baile Salón/Tango Pista..... 302
  iii. Baile Tango Canyengue..... 303
  iv. Baile Tango Escenario..... 303
  v. Códigos de Milonga y del Baile..... 303
  vi. Tango Nuevo..... 304
  vii. Escritura y lectura de la Torá..... 304
  viii. Madagh..... 304
- Corrientes..... 304
  i. Celebraciones de las capillas domésticas..... 305
  ii. Chamamé..... 305
- Entre Ríos..... 305
  i. El uso de la corneta en el Corso Popular "Matecito" de Gualeguaychú..... 305
  ii. Mate..... 305
- Formosa..... 306
  i. Fiesta de San Juan..... 306
- Jujuy..... 306
  i. Arete Guasú..... 306
  ii. Doctrinas de Semana Santa..... 306
- La Pampa..... 307

i. Asado con cuero..... 307
ii. La Payada en La Pampa..... 307
iii. We Tripantu..... 307
- Misiones..... 308
i. Avachikui..... 308
ii. Jaguareté Korá, Chivi Korá (el corral del jaguareté)..... 308
iii. Mbo'y..... 308
iv. Petyngua, el uso y elaboración de la petynguá..... 308
- Neuquén..... 309
i. Cantoras del norte neuquino..... 309
ii. Crianceros trashumantes de la zona norte de la provincia del Neuquén..... 309
iii. Wiñoy Tripantv – Xipantv..... 309
- Santa Cruz..... 310
i. La Quillanguería patagónica..... 310
- Santa Fe..... 310
i. Fiestas Patronales de Piñero..... 310
ii. Milonga pa recordarte..... 310
- Santiago del Estero..... 311
i. Soguería tradicional criolla en Loreto..... 311
ii. Técnica de tejido artesanal en telar de estaca..... 311
CAPÍTULO 6 - PCI en las Provincias argentinas..... 313
a).- Reseña de la legislación de protección en cada una de las provincias..... 313
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires..... 313
- Buenos Aires..... 317
- Catamarca..... 320
- Córdoba..... 320
- Corrientes..... 322
- Chaco..... 325
- Chubut..... 329
- Entre Ríos..... 331
- Formosa..... 332
- Jujuy..... 334

- La Pampa..... 336
- La Rioja..... 338
- Misiones..... 340
- Neuquén..... 341
- Río Negro..... 343
- Salta..... 344
- Santa Cruz..... 346
- Santa Fe..... 347
- San Juan..... 348
- San Luis..... 350
- Santiago del Estero..... 352
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur..... 353
- Tucumán..... 354

CAPÍTULO 7 - El PCI en la Provincia de Mendoza..... 357

a).- Reseña histórica de la protección del patrimonio cultural en Mendoza..... 358

b).- Protección de bienes que conforman el patrimonio cultural de la Provincia de Mendoza..... 362

- Ley 6.034..... 362
  - i. Declaración genérica del fin legal. Objetivo de la ley..... 363
  - ii. Definición y enumeración de los bienes protegidos. Sólo patrimonio cultural material..... 363
- Decreto reglamentario 1.882/2009..... 369
  - i. Sobre la aplicación de las normas para la gestión del patrimonio cultural.....369
  - ii. Definición de bien patrimonial. Solo patrimonio cultural material.... 369
  - iii. Disposiciones específicas sobre cada tipo de bien patrimonial..... 370
- Disposiciones específicas para la salvaguardia del PCI..... 371
  - i. Definición..... 371
  - ii. Autoridad de aplicación..... 373
  - iii. Funciones de la autoridad de aplicación vinculadas con el patrimonio inmaterial..... 374
  - iv. Sobre los objetos materiales asociados o relacionados..... 374

v. ¿Cómo es la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales en Mendoza? 375
vi. ¿Se aplica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Mendoza? 378
vii. Efectos de la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales de la cultura 379
- Ley 5.961 de Preservación del Medio Ambiente 380
i. Principios de política ambiental 380
ii. La defensa jurisdiccional del patrimonio cultural 381
iii. El patrimonio cultural y la evaluación de impacto ambiental en Mendoza 382
iv. Educación ambiental 386
- Ley 6.045 de Protección de Áreas Naturales provinciales 386
- Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial 388
- Manifestaciones concretas de PCI en Mendoza 390
i. Tango 391
ii. Fiesta Nacional de la Vendimia 391
iii. Tonada cuyana 392
iv. Festa in Piazza 392
v. Otras manifestaciones en carpeta 392
vi. Alcances de las declaraciones 393
c).- Valoración integral del régimen de protección del PCI en Mendoza 397
CONCLUSIONES 401
BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 411

ABREVIACIONES

a.C.: Antes de Cristo.

Art. o arts.: Artículo o artículos.

CICI: Comisión Internacional de Cooperación Intelectual.

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja.

C.N. o Const. Nac.: Constitución Nacional.

Cám. Cont. Adm. y Tribut.: Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Cám. Cont. Adm.: Cámara en lo Contencioso Administrativo.

CAME: Conferencia de Ministros Aliados de Educación.

CEPA: Comisión Económica para África.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPE: Comisión Económica para Europa.

CESPAO: Comisión Económica y Social para Asia Occidental.

CESPAP: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico.

CIM: Consejo Internacional de la Música.

CNCA: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Chile).

Cód. Civ. y Com.: Código Civil y Comercial de la Nación.

Cód. Penal o Cód. Pen.: Código Penal de la Nación.

COFEMA: Consejo Federal del Medio Ambiente.

Comp.: Compilador/a.

Conf.: Conforme / confrontar.

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Coord.: Coordinador/a.

CRESPIAL: Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina.

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación.

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación.

d.C.: Después de Cristo.

Dir.: Director/a.

ed.: Edición.

EMC: Estrategia Mundial para la Conservación.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

FCA: Fondo de Compensación Ambiental.

FCJ y S. UNLP: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

FNA: Fondo Nacional de las Artes.

FNPM: Fundación Nórdica del Patrimonio Mundial.

H.C.D.N.: Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

I.I.C.I.: Instituto Internacional de Cooperación Intelectual.

ICCROM: Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property.

ICDA: Instituto Catamarqueño de Desarrollo Artesanal.

ICOM: International Council of Museums.

ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios / International Council on Monuments and Sites.

INAPL: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

Inc.: Inciso.

IPHAN: Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Brasil).

L.H.N.: Lugar Histórico Nacional.

L.L.: Editorial La Ley

LPMPA: Leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.

M.H.N.: Monumento Histórico Nacional.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

OCPM: Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial.

OEA: Organización de Estados Americanos.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

ONG: Organización No Gubernamental.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OP. CIT.: Opus citatum u obra citada.

PÁG.: Página.

PCI: Patrimonio cultural inmaterial.

PNUMA: Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PROARBO: Sistema de Protección y Promoción del Artesano y las Artesanías Bonaerenses.

SCJ: Suprema Corte de Justicia.

SInCA: Sistema de Información Cultural de la Argentina.

SPHAN: Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Brasil).

T.: Tomo.

TICs: Tecnologías de información y comunicación.

Trad.: Traducción.

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

v.gr.: Verbigracia o verbi gratia.

WCMC: Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación / World Conservation Monitoring Centre.

WWF: World Wildlife Found / Fundación Vida Silvestre.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se estudiará el régimen jurídico del patrimonio cultural a nivel internacional, nacional y con especial referencia a la provincia de Mendoza, a su vez, haciendo hincapié en la esfera inmaterial y su normativa específica.

Nuestra Constitución Nacional cuenta con numerosas referencias a la materia cultural (arts. 14 y 75 inc. 17, 19 y 22). Pero fundamentalmente en su art. 41 consagró el derecho de todos los habitantes de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto tanto para el desarrollo humano, imponiendo en cabeza de cada uno de ellos el deber de preservarlo. En tal marco, la norma refuerza tal derecho estableciendo un deber genérico de las autoridades de proveer a tal derecho, y en particular preservar el patrimonio cultural.

A lo largo de este estudio se busca determinar y dar respuesta a los interrogantes que naturalmente surgen en la presentación del tema: ¿Cuál es el bien jurídico protegido: el ambiente o la cultura?, ¿cómo se produce la patrimonialización de la cultura?, ¿qué se entiende por patrimonio cultural?, ¿qué distingue al patrimonio cultural material del inmaterial?, ¿cuáles son las herramientas jurídicas con que se cuentan para la protección del patrimonio, y en particular del patrimonio cultural inmaterial?

Para ello en primer lugar se conceptualizará a la cultura para luego pasar a la noción de patrimonio cultural. Igualmente se analizará si tal patrimonio guarda relación con el medio ambiente y, en su caso, cómo es la relación y en qué medida puede contribuir la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural al desarrollo sustentable o sostenible de las sociedades.

Más adelante se indagará y analizará la normativa vigente sobre protección del patrimonio cultural, especialmente el inmaterial, y su aplicación jurisprudencial, a nivel mundial y regional, para luego ir decantando en la legislación nacional y terminar en el estudio de la legislación local sobre la materia. Pero esto no será sin antes comprender la evolución histórica del ordenamiento jurídico en los distintos niveles señalados.

De esta manera se buscará demostrar que, si bien existe una profusa legislación sobre el patrimonio cultural, es necesario dirigir una mirada global sobre el régimen jurídico –y en particular el mendocino-, que se adapte a los nuevos paradigmas establecidos por los tratados internacionales, atento a que a priori el

sistema actual no garantiza una protección eficaz del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).

a).- Estado de la investigación sobre el tema.

Si bien la protección jurídica del patrimonio cultural material ha sido objeto de muchos y diversos estudios, el PCI deja todavía lagunas investigativas, sobre todo en la doctrina jurídica argentina.

Los autores han tratado el tema someramente en trabajos sobre derecho constitucional, y fundamentalmente en el ámbito del derecho ambiental, sin perjuicio de que es posible encontrar algunos artículos publicados en otras materias.

Así, la protección del patrimonio cultural ha sido abordada, en términos generales, por Miguel Ángel Ekmekdjian[1], Germán Bidart Campos[2] y Helio Juan Zarini[3] al analizar la reforma constitucional producida en el año 1994. En el mismo sentido describen Horacio Rosatti[4], Amílcar Moyano[5] y Enrique Peretti[6] al patrimonio cultural como integrante del medio ambiente.

Sin perjuicio de ello, existen autores que han desarrollado el tema de la protección del patrimonio cultural material con cierta especificidad. Entre ellos se pueden mencionar a Carlos Aníbal Rodríguez[7] que, enmarcado en el derecho ambiental, enseña que el derecho humano al ambiente comprende la defensa de los bienes y valores culturales, o Gonzalo Rey[8] que analiza en términos generales la

---

[1] Ekmekdjián, Miguel Ángel, *Tratado de derecho constitucional. Constitución de la Nación Argentina, comentada, y anotada con legislación, jurisprudencia y doctrina*, T. III (1995) y T. IV (1997), Depalma, Buenos Aires.

[2] Bidart Campos, Germán J., *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, T. VI La reforma constitucional de 1994, Buenos Aires, EDIAR, 1995.

[3] Zarini, Helio Juan, *Constitución Argentina comentada y concordada*, 1ª ed. 6ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 2012.

[4] Rosatti, Horacio, *Tratado de derecho constitucional*, 2 tomos, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2010.

[5] Moyano, Amílcar, *Acciones de preservación y desarrollo del patrimonio ambiental*, Idearium, Mendoza, 1991

[6] Peretti, Enrique, *Ambiente y propiedad*, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014.

[7] Rodríguez, Carlos Aníbal, *Derecho Ambiental. Patrimonio cultural e histórico*, en La Ley, 08/01/2014, 1.

[8] Rey, Gonzalo H., *La tutela del patrimonio cultural en la Constitución Nacional*, en La Ley Sup. Act. 06/08/2009, 1 cita online AR/DOC/2664/2009.

noción de patrimonio cultural mencionando en ella al aspecto inmaterial, para terminar describiendo cómo se lo protege en la Constitución Nacional.

Lo mismo sucede en los estudios donde se analizan los efectos económicos de la protección del patrimonio cultural. En ellos se realiza el análisis a partir de la tutela del aspecto material de los bienes culturales. Como ejemplo de ello puede mencionarse a Liliana Zendri[9] en el ámbito nacional, y a Françoise Benhamou[10] en el foráneo.

A nivel provincial existen algunos trabajos abocados a la conceptualización del patrimonio cultural, los que compilan datos y normativas provincial y municipal, pero sin ahondar en el análisis jurídico de los mismos y, mucho menos, sobre la eficacia o no de dicho marco protectorio.

En virtud del estado descripto, por ser un tema cuyo tratamiento específico a nivel internacional es relativamente reciente, el abordaje doctrinario actual –aunque creciente- es insuficiente para comprender el desarrollo de la normativa local de protección del patrimonio cultural inmaterial, adelante PCI.

b).- Justificación y fundamentación del problema a investigar. Objetivos.

La elección del tema responde, en primer lugar, a un interés personal en su estudio. Por otro lado, y a partir del estado de la cuestión expuesto, se advierte que más allá de los distintos esfuerzos por conceptualizar al patrimonio cultural y analizar su protección, se lo ha hecho en forma general, sin incluir un abordaje sistemático del ordenamiento jurídico provincial –en especial el mendocino-, nacional e internacional como se pretende efectuarlo desde el presente trabajo. Especialmente en lo referido al PCI.

A su vez, es un tema cuyo estudio va creciendo en interés debido a que desde mediados del siglo XX el intercambio cultural se desarrolló con mayor intensidad con motivo de los avances tecnológicos, al punto tal que el mundo hoy está interconectado. Todo se sabe y todo se conoce. Indudablemente que esto afecta a lo que los pueblos entienden como su cultura, haciendo muy difícil su salvaguarda,

[9] Zendri, Liliana, *Dimensión económica del patrimonio cultural: Necesidad de adecuadas políticas en materia preservacionista*, en La Ley Online AR/DOC/2961/2001.

[10] Benhamou, Françoise, *Economía del patrimonio cultural*, trad. Heber Ostroievsky, Ariel, 2014.

especialmente en su faz inmaterial, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional y sin que exista actividad del Estado que bregue por lo contrario [11].

Por su parte, la adopción de una normativa internacional destinada a la protección jurídica del patrimonio cultural plasma la existencia en este ámbito de un interés general de la comunidad internacional. Sin embargo, no resulta exento de dificultad dirimir el alcance y los límites de dicho interés general si se tiene en cuenta que el patrimonio cultural depende esencialmente de la soberanía del Estado, hecho que es así reconocido en las normas internacionales de origen convencional. Vale agregar a esto lo difícil que resulta definir el objeto de estudio debido a la amplitud y el carácter polisémico del término cultura, que engloba distintas acepciones en un mismo concepto[12].

Por esto, y a los efectos de analizar si tal comportamiento estatal se debe a falta de políticas de gestión o si, por el contrario, es la legislación la que permite que esto suceda, "atando de manos" a las autoridades, es que se estima de interés el abordaje del tema seleccionado.

Si bien son loables los intentos de salvaguardia del PCI que se generan desde mediados del siglo XX, no surge con claridad si es posible en la realidad detener las modificaciones que se van produciendo en ese patrimonio, tal cual la definición que se expone más adelante en el Marco Teórico. Tampoco es fácil advertir si esas alteraciones que se van produciendo en los usos, representaciones y técnicas que las comunidades y los individuos reconocen como parte de su cultura impactan negativamente en ella.

Atento a lo dinámico del comportamiento social, cabe preguntarnos cómo y cuándo proteger a una costumbre cuando ella va perdiendo vigencia en la comunidad. ¿Alcanza un instrumento jurídico para mantenerla viva o intacta? Y más complejo aún ¿una norma general es eficiente a tal efecto?

---

[11] En este sentido, por ejemplo, Carman, María, *Las fronteras de lo humano: cuando la vida humana pierde valor y la vida animal se dignifica*, Buenos Aires: Siglo XXI, págs. 162-165, observa que existe una dificultad en la protección legal de culturas aborígenes que no responden a las construcciones mentales occidentales bajo el discurso normativo único, ya que los paradigmas regulados no suelen ser representativos de todas las identidades de las poblaciones indígenas que componen un país, generándose una apropiación discursiva por parte del Estado moderno que altera la cultura original, la que además ya se encuentra alterada por las visiones desarrollistas que históricamente han incidido en las culturas existentes.

[12] Camps Mirabet, Núria, *La protección internacional del patrimonio cultural*, tesis doctoral, Universitat de Lleida, Departament de Dret Públic, programa de Doctorat, Lleida, 5 de mayo de 2000.

A raíz de este planteo y a la luz de los preceptos constitucionales argentinos, cabe preguntarse si es posible, y en su caso, de qué forma, que las autoridades cumplan con su deber de preservar el PCI de la República Argentina. ¿Son eficaces las normas jurídicas que actualmente rigen para el logro de este objetivo?

- **Objetivo General.**

El objetivo general de este trabajo consiste en analizar pormenorizadamente la conceptualización del patrimonio cultural inmaterial como bien jurídico tutelado y las herramientas jurídicas que existen a nivel internacional, nacional y provincial para lograr la protección efectiva del PCI, y exponer posibles estrategias de desarrollo normativo que resulten necesarias para superar falencias en las regulaciones de tutela, en particular en el régimen de la Provincia de Mendoza. El estudio de los distintos instrumentos jurídicos se justifica porque un análisis profundo de los mismos permite establecer la noción de patrimonio cultural como objeto de protección, los principios rectores en este ámbito, las estrategias de protección, las obligaciones que de ellas se derivan y la función que desempeñan las autoridades públicas y las organizaciones internacionales en su protección y salvaguardia.

- **Objetivos Específicos.**

Se pueden mencionar 2 objetivos específicos que tiene el presente trabajo. A saber:

- Determinar cuál es el bien jurídico tutelado cuando se habla de patrimonio cultural, y en particular de patrimonio cultural inmaterial.
- Identificar qué instituciones jurídicas existen, o pueden existir, para garantizar la participación de la comunidad en la protección del PCI. Este objetivo se particularizará en el ámbito normativo de la Provincia de Mendoza.

c).- Sustento teórico y formulación de hipótesis.

A lo largo del siglo XX se fue desarrollando a nivel global un proceso de construcción normativo-jurídico destinado a proteger a los bienes culturales, que fue profundizado a partir de la segunda guerra mundial.

Sin embargo no fue hasta finales del siglo XX que se planteó que el aspecto inmaterial de la cultura también debía ser protegido, culminando a comienzos del siglo XXI (año 2003) con la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, entendiendo por tal a *"los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural [...]"*[13].

Para la protección del patrimonio cultural, y en particular el inmaterial, hay distintas posturas teóricas: Una de ellas sostiene que es necesaria la incorporación del bien a proteger al patrimonio cultural de una sociedad a través de una ley que lo declare como tal (dentro de esta se enrolaría la legislación mendocina). Por el contrario, hay otra que afirma que la protección debe darse aunque no se produzca la declaración como integrante del patrimonio cultural, bastando que la sociedad lo reconozca como tal.

Por todo lo que se ha venido exponiendo, y tal como ya se adelantó párrafos atrás, se entiende que el actual régimen jurídico de la provincia de Mendoza no garantiza una protección efectiva del PCI, situación que exige una adecuación normativa para satisfacer la manda constitucional de proveer a su protección. Esta será la hipótesis de investigación que guiará el presente trabajo.

d).- Metodología de la investigación. Delimitación.

El método elegido para el análisis del objeto de la presente investigación es el método jurídico positivo. Sin embargo debe ser completado, en especial en el caso de un objeto con notable carácter pluridisciplinar como el presente, desde otras perspectivas metodológicas; en particular desde una perspectiva histórico-sociológica.

[13] UNESCO, *Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003)*, art. 2 ap. 1. Aprobada por la República Argentina en 2006 mediante Ley 26.118.

Se utiliza un estudio exploratorio, comparativo, revisionista y de observación científica sobre el estado general del tema, obteniendo la información a través de material bibliográfico y normas jurídicas vigentes en el derecho comparado. También se analiza la evolución de las normas protectorias del patrimonio cultural, circunscribiendo el objeto de estudio desde una perspectiva normativa, analizando los distintos instrumentos convencionales -tanto de ámbito mundial como regional- enfocados al PCI.

Este trabajo se ha desarrollado en 7 capítulos desde los cuales se ha intentado abordar la investigación.

En el capítulo 1 se analizan consideraciones generales desde las cuales se busca definir el bien jurídico tutelado. Se plasma la relación existente entre ambiente y cultura y la patrimonialización de la misma; los valores del patrimonio cultural en general. Se cierra el capítulo con los aportes efectuados por el patrimonio cultural al desarrollo sostenible de las comunidades.

El capítulo 2 está dedicado a la evolución histórica de los ataques y protección dada al patrimonio cultural a nivel global, desde la Antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de este capítulo ha sido acotado en períodos históricos para facilitar su comprensión: Un primer período comprende desde la Antigüedad hasta el siglo XIX; y un segundo período abarca la primer parte del siglo XX, desde el estallido de la Primer Guerra Mundial (1914) hasta el comienzo de la Segunda (1939).

Se considera en ese capítulo también lo referido a los organismos internacionales de protección del patrimonio cultural. Especialmente se analiza el rol que tiene la UNESCO en el desarrollo de la temática y la relación que esta tiene con otros organismos y organizaciones intergubernamentales especializadas, su condición jurídica y su actividad normativa vinculante y no vinculante (convenciones, recomendaciones y declaraciones).

El capítulo 3 comprende el sinuoso desarrollo que se fue dando hacia la protección del PCI y las distintas normas internacionales dictadas a lo largo del siglo XX. El abordaje utilizado en este capítulo se caracteriza por haberse dividido también en diferentes períodos históricos que, en la medida de lo posible, abarcan cada uno aproximadamente una década. Dentro de ellos se estudian las principales normas dictadas y los acontecimientos históricos que las motivaron, hasta llegar

finalmente a la adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

También abarca este capítulo en forma específica lo referido al PCI desde lo conceptual y, en lo normativo, en el plano internacional. Se realizan consideraciones sobre la autenticidad y cambio en el PCI como realidad evolutiva; la salvaguardia de ese patrimonio y la existencia de escalas y no de jerarquías en el mismo; y se analiza minuciosamente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial dictada en el año 2003 y sus normas complementarias.

Siguiendo este análisis, en el capítulo 4 se aborda la protección y salvaguardia del PCI en el ámbito regional latinoamericano. Allí se desarrolla el marco legal; la situación de las políticas nacionales de salvaguardia del PCI; el impacto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y el PCI de los países latinoamericanos inscripto en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad.

En el capítulo 5 se contempla el régimen del PCI específicamente en el orden nacional argentino. Allí se ve la evolución de la normativa de regulación del patrimonio cultural en nuestro país desde una doble perspectiva, que atiente tanto la situación anterior a la reforma constitucional de 1994 como con posterioridad a la misma. Se analiza cómo esta reforma implicó una nueva constitucionalización del patrimonio cultural en Argentina; y quién es y cuál es la función de la autoridad de aplicación en el país de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y los organismos con ella relacionados. Cierra el capítulo un relevamiento de las manifestaciones patrimoniales inmateriales argentinas.

El capítulo 6 está dedicado al estudio del régimen jurídico del PCI en cada una de las provincias argentinas. Allí se analiza la legislación vigente regulatoria de la materia en todas las provincias.

Por último, el capítulo 7 está dedicado al estudio de la regulación del PCI en la Provincia de Mendoza. Este capítulo abarca una breve reseña histórica de la protección cultural provincial, como así también la protección de bienes que conforman el patrimonio cultural mendocino. Se analiza en especial la Ley 6.034 y su Decreto reglamentario 1.882/2009; las disposiciones específicas para la salvaguardia del patrimonio inmaterial; respondemos a los interrogantes que se plantean acerca de cómo es la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales en Mendoza y si se aplica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Inmaterial en la Provincia y cuáles son los efectos de la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales de la cultura. Luego se analiza la Ley 5.961 de Preservación del Medio Ambiente; haciendo una somera mención a la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial y su vinculación con el patrimonio cultural, a la Ley 6.045 de Áreas Naturales Protegidas; y por último se ven las manifestaciones concretas de PCI en Mendoza y los alcances de esas declaraciones.

Sobre toda esta base, el trabajo culmina en un capítulo conclusivo, en el que se sintetizan los conceptos desarrollados en torno al tema de investigación y se especifica conceptos que permiten alcanzar los objetivos propuestos.

CAPÍTULO 1

En este capítulo se contextualiza a la cultura dentro del ambiente en que se desarrolla el ser humano, analizando cuáles son los elementos de aquel y si la cultura puede considerarse incluida en él, previo intentar definirla.

Luego se trabajará sobre la patrimonialización de la cultura, es decir, qué hace que un determinado objeto, un conjunto de ellos o una costumbre –por citar algunos ejemplos- forme parte del patrimonio de una comunidad y se convierta, de esa manera, en patrimonio cultural que deba ser protegido.

a).- Ambiente y Cultura. Algunas aproximaciones.

En primer lugar se considera necesario determinar si la cultura en general y el patrimonio cultural en particular forman parte del ambiente. Para ello, se comenzará por brindar algunos conceptos del mismo.

Se ha dicho desde una visión sistémica, que se concibe a lo ambiental como una universalidad en el que interactúan sus elementos constitutivos: *"Por un lado existe la cultura con su afán de progreso incesante. Por otro, la naturaleza con su mecanicismo incesante. Y por otro, el proceso de esta interacción inevitable entre naturaleza y cultura"*[14].

En este sentido también se lo ha definido como

> *"aquel sistema global constituido por elementos naturales, artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones"*[15].

---

[14] Moyano, Amílcar, *Sistemas jurídicos sobre las aguas en Mendoza*, LL Gran Cuyo2005 (julio), pág. 625.

[15] Lorenzetti, Ricardo L., *La protección jurídica del ambiente*, en la L.L. 1997-E-1463, citado por López Alfonsín, Marcelo A. en *Aspectos constitucionales del ambiente y de la responsabilidad por daño ambiental en el nuevo Código Civil*, en Revista de Derecho Público, 2015-1, Rubinzal Culzoni, pág. 113.

Según esta concepción, la cultura forma parte del ambiente siendo un subsistema que tiene gran influencia sobre el mismo, al igual que los otros elementos o subsistemas. Puede considerarse, por ejemplo, lo determinante que ha sido la cultura en Mendoza para al manejo del agua en sus distintos usos que efectivamente determina la existencia y el desarrollo y, por ende, la calidad de vida de los mendocinos. Es decir, que la cultura mendocina, o sea, aquello que identifica a esa comunidad y por ello la hace distinta, sus valores espirituales, intelectuales, tradiciones y creencias, está fuertemente ligada al manejo del agua que a lo largo de la historia se fue dando.

Sin duda alguna que el ambiente cumple un rol fundamental en el bienestar de los seres vivos del planeta y la cultura desarrolla una fundamental influencia en ello.

Ahora bien. Estando de acuerdo en que la cultura forma parte del ambiente ya definido, cabe la pregunta sobre qué es. La Declaración de México sobre las Políticas Culturales[16] expresa que

> *"la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias [...]".*

Venini sostiene que cultura *"es la forma en que se manifiesta la identidad de un pueblo o nación"*[17]. Si bien existen otras definiciones[18], estas resumen las características fundamentales y, sobre todo la última de ellas, en su sencillez contiene un elemento decisivo: su carácter de instrumento de expresión de las comunidades. En este sentido se expresa la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) cuando se refiere a que el patrimonio cultural se transmite

---

[16] Dictada en el marco de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, México D.F., 26 de julio al 6 de agosto de 1982.

[17] Venini, Juan Carlos, *Tutela del patrimonio cultural*, en Revista de Derecho de Daños 2011-1, Rubinzal Culzoni, pág. 290.

[18] Clarke, J.R., Analytical Archaeology, Methuen Ed. Londres, 1968, p.19, citado por M. PAOLA GONZÁLEZ CARVAJAL, *Régimen jurídico de protección del patrimonio cultural y de los pueblos indígenas en la legislación chilena*, inédita, pág. 10.

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Pero a esto se agrega que ese instrumento o medio de manifestación de la identidad de un pueblo es creado por el ser humano -no individualmente considerado sino por la comunidad toda- y está formado por dos elementos fundamentales tal cual lo dice la primer definición dada: Un elemento tangible o material y otro elemento intangible o inmaterial. El primero de ellos puede, a su vez, estar compuesto por cosas muebles o inmuebles que, generalmente, será una representación del segundo elemento. Hay una gran vinculación entre ambos[19].

Sin embargo, el elemento inmaterial de la cultura a su vez tiene una característica fundamental que lo distingue del elemento material: su fragilidad. A diferencia de un cuadro o de un edificio, que sobreviven a las generaciones y que para existir no han de necesitar de una presencia humana que la anime, las manifestaciones inmateriales de la cultura existen sólo y únicamente si alguien, un cuerpo, la hace existir[20].

De esta manera, se concluye que la identidad de un pueblo, es decir, aquellas características que lo hacen único, se manifiesta a través de creaciones artificiales representadas por objetos materiales o tangibles –como una casa, una guitarra o una vasija de barro- o por costumbres, creencias, lenguajes que conforman su cultura y son, a su vez, elementos disponibles con que cuenta la sociedad para resolver sus necesidades espirituales. Así, estos recursos culturales forman parte del ambiente tal como se definió anteriormente.

b).- Patrimonialización de la cultura: Incorporación de los bienes al patrimonio cultural.

En primer lugar, debe aclararse que definir al patrimonio cultural ha presentado muchas dificultades. Se lo ha intentado hacer a través de una enumeración de sus

[19] CRESPIAL, *Experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural en América Latina*, , Cuzco, 2010, pág. 22.

[20] Gasparini, Lucía, *Il patrimonio culturale immateriale. Riflessioni per un rinnovamento della teoría e della pratica sui beni culturali*, Ed. Vita e Pensiero Strumenti Storia dell'arte, Milano, 2014, pág. 8.

componentes, tal como lo manifiesta la conceptualización dada por el art. 1 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural adoptada por la UNESCO en 1972. En ella se dice que

> *"se considerará 'patrimonio cultural': los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico".*

Ya se ha expresado que la cultura está conformada tanto por bienes materiales o tangibles –muebles o inmuebles- como por elementos inmateriales o intangibles como son los saberes, el folklore, las costumbres o el lenguaje mismo de una sociedad determinada. Sin duda alguna ambos elementos son bienes culturales, entendidos como creaciones del hombre.

Pero cabe preguntarse cuándo esos bienes culturales pasan a ser patrimonio de una comunidad y, por lo tanto, son merecedores de protección jurídica como tal. El caso del Pasaje San Martín en la ciudad de Mendoza vale para ejemplificar este aspecto.

Se trata de un edificio inaugurado en 1926 destinado a galerías comerciales, departamentos y oficinas, habiendo sido el edificio más alto de la ciudad hasta 1954[21]. Luego de su inauguración generó una suerte de rechazo por parte de los

[21] Según la página web oficial de la Municipalidad de Mendoza (www.ciudaddemendoza.gov.ar), esta construcción *"se sitúa en Av. San Martín 1136. Data de 1926. Proyecto del Ing. Ludovig Froude y dirección del Ing. Edmundo Romero. Primer edificio en altura para galerías comerciales, departamentos y oficinas a la manera de los grandes pasajes de la época y hasta 1954 el más alto de Mendoza. Galerías de doble altura conectan con calle 9 de julio y Sarmiento con bóvedas casetonadas de cañón corrido con tres cúpulas que contienen iluminación cenital mediante claraboyas de vitrales de colores con motivos floreales. Torre de siete pisos coronado por una cúpula*

habitantes de aquella época que no lo querían habitar porque no confiaban en tal construcción por miedo a que se derrumbara ante el primer temblor. Para contrarrestar esto, se ofrecieron los primeros seis meses de alquiler en forma gratuita[22]. Sin embargo, hoy nadie puede negar que ese edificio es un paseo emblemático de la ciudad de Mendoza y forma parte de la identidad de sus habitantes, pero no fue reconocido como tal sino hasta mucho después de su construcción, a través de la disposición 048/97 del Consejo Provincial del Patrimonio Cultural y del Decreto del Poder Ejecutivo provincial 2.190 (30/12/1997).

Obviamente que en el año de su inauguración, hubieron muchísimas otras construcciones que también vieron la luz pero que no trascendieron, y hoy no significan nada para la comunidad.

Claramente es su capacidad para portar identidad lo que hizo que ese edificio lograra colarse en el alma de la ciudad. Hoy Mendoza no sería la misma sin el Pasaje San Martín.

Entonces, la primera característica que surge del patrimonio es que es una construcción social[23]. Esto quiere decir que la misma sociedad es quien va delimitando lo que para sí misma es formador de su propia identidad.

La segunda característica del patrimonio es su surgimiento *a posteriori*. Esto significa que una gran parte de los bienes reviste su carácter patrimonial solo a posteriori, cuando se manifiesta su voluntad de luchar contra el olvido y la destrucción de lo que parece ser portador de identidad, de arte y de historia[24].

Luego se encuentra una tercera característica del patrimonio: su heterogeneidad. Patrimonio puede ser cualquier cosa. Cualquier bien cultural puede ser incorporado al patrimonio. Claramente esta heterogeneidad está dada por los distintos motivos que llevan a la patrimonialización de los elementos materiales o inmateriales y por los valores sociales que representan. Esta representación podría estar dada, por ejemplo, por la historia de la comunidad, la belleza estética, la técnica de construcción o, incluso, la capacidad para atraer turistas y generar ingresos económicos.

---

en mansarda. Estilo ecléctico afrancesado con elementos modernistas: vitreaux franceses. Edificio sismorresistente de hormigón armado". [Consulta: 25/11/2015].

[22] Diario Los Andes, *El Pasaje San Martín cumple 75 años* (11/11/2001), [Consulta: 25/11/2015].

[23] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 13. Así también lo sostiene García Cuetos, María Pilar, *El Patrimonio Cultural: conceptos básicos*; Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza; 2011; pág. 17.

[24] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 13.

Sin embargo cabe preguntarnos cómo se incorporan esos bienes al patrimonio cultural. ¿Basta la simple voluntad de los habitantes de una comunidad o de un juez para su incorporación o, por el contrario, es necesaria una declaración expresa de la autoridad competente que declare a tal o cual bien como integrante del patrimonio cultural de una comunidad?

La Ley 12.665 que crea la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos establece en su art. 1 ter como una de las funciones de dicha Comisión la de proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales, y demás bienes protegidos.

Asimismo, en el art. 3 bis establece la consulta previa ante dicha Comisión frente a cualquier iniciativa presentada ante el Congreso Nacional para la declaración como protegido de un bien ubicado en jurisdicción de la República Argentina.

Este régimen está indicando que la solución adoptada por la legislación nacional es la de la incorporación de un bien al patrimonio cultural nacional mediante declaración expresa de la autoridad que, en este caso, podría ser el Poder Ejecutivo nacional o el Congreso de la Nación (conf. arts. 1 ter y 3 bis Ley 12.665).

En el caso del patrimonio arqueológico y paleontológico, la Ley 25.743 incorpora genéricamente a los bienes allí detallados (art. 2) al patrimonio cultural de la Nación (art. 1). Se considera en este sentido que, cada vez que se realiza un descubrimiento, no hace falta la declaración expresa para cada bien por alguna autoridad competente sino que, probado que se trata de un bien de esas características, automáticamente quedaría incorporado al carácter patrimonial dentro de la generalidad declarada por la norma legal.

La legislación mendocina también requiere la declaración expresa previa para que un bien quede incorporado al patrimonio cultural de la Provincia. La Ley 6.034 dice en su art. 1 que son considerados integrantes del patrimonio cultural de la Provincia todos aquellos bienes trascendentes que material o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que significan o puedan significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren en el territorio de la Provincia, o ingresen a él, cualquier fuere su propietario, luego de su declaración como tales por la autoridad de aplicación. También se incluyen a todos los bienes declarados por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos dentro del territorio de Mendoza (art. 6).

En el mismo sentido la Ley 3.138 de Santa Cruz (art. 9); Ley 6.801 de San Juan (art. 2) que también hace una inclusión genérica de todas aquellas construcciones mayores a 50 años al momento de la sanción de la ley (art. 2 bis); Ley II-0526-2006 de San Luis (arts. 8, 15 y 19); Ley 370 de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (art. 3); Ley 1.400-E (antes Ley 5.556) del Chaco (art. 12 inc. b); Ley 2.083 de La Pampa (arts. 8 inc. f, 11 y 13); Ley 1.227/03 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 9 inc. a 2º párrafo); Ley 4.831 de Catamarca (art. 2); Ley 3.656 de Río Negro (art. 9); Leyes 5.543 (art. 1) y 9.729 de Córdoba (arts. 3 y 4); Ley 4.047 de Corrientes (arts. 2, 3 y 4); Ley 1.280 de Misiones (arts. 1 y 2); Ley XI Nº 19 de Chubut (art. 4); Ley 7.535 de Tucumán (art. 3, 8 y 9); Ley 10.419 de Buenos Aires (art. 5); Leyes 6.649 (art. 1) y 7.418 (art. 2) de Salta; Ley 5.751 de Jujuy (art. 7 inc. a) y Ley 2.257 de Neuquén (art. 1).

Asimismo, y siguiendo con el análisis normativo comparado, el *Reglamento para reconocimiento del Patrimonio Cultural del MERCOSUR*, aprobado por decisión 55/2012 del Consejo Mercado Común, establece que un bien que pretenda integrar el patrimonio cultural del MERCOSUR requiere un reconocimiento expreso en tal sentido (art. 3) en el ámbito de la Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR y deberá ser homologado por la Reunión de Ministros de Cultura, tal cual lo dispone el art. 5.

Este criterio adoptado por las diferentes legislaciones, también ha sido sostenido por la jurisprudencia[25].

A partir de estas regulaciones puede considerarse la presencia de otra característica referida a la manera en que se incorpora un bien al patrimonio cultural: la declaración o reconocimiento como tal mediante la autoridad competente.

No obstante, si bien para la legislación argentina es un requisito necesario para la incorporación de un bien al patrimonio cultural de una comunidad, esta declaración importa un reconocimiento a los valores intrínsecos del bien que existen y están representados por el mismo antes de tal manifestación, por lo que también se

[25] Palacio de Lois, Graciela (Ex. Feria N° 10/1998) vs. Poder Ejecutivo Nacional (PEN) s. Amparo - Ley 16986; 13/02/2001; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Cita: RC J 100061/09. También autos Nº F-1.220 (J.P.L. de Jáchal Nº 5.001/11), caratulados "ORDEN PÚBLICO c/ 'Cien Bar - Café' - Propietario Luis Daniel Bravo - Infracción a los arts. 7, 8, 10 y 11 de la Ley Prov. N° 7.196 y 98, 99, 143 y 162 Ley Prov. N° 7.819".

podría reconocer la patrimonialización del bien por sentencia judicial en el caso concreto[26].

Teniendo en cuenta lo hasta aquí analizado, puede referirse al patrimonio cultural como un conjunto de bienes tangibles o manifestaciones intangibles heterogéneos, generalmente únicos, que una comunidad determinada reconoce como aptos para su identificación a raíz del valor que representan y que se manifiestan y consolidan con el transcurso del tiempo, a partir de su reconocimiento como tal por autoridad competente, sea esta administrativa, legislativa o judicial.

---

[26] Por ejemplo si se quisiera demoler el edificio comunal de un pueblo -con una antigüedad del inmueble de 130 años- que no tuviera declaración por autoridad competente para construir otro, ¿alguien podría oponerse alegando y probando que representa valores históricos y culturales que marcan la identidad de la comunidad? Véase al respecto el fallo Stessens, Ángel Bernardo A. C/ Municipalidad de Santa Fe S/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad; 14/12/2010; Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En él se sostuvo que "es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decisorio que no hizo lugar al recurso contencioso administrativo sumario tendiente a dejar sin efecto la transferencia del inmueble donde funcionaba un centro comercial, pues la inteligencia asignada a la cuestión no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego al considerar los jueces que *el mismo no importaba un 'patrimonio cultural' por cuanto carece de valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional, ni configura un bien cultural histórico-artístico en los términos normativos que especifican las normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico*, destacando además los "valores" que deberían estar presentes a fin de que los actores alcanzaran el amparo legal pretendido, estos son: identidad y representación de los santafesinos; la vinculación del patrimonio cultural con el turismo, el desarrollo urbano, la mercantilización a partir de nuestra historia; la solidaridad y complicidad social; la memoria popular, etc., determinando que los mismos no se encontraban comprometidos en el caso, más allá de haber brindado el centro comercial servicios útiles y atractivos". Se considera desde este punto de vista que los magistrados hicieron un juicio de valor respecto a los valores del inmueble, independientemente de su declaración como patrimonio cultural. Ver fallo Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos Anexo Biblioteca Popular vs. Municipalidad de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) s. Amparo - Medida cautelar /// SCJ, Buenos Aires; 08/07/2008; Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires; A 68080; RC J 9232/10: "La protección de determinados bienes está de ordinario subordinada a su expresa consideración como pertenecientes al patrimonio cultural (por medio de ley, acto administrativo, Ordenanza, etc.), que disponga la calificación o registro respectivos, según el régimen de que se trate. *Excepcionalmente, cabe admitir que con respecto a ciertos bienes carentes de tal declaración formal pero portadores de indisputables valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos, culturales en suma, se reivindique válidamente el derecho a su tutela, en razón del interés público comprometido y del deber jurídico general que atañe a su preservación o a la prevención de daños (art. 41, C.N.; 28 y 44, Constitución provincial).* Mas en tales casos ha de acreditarse, como mínimo, la omisión de la autoridad pública así como lo que es más complejo la procedencia de la salvaguarda del bien sobre la base de constatación de sus atributos singulares, objetivamente indisputables, para cuya determinación será preciso reunir un material probatorio concluyente, que despeje o deje al margen cualquier opinabilidad. (Del voto del Dr. Soria.)". La Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba así lo ha reconocido cuando sentenció que "La inexistencia de una ley que declare monumento histórico el inmueble" no enerva su protección....." en la causa por amparo que Rafael A. Vaggione, Profesor y ex Decano de la Facultad de derecho en la Universidad de Córdoba siguió (y ganó) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba en defensa del edificio de Rivera Indarte 70, una manifestación propia de la cultura del siglo XIX que fue la morada del ex Presidente de la República Juárez Celman y sede del Club El Panal (Causa 45945.ED 8598 del 7-10-94., 12/8/1994). Valls, Mario F., *Nuevos criterios para la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico en la nueva Ley 25743*.

Por lo tanto, la patrimonialización de la cultura dependerá de la capacidad de sus elementos para construir la identidad de una comunidad determinada y su declaración como tal. Su objetivo último será el de mejorar la calidad de vida de las personas como consecuencia de un desarrollo sostenible.

c).- Los valores del patrimonio cultural.

La heterogeneidad conceptual del patrimonio cultural que anteriormente se ha manifestado se refleja en los diferentes valores que pueden asociarse con el patrimonio. En el caso de Mendoza, el art. 2 de la Ley 6.034 obliga a la conservación de todos aquellos bienes que integran el patrimonio cultural de la provincia por su valor documental y cronológico ya que son testimonio para el conocimiento y desarrollo cultural. Asimismo, el art. 3 de la misma norma enumera como valores que debe poseer un bien digno de protección a los siguientes: antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico.

En igual sentido se expresa la Ley 1.227 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al equiparar los valores de los bienes con sus características, ya que establece que los bienes que integran el patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires son de carácter histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico, así como el denominado patrimonio cultural viviente, sin perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro.

Estos casos citados sirven como ejemplo de que, en mayor o menor sentido, todas las legislaciones amparan estos valores pero, fundamentalmente, demuestran la heterogeneidad de los mismos, tal como se ha visto.

De todos los valores expresados en el patrimonio cultural material, el estético y el histórico son los más fáciles de percibir. Benhamou[27] distingue el valor de rememoración (valor histórico) y el valor de contemporaneidad (valor de arte y de uso).

Respecto al valor científico, este hace del patrimonio un objeto de saber y de memoria. Así lo expresa la Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico en su art. 2: forman parte del patrimonio arqueológico las cosas

[27] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 20.

muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Naturalmente estamos haciendo referencia a un objeto de saber.

Pero estos valores enunciados son aquellos que deben poseer los bienes para ser declarados patrimonio cultural y conseguir, de esa manera, que se los proteja. No obstante, una vez que se ha conseguido su patrimonialización, es decir, la declaración como patrimonio cultural de un bien tangible o intangible determinado, entran en juego otros valores como pueden ser el de comunicación y apropiación o el de mercado, tal como se podrá ver más adelante, generando de esta manera externalidades positivas o negativas según sea el caso.

La capacidad de un lugar patrimonial de atraer al turismo y a las empresas de servicios denota un valor de comunicación y de apropiación del patrimonio[28].

Esta dimensión alcanza el valor de mercado del patrimonio pero también resulta de su valor simbólico, el cual es una mezcla de historia y de referencias comunes que entra en la psiquis nacional. Ciertos valores científicos (como los de un sitio arqueológico) o simbólico (los de una iglesia rural) fuertes pueden ir de la mano de un valor de mercado nulo o muy bajo[29].

Throsby, citado por Benhamou[30], insiste en el valor cultural, que se refiere a la calidad estética, social, simbólica, espiritual, histórica y de autenticidad relacionada con el patrimonio. Es, en definitiva, el valor que podría llegar a englobar a todos los demás.

---

[28] Respecto al turismo masivo, se ha dicho que este amenaza la conservación y debilita la emoción patrimonial cuando se acentúa el estacionamiento salvaje y la degradación del entorno. Cada sitio de interés natural o cultural puede alcanzar una cantidad óptima de usuarios, más allá de la cual se deteriora su estado. En Angkor, vestigio de las capitales del Imperio Temer construidas del siglo IX al siglo XIII, el consumo excesivo de agua seca las napas freáticas, al punto tal de poner en peligro de derrumbe los cimientos de los templos. La gestión de los sitios de interés más delicados puede consistir en la composición de una copia. En 2009, se decidió hacer una réplica de la cueva Chauvet, descubierta en el sur de Ardeche (sur de Francia), en 1994 y que hoy es Patrimonio de la Humanidad: la conservación exige que se prohíba el acceso al público. Esta opción ya había sido seleccionada para las grutas o cuevas de Lascaux: Lascaux II, abierta en 1983, restituye, casi perfectamente, los diferentes volúmenes de la gruta o cueva, así como las composiciones asociadas. Las grutas o cuevas de Altamira, en Cantabria –España- están cerradas al público desde 2002, pero se han abierto numerosos museos relativos a ella (particularmente el Centro Europeo de Prehistoria de Tautavel, entre otros). Ellas también son Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Ver Benhamou, Françoise, *op. cit.*, págs. 20 y 87/88.

[29] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, págs. 22/23.

[30] Throsby, D., *Economics and Culture*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. Esp. Economía y cultura, Madrid, Cambridge University Press, 2001) citado por Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 23.

El grado de identificación colectiva con estos valores se manifiesta, especialmente, en el voluntariado y en la adhesión a asociaciones de defensa del patrimonio que en muchas sociedades se da[31].

También se agrega el valor educativo y didáctico del patrimonio. La utilización de elementos patrimoniales permite el aprendizaje de unas pautas que facilitan al estudiante interrogarse sobre el entorno que le rodea, acercarse, reflexionar y después llegar a conclusiones sobre cómo se construye el conocimiento social[32].

En definitiva el patrimonio está asociado a valores sociales: es un elemento de cohesión social, de adhesión colectiva a referentes culturales. En economía, este aspecto se analiza como una externalidad positiva.

Como corolario de lo dicho, se puede afirmar que desde el punto de vista antropológico para poder atribuir a un objeto la categoría de patrimonio, es necesario que reúna una serie de valores que se pueden resumir en tres: el valor de uso, el valor formal y el valor simbólico.

El valor de uso se refiere a la utilidad que tiene el objeto, siendo necesario que cubra algún tipo de necesidad; el formal hace referencia a la atracción que debe despertar a los sentidos, ya sea por la forma, por el volumen, etc.; y el simbólico que es determinante por el hecho de ser testigo de ideas, de acontecimientos o de situaciones del pasado, que permiten conectar a personas de tiempo diferentes[33]. Pero el patrimonio cultural, es decir, después de la declaración e incorporación de un bien a la herencia y bagaje cultural, adquiere otros valores que ya han sido descritos: el de comunicación y apropiación, el de mercado, el cultural, el educativo y el social.

d).- Consideración económica de los bienes culturales.

---

[31] En el Reino Unido puede apreciarse al *National Trust of England*, asociación sin fines de lucro creada en 1895 por tres personas, que se dedica a la conservación y a la preservación del patrimonio. https://www.nationaltrust.org.uk/features/about-the-national-trust. Asimismo, en Italia se encuentra al *Fondo Ambiente Italiano* que, según sus propias palabras, es una fundación nacional sin fines de lucro que desde 1975 ha salvado, restaurado y abierto al público importantes testimonios del patrimonio artístico y natural italiano. http://www.fondoambiente.it/chi-siamo/.

[32] González Monfort, Neus, *El valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural*, Universitat Autónoma de Barcelona, consultado en http://pagines.uab.cat/neus.gonzalez/sites/pagines.uab.cat.neus.gonzalez/files/praxis_neusgonzalez.pdf [consultado: 29/10/2016].

[33] González Monfort, Neus, *op. cit.* [consultado: 29/10/2016].

A pesar del concepto de patrimonialización vinculado a lo cultural, el interés de las ciencias económicas sobre la materia es relativamente reciente. Es a partir de la década de 1970 que empiezan a tomar interés los bienes culturales para la economía[34].

Tal como se expresó, los bienes culturales desempeñan un papel importantísimo en las comunidades. Desde el punto de vista sociocultural, los edificios simbólicos, los centros culturales y, en general, toda la oferta cultural le otorga identidad a una sociedad, constituyéndose en puntos de atracción de visitantes que contribuyen a la construcción de la cohesión colectiva. Desde el punto de vista de la economía, las repercusiones de este capital cultural son directas (ingresos por el consumo de esos bienes y servicios), e indirectas (restaurantes, transporte, alojamiento, valorización de propiedades cercanas, etc.) y la explotación económica de estos bienes culturales contribuye a diversificar la economía local (particularmente en las ciudades postindustriales en declive económico)[35].

En lo que respecta al desarrollo económico, el patrimonio cultural tanto material o tangible como inmaterial o intangible tiene la capacidad para contribuir, mediante su adecuada puesta en valor, a la generación de riqueza y empleo. Esa capacidad se materializa fundamentalmente a través del turismo cultural y las actividades a él vinculadas.

En consecuencia, las actuaciones públicas y privadas de valorización del patrimonio cultural adquieren una gran significación, vista la rentabilización social y económica que este activo reporta.

e).- Las características económicas del patrimonio cultural.

- **Bienes únicos. Bienes frágiles.**

[34] Barciela, Carlos y ots. (eds.); *Los bienes culturales y su aportación al desarrollo sostenible*; Publicaciones de la Universidad de Alicante; 2012; 17. También Herrera Prieto, Luis César; *Economía del patrimonio histórico*; en Revista ICE, N° 792 junio-julio 2001.

[35] Delgadillo Polanco, Víctor Manuel; *La dimensión económica del patrimonio cultural. Andamios* [online]. 2010, vol.7, n.14, págs. 385/389. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632010000300016&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1870-0063. [consultado: 08/10/2016]

Ya se ha expresado que una de las características de los bienes tanto materiales como inmateriales que conforman el patrimonio cultural es que, generalmente, son únicos.[36].

En este caso, la no preservación constituye una pérdida irreversible ya que, en el mejor de los casos, solamente pueden existir sustituciones imperfectas de los bienes en peligro:

> *"Todas las generaciones tienen una interpretación diferente del presente y en ellas siempre surgen ideas nuevas. Toda disminución de este capital implica un empobrecimiento tal que la pérdida de los valores acumulados no puede ser compensada, ni siquiera con creaciones de gran calidad*[37]*"*.

Debe tenerse en cuenta que la irreversibilidad es una amenaza que afecta toda decisión de modificación y, sobre todo, de destrucción. Sin embargo, seguramente debido a la durabilidad de los bienes, es tentador aplazar la decisión de restaurarlos. Muchas catástrofes acaecidas en los bienes patrimoniales se deben a estas negligencias, a la vez que los recursos necesarios para la conservación no están a la altura de las necesidades, y los dispositivos jurídicos y administrativos no pueden bastar para asegurar la protección y la conservación del patrimonio. La historia lo demuestra. Panfletos y denuncias rara vez obstaculizan la propensión de las sociedades a destruir lo que la historia ha logrado dejar como legado, pese a que siempre se declaren devotas de "su patrimonio". Así, pese a las numerosas voces de protesta contra la degradación del patrimonio, que se interpreta como una injuria a la historia, a la identidad de los pueblos y al arte, siempre hubo destrucciones. A veces, el patrimonio se destruye debido a ciertos caprichos de la moda y a las exigencias de la vida contemporánea, lo cual es algo que suele lamentarse con el paso del tiempo[38].

---

[36] No obstante, los gobiernos responsables del patrimonio tienden a incluir dentro de los bienes protegidos a los bienes que no son únicos, sino raros y típicos de una época o de una categoría. Heinich, N., *La Fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère*, París, Editions de la Maison des sciencies de l'homme, 2009, citado por Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 34.

[37] Leniaud, J. P., *L'Utopie francaise. Essai sur le patrimoine*, París, Mengès, 1992, pág. 57, citado por Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 34.

[38] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 34/35.

En Argentina existen numerosos casos en que bienes que luego integraron el patrimonio cultural fueron modificados, mutilados o destruidos hasta cambiar totalmente su fisonomía, para luego intentar reconstruirlos. Como ejemplo, puede observarse el cabildo de Buenos Aires. En 1860 se ornamentó la cúpula con azulejos "pas de calois" y en su parte superior se colocó una bola de metal dorado con un pararrayos y poco tiempo después su torre fue modificada para la colocación de un nuevo reloj. En 1880 este edificio pasó a ser la sede de los Tribunales Nacionales, adaptándose para este destino y su fachada también fue modificada, agregándose un tercer cuerpo a la torre. Pero llegó el año 1889 y este cuerpo agregado a la torre, ante la posibilidad de su derrumbe, fue demolido. Ya entrado el siglo XX, precisamente en 1931, para abrir calles se demolieron tres arcos del ala sur y se le realizó al edificio una ochava en la esquina de la actual calle Hipólito Yrigoyen. En ese tiempo fueron varias las voces que pidieron su demolición, pero en 1933 por Ley 11.688 el cabildo de Buenos Aires fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 1940 se inauguró la restauración encargada al arquitecto Mario Buschiazzo[39].

La unicidad comporta una segunda especificidad. Implica un poder de monopolio por parte del propietario del bien, ya sea público o privado. Es él quien define las modalidades de acceso, bajo reserva de limitaciones u obligaciones susceptibles de ser impuestas por la reglamentación. Puede implementar una política de regulación del acceso en dos modalidades diferenciadas. La primera concierne al precio. Si a la demanda no le importa demasiado el precio, el propietario dispone de un gran abanico para tarifar una visita. La regulación también puede afectar a la cantidad: el propietario puede decidir limitar la cantidad de visitantes, por ejemplo, en el caso de que la saturación de público amenace la conservación de un monumento o de un sitio.

Aunque la unicidad implique la sustitución de pocos bienes, esta sigue existiendo. En algunas ciudades del mundo algunos museos están abiertos en el día en que cierra la mayoría. En este caso un turista que no puede visitar uno por estar cerrado puede ir a cualquier otro que esté abierto, lo cual demuestra que la visita a un museo es reemplazable por la de otro[40].

[39] https://cabildonacional.cultura.gob.ar/institucional/historia-del-edificio/ [consultado: 08/10/2016].

[40] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, pág. 36.

No obstante, lo expuesto sobre la condición de únicos de los bienes que integran el patrimonio cultural se ve claramente en el caso de los bienes materiales o tangibles. Pero esto no se ve con tanta claridad en el caso de los bienes inmateriales o intangibles, ya que, si bien la costumbre o el uso pueden ser únicos, no son pocas personas las que los practican, lo que hace que pueda ir heredándose entre las generaciones aunque, claramente, somos conscientes de la fragilidad de los mismos frente a las nuevas tendencias y cambios de valores. Por esto, puede sumarse otro carácter claramente vinculado a la unicidad de los bienes materiales: la fragilidad de los bienes inmateriales o intangibles.

La reflexión sobre el patrimonio inmaterial ha permitido revalorizar la axiología tradicional referida al patrimonio cultural, releyendo bajo una nueva luz los valores de autenticidad, unicidad, originalidad, rareza y antigüedad[41].

- **Bienes públicos[42].**

En economía, se distinguen los bienes privados, divisibles y excluibles, de los bienes colectivos o públicos, no divisibles y no excluibles (que pueden pertenecer tanto a personas humanas como a personas jurídicas de carácter público o privado). Mientras que en el caso de los bienes privados dos agentes no pueden gozar simultáneamente del uso de un mismo bien (por eso terminan siendo rivales), en los bienes públicos no son rivales, es decir, pueden ser consumidos en partes iguales por varias personas al mismo tiempo. Además, no se puede utilizar el precio como medio para impedir que un individuo consuma un bien público. En cambio, cuando no hay rivalidad, sino que el precio es el que realiza la exclusión, estamos ante los denominados bienes de club. Este último caso puede llevar a la saturación. Por ejemplo: las postales con fotos del obelisco de Buenos Aires o los recuerdos que se venden en los negocios para turistas son bienes privados: para poseerlos, se deben comprar. La fachada de un monumento que se puede ver desde una calle es un bien público. Todos pueden disfrutar de esa vista sin pagar nada y sin que eso afecte el consumo por parte de otra persona. En cambio, cuando varios individuos pueden visitar al mismo tiempo un sitio arqueológico, o un monumento, es posible que haya

[41] Gasparini, Lucía, *op. cit.*, pág. 11.

[42] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, págs. 36/37.

que pagar una entrada y, dada la saturación de público o la congestión provocada, la calidad de la visita puede ser inferior. La satisfacción de un individuo depende, entonces, de la cantidad de usuarios que realizan la misma visita al mismo tiempo. Ese el caso de los bienes de club.

En definitiva, estos bienes poseen tres características: 1.- Consumo conjunto: esto quiere decir que pueden ser disfrutados por varias personas a la vez sin que decaiga su utilidad; 2.- Exclusión por precio: la persona que no paga no disfruta del consumo, y; 3.- El efecto saturación: que el consumo masivo de dicho bien haga su utilidad muy baja o nula.

- **Bienes generadores de externalidades.**

Los bienes que integran el patrimonio cultural generan externalidades positivas, públicas o privadas, entendiéndose por externalidad positiva cuando una persona se beneficia o perjudica de la acción de otra sin que esta última reciba ninguna remuneración a cambio. Esas situaciones se traducen en las insuficiencias del mercado: el beneficiario no es necesariamente quien financia la actividad en cuestión, y por ello en forma genérica puede afirmarse que se trata de externalidades positivas.[43]

La cultura y, en particular, el patrimonio están llenos de ejemplos de este tipo: la cercanía a un monumento declarado como patrimonial realza el valor de las construcciones que están a su alrededor. La declaración del bien como patrimonial se traduce en una mejora del bienestar colectivo. Los beneficios no comerciales de esa valoración se obtienen mediante la satisfacción de algunas personas, gracias a la mejoría del ambiente urbano o paisajístico, y también provienen de la posibilidad de gozar de la vista de este ambiente y del orgullo que sienten los habitantes de un lugar ante lo que consideran "su" patrimonio sin importar cuál sea el propietario efectivo.

Además, el patrimonio refuerza el prestigio nacional y funciona, en este caso, como factor de enriquecimiento del capital humano. Otros tipos de externalidades que atañen al patrimonio son intergeneracionales: el patrimonio constituye un legado para las generaciones futuras. Esa característica posee dos dimensiones: todas las

[43] La patrimonialización también puede generar externalidades negativas, por ejemplo hacia el propietario que ve restringido su derecho a modificar la fachada u otros aspectos del bien. Si tal restricción desnaturaliza la propiedad, puede entrar en juego la garantía del art. 17 CN. Ver al respecto CSJN, 27/8/2013, «Zorrilla, Susana y otro c/ E. N. - P. E.N.», MJJ81882.

generaciones tienen la responsabilidad de transmitir el patrimonio que han heredado. Así, se está dentro de una lógica de generaciones unidas y solidarias. Todas las generaciones crean un patrimonio nuevo para las generaciones venideras. El patrimonio no está predefinido ni cerrado. Su perímetro no deja de ampliarse[44].

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe decir que el patrimonio cultural también genera externalidades negativas como, por ejemplo, hacia el propietario que ve restringida su posibilidad de modificar la fachada; o hacia los vecinos que pueden ver alterada su vida cotidiana por la afluencia de público.

- **Bienes colectivos.**

En lo que se refiere al derecho real de dominio, los bienes patrimoniales pueden ser públicos o privados según quien sea su propietario. Quien sea el titular, privado o público, en el ejercicio del derecho de propiedad debe respetar las normas y las reglas relativas a la conservación de los monumentos protegidos[45].

Barzel[46], propone un marco de análisis de la naturaleza de la propiedad privada que ayuda a interpretar el caso específico de los bienes patrimoniales. Esos bienes no son entidades homogéneas y pueden descomponerse en un conjunto de atributos. Por ejemplo, un edificio protegido se caracteriza por un valor de uso, el tamaño de los departamentos, su estado de limpieza, su exposición a la luz solar, etc. Estos atributos privados son "consumidos" por el propietario o por los locatarios, pero los atributos históricos del edificio se comparten con la colectividad. Escapan al ejercicio del derecho de propiedad como prerrogativa individual.

Desde el momento en que se considera que los derechos de propiedad no afectan al bien en su totalidad, sino a sus atributos, un bien puede tener un solo propietario desde el punto de vista de la ley y varios desde el punto de vista económico, dependiendo de si los atributos afectan a la propiedad privada o a la sociedad[47].

---

[44] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, págs. 37/38.

[45] El art. 5 de la Ley 6.034 de Mendoza expresamente consagra la posibilidad de que los bienes culturales sean públicos o privados y el 22 responsabiliza tanto a los propietarios como a los poseedores de los bienes de su preservación y conservación.

[46] Barzel, Y., *Economic Analysis of Property Rights*, Cambridge, Cabmridge University Press, 1997.

[47] Víctor Hugo resume así esta doble dimensión: *"En un edificio hay dos cosas: su uso y su belleza. Su uso le pertenece al propietario, y su belleza a todo el mundo; sobrepasa al derecho, en lugar de*

Respecto a la doctrina económica, ella distingue dos rasgos en los bienes patrimoniales: su utilidad para el individuo o la casa, y su capacidad de generar una experiencia compartida con la sociedad.

Estos conceptos se pueden ubicarlos dentro de la noción de *función cultural* de la propiedad privada. Esto quiere decir que la naturaleza cultural de los bienes lleva a limitar el campo de aplicación del derecho de propiedad, incluso en países como Estados Unidos, que se preocupan mucho por la defensa de la propiedad privada.

En consecuencia, más allá de la propiedad dominial de los bienes patrimoniales referidos, los mismos constituyen un bien colectivo. El art. 240 del Código Civil y Comercial de la Nación regula los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. En este artículo, el Código hace referencia expresa a los derechos individuales y a los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, aclarando que el ejercicio de los derechos individuales no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los valores culturales.

Uno de los primeros fallos de la justicia de Estados Unidos respecto a la materia que se estudia, Figarsky v. Historic District Commission of City of Norwich, 368 A.2d 163 (1976)[48] tuvo una importancia decisiva. Los hechos, abreviadamente, eran los siguientes: los dueños de una propiedad ubicada dentro del distrito histórico de la ciudad de Norwich (Connecticut), solicitaron una autorización para demoler una casa argumentado los altos costos, prácticamente prohibitivos, de su reparación. La Comisión del Distrito Histórico la denegó y los solicitantes apelaron tal decisión ante la Corte de Justicia local, quien consideró que la Comisión había juzgado correctamente para denegar la solicitud y que tal decisión no era ilegal, sino que había resultado de una aplicación razonable y honesta de una ordenanza, siendo constitucional su denegación.

Otro de los casos señeros en materia de protección del patrimonio cultural de aquel país fue Penn Central Transportation Co. v. New York City, 438 U.S. 104 (1978). En él la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York (*The New York City Landmarks Commission*) denegó una solicitud de la *Penn*

---

destruirlo". A su modo, el fachadismo, es decir, la preservación de las fachadas y la restauración completa de los interiores sin considerar su estado original, implica esta dicotomía.

[48] https://law.justia.com/cases/connecticut/supreme-court/1976/171-conn-198-2.html [Consultado: 28/03/2020].

Central Transportation Company para construir una torre de oficinas arriba de la Estación Central de Nueva York. La denegatoria se fundó en la preservación de la integridad histórica y arquitectónica del estilo de construcción de la estación. La Suprema Corte avaló la decisión de esta oficina y reconoció, entre otras cosas, a la preservación histórica como un objetivo gubernamental legítimo que justifica restricciones al dominio en propiedades históricas, aunque ello implique algún tipo de perjuicio al propietario.

A nivel nacional, se encuentra el caso "Quesada, Ricardo C/ Municipalidad de Buenos Aires"[49], en el que el juez de grado hizo lugar a la demanda de amparo en virtud del cual se trataba de impedir la poda de árboles de la plaza Grand Bourg, por la que se alteraba la fisonomía de un edificio, mástil y muros anexos que recordaban a José de San Martín. Se entendió entonces que cualquier ciudadano está facultado para el ejercicio de acciones implicadas en la soberanía del pueblo, titular del dominio público, con motivo del talado de árboles con el fin de resguardar un bien altamente representativo del sentimiento nacional. Este fallo fue posteriormente revocado en la alzada por motivos de legitimación.

En la Provincia de Mendoza, en el caso "UCIM c/ Municipalidad de Mendoza"[50], el Juez Carlos Parellada –titular del 14 Juzgado Civil, Comercial y Minas de la 1° Circunscripción Judicial- luego de reconocer una amplia legitimación para demandar en defensa de los intereses difusos, rechazó la demanda en la que se cuestionaba la legalidad de una reforma arquitectónica de la Plaza Independencia en la Ciudad de Mendoza, considerando para ello –entre otros elementos- que aunque el régimen de protección cultural era aplicable en general, la referida plaza no presentaba la antigüedad que fija el Decreto Nacional 3.511/82 para la intervención de los órganos técnicos allí reglados.

Las autoridades a cargo de la protección del patrimonio como los jueces, deben arbitrar entre el respeto del ejercicio pleno del derecho de propiedad sobre los bienes tutelados y la preservación del patrimonio. En el primer caso, se corre el riesgo de dejarle al propietario la responsabilidad del futuro del patrimonio y, en el

[49] La Ley, 1980-D-130.

[50] Esta sentencia, de fecha 2/05/1988, se ha publicado en Rodríguez Salas, Aldo (dir), *Jurisprudencia Ambiental. 5 sentencias sobre la preservación de ambiente*, Mendoza: Gobierno de Mendoza, 1991, págs. 43-71.

segundo, el de impedir el crecimiento, la modernización y el desarrollo del tejido urbano o rural.

f).- Consumo de patrimonio cultural.

Ya se ha referido que los bienes patrimoniales tienen diferentes valores, aunque no necesariamente un precio.

En consonancia con lo mencionado, Throsby –citado por Delgadillo Polanco[51]- dice que el patrimonio, los bienes y servicios culturales son un capital físico y cultural capaz de producir beneficios económicos y sociales. Dentro de los valores que el patrimonio cultural contiene se encuentra a los *valores socioculturales estéticos* (vinculados a las modas y corrientes artísticas en boga); *espirituales* (prácticas y creencias religiosas o laicas); *sociales* (identidad colectiva, cohesión social, uso del territorio); *históricos* (recuerdo de los antepasados o la ocurrencia de hechos pretéritos) y *simbólicos* (evocación de significados colectivos); y *valores económicos*. Estos últimos se construyen en el mercado, mientras que los valores culturales se definen en la esfera de las relaciones sociales, se establecen en función de significados colectivos, y son difíciles de conceptuar y complicados de medir.

Dentro de los mencionados valores económicos, se distinguen el valor de uso de los bienes patrimoniales –que incide en el mercado por su valor comercial (alquileres, precio de venta) o por la tarifa de las entradas- del valor de no uso o valor pasivo, que deriva del carácter específico de los bienes y que se puede observar en los bienes ambientales: valor de existencia, valor de opción y valor de transmisión para las generaciones futuras. El valor de existencia es la satisfacción de saber que existe en el propio país o en el exterior un gran monumento o un museo importante, aunque jamás se lo visite. El valor de opción es la posibilidad de visitar tal o cual monumento en algún momento aún no definido. El valor de herencia es la satisfacción que sienten los ciudadanos al dejarles el patrimonio como legado a sus descendientes. Estos tres valores no se traducen en un precio, dado que no dan lugar

[51] Delgadillo Polanco, Victor Manuel, *op. cit.*, citando a Throsby, D., págs. 388/389.

a un consumo inmediato, aunque pueden justificar la solicitud de financiamiento público[52].

El valor de uso está asociado a la predisposición a pagar por parte del visitante. Para conocer este último factor, se puede recurrir a distintos métodos que revelarán las preferencias del público. Para valorar bienes sin mercado, la economía cuenta con tres técnicas: el método de la valoración contingente, el método del costo de desplazamiento y el modelo de los precios hedónicos.

g).- Patrimonio cultural y desarrollo sostenible.

Para comenzar a analizar el rol que pueden tener la cultura en general y el patrimonio cultural en particular en el desarrollo sostenible, se hace necesario conocer qué se entiende cuando se menciona al desarrollo sostenible.

- **Relación entre cultura y desarrollo.**

A partir de la segunda guerra mundial el término desarrollo fue adoptado por la economía para indicar el modelo de crecimiento económico de los países industrializados, definiendo a los países desarrollados como los más industrializados y a los países más o menos pobres como países en vías de desarrollo[53], teniendo en cuenta únicamente su renta per cápita.

En 1967 el Informe Final de la Reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, denominadas Normas de Quito, estableció en su introducción que los bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso. Asimismo, en el punto V.1. presupuso que los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico constituyen recursos económicos al igual que las riquezas naturales del país y que, consecuentemente, las medidas conducentes a su preservación y adecuada utilización forman o deben formar parte de los planes de desarrollo. En este instrumento se plasmó la relación entre el patrimonio cultural y el desarrollo.

---

[52] Benhamou, Françoise, *op. cit.*, págs. 43/44.

[53] Bermejo Gómez de Segura, Roberto; *Del desarrollo sostenible según Bruntland a la sostenibilidad como biomimesis*; 2014; Hegoa, pág. 15.

Luego de este documento, la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro[54] (1968) estableció una precisa relación entre la conservación y protección de la herencia cultural con el desarrollo económico y social de las comunidades, expresando que aquellas son deberes de los gobiernos tanto como la promoción de este considerando que la adecuada preservación de los bienes culturales contribuyen poderosamente al desarrollo social y económico de países y regiones poseedores de esta clase de tesoros de la humanidad mediante el estímulo del turismo nacional e internacional.

En junio de 1972 se dictó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo. Ella proclamó que tanto la protección como el mejoramiento del medio humano, en sus dimensiones natural y artificial, es una cuestión que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, siendo el medio humano esencial para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso la vida misma.

Se refirió al desarrollo también cuando proclamó que la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea (entre ellos el medio artificial), utilizada con discernimiento, podía llevar a todos los pueblos los beneficios de aquel. Declaró que la defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se convirtió en una meta imperiosa de la humanidad toda, debiendo perseguirse juntamente con otras metas fundamentales como la paz y el desarrollo económico y social de todo el mundo.

Esta declaración no hizo referencia a la relación de la cultura con el desarrollo, sino que siempre se refirió a este y su relación con el cuidado del medio ambiente en su doble faz: la natural y la artificial, como la llamó.

Unos meses más tarde, precisamente el 16 de noviembre de 1972, la Conferencia General de la UNESCO, junto con la Convención sobre la Protección Mundial Cultural y Natural, dictó la Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio Cultural y Natural, de gran trascendencia. En este documento no vinculante, se estableció nuevamente la relación entre patrimonio cultural y desarrollo. Allí se consagró que la finalidad de la protección, la

[54] Dictada en la 15° reunión de la Conferencia General de la UNESCO el 19 de noviembre de 1968.

conservación y la revalorización del patrimonio cultural y natural era el desenvolvimiento completo del hombre, debiendo aquel dejar de ser un freno al desarrollo nacional para pasar a ser un factor determinante de ese desarrollo[55].

En 1982, en la ciudad de México, se celebró la Conferencia Mundial de las Políticas Culturales y constituyó un hito para la concientización de que cultura y desarrollo son inseparables. La Declaración de México sobre las Políticas Culturales, corolario de tal Conferencia, desarrolló en siete apartados su visión sobre la dimensión cultural del desarrollo.

En el primero de ellos (apartado 10) expresó que la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones; que el crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre, debiendo perseguir el auténtico desarrollo el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos siendo el hombre el principio y el fin del desarrollo (apartado 14).

En su apartado 16 claramente dejó sentado que sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias deberían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad.

- **Surgimiento de la noción de desarrollo sostenido o sostenible.**

Como pudo verse, ninguno de los textos hasta ahora referidos empleó la palabra sostenibilidad. Para conocer el origen del término, hay que remontarse hasta 1980.

Ese año fue elaborada la Estrategia Mundial para la Conservación (EMC) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con la asesoría, cooperación y el apoyo financiero del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el World Wildlife Found (WWF), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

[55] Punto 7, apartado III (Principios Generales).

Según sus propias palabras, la finalidad de la EMC fue la de contribuir al logro de un desarrollo sostenido mediante la conservación de los recursos vivos.

En ella se dijo que las relaciones del hombre con la biósfera continuarían deteriorándose mientras, entre otras cosas, un tipo sostenido de desarrollo no se convirtiera en regla y dejara de ser la excepción. A continuación, definió al desarrollo como la *"modificación de la biósfera y la aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida del hombre"*. Completó la idea diciendo que para que ese desarrollo fuera sostenido debería tener en cuenta, además de los factores económicos, los de índole social y ecológica. Una de las condiciones previas que previó la EMC para que se produzca un desarrollo sostenido, era la conservación de los recursos vivos.

Como consecuencia de ello, definió a la conservación como *"la gestión de la utilización de la biósfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras"*.

El mismo documento reconocía que la integración de la conservación y el desarrollo revestía una importancia particular ya que de no aplicarse en todas partes una estructura de desarrollo que conservara los recursos vivos, sería imposible satisfacer las necesidades de hoy sin impedir lo que es preciso lograr mañana. También aclaraba una cuestión que más adelante se le criticaría a la definición del Informe Brundtland -que se analiza infra-: que la conservación y el desarrollo aparecen como incompatibles; aclarando que eran incompatibles en la medida que el desarrollo no fuera sostenido.

En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas creó mediante resolución N° 38/161 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Unos años después, en 1987, esa Comisión presentó su informe llamado "Nuestro Futuro Común", conocido también como Informe Brundtland.

Con un espíritu común a la Estrategia Mundial de Conservación, el informe definió al desarrollo sostenible, sostenido o duradero como aquel *"que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades"*. Continúa diciendo que esta noción *"contiene dos conceptos fundamentales: El concepto de necesidades, en particular*

las necesidades esenciales de los pobres del mundo, a las cuales se les debe dar la máxima prioridad; y la idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social a la capacidad del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras".

Este concepto debe entenderse tal como lo entendió el informe: que el principal objetivo del desarrollo debe ser la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas y la sostenibilidad de ese desarrollo necesariamente requiere la satisfacción de las necesidades básicas de todos y extender a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor. Esto quiere decir que no solo se trata de equilibrar las necesidades intergeneracionales, sino que se trata también de equilibrar los recursos dentro de la propia generación, garantizando que las necesidades básicas de la humanidad fuesen satisfechas reduciendo la disparidad y desigualdad entre distintas zonas del mundo[56].

Aquella visión intergeneracional de la satisfacción de necesidades como elemento constitutivo del desarrollo sostenible, fue consagrada en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medioambiente y el Desarrollo (junio de 1992), adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medioambiente y el Desarrollo, en su principio 3.

- **Contribuciones del patrimonio cultural al desarrollo sostenible.**

Existe una importante vinculación entre el patrimonio cultural y la consecución del desarrollo sostenible. La cultura, a través de sus múltiples manifestaciones –dentro de las cuales se ubica el patrimonio cultural material e inmaterial-, contribuye poderosamente al desarrollo económico, a la estabilidad, cohesión e inclusión social y a la protección ambiental.

La contribución del patrimonio cultural al desarrollo económico se manifiesta, por ejemplo, en su capacidad para generar el turismo cultural. Por supuesto que para que el turismo cultural sea sostenible, el patrimonio cultural debe gestionarse de esa manera para que pueda hacer un aporte verdadero a la comunidad.

El PCI también contribuye al desarrollo sostenible. Esto se ve, por ejemplo, en la artesanía tradicional, que genera movimiento de dinero para las comunidades y

[56] Turner, Michael; *Patrimonio Mundial y desarrollo sostenible*, en Patrimonio Mundial; UNESCO; Londres, octubre 2012.

sus integrantes, incluyendo a artesanos vendedores de materias primas, transportistas y vendedores de aquellos objetos.

En cuanto al desarrollo social inclusivo, se ha sostenido que este no se puede alcanzar sin seguridad alimentaria sostenible, atención sanitaria de calidad, acceso al agua potable y al saneamiento, educación de calidad para todos, sistemas de protección social inclusivos e igualdad de género. Estos objetivos deben ser respaldados por una gobernanza inclusiva y libertad para que la gente pueda elegir su propio sistema de valores. Para ello es fundamental el rol que juega el PCI. La medicina tradicional, los hábitos alimentarios, las prácticas de gestión del agua, las reuniones sociales, las celebraciones y los sistemas de transmisión del conocimiento desempeñan un papel fundamental para las comunidades[57].

En tal sentido, los conocimientos tradicionales de una comunidad, basados en su enfoque global de su entorno y de su vida rural, fortalecen la agricultura local y los hábitos alimentarios tradicionales. En la medicina tradicional los tratamientos en zonas rurales aisladas son accesibles frente a otros tipos de medicina no disponibles. Para que esto contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad, se hace necesario garantizar el reconocimiento, el respeto y la mejora de este conocimiento medicinal y la transmisión a generaciones futuras. Donde hay otros servicios médicos, las prácticas y el conocimiento tradicionales, profundamente arraigados en el tejido sociocultural con valores espirituales específicos, son complementarios y pueden ampliar la oferta para los habitantes.

También el patrimonio cultural hace su aporte a la cohesión y estabilidad social dada su fuerza simbólica. Genera un gran sentido de pertenencia. Las prácticas sociales, los rituales y los eventos festivos estructuran la vida de las comunidades y colectivos, y pueden desempeñar un papel fundamental en su tejido social de una forma inclusiva.

Como se dijo, el patrimonio cultural también genera turismo de ese tipo y este no solo genera ingresos económicos, como ya vimos, sino que también amalgama a la sociedad porque la moviliza alrededor de su cuidado y administración.

En este sentido juega un rol preponderante la diversidad cultural. En cuanto al rol de la cultura en general y el patrimonio cultural –especialmente el inmaterial- en el cuidado del ambiente y la sustentabilidad ambiental, se resalta que los valores

[57] UNESCO. *Patrimonio cultural inmaterial y desarrollo sostenible*; pág. 4; https://ich.unesco.org/doc/src/34299-ES.pdf [consultado abril 2017]

culturales, el conocimiento local y las prácticas tradicionales sobre el manejo del ambiente pueden ser recursos invalorables para alcanzar la sustentabilidad ambiental y la consecuente supervivencia de la gente y su lugar. El manejo del patrimonio natural y cultural necesita que las comunidades se involucren en su conservación y tomen la iniciativa para ello, generando de esa manera una interdependencia intergeneracional[58].

En el mismo sentido de lo dicho, el principio 22 de la Declaración de Río (1992) expresó que las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel importante en el desarrollo y la ordenación del medioambiente debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Cabe destacar que, sin perjuicio de lo expresado, también hay prácticas que están enraizadas en las comunidades con la convicción de ser beneficiosas como, por ejemplo, la mutilación genital femenina o el matrimonio precoz que se practica en diversas comunidades, o incluso conductas arraigadas y justificadas culturalmente como la violencia doméstica o la discriminación a ciertos grupos. Estas expresiones culturales contrarias a los valores universales aceptados son consideradas internacionalmente como una violación de los derechos humanos[59], lo que excluye su contenido como acervo patrimonial[60]. Frente a esto, cabe preguntarse cómo resuelve jurídicamente la comunidad internacional este problema. La respuesta la encontramos en el art. 1 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que establece que sólo se tendrá en cuenta el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

Más allá de lo dicho en este último párrafo, cabe cuestionarse sobre la vigencia o, mejor dicho, la eficacia de la Convención mencionada para evitar la patrimonialización de tales conductas. Es el propio instrumento internacional que dice cuáles son las prácticas consideradas PCI y destaca que las mismas son las que

---

[58] UNESCO. *The power of Culture for Development*; https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189382; [consultado en abril de 2017]; en inglés; traducción del autor.

[59] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation [Consulta: 28/03/2020].

[60] UNESCO, Patrimonio cultural inmaterial y género, UNESCO, 2015, pág. 9 UNESCO, Igualdad de Género. Patrimonio y creatividad, Buenos Aires: UNESCO, 2014, pág. 15; https://ich.unesco.org/doc/src/34300-ES.pdf [consultado en junio de 2017].

las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural (art. 1); por ello, se entiende que las prácticas que sean contrarias a los valores universalmente aceptados por las convenciones de la ONU y demás organismos internacionales, impedirán que sean declaradas PCI de la humanidad, pero no le quitarán el carácter patrimonial en la comunidad en que se desarrollen, aun cuando ello pueda ser rechazado desde otros estándares culturales.

h).- Necesidad y justificación de la protección.

Ante la creciente amenaza de destrucción que sufre constantemente el patrimonio cultural, no sólo por el transcurso del tiempo y el consecuente deterioro sino también por la evolución social y económica de la población global, se hizo necesario adoptar distintos instrumentos de protección jurídica del mismo que resultan un paso importante para la aplicación de medidas de salvaguarda.

Teniendo en cuenta que el patrimonio cultural representa una construcción social que transmite diferentes valores de una sociedad determinada y es transmisor de su identidad, surge la clara necesidad de proteger los bienes que integran dicho patrimonio para –en última instancia- brindar protección a los valores sociales generadores de identidad que dicho patrimonio representa, siendo que la desaparición de un bien material o una manifestación inmaterial integrante del patrimonio cultural implica el menoscabo a la cultura de una sociedad determinada y, en algunos casos, de todos los pueblos del mundo.

Uno de los problemas más evidente en lo que respecta al PCI se da en el caso de los conflictos o choques culturales provocados por los diferentes factores sociales propios de la humanidad: la migración, la globalización, la propia evolución de las comunidades, los cambios de paradigmas sociales, entre otros. Estos choques culturales tienen como efecto lo que Félix Luna denominó confluencia cultural[61] y afectan la idiosincrasia de las comunidades. Esto hace necesario que el ordenamiento jurídico disponga el mecanismo para determinar qué se debe proteger y cómo en estos choques o conflictos culturales.

[61] Luna, Félix, *Confluencias*, 3ra. ed., Sudamericana, Buenos Aires, 1998, pág. 9.

Por ello la protección del patrimonio cultural es de interés público, justificando así las restricciones y límites al dominio que deben sufrir, en muchos casos, los bienes culturales de dominio privado, llegando incluso, a ser procedente la expropiación[62]; pero también otras medidas de restricción de la libertad general, o de incentivo a ciertas prácticas que son favorables a la tutela cultural. Lo dicho también vale para el desarrollo de las manifestaciones inmateriales o intangibles del patrimonio cultural.

Se ha expresado a lo largo del capítulo las características de los bienes culturales y en cada una de ellas se ha explicado por qué se constituye el patrimonio cultural como materia de protección.

Igualmente, en la normativa que rige a nivel nacional puede encontrarse también la esencia de la protección: el art. 41 de la Constitución Nacional junto a la garantía del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano sostenible, obliga a las autoridades a proveer este derecho y a la preservación del patrimonio cultural.

Esta regulación muestra con claridad cómo la Ley Suprema vincula el patrimonio cultural con el desarrollo sostenible en los términos que se expresaron anteriormente.

Por otro lado, y tal como se mencionara anteriormente, el Código Civil y Comercial categóricamente niega en su art. 14 el amparo del ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando este ejercicio pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Completando esta idea, en la Sección 3ra del Capítulo 1 del Título III del Libro Primero, contempla la regulación de los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva dentro de los cuales está el patrimonio cultural.

El art. 240 dice que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, debiendo conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas

[62] Cuando la restricción necesaria para la tutela cultural desnaturaliza el derecho de propiedad, la CSJN ha reconocido que puede darse lugar a la expropiación inversa. CSJN, 27/8/2013, «Zorrilla, Susana y otro c/ E. N. - P. E.N.», MJJ81882: *"El Estado es el máximo responsable de la satisfacción del derecho colectivo a la preservación de los bienes culturales"*; *"la expropiación resulta ser en el caso el único medio apto para garantizar el acabado cumplimiento de la manda contenida en el art. 41 de la Constitución nacional y las leyes, esto es, asegurar la preservación de un inmueble cuyo valor cultural ha sido reconocido"*.

de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en leyes especiales, dentro de las cuales está la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Esta norma en su art. 2 inc. a) obliga a la política ambiental nacional a asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los recursos culturales en tanto recursos ambientales, en la realización de las actividades antrópicas.

En el ámbito mendocino, la Ley 5.961 considera a los bienes culturales como bienes de incidencia colectiva, estableciendo en su art. 16 que tal norma se aplicará, en general, para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos y los derechos colectivos. Específicamente aclara que eso se hará brindando protección a tal fin a la conservación de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos.

Se ha sostenido doctrinalmente que luego de la reforma del año 2015 del Código Civil y Comercial, se ha introducido la variable ambiental en el ejercicio de los derechos individuales. Los artículos ya citados 14 y 240 incluyen dentro del Código la concepción de desarrollo sustentable[63], regulando así, y tal como se adelantara, los derechos individuales y los de incidencia colectiva, incorporando la noción de "función socioambiental" en el ejercicio de los derechos individuales[64].

Estos últimos se caracterizan por ser de uso común, indivisible y cuya tutela no es disponible por las partes[65], ya que las leyes que los regulan son de orden público.

[63] Cafferatta, Néstor y Lorenzetti, Pablo en Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.); *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*; T. XII-A; 1ra ed. revisada; Rubinzal Culzoni; Santa Fe; 2018; pág. 221.

[64] Cafferatta, Néstor y Lorenzetti, Pablo; *op. cit.*; pág. 226.

[65] CSJN in re "Mendoza, Silvia Beatriz y otros C/ Estado Nacional y otros S/ Daños y Perjuicios" (pronunciamiento de apertura en competencia originaria), Fallos: 326:2316.

CAPÍTULO 2

Antecedentes de la protección cultural en el ámbito internacional hasta el surgimiento de la UNESCO

a).- Desarrollo del expolio cultural y los intentos de protección.

- **Desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.**

En el mundo Antiguo (3000 a.C. – 700 a.C.) cualquier bien que hoy se considerara integrante del patrimonio cultural material, carecía de cualquier tipo de privilegio, siendo objeto de depredación y saqueo en los conflictos armados[66]. Entre los que subsisten de esta época se encuentran objetos provenientes de los territorios que hoy son Oriente Próximo y Medio Oriente, tales como el Código de Hammurabi –rey de Babilonia (1792-1750 a.C.)- que fue parte del llamado "botín mesopotámico", un conjunto de monumentos históricos saqueados por un conquistador elamita del siglo XII a. C.[67]

En las culturas americanas también sucedía lo mismo: cada conflicto entre comunidades llevaba al saqueo de la población invadida y la consecuente imposición de sus patrones culturales. Si bien aún existen numerosos testimonios de aquella época, es incalculable la cantidad de objetos materiales destruidos, incluso ciudades y civilizaciones enteras como, por ejemplo, la chavín en América del Sur

[66] Camps Mirabet, Núria, *op. cit.*, pág. 5. Fernando Báez sostiene que los primeros libros de la humanidad se originaron en Súmer (hoy sur de Irak) hace miles de años (entre 4100 y 3300 a.C.). Son las que se conocen como tablillas sumerias. No obstante, esos libros comenzaron a desaparecer inmediatamente debido en parte a su material (arcilla), otra parte a los desastres naturales y, también, en gran parte a la violencia del hombre ya que las guerras entre ciudades-Estado ocasionaban incendios y, en medio del fragor de los combates, las tablillas caían de sus estantes de madera y se partían quedando ilegibles. Asimismo, comenta el autor que la biblioteca de Ebla (Siria) fue abandonada cuando el Palacio Real de esa ciudad fue atacado e incendiado (2254-2218 a.C.) y miles de tablillas escritas en cuneiforme (textos administrativos, históricos, comunicaciones oficiales y hasta diccionarios bilingües en sumerio y su traducción al eblaíta) fueron reducidas a fragmentos. El fuego fue devastador y los saqueadores robaron oro y los objetos de más valor, dejando rotas las tablillas. Báez, Fernando, *Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros. De las tablillas sumerias a la era digital*, Océano, México, 2013, págs. 41/46.

[67] *LOUVRE. Las 300 obras maestras*, Musée Du Louvre Editions, París, 2008, pág. 13. Paradójicamente, Hammurabi emprendió distintas guerras de conquista en las cuales saqueaba archivos y los trasladaba a la gran biblioteca de su palacio donde, junto con las leyes compiladas en el código, estaban las obras literarias, matemáticas, astronómicas e históricas. También se han encontrado restos de otras dos grandes bibliotecas babilónicas: Shaduppum y Sippar. Báez, Fernando, *op. cit.*, pág. 47.

(aproximadamente entre 1250 y 200 a.C.) o los olmecas en Mesoamérica (aproximadamente entre 1800 y 400 a.C.). Schávelzon confirma esta postura de dominación cultural de un grupo por otro y su manifestación: los edificios eran modificados o recubiertos por otros conforme las pretensiones de los dominadores. Sin embargo, agrega un dato interesante referido a que los edificios existentes no eran desmantelados sino que quedaban en el interior del nuevo, siendo esta superposición muy cuidadosa para no destruir las pinturas murales o los objetos encerrados en el inmueble antiguo[68].

Con el transcurso del tiempo, a la guerra se la fue concibiendo como un conflicto entre estados y paulatinamente se redujo el *ius predae* (derecho a la apropiación de los bienes del enemigo) a la propiedad de los Estados.

Ya en la Edad Media (600 d. C – 1450 d. C.) tampoco se observaron cambios estructurales respecto al tema. Cuando se producían las guerras no importaban los medios empleados para ello, considerándose lícitos cualquiera de los utilizados. Como podrá adivinarse, tanto los objetos de interés histórico, arquitectónico o artístico como los valores que estos representaban sufrían la suerte que los ganadores quisieran imprimirle.

En el Imperio Bizantino, durante el movimiento de iconoclastas entre los siglos VIII y IX, la quema de imágenes también alcanzó a los libros de los autores de un bando u otro. La iconoclastia comenzó cuando el emperador bizantino León III (717-741) proscribió las imágenes en un intento de conciliar cristianos, judíos y musulmanes (aunque se afirma que predominó en la decisión un intento de reducir la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado). Hacia 725, un edicto repudió las imágenes eclesiásticas y una estatua de Cristo[69] fue destruida, provocando una revuelta en el pueblo. El hijo de León III, Constantino Coprónimo –Constantino V-, prosiguió la iconoclastia y arreció las medidas contra los protectores de imágenes. En

[68] Schávelzon, Daniel, *La conservación del patrimonio cultural en América Latina. Restauración de edificios prehispánicos en Mesoamérica: 1750-1980*, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo, Buenos Aires, 1990, pág. 13. Este autor da el ejemplo de lo que sostiene: en Tulúm se dejó un estrecho pasadizo relleno de arena y abovedado, para cubrir las pinturas de la subestructura de El Castillo; en Cacaxtla se protegieron pinturas y relieves con arena, aunque ello no evitó su parcial destrucción; en Chichén Itzá están el Chac-Mool y el Jaguar Rojo dentro de la pirámide inferior de El Castillo; en Tikal se dejó un templo de la acrópolis con una estela en el interior, pese a que luego fue recubierta toda la estructura. Sostiene que era una manera de destruir conservando.

[69] Se afirma que no se trató de una escultura sino de una famosa pintura de Cristo llamada *Christos antiphonetes*, sobre la arcada del palacio de Constantinopla. http://ec.aciprensa.com/wiki/Iconoclasia [consultado: 01/11/2015].

754 se convocó a lo que se conoció luego como Séptimo Concilio General que resolvió en el mismo sentido iconoclasta sostenido hasta entonces. Esta decisión legalizó una persecución sin precedentes y miles de imágenes fueron quemadas o blanqueadas. Las imágenes de la Virgen desaparecieron. Todos los defensores de las imágenes fueron torturados y asesinados y sus propiedades confiscadas. En las bibliotecas fueron buscados los manuscritos iluminados y cientos de textos fueron destruidos[70].

Así, en los casos de las guerras de religión (v.gr. las Cruzadas 1095-1272) la destrucción de los templos pertenecientes a la religión combatida era moneda corriente[71], así como también el robo de reliquias y su posterior tráfico y falsificación. Tal como afirma Johnson, esto se convirtió en un gran símbolo de poder: Una buena colección de reliquias –o incluso un objeto destacado- atraía peregrinos y por lo tanto riqueza a una abadía o una iglesia episcopal. Los reyes formaban colecciones tan importantes como las que había en las principales iglesias, para fortalecer su prestigio o su autoridad. Estas colecciones debían ser amplias para impresionar al público[72].

No obstante, existieron algunos intentos de proteger a las iglesias en virtud del carácter sagrado que las cubría, que no fueron respetados, como el caso del edicto promulgado en 1158 por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico I Barbarroja que prohibía el pillaje[73].

Ya mediando el siglo XV, precisamente el 29 de mayo de 1453, el ejército otomano del sultán Mehmet II atravesó las murallas de Constantinopla y asedió la ciudad[74]. Sería la caída definitiva del imperio. Los turcos se dedicaron a saquear la ciudad durante tres días, de acuerdo a una tradición establecida. Barrio a barrio, calle

---

[70] Báez, Fernando, *op. cit.*, págs. 126/127.

[71] En el 1204 la Cuarta Cruzada llegó a Constantinopla y miles de manuscritos fueron arrasados. Desde el 12 de abril, los cruzados saquearon la ciudad. Turba de soldados entraron en la iglesia Hagia Sofía o Santa Sofía, y se llegó a sentar a una prostituta en el trono del patriarca. El ataque fue salvaje: violaron a las mujeres, robaron los tapices de las iglesias, las obras de arte y los candelabros. Los sacerdotes, conscientes de la necesidad de mantener el temor a Dios como inicio de toda sabiduría, robaron con timidez todas las reliquias encontradas y prometieron la absolución a todos los saqueadores. Fue tal el robo que casi todas las iglesias de Europa llegaron a tener tesoros o reliquias de Constantinopla. Báez, Fernando, *op. cit.*, pág. 128.

[72] Johnson, Paul, *Historia del Cristianismo*, trad. Aníbal Leal y Fernando Mateo, Vergara, Argentina, 2006, pág. 223.

[73] Camps Mirabet, Núria, *op. cit.*, pág. 10.

[74] Parker, Philip, *Historia Mundial*, El Ateneo, 2010, trad. Antón Corriente y José Luis López, pág. 203.

a calle, aniquilaron a las mujeres y a los niños. Sin piedad, destruyeron iconos, iglesias y manuscritos. En el palacio imperial, en Blachernas, exterminaron a la guarnición veneciana y prendieron fuego a lo que pudieron. Eliminaron todos los libros que encontraron, no sin arrancar las cubiertas con joyas de algunos. Hay pruebas de saqueos en las iglesias de Santa Sofía, San Juan de Patras, Chora y Santa Teodosia, así como en la triple iglesia del Pantocrátor. Numerosos centros religiosos se transformaron en mezquitas[75].

Siguiendo esta evolución, se llega al Mundo Moderno (1450-1750) y en él se encuentra al Renacimiento europeo. Este movimiento reivindicó el interés por el arte, la arquitectura y la literatura, considerando al objeto creado como una obra de creación irrepetible, convirtiéndose la clase burguesa en mecenas del nuevo arte[76].

No obstante, durante este período se produjo un hito determinante en la historia universal: La conquista europea de América. Sin intentar si quiera un abordaje del tema del descubrimiento o conquista de este continente, vale hacer una aclaración: estos acontecimientos históricos no fueron diferentes a los que ya se vienen describiendo: La dominación de una civilización (o civilizaciones) por otra u otras a través de su cultura. Naturalmente que este encuentro produjo la destrucción de la cultura de los pueblos originarios, pero tampoco se impuso la cultura europea tal cual era en aquel continente. Ambas se vieron influenciadas. Se produjo una confluencia de culturas. Los europeos no solo se llevaron riquezas materiales, sino también algunos recursos materiales o inmateriales que cambiaron rotundamente sus tradiciones, costumbres o tecnologías: medicina, agricultura, tejidos, alfarería, alimentos[77]. No se produjo nada distinto al proceso que ya se venía dando durante los siglos anteriores en América y que ya se ha mencionado someramente en párrafos anteriores. Indudablemente se trató de un complejo proceso de transformación social y cultural que modificó las vidas en ambos continentes y, con el paso del tiempo, influyó en gran medida en el orden mundial.

A pesar de lo dicho, no se puede desconocer que a partir de la llegada de los europeos a América se produjeron despojos culturales en el ámbito material como, por ejemplo, la construcción de la catedral de Cuzco en 1560 sobre el templo de

[75] Báez, Fernando, *op. cit.*, pág. 129.

[76] Parker, Philip, *op. cit.*, pág. 239.

[77] Rossi, Juan José, *La máscara de América: el eje curvo de nuestra historia*, Galerna, 1° ed., Buenos Aires, 2007, pág. 210.

Viracocha; el monasterio de Santa Catalina encima de la Casa de las Vírgenes del Sol; la iglesia de la Compañía de Jesús en el palacio de Huayna Cápac; la de Santo Domingo sobre el Coricancha[78], pero también en el ámbito inmaterial como, por ejemplo, vemos en la prohibición de las representaciones teatrales mayas.

Los propios europeos observaron con gran asombro la monumentalidad de las ciudades y las arquitecturas del continente americano. Desde Cortés hasta Bernal Díaz han dejado descripciones que indican hasta qué punto quedaron anonadados al ver el Templo Mayor, el mercado de Tlatelolco y las calzadas por las que se entraba a Tenochtitlán. No obstante este asombro, ellos mismos se dedicaron a quemar códices, enterrar o destruir ídolos, saquear templos y palacios, extirpar idolatrías y, sobretodo, prohibir la cultura y la religión antiguas[79].

Nuevamente se ve la constante que se dio en toda invasión o conquista: el intento de dominación a través de la cultura en donde el pillaje, saqueo, destrucción o apropiación de objetos materiales responden al objetivo de doblegar el aspecto inmaterial que los mismos representan y que comprenden desde el idioma hasta las tradiciones de los pueblos dominados.

Después de la conquista vino la etapa de la imposición de la cultura triunfante y, siempre, existieron intentos de resistencia por parte de grupos más o menos numerosos de "dominados" a estos intentos y de mantener viva la cultura heredada y que hacían a su identidad.

América no fue la excepción. Terminada la conquista, que en realidad continuó en regiones como la habitada por los mayas hasta finales del siglo XVII, vino la integración, la simbiosis y la aculturación donde existió gente convencida, otra que aceptaba contra su voluntad tal imposición y gente que de una forma u otra continuó con sus ritos, costumbres y creencias. Así, por ejemplo, apareció la costumbre de celebrar la fiesta del pueblo el mismo día que antiguamente estaba dedicado al dios de la región. Simplemente debían elegir un santo cualquiera que fuera festejado ese mismo día mutando, así, Tonantzin en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo.

Respecto a instrumentos jurídicos de protección tanto de los objetos materiales como a las prácticas rituales o tradiciones a ellas relacionadas en América,

---

[78] Luna, Félix, *op. cit.*, pág. 83. Acá sucedió lo que ya fue descripto anteriormente cuando se citó a Schávelzon, Daniel, *op. cit.*, pág. 13.

[79] Schávelzon, Daniel, *op. cit.*, pág. 15.

no se han podido encontrar para este trabajo rastros de que hayan existido a la llegada de los europeos.

Pero estas prácticas de despojo y vejaciones culturales no eran exclusivas de América, sino que también se producían en la propia Europa durante las contiendas religiosas y políticas que se sucedían en el continente (reconquista española, saqueo de Amberes por parte de tropas españolas en 1576, guerra civil inglesa, entre otros).

Otra contienda feroz que se produjo en Europa fue la conocida como Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Esta terminó con la paz de Westfalia[80] y la firma del tratado de paz de Münster en 1648. En este instrumento de paz internacional podemos encontrar un antecedente convencional de la restitución de bienes, como así también en el Tratado de Oliva de 1660 (celebrado entre Suecia y Polonia) respecto a la restitución de la biblioteca Real Polaca[81] o el Tratado de Whitehall de 1662 (firmado entre Inglaterra y Holanda) donde incluye la devolución de la colección de los Estuardo[82].

A pesar de todos estos y otros intentos más y la intención protectoria de algunos doctrinarios[83], no se produjeron modificaciones sustanciales en lo referido al tema que venimos estudiando sino hasta el siglo XIX.

---

[80] *"Considerada el acta fundacional del Derecho Internacional moderno, entendido como conjunto normativo que emana de la voluntad de Estados soberanos e independientes"* según Sánchez, Víctor M. (Dir.) y ots. *Derecho Internacional Público*, 2° ed., Huygens Editorial, Barcelona, 2010, pág. 44.

[81] Fernández Liesa, Carlos R., *Normas Consuetudinarias y Convencionales de Derecho Internacional en Materia de Restitución* en DICCIONARIO JURÍDICO DE LA CULTURA, coord. Margarita Fuenteseca; http://www.diccionario-juridico-cultura.com/voces/normas-consuetudinarias-y-convencionales-de-derecho-internacional-en-materia-de-restitucion; [consultado: 28/2/2016].

[82] Camiña Domínguez, Celia M. *La protección internacional de los bienes culturales en tiempo de guerra*, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 3, junio, 2004, págs. 73/107, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400302. [consultado: 28/2/2016]. Ver FRIGO, Manlio, *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2007. En esta obra, el autor menciona también el Tratado de Utrecht (1713) entre Francia y Países Bajos, art. VI y VIII.

[83] Badenes Casino, Margarita, *La protección de los bienes culturales durante los conflictos armados. Especial referencia al conflicto armado en el territorio de la antigua Yugoslavia*, Universitat de Valencia, 2005, pág. 16.

En el curso del siglo XVII, en virtud de una nueva concepción de la guerra producto del Iluminismo y surgida del pensamiento iusnaturalista, aquella asume los caracteres de un conflicto entre Estados y sus efectos deben quedar circunscriptos a la destrucción del potencial bélico del enemigo, sin comprometer los bienes ni las personas de quien no estén directamente interesados en el conflicto en la medida que ello sea posible. Frigo, Manlio, *op. cit.*, pág. 83/84.

- **Desde el siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914).**

Durante el gobierno del Directorio francés (1795-1799) y las guerras napoleónicas (1803-1815) se produjo un sistemático saqueo por parte del país galo de obras de arte a los países invadidos, siendo trasladadas a Francia con intención de que allí estuvieran reunidas las obras maestras de la época[84]. A tal punto esto era así que se dice que era costumbre que Dominique Vivant, barón de Denon, acompañara a Napoleón Bonaparte en muchas de sus campañas para elegir qué obras del enemigo tomar y así enriquecer a los museos franceses. Cabe destacar que estas apropiaciones se instrumentaban mediante tratados de paz como, por ejemplo, el acuerdo preliminar del Tratado de Tolentino (1797): el armisticio de Bolonia, firmado el 23 de junio de 1796 entre los Estados Pontificios y Francia, mediante el cual los primeros debían entregar a la segunda 100 obras de arte y 400 manuscritos que serían trasladados a Francia[85]. Una actitud similar se llevará a cabo durante la Segunda Guerra Mundial de la mano del Tercer Reich.

Pero los historiadores coinciden en que es a partir de la caída de Napoleón Bonaparte que se inicia el debate sobre la restitución de los objetos de arte e históricos[86], aunque en el contexto de acuerdos y normativas de guerra o paz según el caso.

Aunque el Tratado de París del 30 de mayo de 1814 –antecedente directo del Congreso de Viena y que ponía fin a las guerras napoleónicas- firmado entre Francia y la coalición adversaria (Gran Bretaña, Rusia, Austria, Prusia, Suecia, Portugal y España) sí reconoció la obligación de las partes contratantes de devolver archivos, mapas, planos y cualquier otro documento, el acta principal del Congreso de Viena (9 de junio de 1815) no contuvo ninguna referencia a la restitución de lo que hoy llamamos bienes culturales ni, mucho menos, obras de arte.

No obstante, se generó un movimiento internacional reivindicando la restitución de tales objetos movilizado por el diplomático británico en el Congreso de

---

[84] Ramila, Janire, *España en ruinas. Dos siglos de expolio del patrimonio artístico*, en Clio. Revista de Historia, año 12 N° 137, MC ediciones, Madrid, pág. 46.

[85] Fernández Liesa, Carlos R., *op. cit.* [consultado: 29/2/2016].

[86] Véase al respecto los ya citados autores Camps Mirabet, Núria; Fernández Liesa, Carlos R; Caamiña Domínguez, Celia M.; Badenes Casino, Margarita y los recomendados por esta en la obra ya citada.

Viena Robert Stewart, conocido como Lord Castlereagh, fundado en la ilicitud de las apropiaciones de lo que aún no se conocía como patrimonio cultural, haciéndola extensiva a la cesión formal de obras de arte a través de los tratados de paz[87]. En este marco se logran recuperar del Museo del Louvre más de 5.000 piezas.

A raíz de estos movimientos descritos, se empieza a tomar conciencia de la necesidad de proteger los objetos artísticos, históricos y de gran valor arquitectónico durante los conflictos armados. Es durante el siglo XIX que empieza a consolidarse en el plano internacional la idea de humanización de la guerra, distinguiéndose entre objetivos militares y no militares[88], criterio que será tenido en cuenta en las futuras normas internacionales de protección.

Al decir de Badenes Casino[89], la aparición póstuma (1832) del quinto volumen del libro *Vom Kriege* (De la guerra) del filósofo y militar alemán Carl von Clausewitz es un hito importante en la protección de lo que hoy se conoce como bienes culturales, estableciéndose en él el principio de proporcionalidad en relación con la conducta durante las hostilidades, en virtud del cual están prohibidas las acciones militares cuyos daños excedan claramente la ventaja militar que pueda obtenerse. También incorporó la idea de limitar los esfuerzos de la guerra a los objetivos estrictamente militares.

No obstante lo meritorio de la idea que legó el autor, se concluye que, desde su punto de vista, las obras de arte y los objetos de gran valor histórico y arquitectónico no son el objeto principal de protección y quedarían salvaguardados en el caso de que ellos queden incluidos en alguno de los supuestos contemplados. En caso contrario, no tendrían protección alguna.

i. Código Lieber.

Es recién en el año 1863 que se emite un documento que contiene una disposición de protección específica de lo que hoy son considerados bienes culturales: el Código Lieber. Se llamó así a las *Instrucciones del Gobierno para los Ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla* u *Orden General N° 100* y

[87] Camps Mirabet, Núria, *op. cit.*, pág. 14.

[88] Camps Mirabet, Núria; *op. cit.*, págs. 15/16.

[89] Badenes Casino, Margarita; *op. cit.*, pág. 16.

consistieron en unas instrucciones firmadas por el presidente estadounidense Abraham Lincoln a las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil de ese país que dictaban la forma en que los soldados debían comportarse en tiempos de guerra[90]. Entre otras disposiciones, en su art. 35 estableció que las obras de arte clásico y bibliotecas debían ser protegidos contra de todo daño evitable.

A su vez, el art. 36 dispuso que si tales obras de arte y bibliotecas, así como las colecciones científicas o instrumentos pertenecientes a una nación o a un gobierno hostil podían ser removidos sin daño, el gobernante del Estado ocupante podía ordenar su incautación y traslado, resolviéndose su propiedad en el inminente tratado de paz. En ningún caso dichos bienes serían vendidos o donados si eran capturados por el ejército de los Estados Unidos, así como tampoco serían nunca objeto de apropiación privada, maltrato o devastación.

Como puede observarse, si bien se trató de instrucciones en el ámbito militar destinado únicamente a las fuerzas del norte de Estados Unidos que luchaban en la Guerra de Secesión – que tuvieron gran influencia en el armado de los ejércitos de otras potencias extranjeras- este código fue el punto de partida para la codificación del Derecho Internacional Humanitario[91]; pero la referencia clara y precisa tanto a obras de arte como a bibliotecas o colecciones científicas mostraron una clara visión de futuro y superadora de su época por parte del militar y jurista germano-estadounidense Francis Lieber.

Cabe recordar que mientras Estados Unidos iba terminando su guerra interna, Argentina, junto con Brasil y Uruguay, entraba en uno de los mayores conflictos bélicos del siglo XIX: la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza (1865-1870). Ella significó la destrucción de Paraguay no solo en los ámbitos militar, geográfico y económico, sino también en lo que respecta a expolio sociocultural, a tal punto que cuando las tropas brasileñas entraron en Asunción el 5 de enero de 1869, las argentinas permanecieron afuera de la ciudad para no autorizar con su presencia los escándalos "inauditos y vergonzosos" perpetrados por los brasileros. Historiadores

[90] https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdljk.htm [consultado en marzo de 2016].

[91] Abrisketa, Joana, *Derechos Humanos y Acción Humanitaria*, Alberdania S.L., Bilbao, noviembre 2004, pág. 47

relatan que buques de transporte y de guerra salían del puerto cargados de muebles de sala y dormitorio, llevando pianos y camas juntos[92].

ii. Declaración de Bruselas.

Unos años más tarde, específicamente en 1874 –con posterioridad a la guerra franco-alemana- se aprobó en Bruselas una Declaración Internacional sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, conocida como *Declaración de Bruselas*. Esta conferencia nunca fue ratificada, pero influyó en gran medida para las codificaciones que vendrían.

Esta Declaración contuvo normas destinadas a la protección de lo que hoy se conocen como bienes culturales materiales. Así, en el art. 8 dispuso que serían considerados como propiedad privada los bienes de los Municipios, los de establecimientos destinados a los diversos cultos, los de beneficencia, instrucción, artes y ciencias, aunque pertenezcan al Estado; debiendo perseguirse y castigarse toda aprehensión, destrucción o degradación intencional de semejantes establecimientos, de monumentos históricos o de las obras de arte y de la ciencia.

En el mismo sentido de protección de estos bienes, el art. 17 dispuso que en los sitios y bombardeos deberían tomarse las precauciones necesarias para no causar daños, en cuanto sea posible, a los edificios consagrados a los diversos cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia; así como a los hospitales y puntos de reunión de enfermos y heridos, con tal que al mismo tiempo no se haga uso de ellos para un fin militar. Los sitiados, por su parte, tenían el deber de designar dichos edificios por medio de signos visibles especiales, que debían dar a conocer de antemano al sitiador.

Indirectamente, los bienes culturales materiales quedaron protegidos mediante el art. 18 que estableció que las plazas o ciudades tomadas por asalto, no deben ser entregadas al pillaje de las tropas victoriosas, como así también por el art. 39 que prohibía formalmente el pillaje.

Pero hay una disposición que podría entenderse como protectoria de lo que hoy son considerados bienes culturales intangibles o inmateriales (además, por supuesto, de los materiales o tangibles). Esta es la cláusula 38 que expresamente ordenaba que debían respetarse el honor y los derechos de familia, la vida y la

[92] De Marco, Miguel Ángel, *La guerra del Paraguay*, 2° ed., Buenos Aires, Booket, 2013, págs. 39/42.

propiedad de los individuos, así como sus convicciones religiosas y el ejercicio de sus cultos, en el sentido que se respetaban las tradiciones o manifestaciones culturales.

iii. Manual de Oxford.

Ya en 1880 se adopta el Código o Manual de Oxford[93]. Así se llamó al *Manual de las leyes de la guerra en tierra* que fuera publicado por el Instituto de Derecho Internacional (fundado en 1873), no siendo un tratado internacional sobre la materia. En él se había adoptado una solución similar a la Declaración de Bruselas que influyó notablemente en su confección –tal es así que fue mencionada en el prefacio del Código-, siendo su art. 34 una reproducción casi literal del art. 17 de esta.

También se prohibía en este instrumento el pillaje y la destrucción de la propiedad pública o privada sin justificación militar, lo que implicaba una salvaguarda indirecta a los objetos materiales históricos o artísticos. Respecto al aspecto inmaterial de la cultura como las convicciones religiosas y su práctica, también quedaron protegidos por estas leyes.

Conjuntamente, el art. 53 de este instrumento consagró la prohibición de incautación de las propiedades de las municipalidades y otras instituciones dedicadas a la religión, caridad, educación, artes y ciencias, como así también prohibió formalmente la provocación de daños o destrucción de las instituciones descritas, monumentos históricos, archivos, obras de arte o de ciencia.

También en este documento se buscó proteger la propiedad privada tanto de particulares como de corporaciones, estableciendo la obligación de que sea respetada y estableció condiciones bajo las cuales era procedente la confiscación (art. 54).

Como novedad, este código añadió en su art. 84 que los que violaban las leyes de guerra debían ser castigados por la ley penal.

En esta evolución del derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos armados y sus normas por regular la guerra, al finalizar el siglo XIX y comenzar el siglo XX aparecen las Convenciones de La Haya (1899 y 1907).

---

[93] Rodríguez Bernal, Antonio Pedro; *La Convención de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 y su segundo protocolo de 1999. Aproximación, utilidad e implementación en España*; Rodríguez Bernal Abogados; S/año edición, pág. 10.

iv. Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

En 1885 se desarrolló la guerra entre Serbia y Bulgaria, demostrando este conflicto armado la necesidad de contar con un instrumento internacional vinculante[94] que cubriera los aspectos de la guerra no cubiertos por el Convenio de Ginebra (1864)[95] aunque, cabe destacar, este convenio no hizo referencia alguna a los objetos artísticos o históricos.

Teniendo en cuenta que Rusia contaba con una insuficiente capacidad industrial y escasez de material bélico, lo que se veía como una amenaza, el zar Nicolás II aprovechó la situación y encomendó a su Ministro de Asuntos Exteriores, el conde Mouravieff, la promoción de una conferencia de paz cuyo principal objetivo sería la reducción de armamentos y la designación de la ciudad de La Haya (Países Bajos) como sede[96].

Esta primera convocatoria tenía un objetivo tan amplio que no tuvo efecto y estas autoridades gestionaron una segunda convocatoria que estableció objetivos concretos como la resolución pacífica de controversias y la reglamentación de la guerra terrestre y marítima[97].

Así, en 1899 se celebró la Conferencia de La Haya –de la que no participó Argentina- en la que se adoptaron tres convenciones y tres declaraciones[98] anexadas al Acta Final redactada el 29 de julio de 1899 que, al decir de la autora Joana Abrisketa Uriarte, representó el primer intento de codificar ciertas normas del Derecho de gentes de la época[99], siendo una referencia obligada en esta evolución.

---

[94] Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho de la Guerra en el siglo XX: Se consolida y evoluciona*, ISSN: 1133-0937 DERECHOS Y LIBERTADES Número 26, Época II, enero 2012, pág. 52.

[95] Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864. Su nombre oficial era "Convenio de Ginebra de 1864 para mejorar la suerte de los militares heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña". Se trató del primer tratado dirigido a mejorar la suerte de los militares heridos. Se trataba de un tratado multilateral auspiciado por el llamado "Comité de los Cinco" que más tarde se convirtió en el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR). Ver Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho*..., pág. 50.

[96] Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho*..., pág. 52.

[97] Jiménez Piernas, *El papel de España en la Conferencia de Paz de La Haya de 1899*, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LI, 1999, núm. 2, págs. 775/782 y AMAE, *Nota del Conde Mouravieff de 30 de diciembre de 1898*, Tratados y Negociaciones, núm. 558, Expediente 20, citado por Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho*..., pág. 52.

[98] Ver al respecto Sánchez, Víctor M. (Dir.) y ots.; *op. cit.*; también ver *The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy*, Lilian Goldman Law Library, Yale Law School, http://avalon.law.yale.edu/ [consultado en noviembre de 2016].

[99] Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho*..., pág. 54

Respecto a la protección de los objetos de interés histórico, artístico o humanitario, en el Convenio II de dicha Conferencia quedó establecido en el art. 27 que en los sitios y bombardeos deberían tomarse todas las medidas necesarias para librar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales y los centros de reunión de enfermos y heridos, siempre que no se utilicen dichos edificios con un fin militar. Nuevamente se estableció el deber de los sitiados de señalar estos edificios o sitios de reunión con signos visibles y especiales, que debían ser notificados de antemano al sitiador.

Al igual que los instrumentos anteriores ya descriptos, el art. 28 prohibió entregar al pillaje a una población o localidad aunque sea tomada por asalto. Asimismo, en consonancia con lo establecido por la cláusula 38 de la Declaración de Bruselas, el art. 46 de esta Convención estipuló la obligación de respetar el honor y los derechos de familia, la vida de los individuos y la propiedad privada –que no podía ser confiscada-, así como las creencias religiosas y el ejercicio de los cultos, prohibiendo en el art. 47 el pillaje.

A pesar de los intentos descriptos por alcanzar la paz, meses después de esta Primer Conferencia de La Haya se desató el segundo conflicto armado entre los ingleses y los boers en Sudáfrica (11 de octubre de 1899 – 31 de mayo de 1902) y a principios del siglo XX se produjo la guerra ruso-japonesa (entre el 8 de febrero de 1904 y el 5 de setiembre de 1905). En ambos casos existió destrucción de objetos artísticos e históricos. Estos conflictos fueron los precedentes de la segunda Conferencia de La Haya celebrada en 1907[100].

Esta Conferencia fue convocada por el presidente de Estados Unidos Theodore Roosvelt y participaron casi el doble de los Estados que participaron en la primer Conferencia[101], incluida la República Argentina junto a otros Estados latinoamericanos.

Entre las disposiciones referidas a la protección de edificios históricos, artísticos y sociales, cabe destacar las contenidas en el Convenio IV relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre y su Reglamento[102] –firmado el 18 de octubre de 1907 y en vigencia desde 26 de enero de 1910-.

---

[100] Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho*..., pág. 54

[101] En total fueron 44 países.

[102] Se celebraron 13 Convenios: Convenio I sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales; Convenio II relativo a la limitación del empleo de la fuerza para la recuperación de deudas

El art. 27 de este reglamento ordenó que en los sitios y bombardeos se tomaran todas las medidas necesarias para favorecer, en cuanto sea posible, los edificios destinados al culto, a las artes, a las ciencias y los monumentos históricos, debiendo los sitiados identificar dichos edificios con signos visibles que se le debían hacer conocer de antemano al sitiador.

Al igual que los documentos anteriores ya analizados, ésta también establece la obligación de respetar la propiedad privada –que no podía ser confiscada-, las creencias religiosas y la práctica de los cultos. El pillaje era formalmente prohibido (arts. 46 y 47).

A su vez, el art. 56 del reglamento citado estableció que los bienes de las comunidades, los de establecimientos consagrados a los cultos, a la caridad, a la instrucción, a las artes y a las ciencias, aun cuando pertenezcan al Estado, debían ser tratados como propiedad privada, agregando enfáticamente que se prohibía y se perseguiría toda ocupación, destrucción, deterioro intencional de tales edificios, de monumentos históricos y de obras artísticas y científicas.

No obstante lo expuesto, el art. 23 inciso g) del Reglamento de la Convención IV estableció una excepción que a sin duda sería posteriormente la puerta de entrada de todas las crueldades contra el patrimonio cultural ya que estableció que era particularmente prohibido, entre otras cosas, destruir o tomar propiedades enemigas, a menos –y aquí está la llave- que tales destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra.

Se ha dicho que tanto la Primer Conferencia de La Haya (1899) como la Segunda (1907) marcaron un hito en la historia del Derecho Internacional Humanitario porque sus objetivos eran más ambiciosos que los congresos precedentes. Se buscó prevenir los conflictos armados y limitar sus consecuencias[103]. En esto también está claramente incluida la protección a los objetos artísticos e

---

contractuales; Convenio III relativo a la ruptura de hostilidades; Convenio IV relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre y su Anexo: Reglamento sobre las leyes y usos de la guerra terrestre; Convenio V relativo a los derechos y deberes de las Potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre; Convenio VI relativo al régimen de los buques mercantes enemigos al empezar las hostilidades; Convenio VII relativo a la transformación de los buques mercantes en buques de guerra; Convenio VIII sobre la colocación de minas submarinas automáticas de contacto; Convenio IX relativo al bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra; Convenio X para aplicar a la guerra marítima los principios del Convenio de Ginebra; Convenio XI relativo a ciertas restricciones al ejercicio del derecho de captura en la guerra marítima; Convenio XII relativo al establecimiento de un Tribunal Internacional de Presas; Convenio XIII relativo a los derechos y deberes de los neutrales en la guerra marítima.

[103] Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho*..., pág. 56.

históricos como así también los valores humanos, las tradiciones y el culto de las personas, en tanto estas Conferencias están consideradas como pioneras[104]. Tanto es así, que ambas sirvieron como inspiración a la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 y su Reglamento, tal como lo dice su preámbulo.

Mientras tanto a nivel regional americano, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional Americana (realizada en México del 22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902), el 29 de enero de 1902 se suscribió una Recomendación sobre la Creación de una Comisión Arqueológica Internacional Americana[105] que tendría como objeto la creación de un "Museo Internacional Americano" y, a su vez, podría nombrar subcomisiones que tuvieran por objeto la limpieza y conservación de las ruinas de las principales ciudades prehistóricas, estableciendo en cada una de éstas un museo para conservar los objetos de interés que se encuentren en la localidad, y que en dichas ciudades exhumadas se establezcan lugares apropiados para los visitantes.

Como puede verse, la protección de los bienes culturales tanto materiales como inmateriales –que no recibían ese nombre en las épocas que relatadas ya que el concepto se desarrolla mucho después- está muy vinculada a la evolución del Derecho Internacional Humanitario porque, incluso, hay quien sostiene que la protección de este tipo de bienes forma parte de este derecho[106]. De ahí que haya que recurrir a la historia del derecho de la guerra para reseñar someramente la evolución de la protección del patrimonio cultural.

No obstante, la carencia principal de estas Conferencias y de todos los documentos que las precedieron fue que no estipularon cómo proteger ni a los objetos artísticos, históricos o científicos ni a las prácticas religiosas y demás costumbres y tradiciones durante los tiempos de paz.

El estallido de la Primer Guerra Mundial (1914-1918) impidió que se efectuara la Tercera Conferencia de La Haya que debía convocarse para 1914.

---

[104] Camps Mirabet, Núria, *op. cit.*, pág. 20.

[105] La República Argentina no suscribió tal recomendación.

[106] Bugnion, Francois, *Génesis de la protección jurídica de los bienes culturales en caso de conflicto armado,* Revista Internacional de la Cruz Roja, 2004. En este artículo sostiene que *"en efecto, la destrucción de un bien cultural no afecta sólo al bien en cuestión. En realidad, a través de la destrucción de un bien cultural, siempre se tiene como objetivo a las personas. Los bienes, por sí solos, no suscitan hostilidad"*.

- **Desde el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) hasta el comienzo de la Segunda (1939). Período entre guerras.**

En agosto de 1914 estalló lo que entonces se conocería como la Gran Guerra. Vale decir que sus consecuencias no se limitaron simplemente a la cantidad de vidas humanas afectadas, sino que repercutieron a nivel político, geográfico, económico, social y cultural.

Respecto a este último aspecto, los cambios fueron rotundos. No solo en el aspecto material de la misma con la destrucción de numerosos objetos representativos del arte y la historia de los países invadidos, sino también desde su aspecto inmaterial, ya que cada nación resignificó su cultura desde la música, la literatura y el arte, dando mayor peso a aquellas piezas que exaltaran la nacionalidad y excluyeran o denigraran al enemigo. Incluso se modificó lo cotidiano: los continuos enfrentamientos y la obstrucción de las comunicaciones aisló comunidades enteras y el alistamiento de los hombres hizo que la mujer pasara a ser un eslabón fundamental en las líneas de producción, entrando a conformar un papel determinante en la sociedad[107]. Por ello, las costumbres arraigadas en cada pueblo fueron alteradas en su esencia, afectándose naturalmente la faz inmaterial de la cultura. Esta modificación estructural se dio tanto en los países victoriosos como en las potencias derrotadas ya que los tratados de paz que se firmaron con posterioridad al armisticio del 11 de noviembre de 1918 significaron un cambio sustancial en las fronteras de los países (basta ver, si no, el ejemplo del Imperio Austro-Húngaro) siendo generador de un conflicto cultural profundo.

Cabe destacar que las disposiciones contenidas en los instrumentos que se describieron anteriormente no impidieron la destrucción de los objetos históricos y artísticos durante la Gran Guerra. Fundamentalmente la doctrina alemana argumentó que los ejércitos beligerantes se basaron en la cláusula de necesidad militar incluidas en los convenios referidos como justificativo para atacar, destruir o apoderarse de la

[107] Beltrán, Lina Constanza, *La Gran Guerra y el nuevo sentido de la valoración del patrimonio cultural*, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-306/la-gran-guerra. [Consultado en noviembre de 2016].

cultura nacional de los países invadidos[108] y así eludir el cumplimiento de la normativa vigente.

i. Algunos intentos fallidos. Sociedad de las Naciones.

Esta protección insuficiente y la gran destrucción de las obras del arte y de la historia que estaba produciendo la escalada de la guerra en muchas ciudades del continente europeo, llamó la atención de la comunidad internacional que entendió que debía perfeccionarse una normativa específica para la protección de tales objetos.

En este sentido, en abril de 1915 los profesores suizos Vetter y Mauriand sugirieron la creación de la Cruz de Oro: un organismo internacional para la protección del patrimonio histórico y artístico del mundo equivalente a la Cruz Roja e inspirado en ella. Ya en agosto de 1915 se reunió en Bruselas una conferencia que trazó las líneas generales de un convenio que preveía la creación de una Oficina Internacional para la protección de los monumentos durante la guerra, pero fracasó[109].

Estos intentos fallidos llevaron a que, en abril de 1918, aún antes de finalizar la guerra, la Sociedad Holandesa de Arqueología solicitara a la Reina de los Países Bajos que convocara a una conferencia internacional con objetivos similares a los propuestos anteriormente: protección de los monumentos y objetos históricos y artísticos y presentó un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores holandés y a todas las asociaciones similares de otros países. En él se exponía, entre otras cosas, que en las Convenciones de la Haya no se había previsto la necesidad de preparar la protección de los bienes culturales en tiempo de paz y proponía, entre otros puntos, confiar ciertas funciones de prevención y control a una Oficina internacional: concretamente la misión de redactar un inventario público de edificios y monumentos históricos que, bajo el compromiso previo de no ser utilizados con fines militares, debieran ser respetados[110]. Otro intento que fracasó.

---

[108] Stabile, Simonetta, *Tutela e circolazione dei bieni culturali: Modelli internazionali, comunitari e nazionali*, tesis doctoral, Scuola Dottorale in Scienze Politiche XX Ciclo, Sezione "Studi Europei e Internazionali", pág. 14.

[109] Badenes Casino, Margarita, *op. cit.*, pág. 22.

[110] Camps Mirabet, Núria, *op. cit.*, pág. 22.

A pesar de que estas iniciativas de otorgar una protección legal a los objetos artísticos e históricos no llegaron a verse concretadas en instrumentos jurídicos vinculantes, mostraron que el fenómeno de universalización del patrimonio era inminente. Demostraron que este estaba dejando de ser una cuestión particular de los Estados para convertirse en una cuestión supranacional y darse la discusión en ámbitos internacionales de debate.

ii. Cláusulas de restitución de objetos de arte e históricos contenidas en los tratados de finalización de la guerra.

Ya con la finalización de la Primera Guerra Mundial y la consiguiente Conferencia de Paz de París (1919–1920), los países victoriosos en los tratados de paz que se firmaron impusieron cláusulas a los países vencidos referidas a la devolución de objetos de interés histórico, artístico y científico.

Así, en el Tratado de Versalles, los países aliados impusieron a Alemania la obligación de restitución de bienes determinados y apropiados por Alemania no solo en la Gran Guerra sino también en la guerra franco-prusiana de 1870-1871 (se referían, por ejemplo, a los trofeos, archivos, recuerdos históricos u obras de arte sacados de Francia por las autoridades alemanas en el transcurso de la guerra de 1870-71). La particularidad de estas cláusulas relativas a los bienes culturales no contemplaba un régimen general, sino que se referían a concretos bienes culturales y beneficiaban sólo a determinados estados[111].

No obstante, la novedad incluida por el Tratado de Versalles radicó en, justamente, contemplar la restitución por sustitución o restitución por equivalencia, constituyendo un precedente de valor.

A su vez, el Tratado de Saint-German en Laye[112] no estableció cláusulas respecto a la restitución de bienes particulares como sí lo hizo el Tratado de Versalles sino que, por el contrario, previó condiciones generales de restitución y reparación como así también la obligación de restituir los bienes sustraídos de los

[111] Caamiña Domínguez, Celia M., *op. cit.*, pág. 80.

[112] Firmado el 10 de setiembre de 1919, entrando en vigencia el 16 de julio de 1920.

territorios invadidos y pertenecientes a las instituciones públicas o privadas, incluyendo los bienes trasladados de los territorios cedidos a partir de 1914[113].

El Tratado de Neuilly[114] dispuso que Bulgaria se comprometía a buscar y devolver a Rumania, Grecia y al Estado Serbio-Croata-Esloveno registros, archivos y cualquier art. de interés arqueológico, histórico y artístico que haya sido sustraído de sus territorios durante la guerra (art. 126).

Por su parte, el Tratado de Trianon[115], respecto a los elementos culturales, obligó a establecer una negociación entre los Estados perjudicados por el traslado de sus bienes y aquellos que se habían apoderado de los mismos. No estableció nada parecido a los demás respecto a la obligación de restituir, confiando entonces en una solución amistosa. Cabe aclarar que esta obligación de negociación se refería a aquellos bienes que no se encontraban incluidos en otras disposiciones. Hungría estaba obligada en virtud del mismo a abstenerse de enajenar o dispersar los bienes culturales afectados, aunque sólo por un plazo de 20 años según el art. 179.

Estas fueron las principales disposiciones referidas a la restitución de bienes culturales contenidas en los principales tratados de paz firmados por las naciones participantes en la Primera Guerra Mundial pero, como puede verse, no se encuentra todavía una normativa internacional a nivel global referida exclusivamente a la protección de los bienes culturales o, como era usual llamarlos en aquella época, objetos de interés histórico y artístico teniendo en cuenta que en un sistema efectivo de protección se distinguen tres niveles de salvaguarda en caso de conflicto armado: la protección material, referida fundamentalmente a su no destrucción; la prohibición de sustraer el bien cultural del territorio de origen durante un conflicto bélico; y la restitución del bien cultural una vez que aquél ha finalizado[116].

iii. Resolución para la Protección de Documentos Arqueológicos.

[113] Ver Caamiña Domínguez, Celia M., *op. cit.*, pág. 81. En general las cláusulas que obligan a Austria a la restitución de actas, documentos y objetos de valor histórico y artístico exportados de los territorios de las potencias aliadas durante la guerra o, a partir del 1 de junio de 1914 de los territorios cedidos, están contenidas entre los arts. 191 y 196 del Tratado.

[114] Tratado firmado el 27 de noviembre de 1919 entre Estados Unidos, Imperio Británico, Francia, Italia, Japón, Bélgica, China, Cuba, Grecia, Reino de Hiyaz, Polonia, Portugal, Rumania, Estado Serbio-Croata-Esloveno, Siam y Checoslovaquia por una parte y Bulgaria por la otra.

[115] Tratado firmado el 4 de junio de 1920 entre Estados Unidos, Imperio Británico, Francia, Italia, Japón, Bélgica, China, Cuba, Grecia, Nicaragua, Panamá, Polonia, Portugal, Rumania, Estado Serbio-Croata-Esloveno, Siam y Checoslovaquia por una parte y Hungría por la otra.

[116] Caamiña Domínguez, Celia M., *op. cit.*, pág. 76.

En el ámbito comunitario americano, en 1923, precisamente el 13 de abril, se aprobó en el marco de la Quinta Conferencia Internacional Americana celebrada en Santiago del 25 de marzo al 3 de mayo de ese año, la Resolución para la Protección de Documentos Arqueológicos en la que se recomienda a los gobiernos americanos la asignación en los presupuestos anuales de una suma conveniente para las excavaciones y estudios de los restos arqueológicos, para la expropiación de los que sea necesario, como también de los documentos históricos que convengan y para el fomento de los museos y bibliotecas en que han de conservarse para ser utilizados (art. 1).

También incluyó una disposición referida a una esfera que hoy se entiende como elemento del PCI: el lenguaje. Pidió expresamente a los gobiernos americanos que establezcan o estimulen en sus institutos superiores de enseñanza, el estudio de las respectivas lenguas aborígenes (art. 3), así como también insinuó la conveniencia de que los gobiernos legislen para obligar a quienes descubran restos arqueológicos, a denunciarlos a la autoridad administrativa, sin que puedan ser removidos antes de un plazo prudencial para su examen (art. 4).

Igualmente, estableció la conveniencia de que se dicten leyes que faculten a los Gobiernos para expropiar, por causa de utilidad pública, los restos arqueológicos, los documentos, las construcciones y objetos muebles de interés histórico, cuya destrucción y exportación debe ser prohibida en todo caso (art. 5), recomendando, además, a cada gobierno a formar un archivo histórico (art. 8).

Tal como se comentó anteriormente, con el desarrollo de la Gran Guerra y su finalización empieza a crecer el interés de la comunidad internacional en la protección de los objetos artísticos e históricos. Este proceso se profundizó con la creación de la Sociedad de las Naciones (1919) y la conformación de organismos especializados como sucedió en 1922 con la conformación de la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual llamada formalmente, antecedente directo de la actual UNESCO.

iv. Carta de Atenas.

En el marco del Comité de Cooperación Intelectual ya mencionado, se convocó a la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de

Monumentos Históricos, celebrada en Atenas entre el 21 y 30 de octubre de 1931 y sus conclusiones son conocidas como Carta de Atenas[117]. Se trató de un documento europeo referido exclusivamente al patrimonio cultural material, constituyendo un avance en la concepción cultural desatada luego de la Gran Guerra. Vale aclarar que no hace referencia al patrimonio cultural sino que se refiere al patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad como un interés común de todos los Estados.

En sus conclusiones generales propuso que los Estados se presten una colaboración cada vez más estrecha y concreta para favorecer la conservación de los monumentos de arte y de historia, otorgándole a la educación un papel fundamental como garantía de conservación de los monumentos y obras de arte (punto VII. a y b); manifestando también que las diferencias entre las legislaciones nacionales existentes se deben a la dificultad de conciliar el derecho público con el derecho de los particulares, aprobando unánimemente la tendencia general que consagra en esta materia un derecho de la comunidad contra el interés privado (punto II), consagrando de esta manera la doctrina de la función social de la propiedad privada[118]; reconoció la relación medioambiental, cultural y paisajística al recomendar el respeto en la construcción de los edificios del carácter y la fisonomía de la ciudad, esencialmente, en la proximidad de monumentos antiguos (punto III). En la misma conclusión, asentó la idea que se desarrollaría después del jardín histórico al expresar que también pueden ser objeto de estudio las plantaciones y ornamentos vegetales adjuntos a ciertos monumentos o grupos de monumentos, para conservar el carácter antiguo, consagrando también la idea de pureza visual y mantenimiento del paisaje al recomendar la supresión de publicidad, de superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de industria ruidosa e invasora, en proximidad de los monumentos.

Otro punto pionero en las consideraciones que se desarrollarían posteriormente fue el V: En él la Conferencia expresó que en las condiciones de la vida moderna, los monumentos se encuentran siempre más amenazados por los agentes externos considerando que en resguardo de la conservación de la escultura monumental, la exportación de las obras del contexto para el que fueron creadas debe en principio considerarse inoportuna.

---

[117] López Bravo, Carlos, *El derecho al patrimonio cultural*, tesis doctoral, Departamento de filosofía del derecho, moral y política, Universidad de Sevilla, 1997, pág. 38.

[118] López Bravo, Carlos; *op. cit.*; págs. 39/40.

Por último, sienta la necesidad de crear en cada país un registro e inventario de sus monumentos históricos y un archivo con la documentación de cada uno de ellos (punto VII c).

Como puede verse, la importancia de este documento radicó en que trató sobre la conservación de monumentos de arte e historia y fue el primer documento internacional que recogió unos principios y normas generales sobre la restauración y la conservación, además de que tuvo gran repercusión internacional y trató temas que aún siguen tratándose[119].

v. Tratado de Washington o Pacto Roerich.

Unos años después de la adopción de la Carta de Atenas, precisamente el 15 de abril de 1935, en el ámbito de la Unión Panamericana (antecedente de la Organización de Estados Americanos) se firmó en Washington, Estados Unidos, el Tratado para la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos[120] que entró en vigor el 26 de agosto del mismo año y del que Argentina fue parte.

El principal objeto de este documento fue la adopción de una bandera (art. III) que identificara todos los monumentos inmuebles de propiedad nacional o particular que forman el tesoro cultural de los pueblos y para preservarlos con ella en cualquier época de peligro, a fin de que los tesoros de la cultura sean respetados y protegidos en tiempo de guerra y de paz.

De esta manera declaró como neutrales, y como tales respetados y protegidos por los beligerantes, los monumentos históricos, los museos y las instituciones dedicadas a la ciencia, al arte, a la educación y a la conservación de los elementos de cultura (art. I) tanto en tiempo de paz como de guerra, obligando a los gobiernos signatarios a comunicar a la Unión Panamericana una lista de los monumentos o instituciones que deseen someter a la protección acordada por este tratado (art. IV). No consideró a la necesidad militar como justificativo de ocupación.

---

[119] García Cuetos, María Pilar; *El patrimonio cultural. Conceptos básicos*; Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2011, pág. 25.

[120] Este Tratado también fue conocido como *"Pacto Roerich"* por haber surgido de la iniciativa del profesor Nicholas Roerich, pintor, poeta y humanista ruso que planteó el problema de la protección de los bienes culturales después de la Gran Guerra, poniendo en marcha una campaña en favor de un sistema de protección jurídica internacional que cubriera el conjunto de bienes e instituciones culturales.

Tuvo la importancia de ser el primer instrumento convencional, aunque a escala regional, que trató de una manera específica el problema del respeto y la protección acordados a los bienes y valores culturales y de su defensa tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra con especial atención a los supuestos de conflictos armados[121]. A tal punto llegó su influencia que fue uno de los instrumentos, junto con las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, que se usaron como fuentes para la elaboración de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de La Haya de 1954.

En este instrumento todavía no se hablaba de bienes o patrimonio cultural, concepto que aparecerá más tarde.

vi. Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico.

El mismo día de la firma del Tratado de Washington también se firmó en la capital del país norteamericano el Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico que entró en vigor el 1 de mayo de 1936[122], ya que el instrumento mencionado anteriormente sólo se refería a bienes inmuebles.

Este documento estableció medidas de protección y conservación de los bienes muebles precolombinos, coloniales y de la época de la emancipación y de la república así como también los siguientes bienes pertenecientes a cualquier época: 1) las bibliotecas oficiales y de instituciones, las bibliotecas particulares valiosas tomadas en su conjunto, los archivos nacionales y las colecciones de manuscritos, oficiales y particulares de alta significación histórica; 2) como riqueza mueble, natural, los especímenes zoológicos de especies bellas y raras que están amenazadas de exterminación o de desaparición natural y cuya conservación sea necesaria para el estudio de la fauna (art. 1).

También se fijaron permisos y documentación oficial para la exportación e importación de los muebles detallados (arts. 2 y 3). Asimismo, se consideró que los Estados que tuvieran algunos de los objetos declarados monumentos muebles, sólo gozarían de su usufructo que no era transmisible sino dentro del país, y se

[121] Camps Mirabet, Núria; *op. cit.*; pág. 23. Para mayor información sobre el Pacto Roerich ver el sitio oficial web del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Charles Babbage http://www.charlesbabbage.edu.ar/Imagenes/BanderaPaz/Pacto%20Roerich%20y%20BP.pdf

[122] La República Argentina no fue país signatario. Castelli, María E. E.; *Protección Jurídica del Patrimonio Cultural de la Humanidad*; Bias Editora, Buenos Aires, 1987, págs. 84/85.

comprometieran a legislar en este sentido (art. 4); como así también facultó a cualquiera de los gobiernos signatarios que tomaran conocimiento de una exportación ilícita de su propio país a dirigirse al Gobierno del país donde se ha llevado el monumento para que este Gobierno proceda a devolverlo al solicitante (art. 6).

Posteriormente, con el estallido de la Guerra Civil española, en 1936 la Oficina Internacional de Museos[123] preparó un proyecto de convenio internacional para la protección de edificios históricos y obras de arte en tiempo de guerra que fue sometido al Consejo y la Asamblea de la Sociedad de Naciones en 1938. La Segunda Guerra Mundial estalló cuando aún no habían concluido las consultas, pero sirvió de base para la confección de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (La Haya, 1954)[124].

vii. Recomendación para la Conservación de Regiones Naturales y Lugares Históricos.

Mientas tanto, en el ámbito americano se dictó el 23 de diciembre de 1938 la Recomendación para la Conservación de Regiones Naturales y Lugares Históricos en la Octava Conferencia Internacional Americana[125].

En esta ocasión se consideró que para la comprensión exacta de la etapa colonial de cultura americana se requiere un reconocimiento profundo de la anterior pre-europea, por haber sido en casi todos los países un elemento básico sobre el cual se estructuró, como lo atestiguan todas o casi todas las manifestaciones económicas, religiosas, arquitectónicas, literarias, y en general, sociales, de los siglos XVI, XVII y XVIII; y que el patrimonio arqueológico e histórico es inalienable a menos que previamente se renuncie al derecho de conocer el pasado, que es lo peor que le puede

[123] Esta oficina era una de las que pertenecían al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual que, a su vez, dependía del Comité de Relaciones Intelectuales de la Sociedad de las Naciones.

[124] Incluso algunos gobiernos adoptaron varias de las medidas que propugnaba el proyecto como, por ejemplo, los Estados Unidos que –durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial- instauraron en 1943 una comisión especial de protección de los monumentos de interés artístico e histórico y crearon en el seno del ejército la Unidad Especial de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, encargada de velar por el respeto del patrimonio cultural de los países en los que estaban presentes las fuerzas armadas aliadas. Daifuku, Hiroshi, *Museos y Monumentos: el papel motor de la UNESCO*, Museum Internacional N° 197 (Vol. L, N° 1, 1998) MUSEUM International: quincuagésimo aniversario, UNESCO, París, pág. 9. Ver también Badenes Casino, Margarita, *op. cit.*, pág. 24/26.

[125] Ocurrida en Lima entre el 9 y el 27 de octubre de 1938.

acaecer a un pueblo que desee perpetuarse a través de los siglos, como una entidad con valores culturales propios; y recomendó que la Unión Panamericana procediera a efectuar un estudio comparativo de las medidas y disposiciones legales existentes en las Repúblicas Americanas relativas a la protección y conservación de sus regiones naturales y lugares y monumentos históricos (art. 1) y que se ratificaran el Pacto Roerich y el Tratado sobre la Protección de Monumentos Muebles de valor histórico (art. 3). Al no tener las recomendaciones carácter vinculante para los firmantes, este instrumento careció de valor ejecutivo.

Luego vino la Segunda Guerra Mundial que marcó un hito en el desarrollo de la protección de los bienes culturales. El mundo actual es consecuencia directa del desenlace de este hecho histórico y las acciones que en ella se llevaron a cabo. Teniendo como escenario casi todo el planeta, destruyó gran parte del legado cultural de Europa[126].

Al comienzo de esta guerra, los únicos instrumentos jurídicos internacionales sobre protección de los objetos de arte, culturales, históricos y científicos era las Convenciones de la Haya de 1907 que no impidieron ni la destrucción ni el exacerbado saqueo de tales bienes[127].

Pero el ensañamiento, expolio y destrucción no solo alcanzaron la esfera material de la cultura, sino que también respondió a un ataque sistemático sobre lo que hoy se conoce como la faz inmaterial. Naturalmente que una y otra van de la mano. Toda invasión y conquista (en general toda guerra) afectó lo que hoy se identifica como patrimonio cultural inmaterial, es decir, las manifestaciones intangibles de la cultura. Al decir de Báez, hay un aspecto determinante y es que el dominio no se establece sin una relación de convicción. No hay hegemonía religiosa, política ni militar sin hegemonía cultural.

b).- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

---

[126] Fiorani, Flavio, *II Guerra Mundial*, trad. Elena del Amo, Tikal, título original *Storia illustrata della Seconda Guerra Mondiale*, Madrid, pág. 11.

[127] Durante el tiempo que ocuparon Europa, Hitler y los nazis cometieron el mayor saqueo de la historia, confiscando y trasladando al Tercer Reich más de cinco millones de objetos de arte. Edsel, Robert M., *Operación Monumento. La fascinante aventura de los guerreros del arte que impidieron el saqueo cultural nazi*, Océano, México, 2009, pág. 18.

- **Antecedentes.**

Tal como se comentara anteriormente, el 4 de enero de 1922 se conformó la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual (C.I.C.I.), dotando así a la por entonces existente Sociedad de Naciones de su organismo especializado.

El 24 de septiembre de 1924 el gobierno francés ofreció el establecimiento en París de un Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (I.I.C.I.) al que el propio gobierno dotaría de presupuesto.

Durante la sesión que la Sociedad de Naciones celebró en Roma en diciembre de 1924, se firmaron los acuerdos correspondientes para la creación del Instituto y su instalación oficial en París en el Palais Royal, quedando inaugurado el 16 de enero de 1926.

Con la creación del Instituto, la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual pasó a constituirse en el Consejo de Administración del nuevo Centro cuyo primer director fue el Sr. Julien Luchaire.

El Instituto llegó a poseer un personal permanente y mantenía relaciones continuas con el Comité de Letras y Artes y con el Comité Consultivo para la Enseñanza de la Sociedad de Naciones y sus actividades se extendían a la educación, ciencias sociales, ciencias exactas y naturales, cine, bibliotecas y archivos, las letras y las artes, derechos de invención y derechos de autor[128].

- **Nacimiento de la UNESCO.**

El Instituto Internacional de Cooperación Intelectual no pudo continuar sus actividades a partir del año 1940 a causa de la Segunda Guerra Mundial, pero el espíritu de esta cooperación estaba presente.

El 28 de octubre de 1942 el presidente del Consejo de Educación del Reino Unido, Richard A. Butler, envió una carta a sus colegas de los países aliados que se encontraban en exilio en Londres en la que los invitaba a una reunión el 16 de noviembre de ese mismo año.

Lo que se denominó en adelante "Conferencia de Ministros Aliados de Educación" (CAME) continuó las reuniones y en una de ellas (mayo de 1943) se

[128] Valderrama, Fernando; *La UNESCO y la educación: Antecedentes y Desarrollo*; http://www.unesco.org/education/pdf/VALDERRA.PDF [consultado: 01/09/2018].

nombró un Comité *ad hoc* para que estudiara la posible creación de una "Organización Internacional para la Educación"[129].

Sobre la base de la propuesta de la CAME, ya en el marco de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, se celebra en Londres del 1 al 16 de noviembre de 1945, justamente al concluir la guerra, una conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización educativa y cultural (ECO/CONF). Ésta reúne a los representantes de unos 40 Estados. Con el impulso de Francia y del Reino Unido, dos países muy afectados por el conflicto, los delegados deciden crear una organización destinada a instituir una verdadera cultura de paz. Dentro de su espíritu, esta nueva organización debe establecer la "solidaridad intelectual y moral de la humanidad" y, de esta manera, impedir que se desencadene una nueva guerra mundial[130].

En esta reunión se aprobó el acta constitutiva y nació la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cuya sede, a propuesta de la delegación del Reino Unido, sería París. La Primera Conferencia General de la UNESCO tuvo lugar en la Universidad de la Sorbona, París del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 1946.

- **Propósitos y funciones.**

Tal como surge de la propia carta constitutiva de la Organización, la misma se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo (art. 1.1).

Respecto al patrimonio cultural, su misión es de ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber velando por la conservación y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o científico, y recomendando a las naciones interesadas las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin [...] (art. 1.2.c), prohibiéndose toda

[129] Valderrama, Fernando, *op. cit*.

[130] http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/. [Consultado: 01/09/2018].

intervención en materias que correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de esos Estados (art. 1.3), por lo que la acción de la UNESCO se desarrolla sin comportar ninguna sustitución de la actividad particular de cada Estado miembro y no implica la renuncia al principio de soberanía, sino que se lleva a cabo a través de la cooperación internacional de carácter multilateral[131].

- **Miembros.**

Respecto a este punto, hay que distinguir dos tipos de miembros de la UNESCO: los Estado miembros y los asociados.

De acuerdo al art. II puntos 1, 4 y 5 de la carta constitutiva, los primeros son aquellos Estados que son miembros de las Naciones Unidas, teniendo derecho a formar parte de la UNESCO, siendo suspendidos en los derechos y privilegios inherentes a la calidad de miembro de esta, a petición de la ONU, en caso de ser suspendidos en el ejercicio de sus derechos y privilegios de miembros de las Naciones Unidas. En consecuencia, también cesan *ipso facto* de ser miembros de ésta, si fueren excluidos de las Naciones Unidas.

También los Estados no miembros de las Naciones Unidas pueden, previa recomendación del Consejo Ejecutivo, ser admitidos como miembros de la Organización, por mayoría de dos tercios de votos de la Conferencia General (art. II punto 2).

Y en cuanto a los miembros asociados, son aquellos territorios o grupos de territorios que no asumen por sí mismos la responsabilidad de la dirección de sus relaciones exteriores. Estos pueden ser admitidos en calidad de miembros asociados por la Conferencia General si esa admisión ha sido solicitada, por cuenta de cada uno de esos territorios o grupos de territorios, por el Estado miembro o por cualquier autoridad que asuma la responsabilidad de la dirección de sus relaciones exteriores (art. II punto 3).

Tanto los Estados miembros como los miembros asociados de la UNESCO, tienen derecho a designar un delegado permanente ante la Organización (art. II punto 7), debiendo presentar sus credenciales al Director General y asumirá oficialmente sus funciones a partir de la fecha de tal presentación (art. II punto 8).

[131] Camps Mirabet, Núria; *op. cit.*; pág. 266.

Asimismo, tanto los Estados miembros como los asociados pueden retirarse de la UNESCO mediante notificación presentada al Director General. La notificación de la retirada de un miembro asociado se debe hacer en su nombre por el Estado miembro o la autoridad a cuyo cargo estén sus relaciones internacionales (art. II punto 6).

Vale resaltar que cuando fue aprobada la carta constitutiva de la UNESCO, no se preveía ninguna disposición similar a esta referida a la retirada de la Organización ya que otorgando este derecho se podía contribuir a su debilitamiento. No obstante, en 1953, Checoslovaquia, Polonia y Hungría anunciaron que daban por terminada su condición de calidad de miembros de la UNESCO. La Organización no reconoció dichas retiradas por considerar que no estaba prevista esta posibilidad en su Carta Constitutiva[132]. A pesar de esto, la actitud comportaba múltiples dificultades por lo que, finalmente, la UNESCO modificó su postura y decidió introducir en el mismo el punto 6 en el art. II.

- **Órganos.**

La Organización comprende una Conferencia General, un Consejo Ejecutivo y una Secretaría (art. III).

i. La Conferencia General.

Constituye el órgano deliberante supremo que tiene el carácter de plenario y está constituida por los representantes de los Estados miembros de la Organización. El gobierno de cada Estado miembro nombra, como máximo, cinco delegados escogidos previa consulta con la Comisión Nacional o, de no existir ésta, con las instituciones educativas, científicas y culturales (art. IV punto A.1), pero cada Estado miembro tiene un voto en la Conferencia General (art. IV punto C.8.a), independientemente de cuál sea la envergadura o la importancia de su aporte al presupuesto.

Tiene dentro de sus funciones determinar la orientación y la línea de conducta general de la Organización y decide acerca de los programas que le son sometidos

[132] Camps Mirabet, Nuria; *op. cit.*; págs. 272/273

por el Consejo Ejecutivo (art. IV punto B.2.), debiendo convocar, cuando lo estime conveniente y de conformidad con las disposiciones que establezca, conferencias internacionales de Estados sobre la educación, las ciencias, las humanidades o la difusión del saber (art. IV punto B.3).

Con respecto a las recomendaciones o convenciones internacionales, cuando la Conferencia General se pronuncie en favor de proyectos que hayan de ser sometidos a los Estados Miembros, debe distinguir entre las recomendaciones dirigidas a esos Estados y las convenciones internacionales que hayan de ser sometidas a la ratificación de los mismos.

También asesora a las Naciones Unidas en los aspectos educativos, científicos y culturales de las cuestiones que interesen a aquéllas (art. IV punto B.5).

Es competente también para recibir y examinar los informes que dirijan a la Organización los Estados Miembros sobre las medidas que hayan adoptado en relación con las recomendaciones y las convenciones o, cuando así lo decida, resúmenes analíticos de esos informes (art. IV punto B.6).

La Conferencia General elige a los miembros del Consejo Ejecutivo y, previa recomendación de éste, nombra al Director General (art. IV punto B.7).

En cuanto a la frecuencia de sus reuniones, la Carta Constitutiva establece que la Conferencia General celebrará cada dos años una reunión ordinaria. Podrá celebrar reuniones extraordinarias, por propia iniciativa, por convocatoria del Consejo Ejecutivo o a petición de un tercio, al menos, de los Estados miembros (art. IV punto D.9.a), debiendo fijar en cada reunión el lugar de la reunión ordinaria siguiente (art. IV punto D.9.b).

Además de adoptar su propio reglamento (art. IV punto D.10), la Conferencia General debe establecer las comisiones especiales y técnicas y los demás órganos subsidiarios que sean necesarios para la realización de sus trabajos (art. IV punto D.11).

Otra de sus atribuciones es la de, previa recomendación del Consejo Ejecutivo y por mayoría de dos tercios, poder invitar a representantes de organizaciones internacionales a que asistan como observadores a ciertas reuniones de la Conferencia o de sus comisiones (art. IV punto E.13).

Los idiomas de trabajo de la Conferencia General son inglés, árabe, chino, español, francés y ruso, lo que representa la diversidad cultural e idiomática de sus integrantes.

ii. Consejo Ejecutivo.

El Consejo Ejecutivo, es, en cierto modo, el consejo de administración de la UNESCO. Es elegido por la Conferencia General y se compone de 58 Estados miembros. El presidente de la Conferencia General tiene asiento por derecho propio en el Consejo Ejecutivo, con voz pero sin voto (art. V punto A.1.a).

Al proceder a la elección de Miembros del Consejo Ejecutivo, la Conferencia General debe tener en cuenta la diversidad de las culturas y una distribución geográfica equitativa (art. V punto A. 3).

Dentro de las funciones del Consejo Ejecutivo se encuentran la preparación del orden del día de las reuniones de la Conferencia General, examinando el programa de trabajo de la Organización y el correspondiente proyecto de presupuesto presentado por el Director General, debiendo someterlos, con las recomendaciones que estime convenientes, a la Conferencia General (art. V punto B.6.a).

Actuando bajo la autoridad de la Conferencia General, es el responsable ante ésta de la ejecución del programa por ella aprobado (art. V punto B.6.b).

Recomienda a la Conferencia General la admisión de nuevos miembros en la Organización (art. V punto B.7) y adopta su propio reglamento y elige su mesa de entre sus miembros (art. V punto B.8).

El Consejo Ejecutivo celebra al menos cuatro reuniones ordinarias por bienio y puede celebrar reuniones extraordinarias si las convoca el presidente, ya sea por iniciativa propia o a petición de seis miembros del Consejo (art. V punto B.9).

El presidente del Consejo Ejecutivo presenta en nombre de éste a la Conferencia General, en cada una de sus reuniones ordinarias, con o sin comentarios, los informes sobre las actividades de la Organización que el Director General debe preparar con arreglo a las disposiciones del apartado b del párrafo 3 del art. VI (art. V punto B.10).

También adopta las disposiciones pertinentes para consultar a los representantes de las organizaciones internacionales o a personalidades competentes que se ocupen de asuntos de la incumbencia del Consejo (art. V punto B.11).

Entre las reuniones de la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo puede pedir a la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas sobre cuestiones

jurídicas que se planteen en la esfera de las actividades de la Organización (art. V punto B.12).

Y, en general, el Consejo Ejecutivo ejerce todas las facultades que le delegue la Conferencia General en nombre de la Conferencia en su conjunto (art. V punto B.13).

iii. Secretaría.

Está compuesta de un Director General y del personal que se estime necesario (art. VI punto 1), siendo este personal nombrado por aquel a base de la más amplia representación geográfica posible, debiendo reunir las más altas cualidades de integridad, eficiencia y competencia técnica (art. VI punto 4). Sin perjuicio de ello, este personal es independiente respecto del gobierno del Director General.

Este último es el más alto funcionario administrativo de la UNESCO y es nombrado por la Conferencia General, a propuesta del Consejo Ejecutivo, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegido por un segundo período, al término del cual ya no será reelegible (art. VI punto 2).

El Director General o, en su defecto, el sustituto que él designe, participa con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Conferencia General, del Consejo Ejecutivo y de las comisiones de la Organización, pudiendo formular proposiciones acerca de las medidas que hayan de tomar la Conferencia y el Consejo Ejecutivo, y preparará para su presentación al Consejo un proyecto de programa de trabajo de la Organización, acompañado del proyecto de presupuesto correspondiente (art. VI punto 3.a).

También el Director General debe preparar informes periódicos sobre las actividades de la Organización y transmitirlos a los Estados Miembros y al Consejo Ejecutivo (art. VI punto 3.b).

Cabe resaltar que tanto las responsabilidades del Director General como del personal son de carácter exclusivamente internacional. En el desempeño de sus funciones no deben solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Deben abstenerse de actuar en forma alguna que pueda menoscabar su condición de funcionarios internacionales. Este carácter internacional de las funciones del Director General y del personal debe ser

respetado por cada uno de los Estados miembros de la Organización, no debiendo tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones (art. VI punto 5).

La Carta Constitutiva de la UNESCO aclara en su art. VI punto 6 que ninguna de estas disposiciones mencionadas impide a la Organización concertar, dentro del marco de las Naciones Unidas, arreglos especiales para la constitución de servicios comunes y el nombramiento de personal común, así como para el intercambio de personal.

iv. Comisiones Nacionales de Cooperación.

La UNESCO es el único organismo de las Naciones Unidas que cuenta con una red mundial de entidades nacionales de cooperación conocidas como Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO.

Las Comisiones Nacionales forman parte de la estructura global de la Organización prevista por la Constitución y su existencia está prevista en el art. VII de la Carta Constitutiva de la UNESCO, expresando que cada Estado miembro debe tomar las disposiciones adecuadas a su situación particular, con objeto de asociar a la Organización a los principales grupos nacionales que se interesen por los problemas de la educación, la ciencia y la cultura, de preferencia constituyendo una Comisión Nacional en la que estén representados el gobierno y los referidos grupos (punto 1).

En los países en que existan, las Comisiones Nacionales o los organismos nacionales de cooperación asesoran a las delegaciones de sus países respectivos en la Conferencia General y a los representantes y suplentes en el Consejo Ejecutivo, así como a sus gobiernos, en cuestiones relacionadas con la Organización, haciendo de órganos de enlace para todas las cuestiones que interesen a la Organización (punto 2).

También prevé la Carta Constitutiva en el artículo mencionado que a petición de un Estado miembro, la Organización puede delegar ante la Comisión Nacional de ese Estado a un funcionario de la Secretaría a fin de que, con carácter temporal o permanente, colabore en los trabajos de la misma (punto 3).

Funcionan como órganos de consulta, enlace e información y promueven y coordinan la colaboración con la sociedad civil. De esta manera, aportan una importante contribución a la consecución de los objetivos de la UNESCO y la ejecución de su programa. Los aspectos clave relativos a las Comisiones Nacionales

son seguidos de cerca por el Grupo de Coordinación de las Comisiones Nacionales, quien también brinda asesoramiento sobre las maneras de reforzar la red mundial de comisiones y promueve el papel de éstas en la estrategia global y el programa de la UNESCO.

La Carta de las Comisiones Nacionales es el documento que define los principios esenciales y las modalidades de relación polifacéticas entre la Organización y las Comisiones Nacionales y fue aprobada por la Conferencia General en 1978, en su vigésima reunión, especificando que corresponde a cada Estado miembro definir las responsabilidades de su Comisión Nacional. También determina la finalidad y las funciones de las Comisiones Nacionales, el papel que desempeñan respecto de los Estados miembros y de la UNESCO y las responsabilidades de los Estados miembros y de la Organización hacia ellas. Muy concretamente, la Carta subraya que el reforzamiento de las capacidades operativas de una Comisión Nacional debería ser responsabilidad compartida por los Estados miembros y la UNESCO.

- **Relaciones con la ONU.**

El art. X de la Carta Constitutiva de la UNESCO estableció que esta debía vincularse con las Naciones Unidas en calidad de organismo especializado de las mismas. Este convenio fue aprobado por la Conferencia General el 6 de diciembre de 1946 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1946, entrando en vigor el mismo día.

En virtud de este acuerdo, las Naciones Unidas reconocen a la UNESCO como organismo especializado, competente para adoptar, de conformidad con los términos de su Constitución, las medidas necesarias para alcanzar los fines señalados en la misma (art. I).

i. Representación recíproca.

La vinculación mencionada se da a través del Consejo Económico y Social, órgano coordinador de la labor económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, pudiendo la UNESCO designar representantes para asistir a las reuniones de aquel y de sus comisiones y comités, y a que participen con

voz pero sin voto en los debates de dichos órganos acerca de los puntos del orden del día que se refieran a cuestiones relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura; como así también designar representantes para asistir a las reuniones de la Asamblea General de las Naciones y de sus comisiones principales participando con voz pero sin voto, pudiendo asistir también a las reuniones del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas, siempre que en estos órganos se debatan cuestiones relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura (art. II).

ii. Recomendaciones de las Naciones Unidas.

Conforme al art. IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la UNESCO, teniendo en cuenta la obligación de las Naciones Unidas de promover la realización de los objetivos expuestos en el art. 55 de la Carta[133] y las funciones y poderes del Consejo Económico y Social de hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y otros asuntos conexos, y de hacer recomendaciones sobre todos estos puntos a los organismos especializados; teniendo en cuenta igualmente la obligación asumida por las Naciones Unidas, en virtud de los arts. 58 y 63 de la Carta, de hacer recomendaciones para la coordinación de las normas de acción y las actividades de los organismos especializados, conviene en tomar las medidas necesarias para presentar a su órgano competente todas las recomendaciones en buena y debida forma que las Naciones Unidas pudieren hacerle.

También la UNESCO puede celebrar consultas con las Naciones Unidas, a petición de éstas, acerca de dichas recomendaciones, debiendo dar cuenta a las Naciones Unidas de las medidas tomadas por la Organización o por sus miembros para llevar a la práctica tales recomendaciones, así como de cualesquiera otros resultados que hubiere tenido la toma en consideración de dichas recomendaciones.

[133] Art. 55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

También la UNESCO coopera en cualquier otra medida que pueda ser necesaria para dar pleno efecto a la coordinación entre la actuación de los organismos especializados y las Naciones Unidas. En especial, formar parte de cualquier órgano creado por el Consejo para facilitar dicha coordinación, coopera con el mismo y proporciona los informes que fueren necesarios para la realización del indicado propósito.

iii. Intercambio de información y de documentos.

Según el art. V del Acuerdo, las Naciones Unidas y la UNESCO proceden al intercambio más completo y más rápido de información y de documentos, a reserva de las medidas que fueren necesarias para garantizar el carácter confidencial de ciertos documentos.

iv. Ayuda al Consejo de Seguridad, al Consejo de Administración Fiduciaria y relaciones con la Corte Internacional de Justicia.

La UNESCO coopera con el Consejo Económico y Social, proporcionando la información y prestando la ayuda que el Consejo de Seguridad pudiere pedir, inclusive para la aplicación de las decisiones del Consejo de Seguridad encaminadas a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

También puede auxiliar al Consejo de Administración Fiduciaria en el cumplimiento de las funciones de éste, y especialmente en prestar la ayuda que el Consejo de Administración Fiduciaria pudiere pedir sobre cuestiones que sean de la competencia de la Organización.

Con referencia a las relaciones de la UNESCO con la Corte Internacional de Justicia, la primera proporciona toda la información que pudiere pedirle la Corte Internacional de Justicia, con arreglo al art. 34 de su Estatuto, estando autorizada por la Asamblea General a pedir a la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas acerca de las cuestiones jurídicas que pudieren surgir en el curso de sus actividades, con excepción de las que afecten a las relaciones entre la Organización y las Naciones Unidas u otros organismos especializados, correspondiendo a la Conferencia General o al Consejo Ejecutivo, autorizado por ella, dirigir tales peticiones a la Corte.

v. Centros regionales.

Conforme al art. XI del Acuerdo, los centros regionales o locales que establezca la UNESCO se mantendrán en estrecha relación con los centros regionales o locales establecidos por las Naciones Unidas, hasta donde sea posible.

Cabe destacar que la UNESCO desarrolla una estructura regional para la ejecución de las actividades de carácter regional de la Organización. Esta estructura agrupa a los Estados miembros y asociados a la misma de la siguiente manera: África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte y, por último, América Latina y el Caribe.

A su vez, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, estableció cinco comisiones regionales: Comisión Económica para África (CEPA), Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), Comisión Económica para Europa (CEPE), Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

vi. Servicios de estadística, administrativos y técnicos.

Las Naciones Unidas y la UNESCO mantienen la cooperación más completa posible en evitar la duplicación superflua de esfuerzos y en utilizar con la máxima eficacia a su respectivo personal técnico, para compilar, analizar, publicar y distribuir datos estadísticos. También coordinan sus actividades para obtener la mayor utilidad y el mejor uso posible de sus datos estadísticos, y para reducir al mínimo las molestias y los gastos que se originen a los gobiernos nacionales y organizaciones de los que se solicite información.

En el Acuerdo se reconoce que las Naciones Unidas constituyen el organismo central encargado de compilar, analizar, publicar, normalizar y mejorar las estadísticas que sean útiles para los fines generales de las organizaciones internacionales, así como también se reconoce que la UNESCO es el organismo adecuado encargado de compilar, analizar, publicar, normalizar y mejorar las estadísticas relativas a su esfera especial de competencia, sin perjuicio del derecho de las Naciones Unidas a ocuparse de las mismas, en cuanto sean esenciales para sus propios fines y para el desarrollo de las estadísticas en el mundo entero.

Por supuesto que con el fin de organizar una colección central de datos estadísticos de uso general, los datos proporcionados a la UNESCO destinados a incluirse en sus series estadísticas básicas o en sus informes especiales, se ponen a disposición de las Naciones Unidas.

Se han creado métodos administrativos y técnicos unificados entre ambos para obtener el mejor rendimiento posible del personal y de los recursos existentes y evitar de esta manera la creación de servicios que se hagan competencia o que den lugar a una duplicación superflua de esfuerzos.

- **Relaciones con otros organismos y organizaciones intergubernamentales especializados.**

Para el desarrollo de sus objetivos, la UNESCO coopera con otros organismos y organizaciones intergubernamentales especializados cuyas tareas y actividades están en armonía con las suyas.

A ese efecto, el Director General, actuando bajo la autoridad superior del Consejo Ejecutivo, puede establecer relaciones de trabajo con esos organismos y organizaciones y constituir las comisiones mixtas que se estimen necesarias para conseguir una cooperación eficaz.

Todo acuerdo concertado en debida forma con esos organismos u organizaciones especializados debe ser sometido a la aprobación del Consejo Ejecutivo, pudiendo estos convenios prever la transferencia de recursos y funciones entre la UNESCO y los distintos organismos, asegurar una representación recíproca en las respectivas reuniones y, en general, adoptar las disposiciones que convengan para facilitar las consultas y asegurar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de cuestiones comprendidas en la esfera de competencia de aquélla. Para esto, la UNESCO puede invitarlas a realizar determinadas tareas en sus respectivos campos de acción.

Esa cooperación puede asumir la forma de participación de representantes de las referidas organizaciones en los trabajos de los comités asesores creados por la Conferencia General, así como también la puesta en común de los conocimientos necesarios para la ejecución de los programas a través del diseño conjunto y la realización de actividades a escala nacional, regional o mundial; las contribuciones financieras y materiales, incluyendo la puesta a disposición de personal, voluntarios,

material; la coordinación y consulta en la elaboración de programas y en el desarrollo de políticas, reglamentos y normas; la compartición de los recursos de difusión y las redes de los colaboradores para apoyar la sensibilización y el diálogo político en las áreas y en los países prioritarios y la reciprocidad en la asistencia técnica y en los servicios de consultoría.

El enfoque global de la UNESCO para este tipo de alianzas está expuesto en el documento llamado "Estrategia Global para los Acuerdos de Colaboración"[134]. La UNESCO ha colaborado tradicionalmente con instituciones, entidades y particulares de todo tipo –gobiernos, otros miembros del Sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas del sector privado, fundaciones de empresas y filantrópicas, medios de comunicación, parlamentarios, embajadores de buena voluntad y muchas otras redes especializadas en los campos de acción de la UNESCO como los Institutos y Centros de Categoría 2, Clubes UNESCO, Escuelas Asociadas de la UNESCO y Cátedras UNESCO.

i. Algunos colaboradores de la UNESCO en la protección del patrimonio mundial.

ICCROM

El Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales es un organismo intergubernamental creado en 1956 que suministra asesoría técnica acerca de la conservación de los sitios del Patrimonio Mundial así como formación en técnicas de restauración.

ICOMOS

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organización no gubernamental, fue fundado en 1965 tras la aprobación de la Carta de Venecia para promover el concepto y las técnicas de conservación. El ICOMOS provee al Comité del Patrimonio Mundial las evaluaciones de los bienes con valor cultural propuestos

[134] Puede consultarse en su totalidad en http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf . Fue adoptado en la 192 sesión del Comité Ejecutivo en París el 6 de setiembre de 2003.

para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, así como estudios comparativos, cooperación técnica e informes sobre el estado de conservación de los bienes inscritos.

UICN

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organización no gubernamental internacional creada en 1948, asesora al Comité del Patrimonio Mundial con respecto a la inscripción de bienes con valor natural y, a través de su red mundial de especialistas, informa sobre el estado de conservación de los sitios incluidos en la Lista.

ICOM

El Consejo Internacional de Museos, fundado en 1946, está consagrado a la promoción y el desarrollo de los museos y la profesión museológica a nivel internacional cuya finalidad es investigar, perpetuar, perennizar y transmitir a la sociedad el patrimonio cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible.

Lleva a cabo cinco misiones esenciales: establecer estándares de excelencia; ser un foro diplomático; desarrollar la red profesional; animar un centro mundial de reflexión; y llevar a cabo misiones internacionales[135].

FNPM

La Fundación Nórdica del Patrimonio Mundial adquirió el estatuto de fundación a iniciativa del Gobierno de Noruega en marzo de 2002, con los auspicios de la UNESCO en la Conferencia General de 2003. Aunando los esfuerzos de cinco países nórdicos en pro de la *Convención del Patrimonio Mundial*, la Fundación promueve la conservación del Patrimonio Mundial apoyando proyectos innovadores, actividades de preservación y recaudación de fondos a través del mundo, y continúa trabajando por una Lista del Patrimonio Mundial más equilibrada.

[135] https://icom.museum/es/ [consultado: 05/04/21].

OCPM

La Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial fue establecida en 1993 para desarrollar un espíritu de solidaridad y relaciones de cooperación entre las ciudades del Patrimonio Mundial, en particular en la aplicación de la *Convención*. La Organización facilita un intercambio de conocimientos, técnicas administrativas y recursos financieros para la protección de los monumentos y los sitios.

PNUMA-WCMC

El Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (WCMC) del PNUMA administra la base de datos de los bienes del Patrimonio Mundial que poseen un valor natural.

- **Condición jurídica de la UNESCO.**

La UNESCO goza en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica, de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos, al igual que los representantes de los Estados miembros y asociados y los funcionarios de aquella para el desempeño con independencia de sus funciones en relación con la Organización (art. XII de la Carta Constitutiva de la UNESCO y arts. 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas).

- **Actividad normativa internacional de la UNESCO.**

Si bien la UNESCO utiliza su propia capacidad consultiva, organizativa, de información y de gestión, actuando como centro coordinador de iniciativas y acciones concretas sobre el terreno[136], como son las campañas desarrolladas para la protección del patrimonio mundial, es decir, actividades operacionales para el desarrollo, también desarrolla una actividad normativa internacional mediante

[136] Camps Mirabet, Nuria, *op. cit.*, pág. 280.

recomendaciones, declaraciones y convenciones adoptadas por su Conferencia General.

i. Convenciones.

Las convenciones internacionales están sujetas a ratificación o aceptación por los Estados e implican, por parte de los Estados que se han adherido a ellos o los han ratificado, el compromiso de respetar sus disposiciones. Ellas definen las reglas con las que cada Estado se compromete a cumplir.

Son adoptadas por la Conferencia General de acuerdo a un procedimiento preestablecido, también utilizado para las recomendaciones, llamado "Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del art. IV de la Constitución".

ii. Recomendaciones.

Son instrumentos en los que la Conferencia General formula principios y normas para la regulación internacional de alguna cuestión particular e invita a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas o de otro carácter, conforme la organización constitucional de cada Estado y la naturaleza del tema en consideración, para aplicarlos en sus respectivos territorios (art. 1.b del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del Art. IV de la Constitución). Estas son normas que no están sujetas a ratificación de los Estados Miembros pero respecto de las cuales cada uno de ellos es invitado a aplicar.

El objetivo de las mismas es influir en el desarrollo de las leyes nacionales y sus prácticas. No tienen carácter obligatorio.

En materia de protección del patrimonio cultural, las recomendaciones adoptadas por la Conferencia General de la Unesco, se inspiran en el principio de que los Estados, en tiempo normal, son responsables frente a la comunidad internacional, de la conservación de los bienes culturales situados en su territorio y están obligados

a tomar las medidas apropiadas para proteger esos bienes y hacerlos accesibles a todos, en interés de la ciencia y de la mutua comprensión de los pueblos[137].

iii. Declaraciones.

La Carta Constitutiva de la UNESCO no incluye a las declaraciones como normas a adoptar por la Conferencia General. No obstante, en la práctica de las Naciones Unidas este tipo de normas es un instrumento solemne y formal en el que se adoptan principios de gran importancia. Una recomendación es menos formal. Tampoco está sujeta a ratificación por parte de los Estados Miembros.

En la adopción e implementación de las Declaraciones, la UNESCO no tiene un reglamento tal como existe para las convenciones y recomendaciones. No obstante, la Conferencia General adoptó la resolución 33 C/87 que constituye un marco legal para la elaboración, examen, adopción y aplicación de las Declaraciones, Cartas y demás instrumentos adoptados por la Conferencia General y no comprendidos en el Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del Art. IV de la Constitución.

[137] UNESCO, *La protección del patrimonio cultural de la humanidad. Lugares y monumentos*. Unesco, 1969, pág. 13,

CAPÍTULO 3

La protección del PCI

a). - Consideraciones sobre el PCI.

Una de las características del PCI es su fragilidad. Uno de los principales elementos de este tipo de bienes culturales es el de estar íntimamente ligado a la existencia de las personas: a diferencia de un cuadro o de un edificio, que sobreviven a las generaciones y que para existir no necesitan de una presencia humana que los animen, las manifestaciones inmateriales de la cultura existen únicamente si alguien la hace existir.

Sin embargo, y pese a su fragilidad, el PCI es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del PCI de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.

La importancia del PCI no estriba en la manifestación cultural en sí como hecho aislado que se presenta en un momento determinado, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.

El PCI tiene las siguientes características:

- **Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo**: no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales y en constante movimiento. El PCI se pierde y muere cuando se desvincula de la sociedad que lo produce, cuando pierde sus significados y su funcionalidad. Una práctica cae en desuso cuando ya no encuentra acomodo en la realidad cotidiana o en la realidad simbólica de una comunidad[138].

[138] Amescua, Cristina y Topete, Hilario, *Introducción*, en Topete Lara, Hilario y Amescua Chávez, Cristina (coord.), *Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*, Cuernavaca, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, págs.16/17.

El patrimonio inmaterial cambia y evoluciona constantemente, y cada nueva generación lo enriquece. Muchas expresiones y manifestaciones del PCI están amenazadas por la globalización y la homogeneización, y también por la falta de apoyo, aprecio y comprensión. Si no se alimenta, el PCI podría perderse para siempre, o quedar relegado al pasado. Su preservación y transmisión a las futuras generaciones lo refuerza y mantiene en vida, al tiempo que le permite cambiar y adaptarse.

- **Integrador**: se pueden compartir expresiones del PCI que son parecidas a las de otros. El PCI no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.
- **Representativo**: Esto porque no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.
- **Basado en la comunidad**: el PCI sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio[139].

b).- Hacia la protección del PCI[140].

La elaboración del concepto de patrimonio inmaterial es resultado de una larga evolución que ha llevado a comprender que el patrimonio no es únicamente aquello que se toca o se ve, sino sus significados y valores, las tradiciones y usos unidos a lo material e incluso aquellos que no lo están[141]. El PCI antes de esta evolución era en muchos casos un disvalor que provocaba que las normas ordenaran

[139] UNESCO, *¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?*, París, págs. 4/5; https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 [consultado: 05/04/21].

[140] UNESCO. *La elaboración de una Convención sobre el patrimonio cultural inmaterial*, pág. 4/12; https://ich.unesco.org/doc/src/01854-ES.pdf [consultado: 05/04/21].

[141] García Cuetos, María Pilar; *op. cit.*; pág. 77.

destruirlo. Nuestra Const. Nac. atribuía al Congreso Nacional la promoción de la conversión de los indios al catolicismo (conf. art. 67 inc. 15), lo que implica destruir la cultura no católica existente. Lo mismo fue el proceso de conquista. Según el derecho internacional de la época, el Papa asignaba territorios a los príncipes cristianos a condición de que evangelizaran. Incluso en los debates constituyentes de esta norma se puso énfasis en la necesidad de civilizar para pacificar, es decir, en homogeneizar la cultura en la única que se consideraba positiva. A continuación se verá cómo se ha ido dando ese proceso a lo largo de, aproximadamente, 60 años.

Los primeros programas de la UNESCO en la esfera de la cultura reflejaban la situación política y social del mundo de la posguerra y la descolonización. Habida cuenta del mandato de la Organización, consistente en contribuir a la paz mediante la educación, la ciencia y la cultura, se prestó especial atención al fomento de la cooperación internacional en el campo de las artes, y al estudio de la manera de reconocer las diversas identidades culturales del mundo. Se emprendieron diversas actividades en ámbitos tradicionales de la cultura como la literatura, los museos, la música y los idiomas.

- **De 1946 a 1960. Inexistencia de la noción de bienes patrimoniales inmateriales.**

En 1946 se fundó el ICOM[142] y unos años después, en 1949, el Consejo Internacional de la Música (CIM)[143]. Ese mismo año se publicó el primer volumen del *Index Traslationum*[144], mientras que los problemas relacionados con la producción artística se debatieron por primera vez en una conferencia celebrada en

[142] Para mayor información consultar la página web oficial de la institución: https://icom.museum/en/

[143] Este Consejo fue fundado en 1949 por iniciativa del Director General de la UNESCO como una ONG que asesora a aquella en asuntos referidos a la música. Tiene su sede en la sede de la UNESCO en París y funciona independientemente de esta y como una ONG internacional que coopera oficialmente con la UNESCO. Para mayor información, se puede consultar su página web oficial: http://www.imc-cim.org/

[144] El *Index Translationum* es la base de datos de la UNESCO de traducciones de libros. Fue creado en 1932 por iniciativa del IICI de la Sociedad de las Naciones. En sus inicios, era solamente un catálogo trimestral de libros traducidos en una quincena de países. Fue retomado después de la Segunda Guerra Mundial por la UNESCO y constituye el programa más antiguo de esta organización. A lo largo de las décadas, se volvió progresivamente en una grande base de datos dedicada a la producción de estadísticas sobre los flujos mundiales de traducción, proveyendo cifras sobre libros y los autores más traducidos, así como las lenguas desde y hacia las cuales se traduce. Para mayor información consultar http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/the_index_translationum_always_at_the_forefront_of_innovatio/

Venecia en 1952 que culminó con la aprobación de la *Convención Universal sobre Derecho de Autor*[145].

Este instrumento entró en vigor en 1955 y fue revisada en 1971[146], y buscó asegurar en todos los países la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas; expresando que el derecho de autor comprende el derecho exclusivo de hacer, de publicar y de autorizar que se haga y se publique la traducción de las obras protegidas por la Convención (art. V.1).

Si bien se trata de protección de obras inmateriales (la obra en sí misma es inmaterial, más allá del soporte en el que se cree), no se buscó proteger bienes colectivos o de tercera generación, sino que se trata de derechos individuales, de primera generación. Todavía acá no se concibe el concepto de bienes patrimoniales inmateriales en tanto bienes colectivos pertenecientes a una comunidad y a nadie en particular.

Durante el período que se comenta, fue muy fuerte la preocupación que generó en la comunidad internacional la forma de parar la destrucción de los objetos patrimoniales materiales. Si bien se ha hecho hincapié en que los bienes patrimoniales materiales son importantes por el aspecto inmaterial que representan, no se tenía entonces presente la necesidad de proteger ese aspecto inmaterial de los mismos.

Se mencionó la influencia que la Segunda Guerra Mundial tuvo en el patrimonio cultural material, especialmente la tecnología aplicada para los ataques. Estas devastaciones hicieron que se tomara conciencia de la urgente necesidad de proteger el patrimonio inmueble en tiempo de guerra. Así fue como en 1954 se aprobó en La Haya (Holanda) la *Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado*[147], inspirada en los principios relativos a la

---

[145] Firmada en Ginebra (Suiza) el 6 de setiembre de 1952, entrando en vigencia el 16 de setiembre de 1955. Argentina la ratificó el 13 de noviembre de 1957. Esta convención puede consultarse en el sitio oficial de la UNESCO: www.unesco.org

[146] Denominada "Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París 1971". Tal como su nombre lo indica, fue aprobada en París el día 24 de julio de 1971.

[147] Argentina adhirió a la Convención recién en 1989, previa aprobación por ley 23.618 del 28/9/88, pero no hizo dicha adhesión extensiva a su Primer Protocolo. La Convención entró en vigor para nuestro país el 22/6/89. Para más información puede consultarse González, Ariel W, *La Argentina y el esquema de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado: un desafío singular.*, publicado en "Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas", Lecciones y Ensayos nro. 78, Gabriel Pablo Valladares (compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, págs. 165 a 184. CICR ref. T2003.49/0003.

protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 (de las cuales esta Convención es un instrumento suplementario y no alternativo) y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935.

Esta Convención destaca por ser la primera norma convencional en utilizar, con carácter uniforme y único, el término "bienes culturales" en el ámbito internacional y por tener como objeto específico la protección de esos bienes culturales, unificando el régimen de protección, con independencia del origen y propiedad de dichos bienes, entrañando dicha protección la salvaguarda y el respeto de los bienes culturales (art. 2). Tanto la Convención como sus protocolos, son aplicables en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de Estado partes de la Convención, aun cuando alguna de ellos no reconozca el estado de guerra (art. 18.1).

Esta Convención tiene dos protocolos. El primero fue firmado en La Haya el 14 de mayo de 1954 y entró en vigencia el 7 de agosto de 1956 (art. 33), estableciendo cuál es el destino del bien una vez finalizada la guerra, y el segundo se firmó en la misma ciudad el 26 de marzo de 1999, aunque entró en vigor el 9 de marzo de 2004, de conformidad con el art. 43.1.

Tal como se mencionara, la preocupación radicó en proteger los objetos materiales, y así lo mencionan tanto la Convención como sus protocolos, conforme al art. 1:

a).- Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos.

b).- Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles.

c).- Los "centros monumentales", es decir, los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a. y b.

Estableció también que los bienes culturales objeto de protección pueden ostentar un emblema que facilite su identificación (art. 6), detallando las características del mismo a fin de darle uniformidad (art. 16). Asimismo, estableció un régimen de protección especial a un número restringido de bienes culturales

---

Esta Convención se inspiró en los principios relativos a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935. Estos documentos fueron sus antecedentes.

(capítulo II) y contempló normas relativas al transporte de bienes culturales (capítulo III).

Cabe destacar que ya en 1953 la UNESCO había publicado el primer tomo de una nueva serie titulada *Unidad y Diversidad Culturales*, basada en un estudio de la concepción contemporánea de las culturas propias de diferentes pueblos y de las relaciones entre esas culturas. La finalidad de esta publicación fue ofrecer una visión de las diferentes culturas del mundo y de sus relaciones mutuas, intentando abarcar acá el aspecto inmaterial de la cultura, pero sin siquiera asomarse al concepto patrimonial de esos aspectos inmateriales como objeto de tutela jurídica. Simplemente se destacó el valor cultural de esas manifestaciones pero por fuera de una noción jurídica.

Esta idea continuó después con un proyecto titulado *"Proyecto principal relativo a la apreciación mutua de los valores culturales del Oriente y de Occidente"*, que empezó a aplicarse en 1957 y duró nueve años.

Al decir de Georges Fradier[148], este proyecto respondió a la preocupación de la UNESCO por abarcar el problema de las relaciones morales entre Oriente y Occidente.

Las recomendaciones formuladas por los representantes de las comisiones nacionales de Asia y de Europa y las opiniones expresadas por los gobiernos, constituyeron los signos precursores del movimiento que cristalizó, a fines de 1956, en la aprobación unánime, por la Conferencia General reunida en Nueva Delhi, de aquel *Proyecto principal relativo a la apreciación mutua de los valores culturales del Oriente y del Occidente*.

La denominación "proyecto principal" significó el deseo de concentrar los esfuerzos en esa esfera por un período de diez años por lo menos. En cuanto a lo que interesa al presente trabajo, vale destacar que en tal proyecto principal se entendió que los "valores culturales" constituían las creaciones supremas del espíritu y los ideales que en forma más o menos latente influyen en la vida cotidiana de cada pueblo confiriéndole un sentido verdaderamente humano. Son tanto las tradiciones como las ideas y normas que rigen las sociedades modernas, en la medida en que

[148] Fradier, Georges, *Oriente y Occidente: hacia la comprensión mutua*, UNESCO, 1960, pág. 40/50. Para mayor información puede consultarse Romero Castilla, Alfredo, *La UNESCO y la disciplina de las Relaciones Internacionales*, en Cid, Ileana (comp.), *Diversidad cultural, economía y política en un mundo global*, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2001, págs. 56/58.

expresan la idiosincrasia propia de una nación y le permiten continuar su evolución. Los "valores culturales" así comprendidos no constituyen el patrimonio exclusivo de un solo pueblo ni de una sola cultura; el empleo de todos los recursos nunca es excesivo para la formación espiritual del hombre de este tiempo.

Otras reuniones se organizaron en 1958 en Japón sobre las relaciones entre las religiones, en París sobre las influencias y filiaciones musicales, y en Calcuta, sobre los aspectos sociales de los valores culturales. Se estudiaron temas referidos a los efectos de las transformaciones socioeconómicas del momento sobre los modos de vida tradicionales del campesino oriental y medios de comunicación de ideas sobre una cultura a los miembros de otra.

Lo que se intentó con este proyecto es lo que, justamente, su nombre indicó: la apreciación mutua de esos valores culturales, entendiendo como apreciación mutua un elemento de simpatía, de adhesión calurosa. Además, la apreciación de los valores culturales debe ser una apreciación mutua. Es esencial que todo esfuerzo para dar a conocer mejor los valores peculiares de una cultura esté penetrado de ese espíritu de reciprocidad.

Cierra este período la *Recomendación que define los principios internacionales aplicables a las excavaciones arqueológicas*, dictada el 5 de diciembre de 1956 por la Conferencia General de la UNESCO. Estuvo destinada a evitar que sean objeto de comercio los vestigios arqueológicos cuyo descubrimiento debe constituir un enriquecimiento para la humanidad toda. Pero como se ve, también están ausentes acá las concepciones inmateriales de la cultura, haciendo foco únicamente en los vestigios arqueológicos cuya conservación entrañe un interés público desde el punto de vista histórico o artístico. Se refiere tanto a los bienes muebles como inmuebles y comprende asimismo, las ruinas arqueológicas situadas en el suelo y subsuelo de las aguas interiores o territorios de un Estado miembro (I.1).

Como puede verse, se hablaba de bienes culturales y se resaltaba el valor cultural de esos bienes, pero aún no estaba presente en este período ni la noción de patrimonio cultural ni, mucho menos, el interés en resaltar el aspecto inmaterial de aquellos bienes culturales.

- **De 1960 a 1970. Aparición de la noción de patrimonio de la humanidad.**

La necesidad de adoptar políticas destinadas a desarrollar el concepto de "patrimonio de la humanidad", por lo menos en lo referente al patrimonio material, se dejó sentir después de la campaña emprendida en 1960 (y que duró hasta 1980) para rescatar de las aguas los monumentos de Nubia, en Egipto y Sudán, también conocida como campaña de Abu Simbel[149]. Esta campaña revolucionó el enfoque internacional sobre la protección del patrimonio mundial. Se trató de la primera y más extraordinaria campaña internacional realizada para poner en práctica un proyecto de conservación del patrimonio de la humanidad, motivando años más tarde la *Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro,* aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 19 de noviembre de 1968 que, a su vez, complementó la *Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes*.

Si bien en la *Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro* no habló de patrimonio cultural sino de bienes culturales, la importancia que tuvo fue que declaró que la expresión "bienes culturales" abarca no sólo los lugares y monumentos reconocidos y registrados como tales, sino también los vestigios del pasado no reconocidos ni registrados, así como los lugares y monumentos recientes de importancia artística o histórica.

Incorpora así la protección de bienes culturales no reconocidos ni registrados, debiendo entenderse como falta de reconocimiento la no declaración por parte de la autoridad competente según la legislación interna de cada Estado y no de la

---

[149] Para mayor detalle consultar Chehata Adam Mohamed, *Lanzada por la UNESCO, la mayor operación de salvamento arqueológico de todos los tiempos (1960-1980). Victoria en Nubia: Egipto*, publicada en revista *El Correo de la Unesco*, Febrero/Marzo 1980, número XXXII, págs. 5/12 y Negm-El-Din Mohamed Sherif, *Victoria en Nubia: Sudán*, publicado en la misma revista, págs. 16/19.

Argentina participó de esta campaña. Diversos grupos de arqueólogos argentinos trabajaron en colaboración con arqueólogos franceses. Descombraron el templo de Aksha y desprendieron importantes bajorrelieves que actualmente se encuentran en Jartum. Durante la temporada de 1962-1963, la expedición argentina descubrió cinco santuarios construidos por el faraón Seti I, padre de Ramsés II, y parte de una puerta de un santuario dedicado a Heqanajt, que fue virrey de Nubia bajo el gobierno de Ramsés II. En la puerta el virrey está representado con ropas ceremoniales y una inscripción reza "Heqanajt, Hijo Real de Kush". *Veinte años de expediciones arqueológicas*, en revista *El Correo de la Unesco*, UNESCO, Febrero/Marzo 1980, número XXXII, pág. 39.

También participó con una contribución directa de 32.163 dólares estadounidenses, que fueron una subvención de instituciones científicas. Latitudes y longitudes, en revista *El Correo de la Unesco*, UNESCO, diciembre 1964, número XVII, pág. 45.

comunidad. Es decir, para que el objeto mueble o inmueble sea protegido a la luz de esta recomendación, la comunidad debe reconocerlo como un bien cultural aunque no esté declarado así por la autoridad competente.

Es en estos años que empieza a usarse en el marco jurídico internacional la noción de patrimonio cultural. En 1962 se adoptó la *Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes* que en su primer considerando utilizó la noción para referirse al objeto de destrucción de la acción del ser humano cuando ataca la belleza y al carácter de lugares y paisajes que constituyen el ambiente natural de su existencia, empobreciendo a aquel, pero no solo por su valor estético sino también cultural.

Por otro lado, y sin querer referirse a ello, esta Recomendación adelantó la vinculación que luego se desarrollaría a lo largo de los años y es la relación entre lugares y paisajes con el desarrollo sostenible de las comunidades. Véase que los considerando cuarto y quinto hablan de que la protección de paisajes y lugares es necesaria para la vida del hombre, para el que son un poderoso regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la vida artística y cultural de los pueblos, constituyendo un factor importante de la vida económica y social de muchos países, así como un elemento importante de las condiciones de higiene de sus habitantes.

Vale destacar que la protección que esta recomendación sugiere no se ha de limitar a los lugares y paisajes naturales, sino que se ha de extender también a los lugares y paisajes cuya formación se debe total o parcialmente a la mano del hombre.

Nuevamente volvió a hablarse de bienes culturales que forman el patrimonio cultural en la *Recomendación sobre las Medidas Encaminadas a Prohibir e Impedir la Exportación, Importación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales,* adoptada el 19 de noviembre de 1964 durante la 13ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO y tuvo por finalidad, como su nombre lo indica, sugerir a los Estados Miembros la adopción de medidas destinadas a prohibir e impedir el empobrecimiento de su patrimonio mediante el tráfico ilícito de los bienes culturales que lo conforman, definiéndolos como aquellos bienes muebles e inmuebles de gran importancia en el patrimonio cultural de cada país. Puede verse que la perspectiva de protección seguía siendo los bienes materiales. En la década siguiente –en 1970- basada en esta Recomendación, no vinculante, se adoptó la *Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la*

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales.

Más tarde, en la *Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional*, del 4 de noviembre de 1966, se estableció que todas las culturas forman parte integrante del patrimonio común de toda la humanidad por la influencia que ejercen unas sobre otras (art. I.3), siendo la cooperación cultural un derecho y un deber de todos los pueblos y de todas las naciones que deben respetar en cada una de ellas su originalidad (art. VI).

Así, se sentaron las bases para el ulterior desarrollo de las políticas de la UNESCO en el ámbito del patrimonio cultural. Aunque la declaración no empleó el término patrimonio en su sentido jurídico, lo cierto es que la expresión "patrimonio de la humanidad" pasó a ser un elemento fundamental de las políticas de la Organización en el campo del patrimonio cultural.

Diez días después la UNESCO hizo el *llamamiento de la campaña internacional para salvar Florencia y Venecia*[150], constituyendo también un hito en la historia de la protección del patrimonio cultural. El 14 de noviembre de 1966, la Conferencia General de la UNESCO adoptó por unanimidad una resolución que proclamaba que los daños sufridos por los monumentos y los tesoros artísticos e históricos de Florencia y de Venecia constituyeron una grave pérdida para el patrimonio cultural de la humanidad entera, utilizando nuevamente la idea de patrimonio cultural de la humanidad que ya había utilizado 6 años antes en la campaña de Abu Simbel.

- **De 1970 a 1980. Consolidación de la noción de patrimonio cultural de la humanidad.**

Con el comienzo de la nueva década, vinieron nuevos desafíos en la protección del patrimonio cultural y nuevos hitos en su desarrollo. Fue la década donde se sancionó el instrumento jurídico más importante en su tiempo para la protección de los bienes culturales: la Convención sobre la Protección del Patrimonio

[150] UNESCO, *La protección del patrimonio cultural de la humanidad. Lugares y monumentos*, UNESCO, París, 1969, págs. 55/63. Para más detalle ver revista *El Correo de la Unesco*, enero de 1967, año XX.

Mundial, Natural y Cultural en 1972 aunque, claro está, referido a bienes materiales exclusivamente.

Con el telón de fondo de la descolonización y la guerra fría, del 24 de agosto al 2 de septiembre de 1970 se celebró en Venecia, Italia, una *Conferencia intergubernamental sobre los aspectos institucionales, administrativos y financieros de la cultura*. Tuvo la importancia de haber sido la primera reunión de carácter gubernamental convocada en el plano mundial sobre cuestiones relacionadas con la cultura[151].

Fue en esa Conferencia que surgieron las nociones de "desarrollo cultural" y "dimensión cultural del desarrollo", que más tarde se profundizarían, y se estimuló el debate sobre los medios de integrar las políticas culturales en las estrategias de desarrollo. La conferencia afirmó que la diversidad de las culturas nacionales, su carácter único y su originalidad eran un cimiento esencial del progreso humano y del desarrollo de la cultura mundial. Percatándose de que las culturas indígenas de muchos países se veían amenazadas porque, a falta de recursos y de institutos de formación y personal capacitado, se hacía muy poco por preservar su patrimonio cultural.

Esta Conferencia también marcó un punto que luego en la protección del PCI sería trascendente y un elemento fundamental: sentó las bases de la cooperación con organizaciones no gubernamentales en la esfera de la cultura declarando que los Estados Miembros debían procurar que éstas participasen lo más estrechamente posible en la elaboración y aplicación de las políticas culturales estatales.

Después de la Conferencia en Venecia, se celebraron dos conferencias más: la Conferencia sobre las Políticas Culturales de México (MONDIACULT) en 1982 y de Estocolmo en 1998.

Es por estos años que empiezan a haber movimientos en torno a la consideración de la faz inmaterial de la cultural, cuestión que era ajena anteriormente, aunque sin tener un lugar prioritario en la agenda pública de la comunidad internacional. Como ejemplo de esto, en 1972 la UNESCO adoptó un plan decenal de estudio de las tradiciones orales africanas y de promoción de los idiomas africanos. Ese mismo año se celebró en Fiji el primer Festival de Artes del

[151] Argentina estuvo representada en esta conferencia por el Dr. Francisco Ramos Mejía, embajador en Italia; por la Dra. María del Carmen Echeverría de Villalba, agregada cultural de la Embajada de Argentina en Italia; y por el señor Valerio Jorge Zubiaurre, secretario de Embajada.

Pacífico y se pusieron en marcha dos series de estudios culturales sobre América Latina.

En ese entonces, el concepto de patrimonio cultural todavía no se limitaba estrictamente al ámbito material. No obstante, sobre la base de la *Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional* de 1966, el éxito de la campaña de Nubia y los principios enunciados en la *Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales* de Venecia en 1970, la acción más importante llevada a cabo por la UNESCO en 1972 fue la aprobación de la *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural*[152], aunque entró en vigor el 17 de diciembre de 1975. Actualmente puede considerarse el principal instrumento jurídico a escala mundial para la protección de los bienes culturales material, sirviendo de paradigma para la elaboración del principal instrumento jurídico del PCI: la *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* del año 2003, ya que aplican figuras similares de protección.

Con la Convención se consolidó la identificación del patrimonio cultural con el patrimonio material al limitar su alcance a los monumentos, conjuntos de edificios y sitios, pero incorporó dos nociones que no contenían ni las recomendaciones ni las convenciones anteriores: la de "valor universal excepcional" y la de "patrimonio de la humanidad" (tanto para el patrimonio cultural como natural). Con su enfoque programático, basado en un sistema de inscripción en listas[153] y en el uso de directrices operativas revisables para su aplicación, la Convención de 1972 reforzó

[152] Argentina fue el 39° Estado que aceptó esta Convención y el 9° de América. Lo hizo el 23 de agosto de 1978. Se aprobó este instrumento mediante Ley 21.836 del 6 de julio de 1978. Actualmente (abril de 2021) forman parte de la Convención 194 Estados, mientras que la UNESCO cuenta en la misma fecha con 193 Miembros y 11 Miembros Asociados, lo que la convierte en uno de los instrumentos jurídicos más universales existentes.

[153] Hay dos listas que elabora el Comité del Patrimonio Mundial: la "Lista del Patrimonio Mundial" que es elaborada en base a los inventarios -que cada uno de los Estados Partes presente al Comité- de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en esa lista; y la "Lista del Patrimonio Mundial en Peligro", también elaborada por el Comité en donde figuran los bienes que existan en la primer lista pero cuya protección exija grandes trabajos de conservación y para los cuales se haya pedido ayuda, pudiendo figurar sólo aquellos bienes del patrimonio cultural y natural que estén amenazados por peligros graves y precisos (amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios de utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos).

las políticas de conservación del patrimonio y se convirtió en la norma de referencia obligada para incluir las políticas de conservación entre los instrumentos de desarrollo siempre referido, por supuesto, a bienes materiales.

Habida cuenta de que los aspectos jurídicos de los derechos de propiedad intelectual colectiva no estaban todavía bien definidos, se decidió no incluir las expresiones del PCI en las disposiciones de la Convención de 1972. Por eso, el Gobierno de Bolivia propuso en 1973 añadir un Protocolo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor (1952) revisada en 1971, para dotar de un marco jurídico a la protección del folclore[154]. La propuesta no fue aceptada, pero un año más tarde una reunión de expertos gubernamentales, organizada en Túnez con la asistencia de la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), empezó a redactar un proyecto de ley modelo sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual aplicable a esas expresiones culturales.

Entretanto, a raíz de la Conferencia de Venecia de 1970, se habían organizado varios seminarios regionales. En una de esas reuniones, la Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en África, celebrada en Accra en 1977, los expertos propugnaron que la definición de cultura no se limitara a las bellas artes y el patrimonio, sino que incluyese las visiones cosmológicas, los sistemas de valores y las creencias. Un año después, la *Declaración de Bogotá*, adoptada por la *Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en América Latina y el Caribe*[155], hizo hincapié en que el desarrollo cultural debía mejorar la calidad de vida de las comunidades y los individuos. Esa declaración afirmaba también que la autenticidad cultural se basa en el reconocimiento de los componentes de la identidad cultural, cualquiera que sea su origen geográfico o grado de mezcla, y que todo pueblo o grupo de pueblos tiene el derecho y el deber de determinar con toda independencia su identidad cultural, sobre la base de sus antecedentes históricos, sus valores y aspiraciones propios y su voluntad soberana.

Por su parte, en agosto de 1979, el Director General de la UNESCO envió una comunicación a todos los estados miembros acompañada de un cuestionario sobre el tema de la protección del folklore; se trataba de un cuestionario

[154] El Ministro de Relaciones Exteriores y Asunto Religiosos de Bolivia escribió una carta al Director General de la UNESCO el 24 de abril de 1973 pidiendo considerar *"un instrumento internacional para proteger las artes folclóricas y el patrimonio cultural de varias naciones del mundo"*. Gasparini, Lucia, *op. cit.*, pág. 33.

[155] Adoptada el 20 de enero de 1978.

interdisciplinario que consideraba la definición de folklore y los aspectos de la identificación, conservación, preservación, utilización u protección de sus frutos o explotaciones. El objetivo de tal sondeo era evaluar la situación del conocimiento y de la gestión del PCI en el ámbito de los estados miembros y buscar el desarrollo de medidas adicionales[156].

En el marco regional americano, el 16 de junio de 1976 la Asamblea General de la OEA, reunida en Santiago de Chile, aprobó la *Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las naciones Americanas*, también llamada *Convención de San Salvador*[157], motivada por el constante saqueo y despojo que han sufrido a lo largo de los años los países principalmente latinoamericanos, en sus patrimonios culturales autóctonos y que tales actos depredatorios han dañado y disminuido las riquezas arqueológicas, históricas y artísticas, a través de las cuales se expresa el carácter nacional de sus respectivos pueblos.

Esta Convención tuvo por objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales y promover la cooperación entre los Estados del continente para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales. Nuevamente otra disposición referida únicamente a los bienes materiales.

Este período se caracterizó por estar constituido por años en que el mundo fue cambiando y confrontando la cultura tradicional, en particular porque muchos países que apenas habían obtenido su independencia se estaban construyendo su propia identidad nacional. El entusiasmo estaba puesto en reinventar y revivir la tradición local y construir un sentimiento de identidad nacional.

- **De 1980 a 2000. Enfoque hacia la faz inmaterial de la cultura.**

El ciclo de conferencias posterior a la reunión de Venecia desembocó en la *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT)*, que se

[156] Gasparini, Lucia, *op. cit.*, pág. 34.

[157] Argentina aprobó esta Convención por Ley 25.568 que fue sancionada el 10 de abril de 2002 y promulgada tácitamente el 03 de mayo del mismo año.

celebró en la ciudad de México en 1982[158]. El éxito de la Convención de 1972 y la importancia atribuida a la protección de los bienes inmuebles, naturales y culturales, había relegado a un segundo plano la importancia de otras formas de patrimonio y producción cultural como instrumentos del desarrollo.

Se recalcó que la identidad cultural es la defensa de las tradiciones, la historia y los valores morales, espirituales y éticos heredados de las generaciones pasadas. Se señaló que los usos culturales presentes y futuros son tan valiosos como los del pasado y se hizo hincapié en que tanto los gobiernos como las comunidades debían participar en la elaboración de las políticas culturales.

Uno de los principales logros de la Conferencia fue la nueva definición de cultura. Se afirmó que el patrimonio abarca todos los valores de la cultura tal y como se expresan en la vida cotidiana, y se señaló la importancia cada vez mayor de las actividades destinadas a sostener los modos de vida y las formas de expresión por los que se transmiten esos valores. La Conferencia observó que la atención suscitada por la preservación del "patrimonio inmaterial" se podía considerar una de las novedades más positivas del decenio anterior. Esta fue una de las primeras ocasiones en que se utilizó oficialmente la expresión "patrimonio inmaterial" o "patrimonio no material"[159].

Además de redefinir la noción de cultura (incluyendo en ella no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de valores, tradiciones y creencias), la conferencia aprobó la *Declaración de México sobre las Política Culturales* con una nueva definición del patrimonio cultural:

> *"El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y científicos, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales e inmateriales que expresen la creatividad de ese pueblo: la lengua,*

[158] Celebrada en la Ciudad de México, 26 de julio al 06 de agosto de 1982.

[159] *"El concepto de patrimonio ha evolucionado considerablemente desde que se celebró la Conferencia de Venecia. Hoy engloba también todos los valores de la cultura viviente y se concede una importancia cada vez mayor a las actividades que pueden mantener vivos los estilos de vida y de expresión que transmiten dichos valores. La atención que actualmente se presta a la preservación del patrimonio no material puede considerarse como una de las evoluciones más positivas de este último decenio"*. Pág. 14 punto 85.

los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas"[160].

La Declaración de México afirmaba que cada cultura representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más eficaz de manifestar su presencia en el mundo. La identidad cultural y la diversidad cultural son indisociables, y el reconocimiento de múltiples identidades culturales allí donde coexisten diversas tradiciones constituye la esencia misma del pluralismo cultural.

La conferencia pidió a la UNESCO que no se limitara a su programa de preservación del patrimonio cultural constituido por monumentos y lugares históricos, sino que desarrollase también sus programas y actividades para salvaguardar y estudiar el PCI, en particular las tradiciones orales.

La conferencia invitó a los Estados miembros y las organizaciones internacionales presentes en el ámbito de la cultura a que hicieran extensivas sus políticas de protección del patrimonio al conjunto de las tradiciones culturales, sin limitarse exclusivamente al patrimonio artístico y abarcando la totalidad de las expresiones del patrimonio legado por el pasado, como las artes populares y el folclore, las tradiciones orales y los usos culturales. También proclamó que la preservación y el desarrollo de la cultura tradicional de un pueblo constituyen una parte esencial de todo programa encaminado a afirmar su identidad cultural, y que el folclore, en su calidad de componente fundamental del patrimonio de una nación, debe abarcar aspectos como las lenguas, la tradición oral, las creencias, las celebraciones, las costumbres alimentarias, la medicina, la tecnología, etc. Por consiguiente, recomendó a los Estados Miembros que, al igual de lo que hacían con los bienes históricos o artísticos, reconociesen los aspectos no reconocidos de las tradiciones culturales y prestasen asistencia técnica y financiera a las actividades destinadas a su preservación, promoción y difusión. La protección de la faz inmaterial de la cultura estaba en marcha.

En 1984, dos años después de MONDIACULT, se celebró una reunión en Río de Janeiro (Brasil) para discutir de la preservación y el desarrollo de la artesanía en el mundo moderno. Ese mismo año, sobre la base de las *Disposiciones Tipo para*

[160] Pág. 45 punto 23.

Leyes Nacionales sobre Protección de las Expresiones del Folclore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas, adoptadas en Túnez, la UNESCO y la OMPI elaboraron un proyecto de tratado que no entró nunca en vigor. La protección jurídica del folclore tendría que esperar otros cinco años más. Sin embargo, se adoptaron algunas medidas en relación con el PCI, como la preparación de un libro sobre las lenguas árticas y la puesta en marcha, en 1987, de un proyecto experimental en Malí que conjugaba la tradición y la innovación cultural en el desarrollo rural.

En 1989, la UNESCO adoptó la *Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular,* siendo el primer instrumento jurídico de su especie orientado a la salvaguardia del PCI, aunque no vinculante ya que simplemente se trató de una Recomendación.

Definió a la cultura tradicional y popular como el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes.

Se incorporaron nociones que luego serían recogidas por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: salvaguardia y conservación. Respecto a la salvaguarda, se estableció que la cultura tradicional y popular, en cuanto expresión cultural, debe ser salvaguardada por y para el grupo cuya identidad expresa. Asimismo, respecto a la conservación de aquella, se refiere a la documentación relativa a las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular, y su objetivo, en caso de no utilización o de evolución de dichas tradiciones, consiste en que los investigadores y los portadores de la tradición puedan disponer de datos que les permitan comprender el proceso de modificación de la tradición. Aunque la cultura tradicional y popular viva, dado su carácter evolutivo, no siempre permite una protección directa, la cultura que haya sido fijada debería ser protegida con eficacia. A tal efecto recomendó que los Estados Miembros establezcan servicios nacionales de archivos donde la cultura tradicional y popular recopilada pudiera almacenarse adecuadamente y quedar disponible; establezcan un archivo nacional central que pudiera prestar determinados servicios (indización central, difusión de información sobre materiales de la cultura tradicional y popular y normas para el

trabajo relativo a ella, incluida su salvaguardia); creen museos o secciones de cultura tradicional y popular en los museos existentes, donde ésta pueda exponerse; privilegien las formas de presentar las culturas tradicionales y populares que realzan los testimonios vivos o pasados de esas culturas (emplazamientos históricos, modos de vida, conocimientos materiales o inmateriales); armonicen los métodos de acopio y archivo; entre otras medidas.

También estableció sugerencias para la difusión de la cultura tradicional y popular. Al respecto, indicó que se debe sensibilizar a la población respecto de la importancia de la cultura tradicional y popular como elemento de la identidad cultural.

Con relación a la protección de la cultura tradicional popular, consideró que, en la medida en que se plasme en manifestaciones de la creatividad intelectual individual o colectiva, merece una protección análoga a la que se otorga a las producciones intelectuales, sugiriendo a los Estados miembros una serie de medidas como, por ejemplo, proteger los intereses de los compiladores velando por que los materiales recogidos sean conservados en archivos, en buen estado y en forma racional y adoptar las medidas necesarias para proteger los materiales recogidos contra su utilización abusiva, intencional o no (punto F). También consideró fundamental la cooperación internacional para la salvaguarda de la cultura tradicional y popular (punto G).

Con objeto de promover la aplicación de esa recomendación en los años siguientes, la UNESCO organizó cursos de formación y prestó asistencia para preparar inventarios, redactar planes de salvaguardia, revitalización y difusión del PCI de grupos minoritarios e indígenas, y organizar varios festivales de culturas tradicionales. Se estableció una red de actividades relacionadas con el folclore; se editaron discos compactos de la Colección UNESCO de Música Tradicional del Mundo y se publicaron el *Atlas de las lenguas del mundo en peligro de desaparición*; un manual sobre el acopio del patrimonio musical; otro manual metodológico sobre la protección de la cultura tradicional y el folclore contra la explotación comercial impropia; y un documento sobre ética y cultura tradicional.

La Recomendación sirvió para sensibilizar sobre la necesidad de dedicar especial atención a los ámbitos relacionados con el PCI y evidenció algunos principios teóricos generales que se refieren a la importancia política, económica y social del folklore, a su rol en la historia de los pueblos y a su posición en la cultura

contemporánea, reconociendo la necesidad de tutelar las tradiciones culturales y a la comunidad que les da vida.

Tal como afirma Lucia Gasparini, este último elemento es interesante y permanecerá de ahora en adelante como una constante de los documentos que se ocupen de ese tipo de patrimonio: significa emprender un desplazamiento de la atención del objeto concreto al vivido y a los procesos que se darán a partir de eso, revaluando la cultura popular, oral y tradicional en término de cultura viviente que se contrapone a la idea estática de su naturaleza[161].

En 1992 se creó la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo y emitió un informe llamado *Nuestra Diversidad Creativa*[162], que puso de relieve la riqueza del patrimonio material e inmaterial transmitido de generación en generación. Ateniéndose al criterio tradicional de la UNESCO sobre la necesidad de salvaguardar la cultura y la diversidad cultural, el informe destacó que los objetos físicos (monumentos y obras de arte y artesanía) fueron los principales beneficiarios de las políticas de preservación del patrimonio cultural, pero observó que el PCI, extremadamente frágil, no gozaba de la misma atención y recordaba que los vestigios inmateriales como los topónimos o las tradiciones locales también forman parte del patrimonio cultural.

La comisión recalcó la importancia de las políticas de preservación del patrimonio como parte del desarrollo económico. Considerando que todavía no se había prestado la necesaria atención al PCI, la comisión subrayó que la *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural* reflejaba el interés por una clase de patrimonio muy apreciado en los países desarrollados, pero no era adecuada para los tipos de patrimonio que se suelen encontrar en regiones donde las energías culturales se han concentrado en otras formas de expresión como las obras de artesanía, la danza o las tradiciones orales.

Nuestra diversidad creativa examinó también los problemas con que tropezaba la salvaguardia del patrimonio en el plano político, ético y financiero, y puso de relieve algunos problemas relacionados con el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, indicando que la noción de "propiedad intelectual" podía no resultar adecuada en el caso de las tradiciones creativas vivas. A cambio,

[161] Gasparini, Lucia, *op. cit.*, pág. 37.

[162] Puede consultarse en http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf

propuso que se formulase un nuevo concepto basado en ideas inherentes a las normas tradicionales.

Al año siguiente de la publicación de *Nuestra diversidad creativa,* el Director General de la UNESCO propuso que se emprendieran paralelamente dos actividades: la puesta en marcha del programa de Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad; y la realización de un estudio sobre la posibilidad de elaborar un instrumento normativo para proteger la cultura tradicional y el folclore.

- **Desde el año 2000 al 2003. Del folclore al PCI.**

A finales de la década de 1990, después de una larga serie de reuniones regionales, el Instituto Smithsoniano, los Estados Unidos de América y la UNESCO organizaron conjuntamente una conferencia de expertos titulada *"Evaluación global de la Recomendación de 1989 sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular: autonomía local y cooperación internacional"*. La Conferencia llegó a la conclusión de que era necesario un instrumento jurídicamente vinculante sobre la salvaguardia del PCI: la Recomendación de 1989 se centraba excesivamente en la documentación y no prestaba atención suficiente a la protección de las prácticas y tradiciones vivas, ni a los grupos y comunidades depositarios de éstas.

Recalcaron la necesidad de utilizar una metodología más integradora que abarcase no sólo los productos artísticos como narraciones, canciones, etc., sino también los conocimientos y valores que posibilitan su creación, los procesos creativos que les dan existencia y las modalidades de intercambio gracias a las cuales esos productos son debidamente recibidos y apreciados. La Conferencia recomendó que se adoptara la expresión "patrimonio cultural inmaterial" para el nuevo instrumento normativo, en vez del término "folclore" que algunas comunidades estimaban degradante.

¿Por qué se propuso la expresión "patrimonio cultural inmaterial"? Por considerarse más adecuada para designar los procesos de adquisición de saber de los pueblos, junto con los conocimientos, las técnicas y la creatividad que les dan forma sustancial y los desarrollan, los productos que crean, y los recursos, espacios y otros elementos del contexto social y natural necesarios para su viabilidad, que infunden en las comunidades vivas un sentimiento de continuidad con las generaciones

anteriores y son importantes para la identidad cultural y la salvaguardia de la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad.

El Director General de la UNESCO presentó en 2001 un informe que concluyó que la propiedad intelectual no protegía de manera adecuada las expresiones del PCI y que, por lo tanto, debía preverse un régimen específicamente concebido para tal fin. Como si fuera una novedad, el informe observó también que los instrumentos ya adoptados en materia de patrimonio cultural trataban principalmente del patrimonio cultural material y no se referían expresamente al PCI, y por lo tanto no constituían un marco satisfactorio de protección. En definitiva, el informe recomendó que se elaborase un nuevo instrumento normativo basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) y propuso una serie de principios fundamentales en los que debería inspirarse ese instrumento.

Con arreglo a las recomendaciones de la Conferencia de Washington, el informe preconizaba que se utilizase la expresión "patrimonio cultural inmaterial" en vez de "folclore" y proponía una primera definición de la expresión, señalando al mismo tiempo una serie de ámbitos en los que se manifestaba ese patrimonio. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO pidió que se procediera a un debate más detallado sobre los aspectos conceptuales y la definición del PCI, con vistas a que la definición propuesta fuese acorde con la utilizada en la *Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad*. El Consejo hizo observar además que la protección de ese patrimonio no debía limitarse a una acción normativa y subrayó que era necesario colaborar estrechamente con la OMPI y estudiar los límites de la protección.

En septiembre de 2001, la Conferencia General adoptó la *Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural*[163], en cuyo art. 7 se afirma que el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir

[163] Este documento no solo se vincula con los instrumentos de la UNESCO referidos al tema del racismo, sino también con los que abordan el tema del patrimonio. Se trata de una Declaración de singular importancia, pues aboga por la preservación de la diversidad cultural humana en el contexto de un mundo en el cual se acentúan los fenómenos de globalización. Además de realizar importantes definiciones conceptuales, la Declaración incluye orientaciones concretas destinadas a la elaboración de planes de acción, mediante los cuales busca que los Estados avancen en la salvaguardia de las distintas expresiones culturales de sus sociedades, comenzando por algunos componentes claves, tales como las lenguas. Ver Pajuelo Tévez, Ramón, *La Convención del 2003 y los desafíos para la salvaguardia del PCI*, en Experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina, Cuzco, CRESPIAL, 2010, págs. 33/34.

la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas. Esta declaración sentó las bases de la elaboración del instrumento normativo para la salvaguardia del PCI.

En 2002, Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Cultural, el papel desempeñado en el desarrollo por las políticas relativas al patrimonio cultural, y en especial al patrimonio inmaterial, hicieron más patente que nunca la necesidad de elaborar un marco para esta forma de patrimonio. En septiembre de 2002 los representantes de 110 Estados Miembros, entre los que figuraban 72 ministros de cultura, participaron en una mesa redonda sobre el patrimonio inmaterial y la diversidad cultural, que tuvo lugar en Estambul (Turquía). Los participantes adoptaron la Declaración de Estambul, en la que reconocían el valor del PCI, y recomendaron la adopción de una nueva convención internacional. En ese mismo mes de septiembre de 2002, se celebró en París la primera Reunión intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Los especialistas debatieron la conveniencia de utilizar una definición amplia de PCI, porque temían que una interpretación extensiva y vaga del término podría ir en detrimento de una aplicación estricta de la Convención. Decidieron incluir una referencia a los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos humanos y adoptar los términos "comunidades" y "grupos" sin ningún calificativo que pudiera prestarse a divergencias de interpretación. Los expertos optaron por la expresión "espacio cultural", en vez "sitio cultural", porque ofrecía la posibilidad de referirse también a los edificios. Teniendo en cuenta que el PCI es un patrimonio vivo en constante evolución, decidieron añadir a la definición "transmitido de generación en generación". En lo que respecta a la inclusión de los idiomas entre los ámbitos en los que se manifiesta el PCI, se llegó a un compromiso entre los partidarios y adversarios de esa inclusión, adoptando la fórmula "el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial". Asimismo, se decidió por consenso no incluir ninguna referencia a la religión en el ámbito relativo a los "usos sociales, rituales y actos festivos".

Casi todos los expertos estuvieron de acuerdo en que los Estados debían desempeñar un papel preeminente en la salvaguardia del PCI. Su principal obligación debía consistir en identificar y definir el patrimonio cultural inmaterial presente en sus territorios, en consulta y cooperación con las comunidades culturales

concernidas, las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. También se acordó que se debía crear un registro internacional del PCI alimentado por el patrimonio inventariado en los diferentes países. Este registro –la Lista Representativa establecida más tarde por la Convención– debía tener por objeto dar a conocer el PCI y contribuir a la promoción de la diversidad cultural.

En noviembre de 2003, la Comisión de Cultura de la Conferencia General de la UNESCO recomendó que la Conferencia General adoptase por consenso, en sesión plenaria, la *Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* como convención de la UNESCO

Después de 2003 ha entrado en vigor otro instrumento jurídico relativo a la cultura: la *Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales* de 2005. Mientras que la Convención de 2003 trata principalmente de los procesos de transmisión de conocimientos dentro de las comunidades y los grupos depositarios del patrimonio inmaterial, la Convención de 2005 tiene por tema la producción de expresiones culturales, difundidas y compartidas mediante actividades, bienes y servicios culturales. Esta Convención complementa la serie de instrumentos jurídicos de la UNESCO encaminados a propiciar la diversidad y un entorno mundial en el que se aliente la creatividad de los individuos y los pueblos en su rica variedad, contribuyendo así a su desarrollo económico y a la promoción y preservación de la diversidad cultural del mundo.

Así, por primera vez en la historia del derecho internacional, el afán de humanizar la mundialización ha hecho que la cultura encuentre el lugar que le corresponde entre las prioridades de la comunidad internacional.

c).- La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y sus normas complementarias.

La Convención fue aprobada durante la 32ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO el 17 de octubre de 2003 y entró en vigor el 20 de abril de 2006. Más de la mitad de los Estados miembros de la UNESCO han firmado ya la Convención[164]. La excepcional rapidez del proceso de ratificación refleja no sólo el

[164] Actualmente (abril de 2021), son 180 los Estados que han ratificado la Convención. Argentina ratificó la Convención mediante Ley 26.118 del 05 de julio de 2005, entrando en vigor aquel instrumento el día 09 de agosto de 2006.

gran interés que despierta el patrimonio inmaterial en todo el mundo, sino también una toma de conciencia generalizada de la urgente necesidad de dispensarle la protección internacional garantizada por la Convención, habida cuenta de las amenazas que los estilos de vida contemporáneos y el proceso de globalización hacen pesar sobre él. Las innumerables actividades que se están llevando a cabo a nivel nacional, así como las múltiples reuniones intergubernamentales organizadas a nivel internacional, muestran que la adopción de esta convención y su pronta aplicación marcan un hito en la larga campaña de la UNESCO por salvaguardar el patrimonio vivo del mundo.

La *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, cuya estructura se basa también en el enfoque programático de la Convención de 1972, hace hincapié en el reconocimiento de la igualdad de las expresiones y tradiciones, sin distinción jerárquica entre ellas. Así pues, el concepto de "valor universal excepcional" enunciado en la Convención de 1972 no se aplica a la salvaguardia del PCI. El reconocimiento internacional está basado en la importancia que tiene este patrimonio vivo para el sentimiento de identidad y continuidad de las comunidades en las que se crea, transmite y recrea. Ese reconocimiento se garantiza dando notoriedad al patrimonio de esas comunidades, lo cual es el principal objetivo de la Lista representativa del PCI de la humanidad. Este instrumento se centra principalmente en las actividades de salvaguardia y en el intercambio de usos ejemplares, más que en el sistema de listas, tal como se verá.

Esta normativa fue enmarcada en los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y reconoce la importancia que reviste el PCI como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, mencionando como sus antecedentes a la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002.

Tal como se ha dicho, y como lo reconoce la propia Convención en sus considerandos, hasta el momento de su aprobación, no existía en la comunidad internacional un instrumento multilateral de carácter vinculante destinado a salvaguardar el PCI.

- **Disposiciones Generales.**

i. Finalidades de la Convención.

Conforme el art. 1, las cuatro finalidades principales de la Convención son:

- la salvaguardia del PCI;
- el respeto del PCI de las comunidades, grupos e individuos de que se trate;
- la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del PCI y de su reconocimiento recíproco;
- la cooperación y asistencia internacionales.

ii. Definiciones.

- **¿Qué se entiende por PCI?**

A los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este PCI, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la Convención, se tiene en cuenta únicamente el PCI que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible (art. 2.1).

- **¿Cuáles son los ámbitos o manifestaciones del PCI?**

Las manifestaciones en que puede darse ese PCI son (art. 2.2):

- **Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del PCI**[165]: Este ámbito abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas.

Al transmitirse verbalmente, las expresiones y tradiciones orales suelen variar mucho. Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y creación que varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta combinación hace que sean una forma de expresión viva y colorida, pero también frágil, porque su viabilidad depende de una cadena ininterrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación de intérpretes a otra.

- **Artes del espectáculo**[166]: Las artes del espectáculo van desde la música vocal o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y que se encuentran también, en cierto grado, en otros muchos ámbitos del PCI.

- **Usos sociales, rituales y actos festivos**[167]: Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia radica en que reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Esos usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a

[165] Por ejemplo, la hikaye palestina. Palestina. Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2005). La hikaye palestina es una expresión narrativa practicada por las mujeres. Los relatos ficticios, que se han desarrollado a lo largo de los siglos, tratan de las preocupaciones habituales de la sociedad árabe de Oriente Medio, así como de cuestiones familiares. La hikaye es una crítica a la sociedad desde la perspectiva femenina y traza un retrato de la estructura social que está directamente relacionada con la vida de las mujeres. Muchos de los cuentos describen a mujeres desgarradas entre el deber y el deseo.

[166] Por ejemplo, la Samba de Roda de Recôncavo de Bahía.

[167] Por ejemplo, el carnaval de Binche. Bélgica. Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003). La ciudad medieval de Binche está situada al sur de Bruselas, en la provincia belga de Hainaut. Cada año, durante los tres días que preceden la Cuaresma, en esta ciudad de más de 32.000 habitantes se celebra un carnaval en el centro histórico de la ciudad que atrae a un gran número de visitantes extranjeros. El célebre Carnaval de Binche, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, es una de las más antiguas celebraciones de este tipo que sobreviven en Europa.

señalar los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Cada uno de estos "subámbitos" es vasto, pero tienen muchos puntos en común.

- **Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo**[168]**:** Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, influyen muy considerablemente en los valores y creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad.

Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo, los conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de posesión, las organizaciones sociales, las festividades, los idiomas y las artes visuales.

- **Técnicas artesanales tradicionales**[169]**:** La artesanía tradicional es acaso la manifestación más tangible del PCI. No obstante, la Convención de 2003 se ocupa sobre todo de las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales, más que de los productos de la artesanía propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades.

---

[168] Por ejemplo, la cosmovisión andina de los kallawayas. Estado Plurinacional de Bolivia.

[169] Por ejemplo, el kris indonesio. Indonesia. Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2005). El kris, o keris, es una daga asimétrica característica de Indonesia. A la vez arma y objeto espiritual, se suelen atribuir al kris poderes mágicos. Los más antiguos kris conocidos se remontan al siglo X, y lo más probable es que se extendieran a partir de la isla de Java a través de Asia del Sureste.

- **¿Qué se entiende por salvaguardia?**

El punto más innovador respecto a las políticas culturales es la adopción del concepto de salvaguardia que viene a sustituir el clásico de conservación, que implica preservar un bien cultural de las amenazas directas que pueden dañarlo; en cambio, la idea y la práctica de la salvaguardia se refiere a la preservación de las condiciones que se revelan fundamental para la vida de una expresión cultural[170].

Como se dijo, para salvaguardar el PCI se necesitan medidas distintas de las destinadas a conservar monumentos, sitios y espacios naturales. Si se quiere mantenerlo vivo, debe seguir siendo pertinente para una cultura y ser practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por las generaciones sucesivas. Las comunidades y grupos que practican estas tradiciones y costumbres en todo el mundo tienen sistemas propios de transmisión de sus conocimientos y técnicas, en general más por vía oral que escrita. Por consiguiente, en las actividades de salvaguardia deben participar siempre las comunidades, los grupos y, cuando proceda, los individuos que son depositarios de ese patrimonio.

Pero, ¿cómo salvaguardar y efectuar la gestión de un patrimonio que cambia constantemente y forma parte de una "cultura viva", sin fosilizarlo o banalizarlo? Existe el peligro de que ciertos elementos del PCI mueran o desaparezcan si no se contribuye a su salvaguardia. Salvaguardarlos requiere la transferencia de conocimientos, técnicas y significados.

Salvaguardar el PCI significa velar por que siga formando parte activa de la vida de las generaciones presentes y se transmita a las venideras. La Convención entiende por salvaguardia a las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del PCI, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos (art. 2.3).

Da a entender claramente que el objetivo principal de la Convención es garantizar la viabilidad a largo plazo del patrimonio inmaterial dentro de las comunidades o grupos.

[170] Gasparini, Lucia, *op. cit.*, pág. 9.

Vale aclarar también que la Convención no especifica a qué comunidades o grupos de depositarios de la tradición se refiere. Su espíritu quiso que las comunidades tengan un carácter abierto, sin estar necesariamente vinculadas a territorios determinados. Las comunidades pueden ser dominantes o no dominantes y un individuo puede pertenecer a diferentes comunidades a un mismo tiempo, o cambiar de comunidad.

iii. Relación con otros instrumentos internacionales.

Ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada de tal manera que: a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté directamente asociado un elemento del PCI; o b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean Partes (art. 3).

- **Órganos de la Convención.**

i. Asamblea General de los Estados Partes.

También llamada "la Asamblea General", es el órgano soberano de la Convención. Celebra una reunión ordinaria cada dos años y puede reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando reciba una petición en tal sentido del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de por lo menos un tercio de los Estados Partes. Tiene su reglamento propio (art. 4) que rige todo lo referido a la participación, organización de la Asamblea, procedimiento de los debates, elección de los miembros del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI, la Secretaría de la Asamblea y la aprobación, modificación y suspensión del mismo reglamento.

En esta Asamblea pueden participar con derecho de voto, los representantes de todos los Estados Partes en la Convención, pudiendo participar en los trabajos de la Asamblea en calidad de observadores, sin derecho de de voto pero pudiendo hacer

uso de la palabra previa autorización del Presidente, los representantes de los Estados miembros de la UNESCO que no sean parte en la Convención, de los Miembros asociados a la UNESCO y de las Misiones Permanentes de Observación ante la UNESCO. En las mismas condiciones que estos últimos, pueden participar en los trabajos de la Asamblea los representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales con las cuales la UNESCO haya concertado un acuerdo de representación recíproca, como también los observadores de las organizaciones intergubernamentales y de las organizaciones internacionales no gubernamentales invitadas por el Director General (arts. 1, 2 y 7.3 del reglamento interno).

La Asamblea elige un Presidente, uno o varios Vicepresidentes y un Relator. El primero tiene la función de abrir y levantar cada una de las sesiones plenarias, dirigir el debate, poner a votación los asuntos y proclamar las decisiones (arts. 3 y 4 del reglamento interno).

También actúa un Secretario de la Asamblea General, constituida por un funcionario de la Secretaría de la UNESCO designado por el Director General de la Organización, siendo sus funciones la de recibir, traducir y distribuir todos los documentos oficiales en las seis lenguas de trabajo, por lo menos 30 días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea; también se encarga de la interpretación de las intervenciones en los debates y de todas las demás tareas necesarias para la buena marcha de los trabajos de la Asamblea (art. 16 incs. 2 y 3 del reglamento interno).

Las sesiones de la Asamblea son públicas, a menos que la ella misma disponga lo contrario (art. 5 del reglamento interno).

ii. Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI.

El Comité es el responsable ante la Asamblea General, a la que da cuenta de todas sus actividades y decisiones (art. 8.1). Actualmente está integrado por 24 representantes de Estados Partes elegidos por la Asamblea General con un voto cada uno (art. 35 del reglamento interno) para un período de 4 años obedeciendo a los principios de una distribución geográfica y una rotación equitativas. El Comité se renueva por mitades cada dos años, sin que un Estado miembro del Comité pueda ser elegido por dos mandatos consecutivos (arts. 5 y 6).

También tiene su propio reglamento (art. 8.2) que regula su composición, las reuniones, los participantes, el orden del día, la mesa, procedimiento de los debates, votaciones, la Secretaría del Comité, los idiomas de trabajo e informes y la aprobación, modificación y suspensión del propio reglamento.

El Comité celebra sesiones ordinarias al menos una vez al año y extraordinarias cuando lo pidan al menos dos tercios de los Estados miembros (art. 2 del reglamento interno) y tiene como funciones las siguientes (art. 7):

a).- Promover los objetivos de la Convención y fomentar y seguir su aplicación;

b).- Brindar asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre medidas encaminadas a salvaguardar el PCI;

c).- Preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General un proyecto de utilización de los recursos del Fondo para la salvaguardia del PCI;

d).- Buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las medidas necesarias a tal efecto;

e).- Preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General directrices operativas para la aplicación de la Convención.

Estas directrices operativas indican, en particular, los procedimientos que se deben observar para inscribir el patrimonio inmaterial en las listas de la Convención, la prestación de asistencia financiera internacional, la acreditación de organizaciones no gubernamentales para que ejerzan funciones consultivas ante el Comité y la participación de las comunidades en la aplicación de la Convención.

f).- Examinar los informes de los Estados Partes y elaborar un resumen de los mismos destinado a la Asamblea General;

g).- Examinar las solicitudes que presenten los Estados Partes y decidir, con arreglo a los criterios objetivos de selección establecidos por el propio Comité y aprobados por la Asamblea General, acerca de:

i) Las inscripciones en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y en los programas, proyectos y actividades de salvaguardia del PCI;

ii) La prestación de asistencia internacional.

A su vez, el Comité puede crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos *ad hoc* que estime necesarios para el desempeño de sus funciones (art.

8.3) e invitar a sus reuniones a todo organismo público o privado, o a toda persona física de probada competencia en los diversos ámbitos del PCI, para consultarles sobre cuestiones determinadas (art. 8.4 de la Convención y 6 del reglamento interno).

El Comité, al igual que la Asamblea General, está secundado por la Secretaría de la UNESCO y tiene como función preparar la documentación de la Asamblea General y del Comité, así como el proyecto de orden del día de sus respectivas reuniones, y velar por el cumplimiento de las decisiones de ambos órganos (art. 10 de la Convención y 40 del reglamento interno). Actualmente asume la función de Secretaría la Entidad del Patrimonio Vivo de la UNESCO.

- **Salvaguardia del PCI en el plano nacional.**

i. Funciones de los Estados Partes.

La función primordial de cada Estado Parte es adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del PCI presente en su territorio, debiendo para ello, fundamentalmente, identificar y definir los distintos elementos del PCI presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes (art. 11).

Por identificación se entiende el proceso consistente en describir uno o varios elementos específicos del PCI en su contexto propio y distinguirlos de los demás. A esto en la Convención se le llama "confeccionar un inventario".

ii. Inventarios. Identificar para salvaguardar.

La Convención es un documento permisivo, ya que la mayoría de sus artículos están redactados en términos no preceptivos y los gobiernos pueden aplicarlos con flexibilidad. Sin embargo, la confección de inventarios es una de las obligaciones específicas enunciadas en la Convención y en las Directrices Operativas para su aplicación.

La Convención establece que para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte debe confeccionar con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del PCI presente en su territorio. Dichos inventarios se

deben actualizar regularmente (art. 12.1) ya que el PCI evoluciona constantemente y las amenazas que pesan sobre su viabilidad pueden surgir de improviso.

Tal como surge del artículo, los Estados tienen libertad para confeccionar sus inventarios del modo que estimen pertinente, pero los elementos del patrimonio inmaterial deberán estar bien definidos en ellos para facilitar la aplicación de las medidas de salvaguardia.

Los Estados pueden elegir entre hacer un inventario único globalizador o una serie de inventarios de menor envergadura y más circunscritos. La Convención no dice nada de los parámetros para definir el alcance de cada uno de ellos cuando existe un sistema múltiple. Podrían hacerse inventarios distintos para los diferentes ámbitos del PCI y las distintas comunidades, regiones o ciudadanos de los Estados federales. Sin embargo, sean quienes fueren los participantes en la preparación de los inventarios, en última instancia son los Estados Partes en la Convención los responsables de la concepción y realización de sus inventarios.

También obliga la Convención a que cada Estado Parte dé información en relación a esos inventarios al presentar su informe periódico al Comité sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la Convención (art. 12.2).

iii. Participación de las comunidades, grupos e individuos.

En el marco de sus actividades de salvaguardia del PCI, cada Estado Parte debe tratar de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo (art. 15).

Habida cuenta de que las comunidades son las que crean el PCI y lo mantienen en vida, les corresponde ocupar un puesto privilegiado en su salvaguardia. Las comunidades que utilizan en la práctica el PCI están en mejores condiciones que nadie para identificarlo y salvaguardarlo, y por consiguiente deben participar en la identificación de su patrimonio mediante la confección de los correspondientes inventarios y, en general, de cualquier otra medida de salvaguardia.

La definición de PCI de la Convención recuerda que el patrimonio ha de ser reconocido por las comunidades, grupos o individuos a los que pertenece. Sin este reconocimiento, nadie podrá decidir por ellos que una determinada expresión o uso

forma parte de su patrimonio. Así pues, es natural que no pueda confeccionarse un inventario sin la participación de las comunidades, grupos o individuos cuyo patrimonio deba ser identificado y definido. A veces sucede, desde luego, que las comunidades no tienen poder o medios suficientes para hacerlo por cuenta propia. En tal caso el Estado o diversos organismos, instituciones u organizaciones pueden ayudarlas a confeccionar el inventario de su patrimonio vivo.

Asimismo, las Directrices Operativas[171] alientan a los Estados Partes a que creen un organismo consultivo o un mecanismo de coordinación para facilitar que las comunidades, grupos y, si procede, individuos, así como expertos, centros de competencias e institutos de investigación, participen en particular en:

a).- la identificación y definición de los distintos elementos del PCI presentes en su territorio;

b).- la confección de inventarios;

c).- la elaboración y ejecución de programas, proyectos y actividades;

d).- la preparación de expedientes de candidatura de elementos para su inscripción en las listas; y

e).- la exclusión de un elemento del PCI de una lista o su traspaso de una lista a la otra.

Los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias para sensibilizar a las comunidades, grupos y, si procede, individuos a la importancia y el valor que tienen su PCI y la Convención, a fin de que los depositarios de ese patrimonio puedan beneficiarse plenamente de este instrumento normativo.

Cada uno de los Estados Partes se debe esforzar por facilitar el acceso de las comunidades, grupos y, si procede, individuos a los resultados de los trabajos de investigación de que hayan sido objeto, y también se esforzarán por fomentar el respeto de los usos por los que se rige el acceso a determinados aspectos del patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el art. 13.d de la Convención, así como también a que creen conjuntamente, en el plano subregional y regional, redes de comunidades, expertos, centros de competencias e institutos de investigación para elaborar enfoques comunes –especialmente en relación con los elementos del PCI que comparten– y enfoques interdisciplinarios.

[171] Capítulo III.

A los Estados Partes que poseen documentación relativa a un elemento del PCI presente en el territorio de otro Estado Parte se los fomenta a que la compartan con este Estado, que a su vez deberá poner esa información a disposición de las comunidades, grupos y, si procede, individuos interesados, así como de los expertos, centros de competencias e institutos de investigación pertinentes.

Igualmente se requiere que los Estados Partes participen en actividades relacionadas con la cooperación regional, comprendidas las que lleven a cabo los centros de categoría 2 para el PCI que se han creado o se crearán bajo los auspicios de la UNESCO, a fin de que puedan colaborar con la mayor eficacia posible, ateniéndose al espíritu del art. 19 de la Convención, y con la participación de las comunidades, grupos y, si procede, individuos interesados, así como de los expertos, centros de competencias e institutos de investigación pertinentes.

Dentro de los límites de los recursos disponibles, el Comité puede invitar a todo organismo público o privado (comprendidos centros de competencias e institutos de investigación), así como a toda persona particular de probada competencia en el ámbito del PCI (comprendidos miembros de comunidades o grupos y expertos), a que participen en sus reuniones con objeto de mantener un diálogo interactivo con ellos y consultarles sobre cuestiones específicas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.4 de la Convención.

iv. Otras medidas de salvaguardia.

Conforme al art. 13 de la Convención, y sin perjuicio de lo expuesto, para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del PCI presente en su territorio, cada Estado Parte debe hacer todo lo posible por:

a).- adoptar una política general encaminada a realzar la función del PCI en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;

b).- designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del PCI presente en su territorio;

c).- fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del PCI, y en particular del que se encuentre en peligro;

d).- adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para:

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del PCI, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;

ii) garantizar el acceso al PCI, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio. Cabe aclarar que en algunos casos esto puede significar que determinadas formas del PCI no deben inventariarse, o que algunos elementos del patrimonio ya incluidos en inventarios sólo pueden ponerse a disposición del público con ciertas restricciones. En vez de crear una documentación detallada sobre temas delicados, las comunidades podrían decidir, por ejemplo, que en los inventarios se indique quiénes son los depositarios de ciertos conocimientos. Suministrar información sobre un elemento del PCI en un inventario facilita el acceso al mismo. A tenor del espíritu de la Convención, se debe respetar la voluntad de las comunidades que se nieguen a incluir un elemento de su PCI en un inventario.

iii) crear instituciones de documentación sobre el PCI y facilitar el acceso a ellas.

v. Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades.

Además de lo expuesto, según el art. 14 cada Estado Parte debe intentar por todos los medios oportunos:

a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del PCI en la sociedad, en particular mediante:

i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;

ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos interesados;

iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del PCI, y especialmente de gestión y de investigación científica;

iv) medios no formales de transmisión del saber;

b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la Convención;

c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el PCI pueda expresarse.

- **Salvaguardia del PCI y desarrollo sostenible en el plano nacional[172].**

El PCI puede contribuir eficazmente al desarrollo sostenible junto a sus dimensiones económica, social y ambiental[173].

En base a esto, y para aplicar eficazmente la Convención, los Estados Partes deben reconocer la importancia del PCI y valorizar su función de impulsor y garante del desarrollo sostenible, así como integrar plenamente su salvaguardia en los planes, políticas y programas de desarrollo que adopten en todos los planos.

También los Estados Partes deben esforzarse por tomar plenamente en consideración el impacto potencial y real de todos los planes y programas de desarrollo en el PCI, especialmente en el contexto de procesos de evaluación de impactos medioambientales, sociales, económicos y culturales; así como también por reconocer, promover y reforzar la importancia del PCI como recurso estratégico para facilitar el desarrollo sostenible. En este sentido, una de las medidas a adoptar puede llegar a ser la adopción de medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, en particular mediante la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, del derecho al respeto de la vida privada y de cualquier otra forma apropiada de protección jurídica, a fin de amparar debidamente los derechos de las comunidades, grupos e individuos creadores, poseedores y transmisores de su PCI cuando realicen actividades de sensibilización a ese patrimonio suyo o emprendan actividades comerciales con él.

También una acción esencial es velar porque sus planes y programas de salvaguardia tengan un carácter plenamente inclusivo y abarquen al conjunto de los sectores y estratos de la sociedad, comprendidos los pueblos indígenas, emigrantes, inmigrantes, refugiados, personas de diferentes edades y género, personas

---

[172] Para profundizar el tema se deben consultar las Directrices Operativas de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, capítulo VI.

[173] UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial y desarrollo sostenible*, KIT PATRIMONIO CULTURAL, París, 2010, pág. 3; https://ich.unesco.org/es/kit [consultado en abril de 2021].

discapacitadas y miembros de grupos vulnerables, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la Convención.

i. Desarrollo social inclusivo.

El desarrollo social inclusivo no se puede alcanzar sin seguridad alimentaria sostenible, atención sanitaria de calidad, acceso al agua potable y al saneamiento, educación de calidad para todos, sistemas de protección social inclusivo e igualdad de género.

Las sociedades humanas siempre han desarrollado y adaptado su PCI tanto el conocimiento y las prácticas relativas a la naturaleza como a las prácticas sociales, a fin de responder a las necesidades fundamentales y a los problemas sociales a través del tiempo y del espacio. La medicina tradicional, los hábitos alimentarios, las prácticas de gestión del agua, las reuniones sociales, las celebraciones y los sistemas de transmisión del conocimiento desempeñas un papel fundamental para que las comunidades alcancen un desarrollo social inclusivo[174].

Estos objetivos deben sustentarse en sistemas de gobernanza inclusivos y en la libertad de las personas para escoger sus propios sistemas de valores.

ii. Seguridad alimentaria.

Para alcanzar este objetivo, los Estados Partes deben velar para que se reconozcan, respeten y potencien los conocimientos y prácticas en materia de agricultura, pesca, caza, pastoreo y recolección, preparación y conservación de alimentos, comprendidos los ritos y creencias que acompañan estas actividades, ya que no sólo contribuyen a la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada, sino que además son reconocidos como parte de su PCI por las comunidades, grupos e individuos.

Para ello, y en general para cada uno de los aspectos, los Estados Partes pueden, por ejemplo, promover estudios científicos y métodos de investigación con la finalidad de comprender la diversidad de esos conocimientos y prácticas, demostrar su eficacia, identificar y promover sus aportaciones al mantenimiento de la

[174] UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial...*, pág. 3.

agro-biodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria y reforzar su resiliencia al cambio climático; y adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para reconocer y respetar los derechos consuetudinarios de comunidades y grupos sobre los ecosistemas terrestres, marinos y forestales necesarios para el mantenimiento y desarrollo de los conocimientos y prácticas en materia de agricultura, pesca, pastoreo y recolección de alimentos que las comunidades, grupos e individuos, reconocen como parte integrante de su PCI.

iii. Atención médica y sanitaria.

Comunidades de todo el mundo han desarrollado diferentes prácticas y conocimientos relacionados con la salud, proporcionando terapias asequibles y eficaces, con frecuencia basadas en el uso de recursos naturales locales. Los herboristas, por ejemplo, han garantizado el cuidado de las personas durante milenios. Sus prácticas y conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales se basan en la experiencia empírica de tratar a pacientes. Estos tratamientos son asequibles y accesibles, incluso en zonas rurales aisladas donde otros tipos de medicina están menos disponibles.

Es vital garantizar el reconocimiento, el respeto y la mejora de este conocimiento terapéutico, y que siga transmitiéndose a las generaciones futuras, especialmente en las comunidades donde sea la atención sanitaria más corriente. Donde hay otros servicios médicos, las prácticas y el conocimiento tradicionales, profundamente arraigados en el tejido sociocultural con valores espirituales específicos, son complementarios y pueden ampliar la oferta para los habitantes[175].

Es importante para ello que los Estados Partes reconozcan, respeten y potencien las prácticas médicas y sanitarias –comprendidos los conocimientos, recursos genéticos, usos, expresiones, ritos y creencias que las acompañan– que son reconocidas por los individuos, sus comunidades y grupos como parte integrante de su PCI y que contribuyen a su bienestar.

Para eso, cada uno de los Estados Partes puede, por ejemplo adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, consultando a los depositarios de conocimientos, curanderos y médicos, a fin de promover el acceso a

[175] UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial*..., pág. 3.

los conocimientos en materia de curación y a las materias primas necesarias para aplicarlos, la participación en prácticas curativas y la transmisión de los conocimientos y prácticas que las comunidades reconocen como parte integrante de su PCI, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a algunos de sus aspectos específicos.

iv. Educación de calidad.

En el marco de sus respectivos sistemas y políticas de educación, los Estados Partes deben intentar que se garantice el reconocimiento, el respeto y la valorización del PCI en la sociedad, haciendo hincapié en su función especial en la transmisión de valores y competencias para la vida y su contribución al desarrollo sostenible, en particular mediante programas específicos de educación y formación llevados a cabo en las comunidades y grupos interesados y por conducto de medios no formales de transmisión de conocimientos.

Para lograr este objetivo, es conveniente que cada uno de los Estados Partes adopte medidas que garanticen que los sistemas educativos promuevan el respeto por uno mismo, por su comunidad o grupo y el respeto mutuo por los demás, y que bajo ningún concepto distancien a las personas de su PCI, definan a sus comunidades o grupos como entes que no participan en la vida contemporánea, o dañen su imagen de la forma que sea; reconozcan la importancia de los modos y métodos de transmisión del PCI, así como de los métodos innovadores de salvaguardia que las comunidades y los individuos reconocen como parte integrante de su PCI, y tratar de aprovechar su potencial en los sistemas educativos formales y no formales.

También deberían promover la educación para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y para la protección de los espacios naturales y lugares de memoria, cuya existencia es indispensable para que el PCI pueda expresarse.

v. Igualdad de género.

Es a través del PCI que las comunidades transmiten sus valores, normas y expectativas relativas al género y se moldea la identidad de los miembros de la comunidad. Además, el acceso y la participación en ciertas expresiones del patrimonio con frecuencia dependen de las normas de género: la producción de

artesanías tradicionales, por ejemplo, a menudo se basa en divisiones del trabajo relacionadas con el género.

Este PCI puede desempeñar un papel especialmente importante en el refuerzo de la confianza y la tolerancia entre comunidades multiculturales cuyos miembros pueden tener concepciones distintas del género, y brindando espacios comunes para el diálogo sobre la mejor manera de alcanzar la igualdad de género[176].

Por lo dicho es que conviene que los Estados Partes se esfuercen por fomentar la contribución del PCI y de su salvaguardia a una mayor igualdad de género y a la supresión de las discriminaciones por esa causa, reconociendo al mismo tiempo que las comunidades y grupos transmiten sus propios valores, normas y expectativas en materia de género a través del PCI y que, por lo tanto, éste constituye un contexto privilegiado en el que se forjan las identidades de género de los miembros de las comunidades y grupos.

En definitiva, el PCI es decisivo en la creación y la transmisión de las identidades y los papeles asignados a cada género, por lo que es crítico para la igualdad de género.

vi. Acceso al agua potable y gestión sostenible del agua.

A lo largo de la historia, las comunidades locales han demostrado su capacidad para concebir prácticas de gestión del agua sostenibles, guiadas por tradiciones y creencias profundamente arraigadas, y para lograr que todos pudieran acceder a agua potable[177]. Para muchas comunidades, estos sistemas suponen el único acceso a agua potable y es, por tanto, crucial seguir transmitiéndolos a las generaciones futuras. En otros lugares, los sistemas tradicionales siguen siendo esenciales ya que gracias a ellos estas comunidades dependen menos de proveedores de agua exteriores y suponen un suministro más asequible para las familias vulnerables. El reconocimiento y el respeto por la diversidad de los valores y sistemas de gestión de recursos hídricos y sus mejoras, y que perdure la transmisión

[176] UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial...*, pág. 5.

[177] Por ejemplo, los sistemas de gestión del agua en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, se basan en complejas percepciones mayas de reinos sagrados y tradiciones culturales. Los mayas creen que los humanos son parte integral del ciclo del agua y que contribuyen a su continua renovación a través de sus fluidos corporales naturales. Por consiguiente, el agua se considera un recurso colectivo más que una mercancía, y la gestión y el abastecimiento de agua es responsabilidad de toda la comunidad.

entre generaciones son fundamentales para el desarrollo de soluciones sostenibles que respondan a los problemas relacionados con el agua, el medio ambiente y el desarrollo.

En vista a fortalecer la idea desarrollada, los Estados Partes deberían garantizar la viabilidad de los sistemas de gestión de los recursos hídricos que las comunidades, grupos y sus individuos reconocen como parte integrante de su PCI, y que propician un acceso equitativo al agua potable y una gestión sostenible del agua, en particular en la agricultura y otras actividades de subsistencia.

Por lo expuesto, las prácticas tradicionales relativas a la gestión del abastecimiento de agua pueden contribuir al acceso equitativo al agua potable y al uso sostenible del agua en los medios de subsistencia.

vii. Desarrollo económico inclusivo.

La salvaguardia del PCI contribuye al desarrollo económico inclusivo y, en este contexto, el desarrollo sostenible no sólo depende de un crecimiento económico estable, equitativo e inclusivo basado en modos de producción y consumo sostenibles, sino que también exige reducir la pobreza y las desigualdades, crear puestos de trabajo productivos y decentes, garantizar el acceso universal a recursos energéticos asequibles, fiables, sostenibles, renovables y modernos, y mejorar progresivamente el uso eficiente de los recursos tanto en el plano del consumo como en el de la producción.

Así, los Estados Partes deben sacar el máximo partido de la potente fuerza que representa el PCI en el fomento del desarrollo económico inclusivo y equitativo, ya que engloba una gran variedad de actividades productivas con valor monetario y no monetario y contribuye, en particular, al fortalecimiento de las economías locales. Para ello, los Estados Partes deben respetar la naturaleza de este patrimonio y las circunstancias específicas de las comunidades, grupos o individuos interesados, especialmente en lo referente a sus opciones por gestionarlo de modo colectivo o individual, proporcionándoles las condiciones necesarias para la práctica de sus expresiones creativas y promoviendo un comercio equitativo y relaciones económicas éticas.

El PCI con frecuencia es esencial en los medios de subsistencia de grupos y comunidades. El conocimiento, las habilidades y las prácticas autóctonos,

mantenidos y mejorados de generación en generación, proporcionan medios de subsistencia para muchas personas[178].

viii. Generación de ingresos y medios de subsistencia sostenibles, empleo productivo y trabajo decente.

La artesanía tradicional, por ejemplo, a menudo es una fuente de dinero o de trueque para grupos, comunidades e individuos que, de otra manera, quedarían marginados del sistema económico. Genera ingresos no solo para los artesanos y sus familias, sino también para los que se encargan del transporte y la venta de los objetos artesanales o del almacenamiento y la producción de materias primas. Estas actividades generan trabajo decente ya que muchas veces se llevan a cabo en el marco familiar y comunitario, ofreciendo seguridad en el lugar de trabajo y un sentido de pertenencia.

Por esto, los Estados Partes deben velar porque se reconozca, promueva y valorice la contribución del PCI a la generación de ingresos y al mantenimiento de los medios de subsistencia de las comunidades, grupos e individuos; adoptando medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para fomentar las oportunidades que tengan las comunidades, grupos e individuos para generar ingresos y mantener sus medios de subsistencia a fin de que se puedan garantizar la práctica, transmisión y salvaguardia sostenibles de su PCI; y para garantizar que las comunidades, grupos e individuos interesados sean los primeros beneficiarios de los ingresos generados por su propio PCI y que no se les despoje de él.

Por esto, el PCI puede generar ingresos y dar empleo a una amplia gama de personas, incluidos los pobres y vulnerables.

ix. Impacto del turismo en la salvaguardia del PCI y viceversa.

[178] Las familias campesinas de Estonia, por ejemplo, crían ovejas y producen lana en armonía con la naturaleza y la tradición local. Este modo de vida les aporta un medio de subsistencia y moldea su identidad. Fabrican hilados para las máquinas de tejer, crean objetos de lana y fieltro, y hacen velas y jabón a partir de la grasa de las ovejas. Estos métodos de subsistencia son fundamentales para el bienestar de la comunidad y constituyen un factor clave de protección frente a la pobreza a escala local. Lo mismo ocurre en otros lugares, con muchas otras prácticas como técnicas agrícolas autóctonas y sistemas de gestión de los recursos naturales.

El descubrimiento de diversas tradiciones, fiestas, artes escénicas, habilidades relacionadas con la artesanía tradicional y otras áreas del PCI es un buen medio para atraer a turistas a escala nacional, regional e internacional. Estas actividades turísticas pueden generar ingresos y estimular la creación de empleo a la vez que alimentan un sentido de orgullo en la comunidad, siempre que respeten los principios éticos y de responsabilidad en relación con el patrimonio vivo y las personas involucradas. De hecho, el turismo, cuando no respeta el patrimonio, puede ponerlo en peligro, como es el caso, por ejemplo, cuando el exceso de actividades comerciales altera su significado y su fin para la comunidad[179].

Por consiguiente, cada uno de los Estados Partes deben garantizar que toda actividad relacionada con el turismo, ya sea estatal, pública o privada, respete debidamente la salvaguardia del PCI presente en sus territorios, así como los derechos, aspiraciones y deseos de las comunidades, grupos e individuos interesados; también para garantizar que la viabilidad, las funciones sociales y las significaciones culturales de ese patrimonio no se vean mermadas o amenazadas en modo alguno por dicho turismo; y guiar las intervenciones de los que están involucrados en la industria turística, así como el comportamiento de los que participan en ella en calidad de turistas.

x. Sostenibilidad medioambiental.

La salvaguardia del PCI contribuye a la sostenibilidad medioambiental que requiere una gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. A su vez, estos podrían beneficiarse de una mejor comprensión científica y de un aprovechamiento compartido de los conocimientos sobre el cambio climático, los riesgos de desastres naturales, los límites de los recursos naturales y medioambientales, siendo esencial fortalecer la resiliencia de las poblaciones vulnerables frente al cambio climático y los desastres naturales es esencial para limitar sus costos humanos, sociales y económicos.

El conocimiento, los valores y las prácticas tradicionales acumulados y renovados de generación en generación como parte del PCI han guiado a las sociedades humanas en sus interacciones con el entorno natural durante milenios.

[179] UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial*..., pág. 10.

Hoy en día, la contribución del PCI a la sostenibilidad medioambiental ha sido reconocida en muchos campos como en la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales y la preparación y capacidad de respuesta ante los desastres naturales. Como un patrimonio vivo, el conjunto de conocimientos, valores y prácticas del PCI relacionado con el medio ambiente es capaz de evolucionar y adaptarse para lograr un uso más sostenible de los recursos naturales cuando sea necesario, permitiendo que las comunidades se enfrenten mejor a las catástrofes naturales y a los desafíos del cambio climático[180].

xi. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

Los pescadores tradicionales, por ejemplo, poseen información estratégica que puede ayudar a responder a los problemas de biodiversidad marina. Han desarrollado un profundo conocimiento de la ecología pesquera, de los comportamientos, las migraciones y los hábitats. Gracias a ello la pesquería y las prácticas pesqueras se han adaptado a las estaciones. Este conocimiento, sumamente detallado, diverso y dinámico, puede complementar la investigación científica sobre conservación y recuperación de la biodiversidad marina.

Por esto, los Estados Partes deben garantizar el reconocimiento, el respeto, el aprovechamiento compartido y la valorización de los conocimientos y usos relacionados con naturaleza y el universo que las comunidades, grupos y sus individuos reconocen como parte integrante de su PCI y que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, reconociendo su capacidad de evolucionar y aprovechando la función que pueden desempeñar en la protección de la diversidad biológica y en la gestión sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, cada uno de los Estados Partes también debe reconocer que las comunidades, grupos e individuos son depositarios de conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo y protagonistas esenciales de la preservación del medioambiente; y adoptar todo tipo de medidas adecuadas para fomentar el acceso a los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo y su transmisión, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a

[180] UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial*..., pág. 6.

determinados aspectos de esos conocimientos y conservar y proteger los espacios naturales cuya existencia es necesaria para las expresiones del PCI.

xii. Impactos medioambientales en la salvaguardia del PCI.

Los Estados Partes deben esforzarse por reconocer los impactos medioambientales potenciales y reales de la práctica del PCI y las actividades de salvaguardia, prestando especial atención a las posibles consecuencias de su intensificación. Para ello, se alienta a los Estados Partes a promover estudios científicos y métodos de investigación que tengan por finalidad comprender esos impactos; y adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para fomentar las prácticas de elementos del PCI que respetan el medioambiente y atenuar cualquier impacto negativo que esas prácticas pudieran ocasionar.

xiii. Resiliencia de las comunidades frente a los desastres naturales y el cambio climático.

Las comunidades autóctonas, que a menudo viven en entornos hostiles y vulnerables, son las primeras en sufrir los efectos del cambio climático y las amenazas naturales. Por esto, los Estados Partes necesitan garantizar el reconocimiento, el respeto y la valorización de los conocimientos y prácticas que guardan relación con las geociencias, y más concretamente con el clima, y también deberán esforzarse por aprovechar su potencial para contribuir a la reducción de riesgos de desastres naturales y a la recuperación posterior a éstos, en particular fortaleciendo la cohesión social y atenuando los impactos del cambio climático.

xiv. PCI y paz.

La paz y la seguridad –incluidas la ausencia de conflictos, de discriminación y de cualquier forma de violencia– son requisitos indispensables para el desarrollo sostenible. Satisfacer estos requisitos exige respeto de los derechos humanos, sistemas de justicia eficaces, procesos políticos inclusivos y sistemas adecuados de prevención y resolución de conflictos.

La paz y la seguridad también dependen de un acceso justo y el control de los recursos naturales por los pueblos autóctonos, así como de garantizarles el derecho a la tenencia de la tierra y los derechos sin ningún tipo de discriminación o exclusión. El establecimiento y la construcción de la paz están en el centro de varias prácticas, representaciones y expresiones del PCI, y promueven el diálogo y la comprensión mutua[181].

La salvaguardia del PCI contribuye a propiciar el establecimiento de sociedades pacíficas, justas e inclusivas basadas en el respeto de los derechos humanos (comprendido el derecho al desarrollo) y liberadas del temor y la violencia.

Los Estados Partes deben reconocer, promover y valorizar las prácticas, representaciones y expresiones del PCI que se centran en la pacificación y la consolidación de la paz, que unen a las comunidades, grupos e individuos, y que garantizan los intercambios, el diálogo y el entendimiento recíprocos. También deben esforzarse por reconocer plenamente la aportación de las actividades de salvaguardia a la construcción de la paz.

Sin paz y seguridad no hay desarrollo sostenible verdadero, y sin desarrollo sostenible la paz y la seguridad peligran.

xv. Cohesión social y equidad.

Los Estados Partes deben hacer esfuerzos por reconocer y promover la aportación de la salvaguardia del PCI a la cohesión social, luchando contra todo tipo de discriminación y fortaleciendo de forma inclusiva el tejido social de las comunidades y grupos. Para ello, se alienta a los Estados Partes a prestar especial atención a las prácticas, expresiones y conocimientos que ayudan a las comunidades, grupos e individuos a superar y abordar las diferencias de género, color, etnia, origen, clase y procedencia geográfica, y que incluyen ampliamente a todos los sectores y estratos de la sociedad, comprendidos los pueblos indígenas, emigrantes,

[181] La Carta del Mandén de Malí (la constitución del imperio de Malí), institucionalizada por Soundiata Keita en 1236, es un ejemplo. Esta carta magna de derechos humanos, una de las primeras del mundo, defiende valores como la paz social en la diversidad, la inviolabilidad del ser humano, la abolición de la esclavitud por razzias y la liberta de expresión y de comercio. Transmitida oralmente desde su creación, las palabras de la Carta y los rituales asociados son apreciados por el pueblo malinke. Las ceremonias anuales conmemorativas de la asamblea histórica se organizan en la aldea maliense de Kangaba por autoridades locales y nacionales y, en particular, las autoridades tradicionales, que ven la Carta como una fuente de derecho y un mensaje de amor, paz y fraternidad.

inmigrantes, refugiados, personas de diferentes edades y género, personas discapacitadas y miembros de grupos vulnerables.

xvi. Prevención de litigios y solución de conflictos.

Los Estados Partes deben reconocer, promover y valorizar la aportación del PCI a la prevención de litigios y la solución pacífica de conflictos. Para ello, se alienta a los Estados Partes a promover estudios científicos y métodos de investigación que tengan por finalidad mostrar que las expresiones, prácticas y representaciones del PCI pueden contribuir a prevenir litigios y solucionar conflictos pacíficamente[182]; promover la adopción de medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras para apoyar esas expresiones, prácticas y representaciones; integrarlas en políticas y programas públicos; reducir su vulnerabilidad durante los conflictos y después de éstos; y considerarlas como complementos de otros mecanismos jurídicos y administrativos de prevención de litigios y solución pacífica de conflictos.

xvii. Restablecimiento de la paz y la seguridad.

Los rituales de paz y reconciliación, por ejemplo, tienen el poder social de restablecer la paz entre dos partes, ya sean individuos, familias o comunidades. Los rituales de paz se pueden usar de forma simbólica para comunicar un compromiso de no violencia y para transformar relaciones. Ayudan a las personas a relacionarse entre ellas y les permite superar malentendidos, rivalidades, odio y violencia.

Los Estados Partes por esto deben sacar el máximo partido del papel potencial del PCI en la restauración de la paz, la reconciliación entre las partes en

[182] Por ejemplo, los agricultores de las regiones semiáridas españolas de Murcia y Valencia acuden a tribunales comunitarios para resolver disputas sobre la distribución de agua y la gestión de los sistemas de riego, esenciales para cultivar la verdura, la fruta y las flores por las que estas regiones son tan famosas. El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de Valencia se reúnen para emitir veredictos conocidos por ser equitativos y sabios, y con la validez legal de cualquier otra jurisdicción civil. Los miembros del tribunal son agricultores, elegidos democráticamente o por sorteo, que se basan en sus conocimientos de agricultura, riego y costumbres locales para arbitrar entre las pretensiones en conflicto. La viabilidad duradera de estas prácticas sociales de PCI es fundamental en la capacidad de las comunidades para mantener la paz y la seguridad mediante la prevención y la resolución de conflictos de una forma inclusiva que es aceptada por las personas afectadas. UNESCO, *Patrimonio cultural inmaterial*..., pág. 12.

conflicto, el restablecimiento de la seguridad y la recuperación de las comunidades, grupos e individuos.

xviii. El logro de una paz duradera.

Cuando son inclusivas, las actividades de salvaguardia del PCI son una poderosa palanca para unir a las comunidades, grupos e individuos, incluidos los pueblos autóctonos, migrantes, inmigrantes, refugiados, personas de diferentes edades, personas con discapacidades e integrantes de grupos marginados.

Los Estados Partes deben esforzarse por reconocer, promover y valorizar la contribución de la salvaguardia del PCI de las comunidades, grupos e individuos a la construcción de una paz duradera. Para ello, se alienta a los Estados Partes a sacar el máximo partido de la contribución de la salvaguardia de ese patrimonio a la gobernanza democrática y la defensa de los derechos humanos, garantizando la mayor participación posible de las comunidades, grupos e individuos; y promover el potencial de consolidación de la paz entrañado por la labor de salvaguardia que integra el diálogo intercultural y el respeto de la diversidad cultural.

- **Salvaguardia del PCI en el plano internacional.**

Siguiendo un esquema similar al que siguió la *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural*, la *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* estableció un sistema de dos listas para hacer visible el PCI: la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

i. Lista representativa del PCI de la humanidad.

Se trata de una lista que creó el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a propuesta de los Estados Partes interesados, y que debe mantener actualizada y hacer pública. El objetivo de esta lista es dar a conocer mejor el PCI, lograr que se tome mayor conciencia de su

importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural (art. 16.1).

Para incorporar un elemento en esta lista, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos conforme las Directrices Operativas:

a).- El elemento debe ser PCI, en el sentido del art. 2 de la Convención;

b).- La inscripción del elemento debe contribuir a dar a conocer el PCI, a logar que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana;

c).- Se elaboren medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento;

d).- Que el elemento sea propuesto para inscripción tras haber logrado la participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e informado;

e).- Que el elemento figura en un inventario del PCI presente en el territorio del Estado Parte solicitante.

La Convención estableció en su art. 31 una cláusula transitoria en virtud de la cual el Comité debía incorporar a la Lista representativa del PCI de la humanidad los elementos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención, hubieran sido proclamados "*obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad*[183]".

ii. Lista del PCI que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

La Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia se compone de elementos del PCI que las comunidades y los Estados Partes consideran que necesitan medidas de salvaguardia urgentes para asegurar su trasmisión. Las inscripciones en esta Lista contribuyen a movilizar la cooperación y la asistencia internacionales para que los actores interesados puedan tomar medidas de salvaguardia adecuadas.

[183] La lista de *"obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad"* comenzó en 2001 con un conjunto de 19 obras a la que luego se añadieron otras 28 en 2003. El 25 de noviembre de 2005 se emitió una lista agregando otras 43 obras, haciendo un total de 90. Este programa se concluyó en 2006 con la entrada en vigor de la Convención que se analiza. UNESCO.

Al respecto, la Convención dice que, al igual que la anterior, la elaboración de esta lista también está a cargo del Comité, que debe inscribir, a instancia del Estado Parte interesado, el PCI que requiera la adopción de medidas oportunas de salvaguardia. También el Comité debe mantener al día y hacer pública esta lista (art. 17.1).

Los criterios para la inscripción en esta Lista, que el Comité ha elaborado y que requiere la aprobación de la Asamblea (art. 17.2), son los siguientes (conforme las Directrices Operativas):

a).- Que el elemento sea PCI, en el sentido del art. 2 de la Convención.

b).- Que el elemento requiera medidas urgentes de salvaguardia porque su viabilidad corre peligro a pesar de los esfuerzos de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos y Estados Partes interesados.

c).- Que el elemento requiera medidas de salvaguardia de extrema urgencia porque se enfrenta a graves amenazas debido a las cuales no cabe esperar que subsista sin las correspondientes medidas inmediatas de salvaguardia.

d).- Que se elabore un plan de salvaguardia que podría permitir a la comunidad, el grupo o, si procede, las personas en cuestión seguir practicando y transmitiendo el elemento.

e).- Que el elemento haya sido propuesto para inscripción tras haber logrado la participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e informado.

f).- Que el elemento figure en un inventario del PCI presente en el territorio del Estado Parte solicitante, en el sentido de los arts. 11 y 12 de la Convención.

g).- Que, en casos de extrema urgencia, se haya consultado al Estado Parte interesado acerca de la inscripción del elemento con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del art. 17 de la Convención.

iii. Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del PCI.

Conforme el art. 18 de la Convención, basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, el Comité selecciona periódicamente y promueve los programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio que a su entender reflejan del modo más adecuado los principios y objetivos de la Convención, teniendo en cuenta las

necesidades particulares de los países en desarrollo y al principio de distribución geográfica equitativa, impulsando al mismo tiempo la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur.

El Comité debe secundar la ejecución de los mencionados programas, proyectos y actividades mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades que haya determinado.

Conforme las Directrices Operativas, los criterios de selección de los programas, proyectos y actividades propuestos son los siguientes:

a).- El programa, proyecto o actividad debe suponer una salvaguardia tal como se define en el párrafo 3 del art. 2 de la Convención.

b).- El programa, proyecto o actividad debe promover la coordinación de los esfuerzos encaminados a salvaguardar el PCI en el ámbito regional, subregional y/o internacional.

c).- El programa, proyecto o actividad debe reflejar los principios y objetivos de la Convención.

d).- El programa, proyecto o actividad debe haber demostrado ser eficaz para contribuir a la viabilidad del PCI de que se trate.

e).- El programa, proyecto o actividad debe ser o haber sido ejecutado con la participación de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e informado.

f).- Que el programa, proyecto o actividad pueda servir de modelo subregional, regional o internacional, según el caso, para las actividades de salvaguardia.

g).- Que el Estado Parte solicitante, el organismo encargado de la ejecución, y la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados estén dispuestos a cooperar en la difusión de prácticas ejemplares, si se selecciona su programa, proyecto o actividad.

h).- En el programa, proyecto o actividad se proponen experiencias cuyos resultados podrían ser objeto de evaluación.

i).- El programa, proyecto o actividad responde principalmente a las necesidades particulares de los países en desarrollo.

El Comité ha elaborado un registro de los programas, proyectos y actividades seleccionadas, llamado Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia, reuniendo y

poniendo a disposición información sobre las medidas y metodología utilizadas y la experiencia adquirida, en caso de haberla.

iv. **Traspaso de un elemento de una Lista a la otra o supresión de un elemento de una de ellas. Modificación del nombre de un elemento inscripto.**

Según las Directrices Operativas, ningún elemento puede estar inscripto simultáneamente en la Lista del patrimonio que requiere medidas urgentes de salvaguardia y en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un Estado Parte puede pedir que se traspase un elemento de una Lista a la otra.

El Comité puede suprimir un elemento de la Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia cuando, tras evaluar la aplicación del plan de salvaguardia, determine que el elemento ha dejado de reunir uno o varios de los criterios exigidos para la inscripción en dicha Lista.

En igual sentido, se puede suprimir un elemento de la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad cuando el Comité determine que el mismo ha dejado de reunir uno o varios de los criterios exigidos para su inscripción en ella. También uno o más Estados Partes pueden pedir que se modifique la denominación con la que está inscripto un elemento.

- **Cooperación y asistencia internacionales.**

A fin de alcanzar sus objetivos con más eficiencia, la Convención establece mecanismos de cooperación y asistencia internacional, en particular por conducto del Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial. Según lo dispuesto en el Capítulo I de las Directrices Operativas, en la asignación de fondos se concede especial prioridad a la salvaguardia del patrimonio que figura en la Lista de Salvaguardia Urgente y a la confección de inventarios. El Fondo sirve también para prestar asistencia urgente, o para que puedan participar en las reuniones del Comité miembros de las comunidades o grupos y expertos en PCI.

Se alienta a los Estados Partes a aportar contribuciones voluntarias al Fondo, además de sus contribuciones ordinarias. Las contribuciones extrapresupuestarias de

diversas fuentes de financiación aumentan la capacidad de la UNESCO para concebir y ejecutar nuevas actividades y programas, así como para reforzar y ampliar los ya existentes.

i. Cooperación.

Según el art. 19 de la Convención, y a sus efectos, la cooperación internacional comprende en particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, y la creación de un mecanismo para ayudar a los Estados Partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el PCI.

Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del PCI es una cuestión de interés general para la humanidad y se comprometen, con tal objetivo, a cooperar en el plano bilateral, subregional, regional e internacional.

ii. Objetivos de la asistencia internacional.

La Convención establece (art. 20) en forma enunciativa y no taxativa que la asistencia internacional puede otorgarse con los siguientes objetivos:

a).- salvaguardar el patrimonio que figure en la lista de elementos del PCI que requieren medidas urgentes de salvaguardia;

b).- confeccionar inventarios en el sentido de los arts. 11 y 12;

c).- prestar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional y regional destinados a salvaguardar el PCI;

d).- cualquier otro objetivo que el Comité juzgue oportuno.

iii. Formas de asistencia internacional.

La asistencia que el Comité otorgue a un Estado Parte se rige por las Directrices Operativas y por el acuerdo mencionado en el art. 24, y puede revestir las siguientes formas (art. 21):

a).- estudios relativos a los diferentes aspectos de la salvaguardia;

b).- servicios de expertos y otras personas con experiencia práctica en PCI;

c).- formación de todo el personal necesario;

d).- elaboración de medidas normativas o de otra índole;

e).- creación y utilización de infraestructuras;

f).- aporte de material y de conocimientos especializados;

g).- otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede, la concesión de préstamos a interés reducido y las donaciones.

iv. Solicitudes y requisitos para la prestación de asistencia internacional.

Cada Estado Parte, o dos o más Estados Parte en conjunto, puede presentar al Comité una solicitud de asistencia internacional para la salvaguardia del PCI presente en su territorio (art. 23), pudiendo el Comité recibir, examinar y aprobar solicitudes relativas a cualquiera de los objetivos y formas de asistencia internacional.

De acuerdo a las Directrices Operativas, al examinar las solicitudes de asistencia internacional, el Comité debe tener en cuenta el principio de distribución geográfica equitativa y las necesidades especiales de los países en desarrollo. El Comité puede igualmente tener en cuenta:

a).- Si la solicitud implica una cooperación en el ámbito bilateral, regional o internacional;

b).- Si la asistencia puede tener un efecto multiplicador y fomentar contribuciones financieras y técnicas procedentes de otras fuentes.

La asistencia internacional que se define en los arts. 20 y 21 de la Convención puede concederse en situaciones de urgencia, tal como se indica en el art. 22 de ese instrumento (asistencia urgente). En tales casos, el Comité debe examinar con carácter prioritario la solicitud de asistencia. Las solicitudes urgentes de cualquier monto serán examinadas y aprobadas por la Mesa del Comité. Con objeto de determinar si una solicitud de asistencia internacional constituye una solicitud urgente que debe examinar prioritariamente la Mesa, se considerará que existe urgencia cuando un Estado Parte se halle en la incapacidad de superar por sí solo una situación ocasionada por una catástrofe, un desastre natural, un conflicto armado, una epidemia grave o cualquier otro fenómeno natural o provocado por el hombre que tengan graves consecuencias para el PCI, así como para las comunidades, grupos y, si procede, individuos depositarios de dicho patrimonio (Directrices Operativas I.14.50).

El Comité basará sus decisiones sobre la concesión de asistencia en los siguientes criterios:

a).- Si la comunidad, el grupo y/o los individuos interesados participaron en la preparación de la solicitud e intervendrán de la forma más amplia posible en la ejecución de las actividades propuestas, así como en su evaluación y seguimiento.

b).- Si el monto de la asistencia solicitada es adecuado.

c).- Si las actividades propuestas están bien concebidas y son realizables.

d).- Si el proyecto podría tener resultados duraderos.

e).- Si el Estado Parte beneficiario contribuye a sufragar los costos de las actividades para las que se otorga la asistencia internacional, en la medida en que lo permitan sus medios.

f).- Si la asistencia tiene por objeto crear o aumentar capacidades en el ámbito de la salvaguardia del PCI.

g).- Si el Estado Parte beneficiario ha llevado a cabo anteriormente algunas actividades financiadas, de conformidad con todos los reglamentos y las condiciones aplicables al caso.

El Comité ha definido el procedimiento para examinar las solicitudes de asistencia internacional y determina los elementos que deberán constar en ellas, tales como las medidas previstas, las intervenciones necesarias y la evaluación del costo, todo ello conforme a la disposición contenida en el art. 22.

La Secretaría debe comunicar la decisión relativa a la concesión de asistencia a la parte solicitante en un plazo de dos semanas contado a partir de la fecha de adopción de esa decisión. La Secretaría establecerá de común acuerdo con la parte solicitante las modalidades de la asistencia, la que será objeto de una actividad de seguimiento, una rendición de informes y una evaluación adecuadas (directrices operativas I.14.52 y 53).

v. Papel de los Estados Partes beneficiarios.

La asistencia internacional que se conceda se rige por un acuerdo entre el Estado Parte beneficiario y el Comité. El primero deberá contribuir, en la medida en que lo permitan sus medios, a sufragar las medidas de salvaguardia para las que se otorga la asistencia internacional.

Tal cual se expuso en el punto anterior, el Estado Parte beneficiario debe presentar al Comité un informe sobre la utilización de la asistencia que se le haya concedido con fines de salvaguardia del PCI (art. 24).

- **Fondo para la salvaguardia del PCI.**

La Convención establece un "*Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*" al que denomina "el Fondo" y está constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones del reglamento financiero de la UNESCO. Habida cuenta de que el Fondo es alimentado por múltiples donantes, se administra como una Cuenta Especial (art. 1 del Reglamento Financiero de la Cuenta Especial del Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial).

¿Cuáles son los recursos de los que se compone ese fondo? La Convención dice en su art. 25 y el Reglamento Financiero de la Cuenta Especial del Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su art. 4, que son los siguientes:

a).- las contribuciones de los Estados Partes;

b).- los recursos que la Conferencia General de la UNESCO destine a tal fin;

c).- los aportes, donaciones o legados que puedan hacer otros Estados; organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en especial el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otras organizaciones internacionales; y organismos públicos o privados o personas humanas;

d).- todo interés devengado por los recursos del Fondo;

e).- el producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas en provecho del Fondo;

f).- todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo elaborado por el Comité.

¿Cómo se utilizan esos recursos por el Comité? De acuerdo a las orientaciones que formule al respecto la Asamblea General. Las Directrices Operativas (II.1) establecen que los recursos del fondo se deben utilizar, principalmente, para prestar asistencia internacional. Sin perjuicio de ello, también pueden utilizarse esos recursos para:

a).- reaprovisionar el Fondo de Reserva mencionado en el art. 6 del Reglamento Financiero y que, según este artículo, sirve para atender las solicitudes de asistencia en casos de extrema urgencia;

b).- respaldar las demás funciones del Comité definidas en el art. 7 de la Convención, comprendidas las relativas a las propuestas mencionadas en el art. 18 de la misma;

c).- sufragar los gastos de participación de representantes de Estados en desarrollo miembros del Comité en las reuniones de éste, siempre y cuando sean expertos en PCI; y si el presupuesto lo permitiera, sufragar también en determinados casos los gastos de participación de expertos en este tipo de patrimonio de países en desarrollo que sean Partes en la Convención, pero no miembros del Comité;

d).- sufragar los costos de los servicios consultivos que pudieran prestar, a petición del Comité, organizaciones no gubernamentales, entidades sin fines de lucro, organismos públicos o privados y personas particulares; y

e).- sufragar los gastos de participación de organismos públicos o privados y de personas particulares, especialmente miembros de comunidades y grupos que el Comité haya invitado a sus reuniones para consultarles sobre asuntos específicos.

El Comité puede aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca con fines generales o específicos, ligados a proyectos concretos, siempre y cuando esos proyectos cuenten con su aprobación.

Lo que sí aclara la Convención es que las contribuciones al Fondo no pueden estar supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos perseguidos por la Convención (art. 25.6 y Directrices Operativas II.2.72), como así tampoco con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes, los imperativos del desarrollo sostenible o las exigencias de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos. La Secretaría puede decidir que se sometan al examen del Comité casos específicos de contribuciones (Directrices Operativas II.2.2.73).

i. Contribuciones de los Estados Partes al Fondo.

Sin perjuicio de cualquier otra contribución complementaria de carácter voluntario, los Estados Partes en la Convención están obligados –de acuerdo a lo ordenado en el art. 26- a ingresar en el Fondo, cada dos años por lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir de un porcentaje uniforme aplicable a todos los Estados, será determinada por la Asamblea General.

Para que ésta pueda adoptar tal decisión se requiere una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan declarado, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que no se consideran obligados por la disposición mencionada en el párrafo anterior y que contempla la contribución complementaria voluntaria. El importe de esa contribución no puede exceder en ningún caso del 1% de la contribución del Estado Parte al presupuesto ordinario de la UNESCO.

Todo Estado Parte en la Convención que haya formulado la declaración anteriormente mencionada, debe hacer lo posible por retirarla mediante una notificación al Director General de la UNESCO. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración sólo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho Estado a partir de la fecha en que dé comienzo la siguiente reunión de la Asamblea General.

Lo que aclara la Convención es que ningún Estado Parte que esté atrasado en el pago de su contribución obligatoria o voluntaria para el año en curso y el año inmediatamente anterior podrá ser elegido miembro del Comité. El mandato de un Estado Parte que se encuentre en tal situación y que ya sea miembro del Comité finalizará en el momento en que tengan lugar las elecciones previstas en el art. 6 de la Convención.

ii. Campañas internacionales de recaudación de fondos.

En la medida de lo posible, los Estados Partes deben prestar su concurso a las campañas internacionales de recaudación que se organicen en provecho del Fondo bajo los auspicios de la UNESCO (art. 28 y Directrices Operativas II.2.71).

Asimismo, se alienta a los Estados Partes a contemplar la posibilidad de otorgar un reconocimiento a los donantes privados de contribuciones voluntarias al Fondo mediante mecanismos fiscales que inciten a efectuar ese tipo de contribuciones, por ejemplo reducciones de impuestos u otras clases de instrumentos de políticas públicas previstos en las legislaciones nacionales (Directrices Operativas II.2.3.78).

- **Presentación de Informes.**

i. Informes de los Estados Partes al Comité.

Los Estados Partes tienen la obligación de presentar al Comité informes periódicos sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado en el plano nacional para aplicar la Convención (art. 29), en particular, y conforme las Directrices Operativas[184], sobre:

a).- la confección de inventarios del PCI presente en su territorio;

b).- las otras medidas de salvaguardia indicadas en los arts. 11 y 13 de la Convención;

c).- fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de salvaguardia del PCI, tal como se indica en el art. 13 de la Convención;

d).- para garantizar un mayor reconocimiento, respeto y valorización del PCI, comprendiendo las indicadas en el art. 14 de la Convención.

A su vez, el Estado Parte debe informar acerca de las disposiciones que haya adoptado en los planos bilateral, subregional, regional e internacional para aplicar la Convención, comprendidas las medidas de cooperación internacional como el intercambio de información y de experiencias, así como las otras iniciativas comunes a las que se hace referencia en el art. 19 de la Convención.

El Estado Parte también debe informar acerca del estado actual de todos los elementos del PCI presentes en su territorio que estén inscritos en la Lista representativa del PCI de la Humanidad, prestando especial atención a la función del género y velará por lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, grupos y, si procede, individuos interesados y de las organizaciones no gubernamentales pertinentes en el proceso de preparación de los informes, en los que se indicarán para cada elemento:

a).- sus funciones sociales y culturales;

b).- una evaluación de su viabilidad y de los riesgos que corre actualmente, si los hubiere;

c).- su contribución a los objetivos de la Lista representativa del PCI de la Humanidad;

d).- la labor realizada para promover o reforzar el elemento, en particular la aplicación de todas las medidas que pueda haber sido necesario adoptar como consecuencia de su inscripción en la Lista representativa del PCI de la Humanidad; y

[184] Capítulo V.

e).- la participación de las comunidades, grupos, individuos y organizaciones no gubernamentales pertinentes en la salvaguardia del elemento, así como la persistencia de su voluntad de seguir salvaguardándolo.

Otra obligación de los Estados Partes es informar sobre el contexto institucional del elemento inscrito en la Lista representativa del PCI de la Humanidad, en particular sobre:

a).- el organismo competente que participa en su gestión y/o salvaguardia; y

b).- la organización de la comunidad o el grupo a las que conciernen el elemento y su salvaguardia.

También las Directrices Operativas disponen que los Estados Partes tienen el deber de responder a su debido tiempo a las peticiones concretas de información complementaria que les remita el Comité, si fuere necesario e independientemente del ciclo regional establecido por el Comité, conforme lo ya explicado.

¿Cuándo deben presentarse los informes? De acuerdo a lo previsto por las Directrices Operativas, los Estados Partes deben presentar sus informes periódicos al Comité a más tardar el 15 de diciembre cada seis años con base en una rotación región por región. El orden de dicha rotación es establecido por el Comité al principio del ciclo de seis años de presentación de informes periódicos. Los Estados Partes utilizarán el proceso de presentación de informes periódicos para fomentar las medidas de seguimiento, así como la cooperación y el intercambio activo a nivel regional, con el fin de asegurar una salvaguardia eficaz del PCI (Directrices Operativas V.1.152).

ii. Informes de los Estados Partes sobre los elementos inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

Cada Estado Parte debe presentar al Comité informes sobre el estado de los elementos del PCI presentes en su territorio que hayan sido inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia a petición suya o, en casos de extrema urgencia, tras consulta con el Comité. El Estado Parte se debe esforzar por hacer participar del modo más amplio posible en el proceso de elaboración de esos informes a las comunidades, grupos y, si procede,

individuos interesados, así como a las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

¿Cuándo se deben presentar estos informes al Comité? Normalmente a más tardar el 15 de diciembre del cuarto año siguiente a aquél en que se haya inscrito el elemento y luego cada cuatrienio. En el momento de la inscripción, el Comité podrá establecer, caso por caso, un calendario específico para la presentación de informes que prevalecerá sobre el ciclo cuatrienal normal.

El Estado Parte debe prestar especial atención a la función del género e informará acerca del estado actual del elemento, en particular sobre:

a).- sus funciones sociales y culturales;

b).- una evaluación de su viabilidad y de los riesgos que corre actualmente;

c).- las repercusiones de la labor realizada para salvaguardar el elemento, en particular las de la aplicación del plan de salvaguardia sometido en el momento de presentación de su candidatura a la inscripción;

d).- información actualizada sobre el plan de salvaguardia que se incluyó en el expediente de candidatura o en el informe anterior;

e).- la participación de comunidades, grupos, individuos y organizaciones no gubernamentales pertinentes en la salvaguardia del elemento, así como la persistencia de su voluntad de seguir salvaguardándolo.

El Estado Parte informará sobre el contexto institucional en el que se lleva a cabo la salvaguardia del elemento inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, en particular sobre:

a).- el organismo competente que participa en su salvaguardia; y

b).- la organización de la comunidad o el grupo a las que conciernen el elemento y su salvaguardia.

Los Estados Partes deben responder a su debido tiempo a las peticiones concretas de información complementaria que les remita el Comité.

iii. Informes del Comité.

De acuerdo a lo previsto en el art. 30 de la Convención, y basándose en sus actividades y en los informes de los Estados Partes ya mencionados, el Comité debe presentar un informe en cada reunión de la Asamblea General quien, a su vez, debe poner ese informe en conocimiento de la Conferencia General de la UNESCO.

d).- Utilización del emblema de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial[185].

El emblema o logotipo de la Convención, utilizado como sello oficial, no puede utilizarse solo, sino que siempre debe ir acompañado por el de la UNESCO y no se puede utilizar por separado, quedando entendido que cada uno de ellos se rige por un conjunto de normas distinto y que toda utilización debe haberse autorizado de conformidad con cada uno de esos conjuntos de normas respectivos.

La gráfica de este instrumento normativo entonces es la siguiente:



- **Normas respectivamente aplicables a la utilización del emblema de la UNESCO y del emblema de la Convención**.

Las disposiciones de las Directrices Operativas se aplican solamente a la utilización del emblema de la Convención, ya que la utilización del de la UNESCO que acompaña al logotipo de la Convención se rige por las *Directrices relativas a la utilización del nombre, el acrónimo, el logotipo y los nombres de dominio de Internet de la UNESCO*.

- **Derechos de utilización.**

Solamente la Asamblea General de los Estados Partes y el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI así como la Secretaría, tienen derecho a utilizar el símbolo de la Convención sin autorización previa.

---

[185] Conforme el capítulo IV de las Directrices Operativas.

- **Autorización del uso.**

Autorizar la utilización del emblema de la Convención es una prerrogativa de los órganos reglamentarios de la Convención, esto es, la Asamblea General y el Comité, quienes autorizan su uso mediante resoluciones y decisiones. En casos concretos, estos órganos reglamentarios pueden facultar por delegación al Director General para que autorice a otros organismos a utilizarlo[186]. El derecho a autorizar la utilización del emblema de la Convención no se puede conceder a ningún otro organismo.

A petición de un Estado Parte interesado, la Asamblea General y el Comité pueden autorizar a la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO u otra autoridad debidamente designada de dicho Estado a usar el símbolo, así como a ocuparse de cuestiones relacionadas con la utilización del logotipo en el plano nacional.

Toda decisión por la que se autorice su uso debe basarse en los siguientes criterios:

a).- pertinencia de la utilización propuesta con respecto a las finalidades y objetivos de la Convención; y

b).- conformidad de la misma con los principios de la Convención.

- **Criterios y condiciones de utilización del emblema a efectos de un patrocinio.**

La utilización del logotipo a efectos de un patrocinio se puede autorizar para distintos tipos de actividades (espectáculos, obras cinematográficas, producciones audiovisuales, publicaciones, congresos, reuniones, conferencias, adjudicaciones de premios y otros eventos públicos nacionales e internacionales), así como para trabajos representativos del PCI.

[186] El Director General está habilitado para autorizar su utilización en casos de patrocinios, acuerdos contractuales, asociaciones y actividades específicas de promoción. También puede el Director decidir que se sometan casos específicos de autorización a los órganos reglamentarios de la Convención.

La Secretaría ha fijado el procedimiento que se debe seguir para solicitar su utilización a efectos de un patrocinio, de conformidad con los siguientes criterios y condiciones:

a) Criterios:

i) **Repercusión:** la utilización se puede autorizar para actividades excepcionales susceptibles de tener un impacto real en la salvaguardia del PCI y de mejorar significativamente la notoriedad de la Convención.

ii) **Fiabilidad:** se tendrán que obtener garantías suficientes en lo que respecta a las personas responsables (experiencia y reputación profesionales, referencias y recomendaciones, y garantías jurídicas y financieras) y las actividades previstas (viabilidad política, jurídica, financiera y técnica).

b) Condiciones:

i) La utilización del emblema de la Convención a efectos de un patrocinio se tendrá que solicitar a la Secretaría y la autorización para utilizar el emblema de la Convención a efectos de un patrocinio se concederá por escrito y será de la exclusiva incumbencia del Director General.

ii) Cuando se trate de actividades nacionales, la decisión de autorizar su uso a efectos de un patrocinio se adoptará sobre la base de consultas obligatorias con el Estado Parte en cuyo territorio se realice la actividad correspondiente.

iii) La Convención tendrá que beneficiarse de un grado de notoriedad adecuado.

iv) Su utilización a efectos de un patrocinio se puede autorizar para actividades ocasionales o actividades que se realicen regularmente. En este último caso, se deberá determinar la duración de la autorización y renovarla periódicamente.

- **Normas gráficas.**

El emblema de la Convención se debe reproducir de conformidad con las normas gráficas precisas elaboradas por la Secretaría y publicadas en el sitio web de la Convención, y no se deberá alterar.

- **Protección.**

Habida cuenta de que el emblema de la Convención ha sido notificado y aceptado por los Estados miembros de la Unión de París en virtud del art. 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883 y revisado en Estocolmo en 1967, la UNESCO puede recurrir a los sistemas nacionales de los Estados miembros de dicho convenio para impedir cualquier uso abusivo o no autorizado.

En determinados casos concretos, la Asamblea General y el Comité pueden pedir al Director General que controle su utilización adecuada y, si procede, que incoe un procedimiento en caso de que éste se utilice abusivamente, incumbiendo también a este promover un procedimiento en caso de que se utilice sin autorización el emblema de la Convención en el plano internacional. En el plano nacional esta responsabilidad incumbirá a las autoridades nacionales competentes.

e).- Principios éticos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Fueron aprobados por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su 10ª reunión, celebrada del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 en Windhoek (Namibia) y han sido elaborados inspirándose en el espíritu de la Convención del 2003, así como en los instrumentos normativos internacionales que protegen los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Representan un conjunto de ambiciosos principios fundamentales que atañen directa o indirectamente al PCI con vistas a garantizar su viabilidad y que reconocen, por ende, su contribución a la paz y el desarrollo sostenible.

Al complementar la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, así como las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención y los marcos legislativos nacionales, estos Principios Éticos pretenden servir de base para la elaboración de instrumentos y códigos éticos específicos, susceptibles de adaptarse a diferentes situaciones locales y sectoriales.

Los Principios son los siguientes:

1).- Las comunidades, grupos y, si procede, individuos deberán ser los que desempeñen la función primordial en la salvaguardia de su propio PCI.

2).- Se deberá respetar y reconocer el derecho de las comunidades, grupos y, si procede, individuos a seguir ejerciendo las prácticas, representaciones,

expresiones, competencias especializadas y conocimientos que se necesitan para garantizar la viabilidad del PCI.

3).- En las interacciones de los Estados, así como en las de las comunidades, grupos y, si procede, individuos, deberán prevalecer tanto el respeto mutuo entre todos ellos como el respeto y aprecio recíprocos por su PCI respectivo.

4).- Toda interacción con comunidades, grupos y, si procede, individuos que crean, salvaguardan, mantienen y transmiten el PCI deberá caracterizarse por la transparencia en la colaboración, el diálogo, la negociación y las consultas que se lleven a cabo, y estará supeditada a su consentimiento libre, previo, continuo e informado.

5).- Se deberá garantizar, incluso en casos de conflicto armado, el acceso de las comunidades, grupos e individuos a los instrumentos, objetos, artefactos, lugares de memoria y espacios culturales y naturales cuya existencia sea necesaria para expresar el PCI. Se deberán respetar plenamente los usos consuetudinarios que rigen el acceso a ese patrimonio, incluso cuando restrinjan dicho acceso al público en general.

6).- Cada comunidad, grupo o individuo deberá evaluar el valor de su propio PCI, que además no tendrá que ser objeto de juicios externos sobre su valor o mérito.

7).- Las comunidades, grupos e individuos que crean el PCI deberán beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de éste, y más concretamente de los que se deriven de su utilización, así como de las actividades de investigación, documentación, promoción o adaptación realizadas por miembros de las comunidades u otros.

8).- Se deberá respetar continuamente la naturaleza dinámica y viva del PCI. La autenticidad y exclusividad del PCI no deberán constituir motivos de preocupación ni obstáculos para su salvaguardia.

9).- Las comunidades, los grupos, los individuos y las organizaciones locales, nacionales y transnacionales deberán evaluar cuidadosamente el impacto directo e indirecto, a largo y corto plazo, potencial y definitivo de toda acción que pueda afectar a la viabilidad del PCI o de las comunidades que lo practican.

10).- Las comunidades, grupos y, si procede, individuos deberán desempeñar un papel importante no sólo en la identificación de todos los factores que constituyen amenazas para su PCI –en particular su descontextualización, mercantilización y

falsificación– sino también en la adopción de decisiones sobre la manera de prevenir y atenuar esos peligros.

11).- Se deberán respetar plenamente la diversidad cultural y las identidades de las comunidades, grupos e individuos. En lo referente a los valores admitidos por las comunidades, grupos e individuos y a la sensibilidad a las normas culturales, la concepción y aplicación de medidas de salvaguardia deberán incluir elementos que presten una especial atención a la igualdad de género, la participación de los jóvenes y el respeto por las identidades étnicas.

12).- La salvaguardia del PCI es una cuestión de interés general para la humanidad y, por lo tanto, se deberá llevar a cabo mediante la cooperación entre partes bilaterales, subregionales, regionales e internacionales. No obstante, nunca se deberá disociar a las comunidades, grupos y, si procede, individuos, de su propio PCI.

CAPÍTULO 4

Políticas de salvaguardia del PCI en América Latina

Son de suma importancia las investigaciones formuladas por el trabajo auspiciado por el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL)[187]. Habiendo sido mencionado, es necesario hacer una somera reseña sobre el CRESPIAL.

La creación de este Centro[188] se inscribe en el marco de la 32º Conferencia General de la UNESCO donde se aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (octubre de 2003).

En agosto del 2005, Yucay (Urubamba, Cusco, Perú) fue el escenario para la primera reunión para la creación del CRESPIAL en donde se contó con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La segunda reunión tuvo lugar en Brasilia, Brasil (mayo, 2006) aprobándose el Plan de Acción Regional y sus objetivos.

El 22 de febrero del 2006 se materializó su creación y funcionamiento través de la firma del Acuerdo entre la UNESCO y el Gobierno del Perú en París (Francia). Este acuerdo tuvo como objetivo promover y apoyar acciones de salvaguardia y protección del vasto PCI de los pueblos de América Latina. Al ser un Centro de Categoría 2[189], cuenta con los auspicios de la UNESCO.

El CRESPIAL se plantea como propósito contribuir a la formulación de políticas públicas en los países de la región, a partir de la identificación, valoración y difusión de su cultura viva, acciones que redundarán en el enriquecimiento de la

---

[187] Pajuelo Tévez, Ramón (coord.), *Experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina,* Cusco, CRESPIAL, 2010, págs. 37/61; https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/721/pajuelo_experienciasypoliticas.pdf;jsessionid=F4576D4C836286B80152C5D24DB62F44?sequence=2 [consultado en marzo de 2019].

[188] http://www.crespial.org [consultado en marzo 2019].

[189] Regulados por 37 C/Resolución 93 (noviembre 2013). Los Centros Categoría 2 están asociados con la UNESCO pero son jurídicamente ajenos a la Organización. Gozan de autonomía jurídica y funcional. Por lo tanto, la UNESCO no es jurídicamente responsable de ellos y no asume obligaciones de ningún tipo, ya sean administrativas, financieras o de otra índole. Asimismo, las actividades de los institutos y Centros de Categoría 2 deben tener un alcance mundial, regional, subregional o interregional. Esas entidades pueden ser patrocinadas y respaldadas por un Estado miembro o una amplia coalición de Estados miembros. Aquellas que sólo tengan un alcance nacional no pueden clasificarse como instituto o Centro de Categoría 2.

diversidad cultural de Latinoamérica, y que están conformes con el espíritu de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

El Centro es una institución autónoma de carácter internacional al servicio de los Estados Miembros de la UNESCO, encargada de apoyar las actividades de salvaguardia del PCI de los países de América Latina que deseen cooperar con él.

Los países que lo integran son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

a).- Antecedentes y situación de las políticas nacionales de salvaguardia del PCI.

Abordar las perspectivas que la Convención del 2003 ha abierto en América Latina para el desarrollo de las acciones de salvaguardia del PCI, requiere considerar los antecedentes y las situaciones que presentan los distintos países. Esto supone tomar en cuenta que las disposiciones de la Convención del 2003 son adoptadas por Estados que muestran diversas trayectorias en lo que respecta a sus políticas patrimoniales.

En cada uno de los países de la región se observan múltiples experiencias de promoción, salvaguardia, investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial. En algunos casos, a lo largo de décadas, estas experiencias han ido conformando tradiciones nacionales de política cultural (es el caso del Brasil) o estilos de tratamiento vinculados a arraigados esfuerzos de investigación, sistematización y conocimiento del patrimonio (tal como ocurre en Colombia o Perú, por mencionar algunos). Se puede comenzar por reconocer, entonces, la existencia de trayectorias nacionales diferenciadas de las políticas estatales referidas a la salvaguardia del PCI. Un rasgo general de estas trayectorias es que la mayor parte de los esfuerzos han tenido al patrimonio monumental o material como principal objeto de las tareas de salvaguardia. Sin embargo, aunque sin conformar necesariamente políticas nacionales, se pueden registrar valiosos y pioneros esfuerzos de investigación o sistematización del PCI en sus diversas expresiones (sobre todo música, tradición oral y conocimientos tradicionales).

La mayoría de los esfuerzos pioneros de salvaguardia de distintas expresiones del PCI en los países, ocurrieron debido al interés de investigadores o a tempranas iniciativas de política estatal, y tuvieron como contexto a coyunturas históricas de

modernización y acentuación de los vínculos internacionales, que generaron el interés por buscar, identificar y registrar aquello considerado como propio; es decir, la búsqueda de las raíces culturales de los respectivos países. Esta tendencia, observable desde fines del siglo XIX, pero que se desarrolló fuertemente en las décadas iniciales del siglo XX, debe ser diferenciada de esfuerzos y experiencias previas, que constituyen un rico acervo de conocimientos de origen decimonónico y/o colonial en cada uno de los países, en relación al PCI.

Dicha distinción resulta necesaria a fin de destacar que es en el contexto de los impulsos internacionales hacia la modernización e integración que se van conformando tradiciones nacionales, basadas en la investigación y el redescubrimiento de las características socioculturales consideradas propias o particulares de los distintos países. En los casos de aquellos países con poblaciones indígenas importantes esta tendencia dio lugar a movimientos culturales dirigidos a la reivindicación del componente indígena de la nacionalidad.

Expresión de ello fue el indigenismo, que tuvo expresiones múltiples y que llegó a abarcar campos tan variados como la creación artística, la investigación basada en la noción de folclore y el desarrollo de iniciativas estatales de rescate, difusión y preservación patrimonial. Sin duda, los casos más destacados de creación de corrientes indigenistas fueron los de México y Perú.

En otros países, aún sin la impronta indígena, también ocurrió una vuelta hacia el pasado o hacia adentro, que tuvo como resultado la creación de tradiciones e imágenes consideradas emblemáticas de las raíces nacionales. Ejemplos paradigmáticos de ello pueden verse en los casos de Argentina y Chile, donde se instauraron fuertes identidades nacionales basadas en las figuras del gaucho y del roto, en el mismo momento en que otros países vivían el apogeo del movimiento indigenista.

Como se acaba de señalar, es en el marco de estos movimientos de reivindicación cultural que ocurren los esfuerzos pioneros de registro e identificación del PCI, así como de ejecución de políticas estatales para su salvaguardia. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de las iniciativas se concentran en el patrimonio tangible o material, en un contexto en el cual estuvo ausente lo que se puede denominar como políticas nacionales de salvaguardia del patrimonio. Esto ocurre en todos los países latinoamericanos, con la única excepción de Brasil, donde muy tempranamente, en la década de 1930, se instaura una política nacional de

manejo patrimonial con base en las disposiciones de la *Ley de Tombamento* de 1937[190].

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se adoptó en los países de la región en una riquísima y variada tradición de investigación, registro, preservación y difusión de expresiones patrimoniales, incluyendo en muchos casos al patrimonio intangible (sobre todo en lo que respecta a música y folclore). Sin embargo, cabe destacar que dichas experiencias se realizaron –con las excepciones ya dichas de Brasil y México– en el marco de la inexistencia de políticas nacionales para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Entre otras razones, esto tuvo que ver con la inexistencia de una noción integral de patrimonio, pues solo posteriormente es utilizada a nivel internacional y adoptada paulatinamente por los Estados y comunidades académicas.

Asimismo, se podría diagnosticar en cada uno de los países, la influencia de factores tales como la vinculación entre las iniciativas estatales y de sectores privados para la salvaguardia patrimonial, el nivel de desarrollo de las comunidades académicas interesadas en temas patrimoniales o los impactos de las vicisitudes políticas –guerras civiles, dictaduras militares, entre otros– sobre las tradiciones nacionales de manejo estatal del patrimonio. Estos y otros factores permitirían reconocer semejanzas y diferencias de las trayectorias nacionales de manejo del patrimonio antes de la Convención del 2003. Ya se mencionó el caso de Brasil como experiencia paradigmática de creación de una política estatal temprana y continuada a la largo de décadas. Distinta fue, por ejemplo, la situación de Perú.

Fue el caso del más acendrado indigenismo en América del Sur, al amparo del cual se realizaron innumerables experiencias de promoción del patrimonio material e inmaterial, incluyendo investigación, difusión, creación de instancias académicas como las especialidades de antropología en las universidades, y también

[190] A nivel latinoamericano, al caso brasileño habría que agregarle la experiencia de México, donde también se implementan tempranas políticas patrimoniales luego de la revolución de 1910.

La Ley de Tombamento fue a partir de la cual se pudo reconocer el valor patrimonial de bienes culturales y es estableció un régimen jurídico de protección para estos. El descubrimiento de la existencia y el valor de los componentes inmateriales del patrimonio cultural, estuvieron ligados al pensamiento y acción de Mario de Andrade, quien tempranamente, en las décadas de 1920 y 1930 impulsó actividades destinadas a visibilizar el PCI. Mario de Andrade fue, además, quien se encargó de elaborar la propuesta de creación de una política pública destinada a la preservación del patrimonio cultural brasileño en 1936, a solicitud del entonces Ministro de Educación y Salud Pública, Gustavo Capanema. Fue así como se crea en 1937 el Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN), institución pionera del Estado brasileño dedicada a la salvaguardia del PCI. Pajuelo Tévez, Ramón (coord.), *op. cit.*, págs. 75/76.

la ejecución de diversos planes estatales de promoción y manejo patrimonial. Sin embargo, las discontinuidades en la historia contemporánea del país impidieron la formación de una tradición nacional de política cultural. El paradigma indigenista, basado en la idea de que resultaba urgente rescatar las expresiones folclóricas u originarias, tuvo un importante período de apogeo durante las primeras décadas del siglo XX, pero posteriormente cedió lugar a otras corrientes y prioridades que reorientaron las políticas estatales.

En general, en los países adheridos al CRESPIAL actualmente pueden reconocerse hasta tres situaciones de políticas nacionales referidas al PCI. Situaciones que brindan el contexto preciso en el cual entra a tallar la Convención del 2003. Estas tres situaciones son las siguientes:

a).- Existencia de una política nacional propia de salvaguardia del PCI, que se basa en la existencia de una "tradición" de políticas culturales estatales debido a su continuidad a lo largo de décadas. Es el caso de Brasil, donde desde la década de 1930, el Estado adoptó mecanismos específicos para el registro y la salvaguardia de su patrimonio material e inmaterial, incluyendo la construcción de inventarios. La experiencia brasileña construida a partir de la *Ley de Tombamento* ya mencionada de 1937, no es solo una situación pionera a nivel latinoamericano, sino en el mundo, razón por la cual ha sido justamente uno de los referentes de la definición de políticas culturales adoptada por organismos como la UNESCO.

b).- La segunda situación corresponde a los países que muestran recientemente el surgimiento de políticas nacionales de salvaguardia del PCI. Se trata de políticas vinculadas en algunos casos a cambios constitucionales que han implicado significativas variaciones en las políticas de Estado. Asimismo, en cierta medida, estas políticas también recogen la influencia de la difusión internacional de la noción de PCI e inclusive de la misma aprobación de la Convención del 2003. Es el caso de países como Colombia, Ecuador y en menor medida Bolivia. Las experiencias de Colombia y Ecuador no solo muestran mayor antigüedad, sino también mayor solidez institucional. Durante los últimos años ambos países han definido políticas nacionales que incorporan formas de atención específica al PCI. En el caso colombiano, cabe destacar que fue a partir de la Constitución de 1991 que ocurrió un giro significativo en las políticas estatales, incluyendo la implementación de políticas de promoción cultural, así como la adopción de mecanismos de representación política indígena en todos los niveles de gobierno. Asimismo, cabe

mencionar que Colombia es el país de la región en el cual se aprecia, durante las últimas décadas, la consolidación de una comunidad académica que ha influido significativamente en la adopción de políticas patrimoniales a nivel de Estado.

En el caso de Ecuador, la instauración de una política nacional patrimonial se remonta a las décadas de 1970 y 1980, a partir de la revaloración del valor monumental de ciudades como Quito y Cuenca. Posteriormente, se ha ido incorporando una noción más amplia del patrimonio y, recién en el año 2007, se realizó un plan de emergencia para el registro de este a nivel nacional en el marco del decreto de emergencia del patrimonio cultural.

c).- La tercera situación corresponde a países que muestran importantes esfuerzos e iniciativas para la salvaguardia del PCI, pero en el marco de la inexistencia de políticas nacionales, si nos referimos a ellas en sentido estricto. Sería el caso actual de Perú, Chile, Uruguay y Paraguay. En todos estos casos, se vienen ejecutando importantes proyectos y planes dirigidos a documentar expresiones del PCI, o bien a ejecutar acciones concretas de salvaguardia, ligados muchas veces a la instauración de una nueva institucionalidad y a los propios impactos de la Convención del 2003. Sin embargo, se carece aún de políticas nacionales referidas al PCI, y es justamente dicha carencia el reto principal de las iniciativas estatales y privadas en el futuro cercano. El caso chileno muestra la adopción de lineamientos de política cultural que incluyen acciones de salvaguardia del PCI, pero en ausencia de una institucionalidad específica para la salvaguardia de aquel. En los casos de Uruguay y Paraguay, el campo de las políticas culturales tiene un limitado desarrollo, pero debido al impacto de la Convención del 2003 se aprecian esfuerzos importantes dirigidos a mejorar la gestión del patrimonio, atendiendo además a sus expresiones inmateriales.

Cabe mencionar la importancia de la vinculación entre políticas estatales y esfuerzos privados de salvaguardia del patrimonio tangible e intangible en los países. En todos ellos se puede reconocer que tempranamente, junto a los cambios ocurridos en los Estados, se echaron a andar esfuerzos privados sumamente meritorios, a veces previos a las propias políticas de los Estados, que fueron impulsados por universidades, empresas, instituciones privadas e investigadores particulares. Estas experiencias han generado un importante acervo patrimonial, que constituye en muchos casos la base de las acciones de promoción del PCI realizadas desde el sector

privado en la actualidad (por ejemplo, mediante actividades museográficas, de registro, investigación y difusión del PCI).

b).- Desarrollo del marco legal.

Es importante realizar un balance en torno de la situación del marco legal del PCI, porque se trata del contexto legal imprescindible para las tareas de salvaguardia.

Durante los últimos años, en los distintos países se han dado avances importantes que permiten hablar de un avance significativo en términos legales. En primer lugar, en términos constitucionales y legislativos. País por país, se registra un avance importante hacia la formulación de un cuerpo de legislación específica para el tratamiento del PCI. En algunos casos, la normatividad referida a la protección y puesta en valor de aquel es de rango constitucional, pero en otros casos se han diseñado normas sectoriales que promueven la salvaguardia del PCI por su vinculación con determinados sectores.

Estos avances en la formulación de legislación específica referida al PCI conforman una novedad sobre la cual vale la pena llamar la atención. En la historia legislativa de los países latinoamericanos –vale recordar que son países que tienen dos siglos de existencia republicana, aunque en varios casos se trata de sociedades milenarias– es importante reconocer con toda su importancia la formulación de instrumentos y normas para que los Estados asuman políticas específicas dirigidas a la salvaguardia del PCI.

En este contexto es posible identificar una situación de tránsito desde el paradigma anterior centrado en la idea de folclore, al paradigma actual sustentado en la noción de patrimonio. Durante décadas, los Estados estuvieron abocados a la labor de rescate de las expresiones folclóricas que, tal como se pensaba, se hallaban irremediablemente destinadas a desaparecer. Las acciones realizadas en ese contexto consistieron en tratar de recuperar ese folclore, conocerlo en el sentido preciso de documentarlo y evitar así que desaparezca sin dejar rastros. Desde inicios del siglo XX, en diversos países se realizó dicha labor: una suerte de antropología de emergencia que dejó como resultado una masa muy importante de información, así como el registro de distintas expresiones patrimoniales, de tipo artístico, musical, artesanal, entre otros.

Los esfuerzos de preservación y rescate cultural realizados bajo el paradigma del folclore, se dirigieron a la documentación o registro de las manifestaciones consideradas expresión genuina de las otras culturas; es decir, de aquellas culturas distintas a la propiamente nacional, occidental o moderna.

Es así como los esfuerzos realizados se abocaron, sobre todo, al registro de las manifestaciones pertenecientes a las culturas indígenas, y en menor medida a otras culturas populares (por ejemplo, de grupos castellanohablantes de raigambre popular, poblaciones negras o descendientes de minorías llegadas a los países en diversas oleadas de migrantes desde diversas partes del mundo).

Solo recientemente, a partir del uso de la noción de patrimonio cultural, ocurrió el tránsito paulatino desde el paradigma del folclore al actual, basado en la idea de PCI, y que ha dado lugar al desarrollo de los avances legislativos mencionados. Se trata, pues, de un tránsito desde el modelo previo de rescate y preservación del patrimonio folclórico, hacia el actual paradigma cuyo objetivo es salvaguardar el PCI por sus valores intrínsecos. Un tránsito desde la urgencia por documentar y registrar, hacia el interés por preservar las manifestaciones de la cultura viva, incluyendo sus componentes inmateriales y a sus cultores individuales y colectivos.

Esto representa un avance muy importante porque implica una valoración distinta del patrimonio, que viene ocurriendo paralelamente a los cambios legislativos que el afán de salvaguardia del PCI está originando en los distintos países. En la mayoría de países este avance se ha realizado a través de cambios constitucionales, los cuales incorporan el reconocimiento explícito de la diversidad cultural y, en ese sentido, alientan acciones específicas destinadas a la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Es importante destacar que no se trata de acciones que se podrían concebir como una suerte de multiculturalismo latinoamericano, o bien como resultado de la influencia del paradigma multicultural desarrollado en otros países (por ejemplo en Canadá). Más que expresión de un multiculturalismo subregional latinoamericano, la expansión de la noción de PCI y los cambios legislativos recientes, responden a las encrucijadas recientes vividas en el subcontinente, que han obligado a los Estados y las élites a "mirar hacia adentro", redescubriendo sus propias sociedades. Procesos como la globalización, el colapso del modelo de crecimiento basado en la industrialización por sustitución de importaciones, el surgimiento de movimientos sociales que proponen cambios en los modos de

gobernar han conducido a una nueva manera de mirar hacia adentro. Ello implica revalorizar las culturas consideradas como propias. Se trata de un giro en los modos de concebir lo propiamente nacional, y de acciones sucesivas de los Estados, que vienen siendo posibles debido al uso de la noción de PCI. Ello se refleja en una suerte de reencuentro intercultural de los Estados con sus respectivas sociedades, efectuado a través del diseño y ejecución de políticas de salvaguardia de ese patrimonio.

La reforma de las Constituciones aparece de manera diferenciada y se encadena con las respectivas tradiciones nacionales de salvaguardia del PCI. Podemos identificar algunas situaciones. Primero, existe en algunos países una larga tradición nacional de ejecución de políticas culturales que se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En Brasil, desde la *Ley del Tombamento* de 1937, el Estado incorpora una noción particular acerca del valor del PCI, y ello permite que se implementen muy tempranamente acciones de salvaguardia. En América Latina, el único paralelo es la experiencia de México con posterioridad a la revolución de 1910.

Una segunda situación es la que corresponde a aquellos países en los cuales antes de la Convención de 2003 se dio un importante cambio constitucional tendiente al reconocimiento de la diversidad cultural, que en algunos casos sustenta nuevas políticas de salvaguardia del PCI. Es el caso de Colombia. A partir del cambio constitucional de 1991 se van manifestando una serie de novedades que tienen que ver con la participación de las minorías indígenas en los distintos niveles de gobierno, así como la implementación de un sistema de reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural a escala nacional. Igualmente, en Ecuador y en Bolivia el cambio hacia una mayor valorización del PCI ocurre mediante la aprobación de nuevas Constituciones, aunque de modo más tardío que en Colombia. En Ecuador, a partir de la Constitución de 1998, se incorporó el reconocimiento de la diversidad cultural a múltiples niveles del funcionamiento estatal. Posteriormente, con la última Constitución se enfatizó aún más la necesidad de preservar el PCI, como una forma de alentar el reconocimiento y la existencia de la diversidad cultural del país. En Bolivia se aprobó una nueva Constitución que cambió el nombre del Estado mediante el reconocimiento de su carácter plurinacional. En este contexto, se rediseñó la estructura estatal, así como la gestión de las políticas dirigidas a la salvaguardia del patrimonio cultural, en el marco del intento de "descolonización" de

la sociedad y el Estado. En este país se sancionó en el año 2014 la Ley 530 del 23 de mayo de Patrimonio Cultural Boliviano.

No se trata de cambios que reflejan el impacto directo de la Convención del 2003: se relacionan con ella, incorporan sus recomendaciones, pero se hallan ligados a las transformaciones intrínsecas de tipo político. Actualmente, como resultado de estos cambios ocurridos en los últimos años en Ecuador y Bolivia, en ambos países se vienen implementando planes y políticas de salvaguardia del patrimonio que responden a lo que podemos denominar como una redefinición de lo nacional. Esta redefinición impulsada por los Estados, encierra sin embargo el riesgo de convertir a las políticas patrimoniales –específicamente a la labor de salvaguardia del PCI- en instrumentos para la legitimación de proyectos políticos que pugnan por una nueva manera de concebir lo nacional.

Una tercera situación es la que corresponde a aquellos países en los cuales los cambios legislativos no se han dado necesariamente al nivel constitucional, sino a través de la aprobación de leyes específicas o mediante la implementación de reformas institucionales que han incorporado el uso de la noción de PCI para la ejecución de las políticas culturales. Una muestra de esta situación es el caso de Perú, donde se ha creado un Ministerio de Cultura que cuenta con un Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

c).- Institucionalidad.

Uno de los cambios que ha acompañado a las reformas legislativas que han adoptado los distintos países a fin asegurar la salvaguardia de su PCI, tiene que ver con la creación de instancias específicas dedicadas a dicha tarea. La tendencia visible es a la creación de instancias específicas para la gestión del PCI en vinculación con las reformas en la legislación interna. Esta tendencia representa un avance muy importante, pues hasta hace pocos años, en la mayoría de los Estados no existían instancias dedicadas a la salvaguardia de patrimonio inmaterial. De allí que la creación de Ministerios, Viceministerios y otras dependencias dedicadas expresamente al tema constituye una novedad en lo que respecta a la institucionalidad estatal.

Debido a las diferencias de reformas legislativas realizadas en los países para la incorporación del tratamiento del PCI entre las políticas de Estado, se pueden

encontrar diferencias en lo que respecta al rango de la institucionalidad estatal. Mientras que en algunos países se han creado Ministerios de la Cultura que incluyen entre sus prerrogativas el manejo del aquel patrimonio, en otros casos esta función ha sido adscrita a los Ministerios de Educación[191] o bien ha recaído en dependencias de menor rango. En general, se aprecia que en relación a la institucionalidad para el manejo del PCI existe una transición desde los Ministerios de Educación hacia los actuales Ministerios de Cultura[192]. En la mayoría de países se ha avanzado hacia la creación de estas entidades, incluyendo una dependencia particular para la atención estatal al patrimonio y al interior del mismo al PCI. Esto ha venido ocurriendo a la par que a nivel internacional se vienen consolidando espacios de diálogo y coordinación de los Ministerios de Cultura[193].

En este contexto, resulta necesario llamar la atención acerca de las experiencias recientes de Bolivia y Ecuador en lo que respecta a la creación de una institucionalidad estatal *ad hoc* para el desarrollo cultural. En ambos países, se aprecia que se han impulsado formas novedosas de diseño y ejecución de las políticas culturales. En Bolivia, con el objetivo explícito de contribuir a la "descolonización" del país, se ha creado un Ministerio de las Culturas que incluye un Área de Patrimonio inmaterial.

En Ecuador, se creó el Ministerio de Cultura y Patrimonio con una secretaría de Patrimonio. En el caso boliviano, la idea eje es que no puede hablarse de la cultura en singular sino que es necesario que desde el Estado se reconozca explícitamente la existencia de "culturas" en plural. Allí funciona el Ministerio de Culturas y Turismo. A su vez, este Ministerio cuenta con un Viceministerio de Interculturalidad que cuenta con una Dirección General de Patrimonio Cultural y una Unidad de Patrimonio Inmaterial[194]. Este cambio en la denominación expresa en realidad un intento de descolonización empujado desde el Estado, que también ha implicado la variación de la denominación oficial del Estado, pues actualmente

[191] Es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Allí funciona el Ministerio de Educación y Cultura que cuenta, a su vez, con una Subsecretaría de Educación y Cultura y una Dirección Nacional de Cultura.

[192] Es el caso paraguayo. Allí se cuenta con una Dirección Nacional de Patrimonio Cultural dependiente del Ministerio de Cultura.

[193] Existe, por ejemplo, la Conferencia Iberoamericana de Cultura que en su XIII versión se realizó en setiembre del 2010 en Argentina. Asimismo, ese mismo año, el BID realizó a inicios de octubre una reunión especial para discutir con los Ministros de Cultura de 13 países cómo las políticas culturales se vinculan con el desarrollo económico.

[194] http://www.minculturas.gob.bo/es/articulo/3-organigrama [consultado en marzo de 2019].

Bolivia se considera un Estado plurinacional. En Ecuador, el énfasis es puesto en la necesidad de la transversalidad de la gestión cultural.

Chile, por su caso, presenta a su vez el Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), a través del Departamento de Patrimonio Cultural, tiene por principal misión implementar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que Chile suscribió en 2008 y que fue ratificado por el Congreso Nacional en enero de 2009. De este modo, la Convención es el principal marco normativo y de actuación del Departamento, a través del cual se busca relevar y reconocer el PCI de las comunidades, grupos e individuos interesados. Adicionalmente, el Departamento tiene como tarea sensibilizar a nivel local, nacional e internacional sobre la importancia de este patrimonio, la necesidad de asegurar su salvaguardia y visibilizar sobre su valor[195]. Este país cuenta con lo que ha dado en llamar el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por su parte, y tal como ya algo se mencionara, Brasil cuenta con el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), dependiente de la Secretaría Especial de Cultura que, a su vez, cuenta con el Departamento de Patrimonio Inmaterial.

Respecto a la institucionalidad para el manejo patrimonial, entonces, podemos reconocer que en los últimos años se viene conformando un ámbito de gestión estatal dedicado específicamente al PCI. Se trata de un avance muy importante, que resulta paralelo a la persistencia de problemas institucionales en todos los países, que tienen que ver con aspectos presupuestales, recursos humanos, déficit de respaldo político a iniciativas de gestión cultural, entre otros. Sin embargo, a pesar de dichos problemas se aprecia un avance significativo en lo que respecta a la creación de una institucionalidad dedicada al diseño y ejecución de políticas culturales, y específicamente del PCI.

d).- Impacto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

[195] http://www.sigpa.cl/patrimonio-chile/ [consultado en marzo de 2019].

Desde la aprobación de la Convención del 2003, su impacto en los países latinoamericanos ha sido bastante significativo. En primer lugar, se puede mencionar la rapidez del proceso de la ratificación de la Convención por parte de los Estados miembros. De acuerdo con lo estipulado por la Convención, su entrada en vigencia tendría lugar a partir de la ratificación de un trigésimo Estado, hecho que tuvo lugar el año 2006. Entre los países que se han adherido a la Convención del 2003, se encuentran aquellos que actualmente conforman el CRESPIAL. De hecho, la creación de este organismo es también un elemento que permite apreciar el impacto de la Convención en la región.

En relación al impacto de la Convención en los países, lo que puede observarse es que, en algunos casos, dicho instrumento ha fortalecido trayectorias previas de política estatal referida a la protección del PCI, mientras que en otros ha brindado un impulso importante para su consolidación o implementación.

La primera de estas dos situaciones corresponde entre los países integrantes de CRESPIAL a Brasil, cuyo caso se vio. La aprobación de la Convención del 2003 y su ratificación por Brasil en el año 2006, han fortalecido la trayectoria, incluyendo la incorporación de aspectos puntuales, tales como el tratamiento de las lenguas en peligro de extinción, el tipo de identificación de los portadores del patrimonio, los conceptos utilizados en la elaboración de los inventarios nacionales, entre otros.

En el resto de países, el impacto de la Convención consistió en brindar un impulso muy importante para el avance en la definición de políticas nacionales de salvaguardia del PCI. En casos como los de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Chile, la Convención ha brindado un conjunto de definiciones conceptuales y lineamientos respecto a las políticas de salvaguardia del PCI, a las cuales paulatinamente dichos Estados se han ido adecuando. Estos países contaban, al momento de ratificar la Convención, con antecedentes importantes de política cultural propia, pero que no constituían un corpus nacional propio como el brasileño. En ese sentido, la Convención ha sido adoptada como una guía para la consolidación de las políticas de salvaguardia del patrimonio cultural que venían ejecutándose y para la implementación de nuevas acciones.

En otros casos, como los de Bolivia y Paraguay, se viene utilizando expresamente la Convención del 2003 como base para el diseño de las primeras acciones de salvaguardia dirigidas expresamente al PCI. Debido a la inexistencia de políticas culturales nacionales en estos países, las disposiciones de la Convención

han brindado un sustento eficaz para la definición de lineamientos nacionales de mediano y largo plazo, así como para la creación de una institucionalidad dedicada específicamente a la salvaguardia del PCI.

Una mención particular en este contexto puede hacerse en relación a los casos de Perú y Ecuador. En Perú, que fue junto a Panamá uno de los primeros países latinoamericanos en adherirse a la Convención del 2003, con posterioridad a dicha ratificación se procedió a la creación del Ministerio de Cultura, el cual tiene por delante el reto de incorporar los lineamientos de la Convención, a fin de consolidar políticas nacionales de salvaguardia del PCI. En el caso de Ecuador, la Convención ha permitido visibilizar fuertemente ese patrimonio, con lo que ha contribuido a la acción estatal más destacada en aras de la salvaguardia del PCI ocurrida en la región en los últimos años: la promulgación del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural el año 2007, y la realización de una labor acelerada de registro del patrimonio tangible monumental e inmaterial (especialmente artístico), que logró cubrir todo el país durante los meses siguientes. Como resultado de este trabajo, el Ecuador cuenta ahora con una base de información y catalogación que le permitió impulsar políticas nacionales específicas de salvaguardia y difusión de distintos tipos de patrimonio, incluyendo el inmaterial.

e).- Aspectos conceptuales.

Uno de los aspectos más importantes para un diagnóstico de la situación de las políticas nacionales de salvaguardia del PCI y de las perspectivas abiertas a partir de la aprobación de la Convención del 2003 tiene que ver con el componente conceptual de las políticas de salvaguardia. Un avance significativo al respecto ha sido la expansión de la noción de PCI. Al interior de los Estados, así como en las comunidades académicas vinculadas al patrimonio cultural en cada uno de los países, a partir de la aprobación de la Convención del 2003 la noción de PCI ha ido ganado terreno y legitimidad, como el principal instrumento conceptual para la realización de acciones de investigación, promoción y difusión de la cultura intangible de los países. En ese sentido, lo que se aprecia es que, paulatinamente, la noción de PCI está reemplazando a otros conceptos que en las décadas anteriores ocuparon los esfuerzos dirigidos a la promoción cultural, o junto a ellos está permitiendo la formulación de nuevas líneas de política para la salvaguardia. Entre estas nociones

que anteriormente fueron utilizadas para el diseño de las políticas culturales, tenemos a las de cultura inmaterial, cultura intangible, patrimonio intangible, patrimonio inmaterial, cultura viva, folklore, etc.

Un aspecto que se debe destacar, en vinculación con dicha situación, es que aún se requieren mayores esfuerzos, a fin de identificar la especificidad de los elementos simbólicos que constituyen a las culturas y a sus expresiones inmateriales. Considerar el ámbito de lo simbólico constituye todavía un reto no solo conceptual, sino también político en los distintos países. Se trata de un ámbito particular que posee un valor que no puede ser medido en términos cuantificables, o en relación a la necesidad de ejecutar acciones de salvaguardia.

Componentes como las lenguas, las tradiciones, las festividades, la relación con los lugares, con los territorios, la construcción de significados y sentidos, la construcción de memorias colectivas, conforman prácticas sociales que expresan de manera especial el patrimonio inmaterial. De allí que la salvaguardia del PCI encierra un desafío de orden *político*: la necesidad de preservar las identidades socioculturales existentes en cada uno de los países. Sobre todo en un contexto histórico como el actual, en que se acentúa la arremetida de factores asociados a procesos de cambio –globalización, crecimiento económico, construcción de mega proyectos de desarrollo, etc.- que pueden alterar las condiciones para la preservación de las expresiones patrimoniales. Señalar esto no significa asumir una noción que congela la idea de patrimonio cultural, como si se tratase de una herencia inmutable que debe ser conservada sin alteraciones.

Lo que la inmensa masa de investigación académica acumulada en torno a las prácticas patrimoniales en las últimas décadas arroja, es más bien que los símbolos y prácticas sociales patrimoniales se transforman frecuentemente, manteniendo al mismo tiempo determinadas características o patrones que le brindan especificidad o particularidad.

Otro tema vinculado a la salvaguardia del patrimonio inmaterial, es el de la relación entre lo inmaterial y lo material, así como la necesidad de un emplazamiento ético para la ejecución de las tareas de salvaguardia. Es necesario partir de reconocer la indesligable vinculación entre lo simbólico y lo material en la conformación del PCI. ¿De qué se habla cuando se refiere a lo inmaterial del patrimonio? ¿Qué significa hacer salvaguardia de lo inmaterial, de aquello que no se ve ni se puede tocar, pero que existe, otorga sentidos colectivos a determinadas poblaciones y

muchas veces tiene expresiones materiales o visibles? ¿Cómo abordar el universo de lo simbólico colectivo, aquello que constituye el patrimonio más íntimo de poblaciones que son sus portadores, creadores, herederos? Más aún, ¿cómo salvaguardar dicho patrimonio inmaterial existente en las memorias colectivas, formas de organización social, política y económica vinculadas a específicas formas de vida? Estas y otras preguntas requieren de respuestas éticas que finalmente deben tener correlación en las metodologías y herramientas conceptuales que brindan sustento a las actividades de salvaguardia.

Es importante destacar que lo que se acaba de señalar no se refiere solamente al patrimonio inmaterial de las poblaciones indígenas u originarias. Se trata de preguntas y posicionamientos éticos que se aplican a cualquier tipo de población humana. Se pueden establecer diferenciaciones entre poblaciones indígenas y no indígenas, y reconocer que entre unos y otros existen formas de cultura intangible así como múltiples expresiones culturales simbólicas[196].

Asimismo, es necesario avanzar en definir mejor el campo de lo que es que patrimonio inmaterial. Es decir, ¿qué puede ser considerado patrimonio y qué no? Urge construir nociones o herramientas conceptuales que permitan asumir en términos de horizontalidad a las distintas expresiones del patrimonio, incluyendo a las expresiones inmateriales, en ámbitos tan diferentes como pueden ser las ciudades o sus entornos rurales, por ejemplo.

Resulta importante considerar también la complejidad de cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, al interior de las propias ciudades existen zonas territoriales que se pueden denominar como tradicionales, junto a otras que no lo son. En ocasiones, se trata de barrios urbanos donde existe presencia importante de poblaciones indígenas o donde estas constituyen una minoría. También se pueden considerar territorios en los cuales existen poblaciones con otros componentes culturales (es el caso de los afroamericanos o descendientes de poblaciones europeas migrantes debido a sucesos ocurridos en el pasado lejano y reciente).

[196] La noción de lo indígena se encuentra nuevamente en el centro de una fuerte discusión internacional, que ahora incluye la presencia de movimientos de reivindicación de lo étnico e indígena emergidos en diversas regiones del mundo en las últimas décadas. Pajuelo propone considerar como indígenas a aquellas poblaciones preexistentes a los Estados nacionales, que en la actualidad poseen formas de racionalidad particulares que remiten a orígenes no modernos (es decir, no asimilables a la modernidad europeo-occidental). Se trata de poblaciones que, en esa medida, comparten patrones de organización de su vida en común, en lo que respecta a su universo simbólico-cultural, formas de organización social, de vinculación con el territorio, organización política y socioeconómica, entre otros rasgos.

En relación a estas y otras innumerables situaciones que acompañan la existencia del PCI, se requiere establecer estrategias y herramientas horizontales de salvaguardia y revaloración del patrimonio, especialmente de las manifestaciones inmateriales de la cultura. El patrimonio inmaterial, obviamente no se puede comparar y, en tal sentido, resulta muy importante lo avanzado en Uruguay al respecto, en relación a recuperar el valor simbólico de poblaciones que no son poblaciones indígenas, pero que como todas las poblaciones del mundo, o como toda persona, poseen un universo simbólico que es parte de su vida y de la sociedad a la cual pertenecen.

A partir de lo señalado, se pueden reconocer algunos problemas más concretos que tienen que ver con los aspectos conceptuales de las tareas de salvaguardia del patrimonio. Por ejemplo, no existen criterios unificados en los países respecto a lo que significa hacer salvaguardia. En algunos países, como Brasil, las categorías se definieron antes de la Convención del 2003 y sustentan hasta ahora sus políticas nacionales, pero en la mayoría de países no es tal la situación. Por el contrario, cuando la Convención llega, recién se estaba visibilizando la noción de PCI y, en ese sentido, se abre un escenario caracterizado por la necesidad de incorporar las nuevas nociones y disposiciones a las legislaciones nacionales.

De allí que en algunos países se intente realizar una adecuación de las disposiciones de la Convención, en tanto que en otros se adoptan plenamente y se formulan lineamientos de política que buscan abarcar los cinco ámbitos de expresión del PCI identificados en la Convención. Faltan precisiones y adecuaciones respecto al propio uso de la Convención y a otros instrumentos internacionales relacionados al patrimonio inmaterial.

En dicho contexto existe una situación de indefinición de los sentidos y contenidos de las categorías operativas, tales como las nociones de inventario y registro. En algunos países se denomina inventario a la labor previa al registro, consistente en el acopio de la información más completa posible acerca de las expresiones del PCI. Posteriormente, se procede a "registrar" dichas expresiones. Por el contrario, en otros casos se denomina registro a la tarea de documentación de las expresiones del PCI, considerando que se trata de una labor previa al levantamiento de un inventario.

De manera semejante, existen diferencias de concepción y criterios en torno de la necesidad o no de registrar o declarar el PCI o respecto a la necesidad de poner

el énfasis en realizar acciones de salvaguardia o de conservación de las expresiones patrimoniales. Estos y otros dilemas conceptuales se encuentran actualmente en los distintos países, y frente a ellos cabe considerar que se está todavía en una situación temprana de la aplicación del concepto de PCI. Con el paso del tiempo se hará posible una mínima unificación de conceptos y criterios.

f).- Aspectos metodológicos.

Los aspectos metodológicos resultan claves en la realización de acciones de salvaguardia del PCI, debido a que se trata de los principios y procedimientos que permiten el vínculo concreto con las comunidades portadoras de ese patrimonio, así como de la ejecución de acciones que permitan la continuidad de las prácticas socioculturales que dan vida al patrimonio inmaterial.

A diferencia de lo que ocurre cuando se trata de salvaguardar el patrimonio material, al proponer una metodología para evitar que lo intangible se pierda o desaparezca, no es suficiente una perspectiva museística. Incluso en el caso del patrimonio material, resulta imprescindible considerar que este no solo está compuesto de una corporeidad física, sino que también incorpora significados y valores simbólicos insustituibles para las comunidades humanas de las cuales hace parte. Con mayor razón, en el caso del patrimonio inmaterial resulta esencial ir más allá de una perspectiva conservacionista a fin de tomar en cuenta que la forma óptima de conservar el patrimonio inmaterial consiste en asegurar las posibilidades para que sus cultores y poseedores sigan dándole continuidad. Esto no anula las tareas de difusión y preservación de expresiones patrimoniales inmateriales, así como la necesaria preservación de sus expresiones en ambientes físicos especialmente acondicionados para dicha finalidad (tales como museos, repositorios, archivos, entre otros) y con los adecuados soportes físicos (grabaciones, soportes audiovisuales, impresos entre otros). Sin embargo, el patrimonio inmaterial solamente seguirá existiendo como tal, en tanto haga parte de las comunidades humanas que le dan vida y también lo transforman y recrean constantemente a lo largo del tiempo.

El primer reto de los países en relación a las metodologías de salvaguardia del PCI no es estrictamente metodológico, sino que es más bien de orden político-metodológico: consiste en la necesidad de que todos los Estados que han ratificado la Convención del 2003 y, por lo tanto han convertido sus directrices en normatividad

nacional, puedan dar los pasos necesarios hacia la tarea de realizar sus respectivos inventarios nacionales. Esta decisión política, así como las condiciones financieras e institucionales para su implementación, deben permitir asumir, en segundo término, los aspectos estrictamente metodológicos de las acciones de salvaguardia.

Pero es la decisión política de efectuar los inventarios nacionales de cada uno de los países, el factor que permitirá realizar el registro de las expresiones del PCI y, además, diseñar los planes, políticas y metodologías adecuadas para el rescate y la preservación de esas manifestaciones.

Esta prioridad no es solo un punto clave en la agenda de los Estados en relación a su patrimonio cultural inmaterial, sino también de otros actores, incluyendo aquellas instituciones privadas vinculadas de una u otra forma a las manifestaciones patrimoniales inmateriales y, de manera particular, las comunidades académicas dedicadas a la investigación, enseñanza y difusión en temas vinculados al PCI. Crear las condiciones para que los Estados asuman efectivamente las directrices de la Convención del 2003, comenzando por la tarea de realización de inventarios, compete también a los investigadores, agentes culturales e instituciones del amplio campo de la gestión cultural en cada uno de los países. Solo de esa forma se podrán realizar acciones concretas, a fin de avanzar hacia la implementación de inventarios nacionales, trabajando de manera coordinada con vistas a la implementación de estrategias y metodologías adecuadas, incluyendo la unificación de criterios en los aspectos en que esto resulta necesario, pues existe una variedad de nociones y formas de comprensión respecto a salvaguardia, registro, inventario, etc.

Este último aspecto es un componente estrictamente metodológico que urge resolver en la región: la necesidad de armonizar principios y criterios operativos en relación a las acciones de salvaguardia del PCI: ¿Qué es salvaguardia?, ¿cómo efectivizarla?, ¿qué cosa es el registro?, ¿qué son los inventarios y cómo se establecen? Asimismo, urge responder preguntas más puntuales, estrictamente referidas a los procedimientos metodológicos: ¿Cómo efectuar el registro de expresiones patrimoniales?, ¿Con qué técnicas, procedimientos y recursos? Y, sobre todo, ¿mediante qué tipo de relación con las personas y comunidades poseedoras del PCI? Las preguntas señaladas convocan a una reflexión detenida acerca del núcleo metodológico de las acciones de salvaguardia del patrimonio inmaterial.

No obstante, en diversos países de la región se pueden reconocer experiencias valiosas realizadas como parte de las políticas culturales estatales, o bien como

resultado del interés de instituciones privadas ante la pérdida irreparable del patrimonio.

Cabe destacar la experiencia de Brasil, país en el cual, a través de la labor desarrollada durante décadas por el IPHAN, se han logrado establecer definiciones y metodologías específicas para la salvaguardia del PCI. Asimismo, otras experiencias más recientes, como las de Colombia, Ecuador y Chile, permiten contar con otros modelos metodológicos de registro, documentación y salvaguardia. Justamente, el contraste de estas y otras experiencias permite apreciar que actualmente, a fin de que los Estados firmantes de la Convención puedan asumir la tarea de elaboración de inventarios del PCI, se requiere establecer urgentemente criterios mínimos comunes en torno de lo que se entiende por nociones como salvaguardia, registro, documentación, inventario y otros. Asimismo, acerca de las metodologías específicas para el levantamiento de los registros y archivos de las expresiones. En tal sentido, urge la realización de reuniones regionales en las que pueda congregarse a los tomadores de decisiones, hacedores de políticas y especialistas en PCI, a fin de avanzar hacia la definición de criterios e instrumentos metodológicos comunes en la región.

Otro ámbito en el cual resulta urgente trabajar de manera coordinada es el del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC's), para efectos de la realización de los registros e inventarios. Esto excede lo estrictamente metodológico, pero se trata del establecimiento de los recursos indispensables en el mundo actual, para la realización de tareas de registro, documentación y de la elección de las mejores formas de reconocer y situar las expresiones del patrimonio intangible en relación con los contextos socioculturales de los cuales forma parte.

Un tema adicional, vinculado a la cuestión de las metodologías, en el cual se requiere mayor información acerca de sus efectos concretos sobre las comunidades portadoras, es el referido a las políticas de patrimonialización. A partir de las declaratorias de la UNESCO y la creación de diversas listas del patrimonio mundial material e inmaterial, se ha generado una suerte de competencia entre los Estados por el logro del reconocimiento de sus expresiones culturales, así como de bienes monumentales. Pero quizás resulta más intrigante que en diversos países se ha alentado el reconocimiento patrimonial a través de declaratorias realizadas por los organismos encargados de las políticas culturales o de otras dependencias, como los Parlamentos. Esta situación puede ser descrita como una verdadera "fiebre de

patrimonialización" en casos que resultan emblemáticos al respecto como los de Perú y Bolivia. Se trata de una fiebre que muchas veces despierta expectativas posteriormente insatisfechas entre las comunidades portadoras del patrimonio, o bien resulta utilizada por representantes políticos que de esa forma buscan legitimarse ante sus electores. De esta manera, el sentido de la patrimonialización acaba alejándose del objetivo de hacer visibles determinadas expresiones con la finalidad de implementar acciones dirigidas a su salvaguardia.

g).- Aspectos presupuestarios.

El financiamiento de las actividades de salvaguardia del PCI proviene generalmente en los países de la región de fondos públicos canalizados a través de la institucionalidad estatal encargada del diseño y gestión de políticas culturales. Entre estos países, el que cuenta con el sistema más ambicioso y de alcance nacional para el financiamiento de acciones de salvaguardia del patrimonio, incluyendo el inmaterial, es Brasil.

En general, la gran mayoría de experiencias que implican la realización de acciones de registro e inventario para la salvaguardia de expresiones del PCI en América Latina, se realizan con inversión de fondos públicos, a través de las instituciones encargadas de la elaboración y ejecución de las políticas culturales (Ministerios, Secretarías, Departamentos, entre otros). Sin embargo, y generalmente, los presupuestos estatales para la gestión cultural se encuentran por debajo del límite recomendado por la UNESCO y, en ese sentido, existen serios problemas económicos, más aún, porque buena parte del presupuesto con que se cuenta debe destinarse a solventar los gastos del funcionamiento institucional (remuneraciones, mantenimiento de los locales, entre otros). Vale decir que la mayor parte de los fondos públicos asignados a tareas de salvaguardia cultural se invierten en el patrimonio material.

Asimismo, se realizan acciones de difusión o promoción del desarrollo de actividades culturales, muchas veces en relación a la formación de mercados turísticos o con la intención de ampliar los espacios culturales en las ciudades (es el caso de festivales, concursos, encuentros, etc.). Por esa razón, en lo que respecta al PCI se dispone con recursos menores a los necesarios para la realización óptima de las tareas de salvaguardia o para la implementación de acciones como la ejecución de

las directrices de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

A pesar de que los fondos públicos sustentan las políticas nacionales, en cada uno de los países se puede reconocer que existen valiosas experiencias de rescate y preservación del PCI realizadas por el sector privado. Desde la década de 1990, paralelamente al incremento de la valoración del PCI, se aprecia la tendencia a la creciente participación del sector privado no solo en la promoción de actividades culturales, sino también en la realización de acciones concretas de salvaguardia de ese patrimonio. Esta es una tendencia más amplia, que incluye el desarrollo de industrias culturales, iniciativas económicas basadas en el uso de expresiones culturales –incluyendo no solo al folclore tradicional, sino a otras expresiones– y hasta la creación de instituciones privadas que en varios países tienen tanta importancia como las instancias estatales dedicadas a la formulación y ejecución de las políticas culturales. El desarrollo de las industrias culturales y el incremento de la importancia del consumo cultural en las economías de los países, muestra que la inversión estatal y privada en la promoción del patrimonio puede acompañarse de políticas dirigidas al ámbito del consumo de las expresiones patrimoniales.

En muchas instituciones privadas, como resultado de una labor de registro y acopio realizada a lo largo de varios años o décadas, se encuentran actualmente fondos muy importantes del acervo documental, fotográfico, audiovisual, sonoro, artesanal y de otros tipos, que registran expresiones del PCI. Muchas veces, estos esfuerzos privados carecen también de fondos suficientes, sobre todo para la preservación del material de forma adecuada, por lo cual urge realizar acciones conjuntas con el sector público.

h).- PCI de países latinoamericanos inscripto en las Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A continuación se analizará cada uno de los elementos que componen la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de cada uno de los países que forman parte del CRESPIAL. Cabe destacar que de todos ellos, solo dos no poseen elementos en dicha lista: El Salvador y Paraguay.

No obstante esta enunciación, se hace necesario aclarar que el hecho de que estas manifestaciones del PCI estén incluidas en la Lista mencionada, no las

convierten en las únicas manifestaciones existentes en cada uno de los países. Simplemente cada comunidad decidió poner de relieve estas expresiones y no otras pero de ninguna manera pueden entenderse como excluyentes de cualquier otro PCI.

- **Argentina.**

i. El tango[197].

Inscrito en 2009 y corresponde a Argentina junto con Uruguay. Se trata de una inscripción conjunta.

La tradición argentina y uruguaya del tango nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una identidad cultural específica. Entre las expresiones más características de esa identidad figuran la música, la danza y la poesía del tango que son, a la vez, una encarnación y un vector de la diversidad y del diálogo cultural. Practicado en las milongas –salas de baile típicas– de Buenos Aires y Montevideo, el tango ha difundido el espíritu de su comunidad por el mundo entero, adaptándose a nuevos entornos y al paso del tiempo. Esa comunidad comprende hoy músicos, bailarines profesionales y aficionados, coreógrafos, compositores, letristas y profesores que enseñan este arte y hacen descubrir los tesoros vivos nacionales que encarnan la cultura del tango. El tango también está presente en las celebraciones del patrimonio nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, lo cual muestra el vasto alcance de esta música popular urbana.

ii. El filete porteño de Buenos Aires[198].

Inscrito en 2015, el filete porteño de Buenos Aires es una técnica pictórica tradicional que combina los colores vivos con estilos tipográficos específicos. Sus realizaciones se pueden contemplar en autobuses urbanos, camiones y señalizaciones

[197] https://ich.unesco.org/es/RL/el-tango-00258 [consultado en abril 2019].

[198] https://ich.unesco.org/es/RL/el-filete-porteno-de-buenos-aires-una-tecnica-pictorica-tradicional-01069 [consultado en abril 2019].

de tiendas y almacenes, y son cada vez más frecuentes en la decoración del hogar. Sus imágenes guardan relación con el patrimonio cultural de la ciudad, incorporando elementos de carácter social o religioso y constituyen una forma de memoria colectiva. La temática popular de esas imágenes comprende, entre otras, representaciones de santos y personalidades políticas admiradas, así como de estrellas musicales e ídolos deportivos. Los dibujos van a veces acompañados de dichos y refranes.

La ejecución de esta técnica pictórica tradicional comienza con la realización de un dibujo que se traslada a un soporte. Luego se ultima el trabajo utilizando pintura sintética, barniz coloreado y unos pinceles especiales de pelo largo. Los artesanos especialistas en fileteado transmiten su técnica a todas las personas deseosas de aprenderla. No es preciso cursar estudios en el sistema de enseñanza formal para adquirir las competencias que necesita el dominio de esta técnica, por eso su aprendizaje constituye una oportunidad de inserción social para jóvenes de las comunidades que corren un riesgo de exclusión social. En los últimos decenios ha surgido una nueva generación de artesanas, que ha participado en talleres sobre esta técnica pictórica y la está practicando.

- **Bolivia.**

i. La cosmovisión andina de los kallawayas[199].

Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003).

Los orígenes del grupo étnico de los kallawayas, afincados en la región montañosa de Bautista Saavedra, al norte de La Paz, se remontan a la época preincaica. Al igual que muchos otros aspectos de la cultura andina, sus prácticas y sus valores han evolucionado con la fusión de las religiones indígena y cristiana.

La actividad principal de los kallawayas es el ejercicio de una medicina ancestral a la que están asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la economía local. La cosmovisión andina de la cultura kallawaya abarca todo un acervo coherente de mitos, ritos, valores y expresiones artísticas. Sus técnicas

[199] https://ich.unesco.org/es/RL/la-cosmovision-andina-de-los-kallawayas-00048 [consultado en abril de 2019]

medicinales, basadas en los sistemas de creencias de los antiguos pueblos indígenas de los Andes, gozan de un amplio reconocimiento en Bolivia y en numerosos países de América del Sur, donde ejercen los médicos-sacerdotes kallawayas.

Este arte de curación, que está reservado a los hombres, procede de un conocimiento extraordinario de la farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un corpus de conocimientos rituales indisociables de las creencias religiosas. Los curanderos itinerantes tratan a los pacientes gracias a unos conocimientos médicos y farmacéuticos que se articulan en torno a un sistema complejo de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje desempeña un papel preponderante. Al atravesar ecosistemas muy variados en el transcurso de sus viajes, los curanderos kallawayas perfeccionan sus conocimientos de las plantas medicinales. La farmacopea kallawaya, que consta de unas 980 especies, es una de las más ricas del mundo. Las mujeres kallawayas participan en ciertos ritos y se consagran a la salud de las mujeres embarazadas y de los niños. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos, cuyos motivos y adornos evocan la cosmovisión kallawaya. Durante las ceremonias rituales, grupos de músicos llamados kantus tocan la zampoña y el tambor para entrar en contacto con el mundo de los espíritus.

En los últimos años, el modo de vida tradicional de los kallawayas se ha visto amenazado por la aculturación, lo que puede entrañar la desaparición de este acervo extraordinario de conocimientos médicos. La tradición también se ha visto afectada por la falta de protección jurídica de las comunidades indígenas y frente a las grandes empresas farmacéuticas.

ii. El carnaval de Oruro[200].

Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad (originalmente proclamado en 2001).

Oruro, situado a una altitud de 3.700 mts. en las montañas del oeste de Bolivia, era un importante centro de ceremonias precolombino antes de convertirse en un importante centro minero en los siglos XIX y XX. La ciudad fue refundada por los españoles en 1606 y siguió siendo un lugar sagrado para el pueblo uru, al que venían desde muy lejos para cumplir con los ritos, especialmente la gran fiesta de Ito.

[200] https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-oruro-00003 [consultado en abril de 2019].

Los españoles prohibieron esas ceremonias en el siglo XVII, pero éstas continúan bajo la fachada de la liturgia cristiana: los dioses andinos se ocultaban tras los iconos cristianos, convirtiéndose así en santos. La fiesta de Ito fue transformada en ritual cristiano: la Candelaria (el 2 de febrero), y la tradicional "lama lama" o "diablada" se convirtió en el baile principal de Oruro.

Todos los años, durante seis días, ese carnaval da lugar el despliegue de toda una gama de artes populares en forma de máscaras, tejidos y bordados. El principal acontecimiento es la procesión ("entrada"), durante la cual los bailarines recorren durante veinte horas, sin interrupción, los cuatro kilómetros de la procesión. Más de 28.000 bailarines y 10.000 músicos repartidos en unos cincuenta grupos participan en el desfile, que ha sabido conservar las características tomadas a los misterios medievales.

El declive de las actividades mineras y agrícolas tradicionales amenaza a la población de Oruro, así como la desertización del altiplano andino, que provoca una emigración masiva. La urbanización ha producido un fenómeno de aculturación, abriendo una brecha creciente entre las generaciones. Otro peligro es la explotación financiera incontrolada del carnaval.

iii. Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos[201].

Inscrito en 2012, la Ichapekene Piesta es una festividad sincrética que reinterpreta el mito fundacional moxeño de la victoria jesuítica de San Ignacio de Loyola, asociándolo a las creencias y tradiciones indígenas. Los festejos dan comienzo en el mes de mayo con fuegos artificiales, cantos y alabanzas, y prosiguen en el mes de junio con celebraciones de misas diurnas y nocturnas, velatorios, donaciones de limosnas y banquetes. La principal representación de la victoria de San Ignacio consiste en una representación escénica en la que doce guerreros solares con tocados de plumas espectaculares combaten a los guardianes de la Santa Bandera –"señores" primigenios de los bosques y las aguas– antes de acabar convirtiéndolos al cristianismo.

Estos rituales constituyen un acto de fe y renovación constante que permiten a los moxeños renacer al cristianismo en presencia de sus espíritus ancestrales. En la

[201] https://ich.unesco.org/es/RL/ichapekene-piesta-la-fiesta-mayor-de-san-ignacio-de-moxos-00627 [consultado en abril de 2019].

procesión principal participan 48 grupos disfrazados con máscaras de antepasados y animales que destacan la importancia otorgada al respeto de la naturaleza. Estos grupos festivos gastan bromas y bailan al son de la música barroca de las misiones jesuíticas hasta que, en torno de la medianoche, hacen surgir de sus sombreros bengalas y petardos que simbolizan el don de la luz y la clarividencia para vivir en armonía con la biodiversidad.

iv. El Pujllay y el Ayarichi: músicas y danzas de la cultura yampara[202].

Inscrito en 2014, tanto el Pujllay como el Ayarichi son formas musicales y coreográficas de la cultura yampara que se complementan formando un todo. El Pujllay se practica en la época de las lluvias y el Ayarichi en la temporada seca.

El Pujllay lo ejecutan principalmente hombres en el transcurso de un ritual del mismo nombre que celebra la renovación de la vida y la abundancia traída por la época de las lluvias. Los sonidos, bailes y atuendos evocan al "Tata Pujllay", ente demoníaco y fecundo que posee una energía desbordante. Un grupo de músicos toca con varias flautas y una especie de clarinete de cuerno. Los danzarines, suntuosamente vestidos como el "Tata Pujllay", giran incansablemente alrededor de un gran altar bellamente adornado con alimentos, en señal de abundancia.

El Ayarichi se baila en fiestas dedicadas a los diferentes santos católicos que rigen el orden social y cósmico e influyen en la conservación de la vida. El grupo de ejecutantes de este ritual comprende cuatro músicos-bailarines –que tocan simultáneamente una flauta de Pan y un tambor– y unas dos a cuatro bailarinas. De la confección de los trajes se encargan artesanas, que los tejen con suma minuciosidad cuidando hasta el más mínimo detalle. La ejecución de ambos ritos moviliza un vasto conjunto de redes comunitarias que aportan bebidas y alimentos en abundancia. La transmisión de los conocimientos y técnicas musicales y coreográficas a los niños se efectúa generalmente mediante juegos colectivos infantiles y la observación de los adultos, sin intervención directa de estos últimos.

v. Recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alasita[203].

[202] https://ich.unesco.org/es/RL/el-pujllay-y-el-ayarichi-musicas-y-danzas-de-la-cultura-yampara-00630 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2017, los participantes en los recorridos rituales efectuados en la ciudad de La Paz durante la Feria de la Alasita –que comienza el 24 de enero y dura unas dos o tres semanas– buscan y adquieren figuritas de la buena suerte vinculadas al culto de Ekeko, deidad aimara de la abundancia y protectora de la ciudad. Consagradas luego por ritualistas andinos o bendecidas por sacerdotes católicos, esas figuritas cobran así un nuevo significado para quienes han depositado su fe en ellas a fin de convertir sus deseos en realidad. Los participantes en la feria también intercambian figuritas para satisfacer simbólicamente sus deudas. La comunidad de practicantes y depositarios de esta tradición cultural abarca un número considerable de partes interesadas, y los habitantes de la capital boliviana participan ampliamente en su celebración, sea cual sea su condición social.

Este elemento del patrimonio cultural fomenta la cohesión social, se transmite de generación en generación y estrecha las relaciones familiares. Además, la importancia que esta práctica tradicional concede a las donaciones y los pagos de deudas –por simbólicos que sean– contribuye a apaciguar las tensiones entre las personas, e incluso entre las clases sociales.

Las prácticas de la Alasita se transmiten naturalmente en el seno de las familias, ya que los niños acompañan a sus padres en los recorridos rituales. Los esfuerzos realizados para salvaguardar este elemento han sido constantes y han dependido principalmente de la sociedad civil. Algunas colecciones y exposiciones en museos han contribuido a sensibilizar al público a la importancia cultural de determinados temas de la Alasita. Además, para fomentar la fabricación artesanal de figuritas y la creatividad se organizan concursos municipales a los que acude con entusiasmo un número cada vez mayor de participantes.

- **Brasil.**

i. Las expresiones orales y gráficas de los wajapi[204].

---

[203] https://ich.unesco.org/es/RL/recorridos-rituales-en-la-ciudad-de-la-paz-durante-la-alasita-01182 [consultado en abril de 2019].

[204] https://ich.unesco.org/es/RL/las-expresiones-orales-y-graficas-de-los-wajapi-00049 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2008 (originalmente proclamado en 2003), los wajapi, que pertenecen al grupo etnolingüístico tupi-guaraní, son una población indígena del norte de la Amazonia. Los wajapi tienen una remota tradición que consiste en utilizar tintes vegetales para adornar sus cuerpos y otros objetos con motivos geométricos. En el transcurso de los siglos, han ido desarrollando un lenguaje único, mezcla de arte gráfico y verbal, que refleja su visión particular del mundo y mediante el cual transmiten los conocimientos esenciales de la vida de la comunidad.

Los motivos de este arte gráfico único, llamado kusiwa, se realizan con tintes vegetales rojos que se extraen de una planta del Amazonas, la bija, mezclada con resinas odoríficas. El arte kusiwa es tan complejo que los wajapi consideran que la competencia técnica y artística necesaria para dominar el arte del dibujo y preparar los tintes no puede alcanzarse antes de los cuarenta años. Los motivos más recurrentes suelen ser el jaguar, la anaconda, la mariposa y el pez. Los dibujos kusiwas evocan la creación de la humanidad y cobran vida a través de los numerosos mitos en torno a la aparición del hombre. Este grafismo corporal, estrechamente vinculado a las antiguas tradiciones orales amerindias, posee varias significaciones a distintos niveles sociológicos, culturales, estéticos, religiosos y metafísicos. De hecho, el kusiwa constituye la estructura genuina de la sociedad wajapi y su significación va mucho más allá de su mera dimensión artística. Ese repertorio codificado de conocimientos tradicionales evoluciona de forma permanente, ya que los artistas indígenas renuevan constantemente los motivos mediante la reinterpretación o la invención.

Aunque los wapajis están afincados en un territorio protegido, su modo de vida tradicional, y en particular la práctica del kusiwa, corren el peligro de perder su significación simbólica, e incluso de desaparecer por completo. Esa alteración modificaría radicalmente las referencias estéticas, sociales y cosmológicas de la comunidad. El principal peligro procede de la falta de interés de las jóvenes generaciones, del número cada vez más reducido de wapaji que conocen bien el kusiwa y de la indiferencia de la sociedad contemporánea.

ii. La Samba de Roda de Recôncavo de Bahía[205].

[205] https://ich.unesco.org/es/RL/la-samba-de-roda-de-reconcavo-de-bahia-00101 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2008, originalmente proclamado en 2005, la Samba de Roda es un acontecimiento popular festivo que combina música, baile y poesía. Apareció en el siglo XVII en el Estado de Bahía, cerca de Recôncavo y procede de los bailes y tradiciones culturales de los esclavos africanos de la región. También contiene elementos de la cultura portuguesa como la lengua, la poesía y algunos instrumentos musicales. Aunque empezó siendo un componente principal de la cultura regional popular entre los brasileños de origen africano, la Samba de Roda fue luego adoptada por los migrantes procedentes de Río de Janeiro e influenció la evolución de la samba urbana, que se convirtió en el símbolo de la identidad nacional brasileña en el siglo XX.

Este baile congrega a la gente en ocasiones específicas, como las fiestas católicas populares o los cultos afrobrasileños, pero también surge a veces de forma espontánea. Todos los presentes, incluyendo a los principiantes, son invitados a participar en el baile y a aprender a través de la observación y la imitación. Una de las características de esta samba es que los participantes se reúnen en círculo llamado roda. Generalmente, sólo bailan las mujeres. Una por una, se van situando en el centro del círculo formado por los otros bailarines, que cantan y baten palmas a su alrededor. Esta coreografía a menudo es improvisada y se basa en los movimientos de los pies, las piernas y las caderas. Uno de los movimientos más característicos es la famosa umbigada (movimiento de ombligo), de origen bantú, movimiento por el cual la bailarina invita a la que va a sucederla en el centro del círculo. Hay otros rasgos específicos, como el paso de baile llamado miudinho, la utilización de instrumentos raspados y de la viola machete, un laúd pequeño con cuerdas punteadas.

La influencia de los mass media y la competencia de la música popular contemporánea han contribuido a devaluar esta samba a los ojos de los jóvenes. El envejecimiento de los participantes y el número decreciente de artesanos capaces de fabricar algunos de los instrumentos constituyen una amenaza suplementaria para la transmisión de esa tradición.

iii. Frevo: arte del espectáculo del carnaval de Recife[206].

[206] https://ich.unesco.org/es/RL/frevo-arte-del-espectaculo-del-carnaval-de-recife-00603 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2012, el frevo es una expresión artística musical y bailada que se practica principalmente durante el carnaval de de Recife. El ritmo rápido, frenético y potente de su música, ejecutada por bandas de música militares y charangas, se basa en la fusión de géneros como la marcha, el tango brasileño, la contradanza, la polka y piezas de música clásica. La música es esencialmente urbana y al igual que el passo –la danza que la acompaña– es también dinámica y subversiva. La danza tiene sus orígenes en la destreza y agilidad de los luchadores de capoeira, que improvisan sus brincos al son electrizante de las orquestas y bandas de instrumentos de metal.

Los que practican el frevo y el passo son miembros de asociaciones que participan en los desfiles del carnaval. En las sedes de estas asociaciones se ofrece apoyo para preservar, transmitir y desarrollar las competencias y conocimientos relacionados con el frevo. Este elemento del patrimonio cultural también está estrechamente vinculado a las creencias y al universo simbólico de la religión de quienes lo practican. Varias asociaciones adoptan como distintivos colores que guardan relación con la fe religiosa de sus miembros y algunos de los ornamentos utilizados tienen también un significado religioso.

El frevo es fruto de la creatividad y riqueza cultural generadas por una combinación excepcional de la música, el baile, la capoeira, la artesanía y otros elementos que ponen de manifiesto el ingenio y la capacidad de creación de quienes lo practican. Esa capacidad para fomentar la creatividad humana y el respeto de la diversidad cultural son inherentes al frevo.

iv. El "Círio de Nazaré": procesión de la imagen de Nuestra Señora de Nazaret en la ciudad de Belem (Estado de Pará)[207].

Inscrito en 2013. Las festividades del "Círio de Nazaré" dan comienzo todos los años a partir del mes de agosto y su punto culminante es la gran procesión celebrada en honor de Nuestra Señora de Nazaret el segundo domingo de octubre de cada año, con motivo del traslado de una imagen de madera de la Virgen María desde la catedral de la Sé hasta la plaza del Santuario de Nazaret en la ciudad de Belem. Después de este acto religioso, las festividades se prolongan por espacio de dos semanas más. Prácticamente todos los vecinos de la ciudad participan en la

[207] https://ich.unesco.org/es/RL/el-cirio-de-nazare-procesion-de-la-imagen-de-nuestra-senora-de-nazaret-en-la-ciudad-de-belem-estado-de-para-00602 [consultado en abril de 2019].

procesión y grandes muchedumbres de peregrinos acuden desde todo Brasil para participar en una de las más grandes concentraciones religiosas del mundo.

Las festividades comprenden numerosos elementos que reflejan el carácter multicultural de la sociedad brasilera: prácticas culturales y culinarias tradicionales de la Amazonia; y objetos artesanales como los juguetes fabricados con madera de la variedad de palma local. La mezcla de lo sagrado y lo profano hace que este evento religioso tenga también facetas estéticas, turísticas, sociales y culturales. El uso de barcos en la procesión tiene un carácter simbólico ya que Nuestra Señora de Nazaret es la santa patrona de los marineros. Los fieles levantan altares en casas, tiendas, bares, mercados y edificios públicos de toda la ciudad.

La transmisión de esta práctica cultural tradicional se efectúa en el seno de las familias, cuando los padres asisten a los festejos acompañados por sus hijos. Para muchos, la festividad del Círio de Nazaré es una ocasión para retornar al hogar y reunirse con la familia, y para otros es una oportunidad para organizar manifestaciones políticas.

v. El círculo de capoeira[208].

Inscrito en 2014, la capoeira es una práctica cultural afrobrasileña que combina a un tiempo la lucha y la danza y que se puede considerar una expresión cultural tradicional, un deporte o incluso una especie de arte. Los capoeiristas forman un círculo y dos de ellos compiten en el centro de éste. Los movimientos ejecutados exigen una gran destreza corporal.

Los participantes que rodean a los competidores cantan y tocan las palmas e instrumentos de percusión. Los círculos de capoeira están integrados por hombres y mujeres y cada uno de ellos cuenta con un maestro, un contramaestre y varios discípulos. El maestro, que es el custodio de los conocimientos del círculo, debe enseñar el repertorio a los discípulos, mantener la cohesión del grupo y velar por la observancia de un código ritual. El maestro suele tocar un instrumento de percusión de una sola cuerda y es él quien inicia los cantos y marca los tiempos y el ritmo del juego. Todos los participantes tienen que ser capaces de fabricar instrumentos de música y tocarlos, cantar un repertorio común de cantos, improvisar canciones,

[208] https://ich.unesco.org/es/RL/el-circulo-de-capoeira-00892 [consultado en abril de 2019].

conocer los códigos de ética y comportamiento, y ejecutar los movimientos, pasos y gestos de ataque preceptivos.

En el círculo de capoeira los conocimientos y técnicas se transmiten mediante observación e imitación. El círculo también desempeña una función en estos tres ámbitos: la afirmación del respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos; el fomento de la integración social; y la memoria de la resistencia de los afrobrasileños a la opresión histórica.

- **Chile.**

i. El baile chino[209].

Inscrito en 2014, los bailes chinos son hermandades de músicos que expresan su fe por intermedio de la música, la danza y el canto, con motivo de la celebración de fiestas conmemorativas.

Esta expresión cultural, que se practica esencialmente desde la región del Norte Chico hasta la zona central de Chile, tiene cinco estilos plenamente diferenciados y cada uno de ellos lleva el nombre del valle o de la cuenca en la que predomina.

Organizados principalmente por hombres de las zonas rurales, los bailes chinos se caracterizan por la ejecución de saltos y flexiones de piernas al ritmo de una música instrumental isométrica interpretada con percusiones y flautas de origen precolombino. El abanderado del baile canta coplas de tema religioso, memorizadas o improvisadas, cuyas estrofas narran relatos piadosos, y le acompañan dos filas simétricas de músicos y bailarines, a partes iguales. Un tamborilero dirige la coreografía de las danzas y marca también el compás de la música. Cada grupo cuenta con un abanderado y acompañantes, que suelen ser mujeres. La música, las danzas y las coplas se aprenden mediante observación directa, imitación y transmisión en el seno de las familias.

Los bailes chinos son instrumento de participación en la vida social, que prestigian a los que participan en ellos. Constituyen modelos de integración y cohesión sociales que cuentan con la adhesión de casi totalidad de las comunidades

[209] https://ich.unesco.org/es/RL/el-baile-chino-00988 [consultado en abril de 2019].

locales y, además, confieren un sentimiento de identidad y solidaridad a quienes los practican

- **Colombia.**

i. El espacio cultural de Palenque de San Basilio[210].

Inscrito en 2008, originalmente proclamado en 2005, el pequeño pueblo de Palenque de San Basilio está situado en los contrafuertes de los Montes de María, al sureste de la capital regional Cartagena.

Palenque de San Basilio era una de aquellas comunidades fortificadas llamadas "palenques", que fueron fundadas por los esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII. De los muchos palenques que existían en épocas anteriores, sólo el de San Basilio ha sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose en un espacio cultural único.

El espacio cultural de Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. La organización social de la comunidad se basa en las redes familiares y en los grupos de edad llamados makuagro. La calidad de miembro del kuagro implica todo un sistema de derechos y deberes hacia los otros miembros del grupo, pero también una fuerte solidaridad interna. Todos los miembros del kuagro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los acontecimientos particulares.

Los complejos rituales fúnebres y las prácticas médicas son testimonios de los distintos sistemas espirituales y culturales que enmarcan la vida y la muerte en la comunidad de Palenque. Expresiones musicales tales como el "Bullernege sentado", el "Son palenquero" o el "Son de negro" acompañan las celebraciones colectivas tales como los bautismos, bodas y fiestas religiosas, así como las actividades de ocio.

Un elemento esencial del Espacio Cultural de Palenque de San Basilio es la lengua palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con las características gramaticales de lenguas bantúes. Esta lengua constituye un factor primordial que refuerza la cohesión social entre los miembros de la comunidad. Fuera de Palenque, sus habitantes sufren habitualmente de

[210] https://ich.unesco.org/es/RL/el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102 [consultado en abril de 2019].

discriminación racial y de los estereotipos étnicos que provocan un rechazo de sus valores culturales.

ii. El carnaval de Barranquilla[211].

Fue inscrito en 2008, aunque originalmente proclamado en 2003. Cada año, durante los cuatro días que preceden la Cuaresma, el Carnaval de Barranquilla presenta un repertorio de danzas y expresiones culturales de las distintas culturas colombianas. Por su situación geográfica en la costa del Caribe y por su auge económico durante el período colonial, la ciudad de Barranquilla se ha transformado en uno de los primeros centros de comercio del país y en un lugar de convergencia de los pueblos y culturas amerindias, europeas y africanas.

Este mestizaje de diversas tradiciones locales trasparece en numerosos aspectos del carnaval, y en particular en los bailes (como el mico y las micas originario de las Américas, el congo africano y el paloteo, de origen español), los géneros musicales (principalmente la cumbia, pero también otras variantes como la puya y el porro), y los instrumentos populares (tambora y alegre, maracas, claves, etc.). La música del carnaval suele ser interpretada por conjuntos de tambores o de instrumentos de viento. La cultura material de los objetos artesanales se expresa profusamente mediante carrozas, trajes, sombreros adornados y máscaras de animales. Grupos de bailarines con máscaras, actores, cantantes e instrumentistas deleitan a las multitudes con sus representaciones teatrales y musicales inspiradas tanto en los acontecimientos históricos como en la actualidad. La vida política contemporánea y sus personalidades son objeto de mofa en los discursos y canciones satíricas que dan un carácter burlesco al carnaval.

Gracias al creciente éxito que obtuvo en el siglo XX, el Carnaval de Barranquilla se ha transformado en una manifestación profesional que es objeto de una amplia cobertura mediática. Aunque esta evolución genera beneficios económicos a muchas familias de bajos ingresos, la creciente comercialización constituye una amenaza potencial para la supervivencia de numerosas expresiones tradicionales.

[211] https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-barranquilla-00051 [consultado en abril de 2019].

iii. Las procesiones de Semana Santa de Popayán[212].

Inscrito en 2009. Celebradas desde la época colonial, las procesiones de Semana Santa de la ciudad de Popayán son una de las más antiguas conmemoraciones tradicionales de toda Colombia. Desde el martes hasta el sábado anterior a la Pascua de Resurrección tienen lugar, entre las 20 y las 23 horas, cinco procesiones dedicadas respectivamente a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección, que recorren un itinerario de unos dos kilómetros por el centro de la ciudad. Los elementos centrales de las procesiones son los pasos, imágenes representativas de la Pasión de Cristo, creadas y agrupadas con arreglo a normas complejas, que se hacen desfilar con una rica ornamentación floral.

Las estatuas de los pasos, que son de madera y datan su mayoría de finales del siglo XVII, son acompañadas en su recorrido por hileras de fieles portadores de cirios y vestidos con hábitos religiosos. Son notables tanto la calidad artística de los dorados y la ebanistería de los pasos como la atmósfera sonora y olfativa (incienso) de las procesiones. Los preparativos de éstas duran todo el año y se efectúan ajustándose a normas que vienen transmitiéndose de generación en generación y se enseñan a los niños desde la edad de cinco años.

Las procesiones han generado un vocabulario y competencias específicas. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los participantes se definen y distribuyen con precisión. Estas procesiones no sólo atraen a un número considerable de visitantes del mundo entero, sino que además constituyen un factor importante de cohesión social y de reforzamiento del sentido colectivo de identidad de la población local.

iv. El Carnaval de Negros y Blancos[213].

Inscrito en 2009. Surgido de tradiciones nativas andinas e hispánicas, el Carnaval de Negros y Blancos es un gran acontecimiento festivo que tiene lugar todos los años, desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero, en San Juan de Pasto, al sudoeste de Colombia. El primer día de las festividades se celebra el Carnaval del

[212] https://ich.unesco.org/es/RL/las-procesiones-de-semana-santa-de-popayan-00259 [consultado en abril de 2019].

[213] https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287 [consultado en abril de 2019].

Agua, durante el cual se rocían calles y casas para crear una atmósfera lúdica. El 31 de diciembre tiene lugar el Desfile de Años Viejos, en el que los comparsas recorren las calles con monigotes satíricos que representan a personalidades y eventos de actualidad. Esta jornada finaliza con una cremación ritual del Año Viejo. Los dos últimos días del carnaval son los más importantes, cuando todos los participantes, sea cual sea su etnia, se maquillan de negro el primer día y de talco blanco el segundo para simbolizar así la igualdad y unir a todos los ciudadanos en una celebración común de la diferencia étnica y cultural.

El Carnaval de Blancos y Negros es un período de convivencia intensa, en el que los hogares se convierten en talleres colectivos para la presentación y transmisión de las artes carnavalescas y en el que personas de todas clases se encuentran para expresar sus visiones de la vida. Esta fiesta reviste especial importancia como expresión del mutuo deseo de que el futuro esté presidido por un espíritu de tolerancia y respeto.

v. El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü'üi ("palabrero")[214].

Esta manifestación fue inscrita en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La comunidad de los wayuus está asentada en la península de La Guajira, situada entre Colombia y Venezuela. Su sistema normativo comprende un conjunto de principios, procedimientos y ritos que rigen la conducta social y espiritual de la comunidad. Inspirado en principios de reparación y compensación, este sistema es aplicado por las autoridades morales autóctonas: los pütchipü'üis o "palabreros", personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes matriarcales de los wayuus. Cuando surge un litigio, las dos partes en conflicto, los ofensores y los ofendidos, solicitan la intervención de un pütchipü'üi. Tras haber examinado la situación, éste comunica a las autoridades pertinentes su propósito de resolver el conflicto por medios pacíficos. Si la palabra –pütchikalü– se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü'üi.

---

214 https://ich.unesco.org/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-putchipuui-palabrero-00435 [consultado en abril de 2019].

El sistema de compensación recurre a símbolos, representados esencialmente por la oferta de collares confeccionados con piedras preciosas o el sacrificio de vacas, ovejas y cabras. Incluso los crímenes más graves pueden ser objeto de compensaciones, que se ofrecen en el transcurso de ceremonias especiales a las que se invita a las familias en conflicto para restablecer la armonía social mediante la reconciliación. La función de pütchipü'üi recae en tíos maternos –parientes especialmente respetados en el sistema de clanes matriarcales de los wayuus– que se destacan por sus virtudes en el plano ético y moral.

vi. Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí[215].

Inscrito en 2011. Las estructuras míticas y cosmológicas que componen los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí constituyen el patrimonio étnico de numerosos grupos étnicos asentados a orillas del río Pirá Paraná, que fluye en el Departamento del Vaupés, al sudeste de Colombia. Según la sabiduría ancestral, el Pirá Paraná es el centro de un vasto espacio denominado el territorio de los jaguares de Yuruparí, cuyos sitios sagrados encierran una energía espiritual vital que nutre a todos los seres vivientes del mundo. Los chamanes jaguares siguen un calendario de rituales ceremoniales, basados en sus conocimientos sagrados tradicionales, con miras a agrupar a la comunidad, curar a las personas, prevenir las enfermedades y revitalizar la naturaleza. Los rituales comprenden canciones y danzas que embellecen los procesos de curación. Se reputa que la energía vital y los conocimientos tradicionales de los chamanes se han heredado de un mítico Yuruparí omnipotente, una anaconda que vivió como persona y que se encarna en unas preciadas trompetas sagradas fabricadas con madera de palma.

Cada grupo étnico posee sus propias trompetas yuruparí, que son el elemento central de un ritual muy estricto denominado Hee Biki. Durante la ejecución de este ritual, se transmiten a los jóvenes varones normas tradicionales para la preservación de la salud del cuerpo y la conservación del territorio, en el contexto de su paso a la edad adulta. Los conocimientos tradicionales sobre la preparación de alimentos y los cuidados a niños y mujeres embarazadas se transmiten entre las mujeres.

---

215 https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupari-00574 [consultado en abril de 2019].

vii. Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó[216].

Inscrito en 2012 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Cada año, desde el 3 de septiembre hasta el 5 de octubre, los doce barrios franciscanos de la ciudad de Quibdó (Colombia) organizan la Fiesta de San Pancho. Esta celebración de la identidad de la comunidad de origen africano del Departamento del Chocó está muy arraigada en la religiosidad popular. La fiesta comienza con la solemne misa inaugural católica celebrada en la catedral, que se mezcla con la ejecución de danzas tradicionales al son de la música de chirimía (género orquestal chocoano) ejecutada por la Banda de San Francisco de Asís. Luego tiene lugar un desfile carnavalesco con disfraces, bailes y chirimías. Cada barrio ofrenda una misa por la mañana y organiza un desfile de carrozas alegóricas y grupos carnavalescos por la tarde. El 3 de octubre se hace descender en barca la imagen del Santo Patrón por las aguas del río Atrato, y el 4 de octubre la muchedumbre saluda el nacimiento del alba entonando himnos devotos, antes de participar por la tarde en la Gran Procesión del Santo. Los artistas y artesanos locales, junto con los jóvenes que aprenden a su lado, realizan las carrozas, los altares de los barrios, la indumentaria y las ornamentaciones de las calles. En cada barrio hay familias que desempeñan la función de depositarias de la tradición y, por intermedio de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, organizan eventos, preservan las competencias y los conocimientos relativos a este elemento del patrimonio cultural y lo mantienen vivo.

El Festival de San Pancho es el evento simbólico más importante en la vida de la ciudad de Quibdó. Fortalece la identidad del Departamento del Chocó y fomenta la cohesión social de la comunidad, propiciando al mismo tiempo la creatividad y la innovación al revitalizar y recrear los conocimientos tradicionales y el respeto de la naturaleza.

viii. Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas[217].

---

216 https://ich.unesco.org/es/RL/fiesta-de-san-francisco-de-asis-en-quibdo-colombia-00640 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2015 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad y corresponde a Colombia y Ecuador.

La música de marimba y los cantos y bailes tradicionales son expresiones musicales que forman parte integrante del tejido social –familiar y comunitario– de la población descendiente de africanos asentada en la región colombiana del Pacífico Sur, así como en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Los hombres y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo, en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos. La música de marimba se toca con un xilófono de madera de palma, equipado con tubos resonadores de bambú, y se acompaña con sones de tambores y maracas. Este elemento del PCI está profundamente arraigado en las familias, así como en las actividades de la vida diaria. Por eso, se considera que sus practicantes y depositarios son los miembros de la comunidad en su conjunto, sin distinción de sexo o edad. Las personas de mayor edad de la comunidad desempeñan el papel esencial de transmisores de las leyendas y narraciones de la tradición oral a las generaciones más jóvenes, mientras que los profesores de música supervisan la transmisión de los conocimientos musicales.

La música de marimba y los cantos y danzas tradicionales propician los intercambios simbólicos, comprendidos los de alimentos y bebidas. También fomentan la integración a nivel familiar y colectivo, gracias a prácticas ancestrales que fortalecen el sentimiento de pertenencia a un grupo humano específico vinculado a un territorio y un pasado histórico comunes.

- **Costa Rica.**

i. La tradición del boyeo y las carretas[218].

---

[217] https://ich.unesco.org/es/RL/musica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-region-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099 [consultado en abril de 2019].

[218] https://ich.unesco.org/es/RL/la-tradicion-del-boyeo-y-las-carretas-00103 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2005).

La tradicional carreta de bueyes es el tipo de artesanía más famoso de Costa Rica. Desde mediados del siglo XIX, las carretas de bueyes eran utilizadas para transportar el grano de café desde el valle central de Costa Rica, en las montañas, a Puntarenas, en la costa del Pacífico. Un viaje requería de 10 a 15 días. Las carretas de bueyes tenían ruedas sin radios, un híbrido entre el disco usado por los aztecas y la rueda de radios introducida por los españoles, para avanzar en medio del fango sin atascarse. En muchos casos, las carretas de bueyes eran el único medio de transporte de una familia y simbolizaban su estatuto social.

La tradición de pintar y engalanar las carretas comenzó a principios del siglo XX. Originalmente, cada región de Costa Rica tenía su propio diseño, lo que permitía identificar el origen del boyero por los motivos pintados en las ruedas. A principios del siglo XX, flores, rostros y paisajes en miniatura empezaron aparecer al lado de los motivos que representaban estrellas puntiagudas. Se organizaron concursos anuales para premiar a los artistas más creativos, costumbre que aún perdura.

Cada carreta de bueyes se fabrica para producir su propio "canto", un carillón único producido por un anillo del metal que golpea el cubo de la rueda cuando la carreta traquetea por los caminos. Cuando las carretas de bueyes se convirtieron en motivo de orgullo individual, se las construía con mayor cuidado, seleccionando las maderas de mejor calidad para producir los mejores sonidos.

Las carretas variopintas y ricamente engalanadas de hoy se parecen poco a los vehículos originales rectangulares, con un cuadro de caña y toscamente labrados y cubiertos de cuero sin curtir. En la mayoría de las regiones de Costa Rica, los camiones y los trenes han substituido a las carretas como principal medio de transporte, pero éstas siguen siendo símbolos fuertes del pasado rural del país, y aún ocupan un lugar importante en los desfiles y las celebraciones religiosas y profanas.

Al convertirse la mayoría de las carretas en un medio de transporte obsoleto, se ha reducido la demanda de carretas, y por tanto también ha disminuido en las últimas décadas el número de artesanos que dominan la técnica para fabricarlas y decorarlas.

- **Cuba.**

i. La Tumba Francesa[219].

Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003).

El tipo de baile, canto y percusión llamado Tumba Francesa (tambor francés) llegó a Cuba con los esclavos haitianos, que fueron trasladados a la parte oriental del país tras las revueltas que sacudieron Haití en 1790. Los primeros testimonios escritos de esta tradición datan de principios del siglo XIX. Esta danza encarna uno de los vínculos más antiguos y visibles con el patrimonio afrohaitiano de la provincia cubana de Oriente. Es el fruto de la fusión, en el siglo XVIII, de la música de Dahomey (África occidental) y de los bailes tradicionales franceses. Tras la abolición de la esclavitud en Cuba en 1886 y la migración urbana de los libertos en busca de trabajo, surgieron las sociedades de Tumba Francesa en varias ciudades del Este de la isla.

Las interpretaciones suelen comenzar con un solo en un dialecto español o francés interpretado por el cantante principal, llamado composé. Cuando este da la señal, el catá, un gran idiófono de madera, arranca con un ritmo frenético al que replican tres tambores llamados tumbas. Esos instrumentos, que se tocan con la mano, se parecen a las congas modernas. Se fabrican con un tronco de madera hueca de una sola pieza y se adornan con motivos grabados y pintados. Las danzas se ejecutan bajo la dirección del Mayor de Plaza. Los bailarines y el coro están formados principalmente por mujeres. Estas van ataviadas con vestidos largos al estilo colonial, se cubren la cabeza con pañuelos africanos y llevan en la mano pañuelos variopintos. Los cantantes acompasan el ritmo con chachás, que son sonajeros metálicos. Las representaciones consisten en series de cantos y danzas de media hora de duración y suelen prolongarse hasta bien entrada la noche.

La popularidad de la Tumba Francesa alcanzó su apogeo al final del siglo XIX. Actualmente, sólo se interpretan regularmente dos de los numerosos estilos de Tumba Francesa: el masón, una parodia jocosa de los bailes de salón franceses, y el yubá, un baile improvisado basado en ritmos frenéticos de tambor.

[219] https://ich.unesco.org/es/RL/la-tumba-francesa-00052 [consultado en abril de 2019].

ii. La rumba cubana[220].

Inscrito en 2016 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad.

La música y los movimientos de la rumba de Cuba están vinculados a la cultura africana, pero también poseen algunos elementos característicos de la cultura antillana y el flamenco español. La rumba surgió antaño en barrios marginados de algunas ciudades como La Habana y Matanzas, así como en las proximidades de algunos puertos y en poblados de chabolas, llegando a ser especialmente popular en las zonas rurales habitadas por comunidades de esclavos africanos. Al extenderse desde el oeste hacia el este del país, la rumba llegó a ser un símbolo importante de un estrato marginado de la sociedad cubana y de su identidad. Este elemento del patrimonio cultural cubano es la expresión de un espíritu de resistencia y autoestima, así como un instrumento de sociabilidad que enriquece la vida de las comunidades que lo practican. La ejecución de la rumba comprende formas verbales y gestuales de comunicación: cantos, movimientos, palmadas, bailes y un lenguaje corporal específico.

Los instrumentos de percusión, las herramientas de trabajo y los utensilios domésticos utilizados para las músicas rumberas forman parte integrante de esta práctica cultural. Cuando los intérpretes ejecutan la rumba con sus códigos culturales específicos y establecen una interacción con el público, se crea una atmósfera festiva y los cantos y bailes evocan una gracia, una sensualidad y una alegría propicias al acercamiento entre las personas, sean cuales sean su condición socioeconómica, su sexo o su origen étnico. La práctica de la rumba cubana se transmite de generación en generación en el seno de las familias y entre vecinos.

iii. El punto[221].

Inscrito en 2017, el punto es una expresión poética y musical de los guajiros cubanos consistente en una tonada o melodía acompañada por la voz de una persona que canta composiciones poéticas en décimas, improvisadas o aprendidas. Existen dos variantes principales de esta práctica musical: el punto libre, con compás

[220] https://ich.unesco.org/es/RL/la-rumba-cubana-mezcla-festiva-de-baile-y-musica-y-todas-las-practicas-culturales-inherentes-01185 [consultado en abril de 2019].

[221] https://ich.unesco.org/es/RL/el-punto-01297 [consultado en abril de 2019].

variable; y el punto fijo, en clave o cruzado. Aunque a lo largo de la historia este género musical se ha venido practicando tradicionalmente por los habitantes de las zonas rurales, hoy en día se encuentran variantes suyas practicadas por el resto de la población cubana. El punto es un elemento esencial del PCI de Cuba, abierto a todos, que propicia el diálogo y expresa los sentimientos, conocimientos y valores de las comunidades que lo practican.

Las técnicas y los conocimientos vinculados a este elemento cultural tradicional se transmiten de generación en generación, esencialmente por medio de la imitación. Por todo el país, las Casas de Cultura llevan a cabo un programa de enseñanza del punto guajiro que comprende la organización de talleres animados por los depositarios y practicantes de este género musical. Además, en toda Cuba se celebran seminarios, concursos, festivales y eventos de diverso tipo con vistas a salvaguardarlo y revitalizarlo. Por último, cabe destacar que se ha creado una categoría profesional de intérpretes del punto, lo que ha permitido vivir de su interpretación a muchos de sus practicantes y depositarios.

iv. Las Parrandas de la región central de Cuba[222].

Inscrito en 2018, las Parrandas, que tuvieron lugar por primera vez el año 1820 en el municipio de Remedios, son fiestas celebradas hoy en día por dieciocho comunidades de la región central de Cuba durante los últimos meses del año en su mayoría.

Dos partes o barrios de un mismo municipio preparan a lo largo de todo el año una competición cultural que tiene lugar la noche de celebración del festejo. Ambos competidores cuentan con "espías" que tratan de desvelar las sorpresas preparadas en secreto por sus rivales para esa noche. Esta festividad comprende una gran variedad de expresiones culturales: diseño y fabricación de carrozas, indumentarias y réplicas de monumentos; composición de canciones y preparación de coreografías; fuegos artificiales; y elaboración de elementos decorativos como faroles, estandartes y emblemas con los colores de cada barrio competidor. Todos los habitantes de las dieciocho comunidades interesadas, sin distinción de sexo, edad, origen, medio social, profesión y religión participan en las diversiones.

[222] https://ich.unesco.org/es/RL/las-parrandas-de-la-region-central-de-cuba-01405 [consultado en abril de 2019].

El engalanamiento de monumentos y la creación de réplicas de éstos, así como de carrozas, son una asombrosa demostración de la imaginación y creatividad que poseen los grupos de parranderos para reinterpretar y recrear sucesos e historias mediante imágenes, luces y colores de gran originalidad. Los conocimientos tradicionales vinculados a este elemento del patrimonio cultural se combinan constantemente con técnicas modernas, por eso las Parrandas son siempre un evento tradicional y contemporáneo a la vez.

- **Ecuador.**

i. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara[223].

Inscrito en 2008 -originalmente proclamado en 2001-, corresponde a Ecuador y Perú.

El pueblo zápara vive en una región de la selva amazónica situada entre el Perú y Ecuador. Afincados en una de las regiones del mundo más ricas en biodiversidad, los záparas son los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española. En pleno corazón del Amazonas, han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su terminología sobre la flora y la fauna y su conocimiento de las plantas medicinales de la selva. Este patrimonio cultural también se expresa a través de mitos, rituales, prácticas artísticas y de su lengua. Esta, que es la depositaria de sus conocimientos y de su tradición oral, representa también la memoria de toda la región.

Cuatro siglos de historia marcados por la conquista española, la esclavitud, las epidemias, las conversiones forzosas, las guerras o la deforestación han diezmado a este pueblo. Sin embargo, y pese a tantas amenazas, los záparas han sabido preservar sus conocimientos ancestrales. Gracias a los matrimonios con otros pueblos indígenas (quechuas y mestizos), este pueblo ha logrado sobrevivir. Pero esta dispersión implica también la pérdida de una parte de su identidad. La situación del pueblo zápara es crítica y no se excluye el riesgo de extinción.

[223] https://ich.unesco.org/es/RL/el-patrimonio-oral-y-las-manifestaciones-culturales-del-pueblo-zapara-00007 [consultado en abril de 2019].

ii. Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla[224].

Inscrito en 2012, el sombrero de paja toquilla (también llamado sombrero panamá o jipijapa) se teje con las fibras de una palmera peculiar que crece en las costas del Ecuador. Los agricultores del litoral cultivan los toquillales y recogen los tallos a fin de separar luego la fibra de la corteza verde, hirviendo esta última para eliminar la clorofila y secándola después con carbón de leña y azufre para que se blanquee. Con esta materia prima, los tejedores comienzan el tejido de la copa y del ala del sombrero. El tejido de un sombrero puede durar de un día a ocho meses, según su calidad y finura. En la comunidad costera de Pile, los tejedores confeccionan sombreros extrafinos que requieren la existencia de condiciones climáticas específicas y un número exacto de puntos en cada hilera del tejido.

Finalmente se lava y se blanquea el sombrero antes de plancharlo y hornearlo. Los tejedores son en su mayoría familias campesinas y las técnicas de tejido se transmiten a los niños en el hogar, mediante la observación y la imitación, desde una edad muy temprana. Las técnicas y conocimientos engloban una trama social compleja y dinámica que comprende, entre otros elementos, las técnicas tradicionales de cultivo y producción, diversas formas de organización social y el uso del sombrero como parte de la indumentaria cotidiana y festiva. Para las comunidades que la perpetúan, esta tradición artesanal constituye un rasgo distintivo de su identidad y un componente de su patrimonio cultural.

iii. Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Ya se vio este elemento en el turno de Colombia.

- **Guatemala.**

i. La tradición del teatro bailado Rabinal Achí[225].

[224] https://ich.unesco.org/es/RL/tejido-tradicional-del-sombrero-ecuatoriano-de-paja-toquilla-00729 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2005), el Rabinal Achí es un drama dinástico maya del siglo XV y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. En él se presentan mitos acerca de los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como temas populares y políticos, y se expresa con bailes de máscaras, teatro y música.

El relato oral y escrito es presentado por un grupo de personajes que aparecen en la escena que representa los poblados mayas, como Kajyub', la capital regional de Rabinaleb' en el siglo XIV. El relato, dividido en cuatro actos, trata del conflicto entre dos instituciones políticas importantes de la región. Los personajes principales son dos príncipes, el Rabinal Achí y el K'iche Achí. Los otros personajes son el rey de Rabinaleb', Job'Toj; y su sirviente, Achij Mun Achij Mun Ixoq Mun, que tiene rasgos a la vez masculinos y femeninos; la madre de las plumas verdes, Uchuch Q'uq' Uchuch Raxon; trece águilas y trece jaguares que representan los guerreros de la fortaleza de Kajyub'. K'iche' Achí es capturado y procesado por haber intentado raptar a los hijos de Rabinaleb', una grave violación de la ley maya.

Desde la colonización en el siglo XVI, el Rabinal Achí se ha venido representando el día de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. La fiesta es organizada por los miembros de las cofradías, hermandades locales encargadas de la gestión de la comunidad. Al bailar, los vivos entran en contacto con los muertos, los rajawales, representados por máscaras. El recuerdo de los antepasados no es sólo una manera de perpetuar el patrimonio del pasado, sino también una visión del futuro, puesto que un día los vivos se reunirán con sus antepasados.

El conflicto armado, especialmente en los departamentos de Rabinal y K'iche, casi ha hecho desaparecer este baile por completo, viéndose amenazado, además, por la precariedad de la situación económica de los que lo preservan y de la comunidad en su conjunto. También se ve confrontado a la folclorización y la trivialización, que amenazan seriamente la transmisión del conocimiento y los valores asociados a la interpretación de esta tradición teatral.

[225] https://ich.unesco.org/es/RL/la-tradicion-del-teatro-bailado-rabinal-achi-00144 [consultado en abril de 2019].

ii. La lengua, la danza y la música de los garífunas[226].

Corresponde no solo a Guatemala, sino también a Belice, Honduras y Nicaragua. Inscrito en el 2008 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad, originalmente proclamado en 2001.

Las garífunas proceden del mestizaje de varios grupos originarios de África y del Caribe, cuyos elementos culturales integraron. En el siglo XVIII, se establecieron en la costa atlántica de América Central tras verse obligados a huir de la isla de San Vicente. Actualmente estas comunidades viven en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice.

La lengua garífuna pertenece a la familia de lenguas arawak y ha sobrevivido a siglos de persecución y dominación lingüística. Poseen una gran riqueza de úragas, relatos que se narraban durante las veladas o las grandes reuniones. Las melodías reúnen elementos africanos y amerindios y los textos constituyen una verdadera reserva de la historia y el saber tradicional de los garífunas sobre el cultivo del manioc o mandioca, la pesca, la fabricación de canoas y la construcción de casas de barro cocido. Hay también un fuerte componente satírico en las canciones que se cantan al ritmo de los tambores y se acompañan de bailes en los que participan los espectadores.

- **México.**

i. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos[227].

Inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (originalmente proclamado en 2003).

Con la fiesta del Día de los Muertos, tal como la practican las comunidades indígenas, se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y

[226] https://ich.unesco.org/es/RL/la-lengua-la-danza-y-la-musica-de-los-garifunas-00001 [consultado en abril de 2019].

[227] https://ich.unesco.org/es/RL/las-fiestas-indigenas-dedicadas-a-los-muertos-00054 [consultado en abril de 2019].

principios de noviembre. Este período marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país.

Para facilitar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen pétalos de flores y colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio. Se preparan minuciosamente los manjares favoritos del difunto y se colocan alrededor del altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y de objetos artesanales, como las famosas siluetas de papel. Estos preparativos se realizan con particular esmero, pues existe la creencia de que un difunto puede traer la prosperidad o la desdicha según le resulte o no satisfactorio el modo en que la familia haya cumplido con los ritos. Los muertos se dividen en varias categorías en función de la causa del fallecimiento, edad, sexo y, en ciertos casos, profesión. Se atribuye un día específico de culto para cada categoría. Este encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto político y social de las comunidades indígenas de México.

Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos están profundamente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México. Esta fusión entre ritos religiosos prehispánicos y fiestas católicas permite el acercamiento de dos universos, el de las creencias indígenas y el de una visión del mundo introducida por los europeos en el siglo XVI.

ii. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado[228].

Inscrito en 2009 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad.

El pueblo otomí-chichimeca, asentado en la zona semidesértica del Estado de Querétaro, en el centro de México, ha conservado un conjunto de tradiciones que son testimonio de su relación excepcional con la topografía y el medio ambiente circundantes. Su entorno cultural está presidido por el triángulo simbólico que forman la Peña de Bernal y los cerros del Zamorano y el Frontón. Todos los años, los otomí-chichimecas se congregan para ir en peregrinación a estas elevaciones

[228] https://ich.unesco.org/es/RL/lugares-de-memoria-y-tradiciones-vivas-de-los-otomi-chichimecas-de-toliman-la-pena-de-bernal-guardiana-de-un-territorio-sagrado-00174 [consultado en abril de 2019].

sagradas llevando cruces milagrosas, a fin de impetrar la lluvia y la protección divina, venerar a sus antepasados y exaltar la identidad y continuidad de su comunidad.

A lo largo de todo el año tienen lugar otras festividades comunitarias que constituyen todo un calendario de celebraciones de ritos centrados en el agua –un elemento muy escaso debido al clima de la región– y que exaltan la capacidad de resistencia del pueblo otomí-chichimeca. La celebración de los ritos suele efectuarse en capillas familiares privadas consagradas al culto de los antepasados, o se manifiesta con la elevación de los chimales, que son imponentes estructuras temporales construidas con carrizo y recubiertas de plantas silvestres, constituyendo ofrendas y símbolos de la resistencia, la vitalidad y sentimiento de identidad de la comunidad.

El vínculo entre la cultura espiritual y el espacio físico ejerce una influencia en el arte de la región –en particular en las imágenes religiosas, las pinturas murales, las danzas y la música– y las costumbres que encarnan ese vínculo son componentes esenciales de la identidad cultural de la comunidad.

iii. La ceremonia ritual de los Voladores[229].

Inscrito en 2009 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad, la ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad que ejecutan diversos grupos étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos del Estado de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos.

En el transcurso de la ceremonia, cuatro jóvenes trepan por un mástil de 18 a 40 metros de alto fabricado con el tronco de un árbol recién cortado en el bosque tras haber implorado el perdón del dios de la montaña. Sentado en la plataforma que remata el mástil, un quinto hombre, el caporal, toca con una flauta y un tambor melodías en honor del sol, así como de los cuatro vientos y puntos cardinales. Después de este acto de invocación, los danzantes se lanzan al vacío desde la plataforma a la que están atados por largas cuerdas, giran imitando el vuelo de los

[229] https://ich.unesco.org/es/RL/la-ceremonia-ritual-de-los-voladores-00175 [consultado en abril de 2019].

pájaros mientras la cuerda se desenrolla, y van descendiendo paulatinamente hasta el suelo. Cada variante de la danza ritual de los voladores representa un medio de hacer revivir el mito del universo, de modo que esta ceremonia expresa la visión del mundo y los valores de la comunidad, propicia la comunicación con los dioses e impetra la prosperidad.

Para los ejecutantes de esta danza y todas las personas que comulgan con la espiritualidad del rito en calidad de espectadores, la ceremonia de los voladores constituye un motivo para enorgullecerse de su patrimonio y de su identidad cultural, al mismo tiempo que suscita un sentimiento de respeto por ambos.

iv. Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo[230].

Inscrito en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la tradicional Fiesta Grande de Chiapa de Corzo tiene lugar del 4 al 23 de enero de cada año en esa localidad mexicana. La música, la danza, la artesanía, la gastronomía, las ceremonias religiosas y las diversiones forman parte de esta festividad en honor de Nuestro Señor de Esquipulas y de dos santos del catolicismo, San Antonio Abad y San Sebastián, siendo especialmente honrado este último.

Las danzas de los parachicos –término con el que se designa a la vez a los bailarines y al tipo de baile que ejecutan– se consideran una ofrenda colectiva a los santos venerados. Los bailarines recorren toda la localidad llevando las imágenes santas y visitando diversos lugares de culto, y sus danzas comienzan por la mañana y finalizan de noche. Con máscaras de madera esculpidas, tocados con monteras y vestidos con sarapes, chales bordados y cintas de colores, los bailarines van tocando unas sonajas de hojalata llamadas "chinchines". Los dirige un patrón portador de una máscara de expresión severa, una guitarra y un látigo, que toca la flauta acompañado por uno o dos tamborileros. Durante la danza, el patrón entona loas a las que los parachicos responden con aclamaciones.

La danza se transmite y se aprende al mismo tiempo que se ejecuta: los niños que participan en ella imitan los movimientos de los adultos. La técnica de

[230] https://ich.unesco.org/es/RL/los-parachicos-en-la-fiesta-tradicional-de-enero-de-chiapa-de-corzo-00399 [consultado en abril de 2019].

fabricación de las máscaras se transmite de generación en generación, desde la tala y el secado de la madera para fabricarlas hasta la ornamentación final, pasando por el aprendizaje del modo de esculpirlas. Durante la Fiesta Grande, la danza de los parachicos invade todos los ámbitos de la vida local, propiciando el respeto mutuo entre las comunidades, los grupos y las personas.

v. La pirekua, canto tradicional de los p'urhépechas[231].

Inscrito en 2010, la pirekua es un canto tradicional de las comunidades indígenas p'urhépechas del Estado de Michoacán (México) interpretado por hombres y mujeres. La diversidad de sus estilos resulta de la mezcla de influencias africanas, europeas y amerindias, y se han observado variaciones regionales. La pirekua, que se canta por regla general con un ritmo lento, puede presentar también estilos no vocales utilizando ritmos diversos como los sones y los abajeños. La pirekua se puede cantar en solo, en dúo o en trío, y también puede ir acompañada por coros, orquestas de cuerda y conjuntos musicales de instrumentos de cuerda y viento a la vez.

Los cantantes e intérpretes de la pirekua, denominados piréríechas, son reputados por su creatividad y sus interpretaciones de canciones antiguas. La letra de las canciones, en la que se recurre con mucha frecuencia al uso de símbolos, abarca una amplia gama de temas: desde los acontecimientos históricos hasta la religión, pasando por las ideas sociales y políticas, el amor y los noviazgos. La pirekua es un instrumento efectivo de diálogo entre las familias y las comunidades p'urhépechas que la practican, y contribuye al establecimiento y estrechamiento de vínculos entre ellas. Los piréríechas cumplen también una función de mediadores sociales, al utilizar las canciones para expresar sentimientos y comunicar acontecimientos importantes a las comunidades p'urhépechas.

vi. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. El paradigma de Michoacán[232].

[231] https://ich.unesco.org/es/RL/la-pirekua-canto-tradicional-de-los-purhepechas-00398 [consultado en abril de 2019].

[232] https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400 [consultado en abril de 219].

Inscrito en 2010 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad, la cocina tradicional mejicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares.

Los elementos básicos del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla.

El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el Estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Los esfuerzos realizados en Michoacán para preservar la cocina tradicional destacan también la importancia que ésta tiene como medio de desarrollo sostenible.

vii. El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta[233].

Inscrito en 2011, el mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano. Los mariachis tradicionales cuentan con dos o más músicos vestidos con indumentaria regional, inspirada en el traje de

[233] https://ich.unesco.org/es/RL/el-mariachi-musica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575 [consultado en abril de 2019].

charro, que interpretan un amplio repertorio de canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. Las orquestas que interpretan la música mariachi "moderna" cuentan con trompetas, violines, vihuelas y guitarrones, y suelen estar compuestas por cuatro o más músicos. El vasto repertorio de los mariachis abarca canciones de las diferentes regiones de México, jarabes, minués, polkas, valonas, chotis, valses, serenatas, corridos (baladas típicamente mexicanas que relatan combates, hazañas e historias de amor) y canciones tradicionales de la vida rural. La música mariachi moderna ha adoptado otros géneros musicales como la ranchera, el bolero ranchero, e incluso la cumbia colombiana.

El aprendizaje de oído es el principal medio de transmisión de la música mariachi tradicional y las competencias técnicas se transmiten de padres a hijos, y también por intermedio de los espectáculos organizados con motivo de festividades, ya sean religiosas o civiles. La música mariachi transmite valores que fomentan el respeto del patrimonio natural de las regiones mexicanas y de la historia local, tanto en español como en las diversas lenguas indígenas del oeste del país.

viii. La charrería, tradición ecuestre en México[234].

Inscrito en 2016 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad, la charrería es una práctica tradicional de comunidades de México dedicadas a la cría y el pastoreo del ganado a caballo. En sus orígenes, facilitaba la convivencia entre los ganaderos de diferentes estados del país. Las técnicas de esta práctica se transmitían a las generaciones más jóvenes en el seno de las familias.

Actualmente, asociaciones y escuelas especialmente dedicadas la charrería forman a miembros de las comunidades, entrenándolos incluso para participar en competiciones. La organización de concursos públicos o charreadas permite a los espectadores admirar la destreza de los charros en el arte de arrear y jinetear yeguas y toros cerriles. Luciendo una indumentaria tradicional con sombreros de ala ancha para los hombres y chales de colores para las mujeres, los charros hacen gala de sus habilidades a pie o a caballo. Son artesanos locales los que diseñan y fabrican la vestimenta, el equipamiento, las sillas de montar y las espuelas que forman parte del arte tradicional de los charros.

[234] https://ich.unesco.org/es/RL/la-charreria-tradicion-ecuestre-en-mexico-01108 [consultado en abril de 2019].

ix. La romería de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada de la Virgen[235].

Fue inscrito en 2018 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad.

Celebrada el 12 de octubre de cada año, la romería en honor de la Virgen de Zapopan es una tradición religiosa y cultural cuyo origen se remonta al año 1734. Ese día finaliza el ciclo anual del ritual popularmente conocido como "La Llevada de la Virgen", que comienza en el mes de mayo y comprende numerosas actividades de carácter litúrgico y comunitario. Al cerrarse ese ciclo, se celebra el regreso de la Virgen a su basílica de la localidad de Zapopan con una romería festiva en la que participan más de dos millones de personas.

Una de las principales características de este evento es la presencia masiva de diversos grupos de bailarines de comunidades indígenas. A lo largo de todo el año el planeamiento de este evento descansa en una estrecha interacción de diversas comunidades, lo cual propicia la renovación y el fortalecimiento de los vínculos sociales anudados entre ellas. Gracias al continuo apoyo de las comunidades a la romería, este elemento del patrimonio cultural se ha convertido en uno los más populares y arraigados del oeste de México. Agrupados en asociaciones civiles y eclesiásticas bien organizadas, los depositarios y practicantes del elemento han garantizado con éxito su supervivencia.

- **Perú.**

i. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara.

Fue analizado en el turno de Ecuador.

ii. El arte textil de Taquile[236].

---

[235] https://ich.unesco.org/es/RL/la-romeria-de-zapopan-ciclo-ritual-de-la-llevada-de-la-virgen-01400 [consultado en abril de 2019].

[236] https://ich.unesco.org/es/RL/el-arte-textil-de-taquile-00166 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2008 en la Lista, aunque fue originalmente proclamado en 2005.

La isla de Taquile está situada en el altiplano andino peruano, en el lago Titicaca, y es conocida por su artesanía textil realizada por hombres y mujeres de todas las edades, cuyos productos son usados por todos los miembros de la comunidad.

La población de Taquile vivió relativamente aislada del continente hasta los años cincuenta, y la noción de comunidad sigue siendo muy fuerte entre ellos. Esto se refleja en la organización de la vida comunitaria y en la toma de decisiones colectiva. La tradición de tejer en la isla de Taquile se remonta a las antiguas civilizaciones inca, pukara y colla, por lo que mantiene vivos elementos de las culturas andinas prehispánicas.

Los tejidos se hacen a mano o en telares prehispánicos de pedal. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con orejeras, y el cinturón-calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. El cinturón-calendario ha atraído el interés de muchos investigadores, ya que representa elementos de la tradición oral de la comunidad y de su historia. Aunque el diseño del arte textil de Taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales.

Taquile tiene una escuela especializada para aprender la artesanía local, lo que contribuye a la viabilidad y a la continuidad de la tradición. El turismo ha contribuido al desarrollo de la economía comunitaria, que se basa principalmente en el comercio textil y en esta actividad. Mientras que el turismo se considera como una manera eficaz de asegurar la continuidad de la tradición textil, la demanda creciente también se traduce en cambios significativos en cuanto al material, producción y significado.

iii. La huaconada, danza ritual de Mito[237].

Inscrito en 2010, la huaconada es una danza ritual que se representa en el pueblo de Mito, perteneciente a la provincia de Concepción, situada en la cordillera andina central del Perú.

[237] https://ich.unesco.org/es/RL/la-huaconada-danza-ritual-de-mito-00390 [consultado en abril de 2019].

Los tres primeros días del mes de enero de cada año, grupos de hombres enmascarados, denominados huacones, ejecutan en el centro del pueblo una serie de danzas coreografiadas. Los huacones representan el antiguo consejo de ancianos y se convierten en la máxima autoridad del pueblo mientras dura la huaconada. Ponen de relieve esta función tanto sus látigos, llamados "tronadores", como sus máscaras de narices prominentes que evocan el pico del cóndor, criatura que representa el espíritu de las montañas sagradas. En la danza intervienen dos clases de huacones: los ancianos, vestidos con atuendos tradicionales y portadores de máscaras finamente esculpidas que infunden respeto y miedo; y los más jóvenes, engalanados con indumentarias de colores y portadores de máscaras que expresan terror, tristeza o burla. Durante la huaconada, estos últimos ejecutan una serie de pasos de danza estrictamente limitados en torno a los ancianos que, debido a su edad, gozan de una mayor libertad para improvisar movimientos. Una orquesta toca diversos ritmos al compás de la "tinya", un tamboril indígena. La huaconada, que es una síntesis de diversos elementos andinos y españoles, integra también nuevos elementos modernos. Sólo pueden ser huacones los hombres de buena conducta y gran integridad moral.

La danza se transmite tradicionalmente de padres a hijos y los vestidos y las máscaras se heredan.

iv. La danza de las tijeras[238].

También inscrito en 2010, la danza de las tijeras se ha venido interpretado tradicionalmente por los habitantes de los pueblos y las comunidades quechuas del sur de cordillera andina central del Perú y, desde hace algún tiempo, por poblaciones de las zonas urbanas del país.

Esta danza ritual, que reviste la forma de una competición, se baila durante la estación seca del año y su ejecución coincide con fases importantes del calendario agrícola. La danza de las tijeras debe su nombre a las dos hojas de metal pulimentado, parecidas a las de las tijeras, que los bailarines blanden en su diestra. La danza se ejecuta en cuadrillas y cada una de ellas –formada por un bailarín, un arpista y un violinista– representa a una comunidad o un pueblo determinado. Para

[238] https://ich.unesco.org/es/RL/la-danza-de-las-tijeras-00391 [consultado en abril de 2019].

interpretar la danza, se ponen frente a frente dos cuadrillas por lo menos y los bailarines, al ritmo de las melodías interpretadas por los músicos que les acompañan, tienen que entrechocar las hojas de metal y librar un duelo coreográfico de pasos de danza, acrobacias y movimientos cada vez más difíciles. Ese duelo entre los bailarines, llamado atipanakuy en quechua, puede durar hasta diez horas, y los criterios para determinar quién es el vencedor son: la capacidad física de los ejecutantes, la calidad de los instrumentos y la competencia de los músicos que acompañan la danza. Los bailarines, que llevan atuendos bordados con franjas doradas, lentejuelas y espejitos, tienen prohibido penetrar en el recinto de las iglesias con esta indumentaria porque sus capacidades, según la tradición, son fruto de un pacto con el diablo. Esto no ha impedido que la danza de las tijeras se haya convertido en un componente apreciado de las festividades católicas.

Los conocimientos físicos y espirituales implícitos en la danza se transmiten oralmente de maestros a alumnos, y cada cuadrilla de bailarines y músicos constituye un motivo de orgullo para los pueblos de los que es originaria.

v. La peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit'i[239].

Inscrito en 2011 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad.

En la peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit'i (Señor de la Estrella de Nieve) se mezclan elementos procedentes del catolicismo y del culto rendido a los dioses prehispánicos. Esta peregrinación comienza cincuenta y ocho días después de la celebración del Domingo de la Pascua de Resurrección, cuando personas de los alrededores de Cusco se ponen en marcha hacia el santuario, situado en la hondonada del Sinakara. La muchedumbre de peregrinos se divide en ocho "naciones", correspondientes a sus pueblos de origen: Paucartambo, Quispicanchi, Canchis, Acomayo, Paruro, Tawantinsuyo, Anta y Urubamba. La peregrinación comprende procesiones con cruces que suben a la cumbre nevada de la montaña para luego descender, y también una procesión de veinticuatro horas de duración en la que la nación Paucartambo y la nación Quispicanchi llevan al pueblo de Tayancani las imágenes la Virgen Dolorosa y del Señor de Tayancani, a fin de celebrar la aparición de los primeros rayos del sol.

[239] https://ich.unesco.org/es/RL/la-peregrinacion-al-santuario-del-senor-de-qoylluriti-00567 [consultado en abril de 2019].

La danza desempeña un papel fundamental en la peregrinación y se llegan a ejecutar unos cien bailes diferentes, representativos de las diferentes naciones. El Consejo de Naciones Peregrinas y la Hermandad del Señor de Qoyllurit'i organizan las actividades de la peregrinación, establecen sus reglas y códigos de conducta, y proporcionan la comida necesaria. Del mantenimiento del orden se encargan los *pablitos* o *pabluchas*, personajes vestidos con prendas de alpaca que llevan máscaras de animales tejidas con lana.

La peregrinación abarca una gran variedad de expresiones culturales y ofrece un lugar de encuentro a comunidades asentadas a distintas alturas de la cordillera de los Andes que se dedican a actividades económicas diferentes.

vi. Conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Q'eswachaka[240].

Inscrito en 2013 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el puente colgante de cuerda Q'eswachaka une las dos laderas de un desfiladero del río Apurímac, situado en los Andes meridionales del Perú, y todos los años se renueva utilizando materias primas y técnicas tradicionales que datan de la época incaica.

Las comunidades campesinas quechuas de Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua y Ccollana Quehue consideran que este trabajo en común no es solamente un medio para mantener en buen estado una vía de comunicación, sino que es también una forma de estrechar los lazos sociales que existen entre ellas.

El puente se considera un símbolo sagrado del vínculo que une a las comunidades con la naturaleza y con su historia y tradiciones, de ahí que su renovación anual vaya acompañada de la celebración de ceremonias rituales. Aunque la renovación del puente solamente dura tres días, de hecho estructura la vida de las comunidades participantes a lo largo de todo el año, ya que les permite comunicar entre ellas, reforzar sus vínculos seculares y reafirmar su identidad cultural.

La renovación empieza con el trabajo de las familias de las comunidades, que cortan paja y la trenzan en sogas de unos setenta metros de largo. Bajo la supervisión de dos maestros constructores, se entrelazan esas sogas para formar las seis cuerdas

[240] https://ich.unesco.org/es/RL/conocimientos-tecnicas-y-rituales-vinculados-a-la-renovacion-anual-del-puente-qeswachaka-00594 [consultado en abril de 2019].

de gran grosor que sirven de armazón al puente. Luego, los hombres de las comunidades las atan sólidamente a las antiguas bases de piedra situadas a cada lado del desfiladero. Dos maestros tejedores dirigen y efectúan después el tejido del resto del cordaje del puente, avanzando desde los dos extremos opuestos de éste. Una vez acabada la renovación del puente, las comunidades celebran la finalización de los trabajos con una fiesta. Las técnicas de tejido de los cordajes del puente se enseñan y aprenden en el seno de las familias.

vii. La fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno[241].

Fue inscrito en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad en 2014.

Celebrada el mes de febrero de cada año en la ciudad de Puno, la festividad de la Virgen de la Candelaria comprende actos de carácter religioso, festivo y cultural que tienen sus raíces en tradiciones católicas y elementos simbólicos de la cosmovisión andina. Las fiestas dan comienzo a primeros de mes con la celebración de una misa al alba, a la que sigue una ceremonia de purificación ancestral. Al día siguiente por la mañana, tras un acto litúrgico, se transporta una imagen de la Virgen de la Candelaria para hacerla recorrer en procesión las calles de la ciudad con el acompañamiento de danzas y músicas tradicionales. Luego, las fiestas prosiguen con la celebración de dos certámenes en los que compiten unos 170 grupos de toda la región, siendo los participantes principales los habitantes de etnia quechua y aimara de las zonas rurales y urbanas de la región de Puno.

La transmisión a las generaciones más jóvenes de todos esos conocimientos se efectúa mediante la organización de ensayos musicales y coreográficos, y también mediante la creación de talleres para la fabricación de máscaras. Las fiestas finalizan con una ceremonia en honor de la Virgen, un concierto y misas de despedida.

viii. La danza del wititi del valle del Colca[242].

[241] https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-la-virgen-de-la-candelaria-en-puno-00956 [consultado en abril de 2019].

[242] https://ich.unesco.org/es/RL/la-danza-del-wititi-del-valle-del-colca-01056 [consultado en abril de 2019].

Inscrito en 2015, la danza del wititi del valle del Colca es un baile popular tradicional que guarda relación con el comienzo de la edad adulta. Reviste la forma de un ritual de cortejo amoroso y suelen interpretarla los jóvenes durante las festividades religiosas que se celebran a lo largo de la estación lluviosa. Las parejas de bailarines y bailarinas se alinean en filas y ejecutan diversos pasos al compás de la música. Las bailarinas llevan trajes finamente bordados con motivos naturales de colorido vistoso y van tocadas con sombreros característicos. Por su parte, los bailarines llevan dos faldas de mujer superpuestas, una camisa militar, un chal y sombreros con aditamentos. La representación del wititi coincide con el inicio del ciclo de producción agrícola y simboliza el renuevo de la naturaleza y la sociedad.

Esta danza consolida los vínculos sociales y la identidad de los pueblos del valle del Colca, que compiten para presentar los mejores conjuntos de danza, renovándola así continuamente y perpetuando al mismo tiempo su carácter tradicional. Los niños y los jóvenes aprenden el wititi mediante la observación directa, tanto en las escuelas como en las fiestas familiares celebradas con motivo de bautismos, cumpleaños y bodas. A nivel nacional, hay grupos de bailes folclóricos que también interpretan esta danza por haberla integrado en sus repertorios coreográficos.

ix. Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo[243].

Inscrito en 2017, el Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo es una estructura organizativa creada por los habitantes de esta ciudad del norte del Perú, que gestiona el abastecimiento de agua y cultiva al mismo tiempo la memoria histórica.

Los orígenes de este sistema se remontan al período preincaico y su objetivo primordial es lograr un abastecimiento equitativo y sostenible de agua, así como una gestión adecuada de la tierra a fin de que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de estos dos recursos naturales esenciales en buenas condiciones.

Los depositarios principales de este elemento del patrimonio cultural son los habitantes de Corongo, ya que ese sistema regula sus actividades agrícolas. Su máxima autoridad es el juez de agua que se encarga de la gestión de los recursos

[243] https://ich.unesco.org/es/RL/sistema-tradicional-de-jueces-de-agua-de-corongo-01155 [consultado en abril de 2019].

hídricos y de la organización de las fiestas más importantes de la ciudad. Pilar de la identidad cultural y la memoria histórica de los coronguinos, el sistema se basa en tres principios fundamentales: la solidaridad, la equidad y el respeto de la naturaleza.

El significado, la importancia, las funciones y valores del sistema se trasmiten a las nuevas generaciones en el seno de las familias e instituciones públicas, y también en los centros docentes de todos los niveles de enseñanza mediante el aprendizaje de las danzas emblemáticas de Corongo, íntimamente vinculadas a este elemento. Entre los valores transmitidos figura el conocimiento de la relación de San Pedro, patrón de la ciudad, con el agua y, por ende, con la prosperidad y el bienestar. Este conocimiento se adquiere desde la infancia mediante la tradición oral o la participación en celebraciones religiosas.

- **Uruguay.**

i. El tango.

Fue analizado en el caso de Argentina.

ii. El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria[244].

Inscrito en 2009 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad.

Todos los domingos y muchos días festivos, las llamadas de tambores del candombe resuenan en el barrio Sur de Montevideo y en otros dos barrios meridionales de la capital uruguaya, Palermo y Cordón, que albergan una población de origen africano. Antes de que dé comienzo el desfile del candombe, los participantes se reúnen en torno a fogatas para templar sus tambores y confraternizar. Una vez en marcha, el cortejo es encabezado por los comparsas más prestigiosos, miembros de familias reputadas en la comunidad por su virtuosismo en el arte de tocar el tambor desde muchas generaciones atrás. Tras de ellos marchan, en filas, los demás tamborileros, mientras que otros participantes, aficionados al baile o espectadores, acompañan el desfile o lo contemplan desde los balcones.

[244] https://ich.unesco.org/es/RL/el-candombe-y-su-espacio-sociocultural-una-practica-comunitaria-00182 [consultado en abril de 2019].

Cada uno de los tres barrios repica de forma distinta el "piano" –el tambor de mayor tamaño y sonido más grave– de modo que el sistema característico de llamadas y respuestas entre los tambores del candombe constituye, a la vez, un vínculo de unión entre los barrios y un signo distintivo de su identidad propia. Transmitido en el seno de las familias de ascendencia africana, el candombe no sólo es la expresión de una resistencia, sino también una festividad musical uruguaya y una práctica social colectiva profundamente arraigada en la vida diaria de esos barrios. También es un símbolo y una manifestación de la memoria de la comunidad, que incita a los antiguos habitantes a retornar al núcleo histórico del candombe en determinados días festivos.

- **Venezuela.**

i. Diablos Danzantes de Venezuela[245].

Esta manifestación fue inscrita en 2012. Las pequeñas comunidades de la costa central de Venezuela celebran de manera especial el Corpus Christi, festividad de la Iglesia católica romana que conmemora la presencia de Cristo en el sacramento de la eucaristía. Grupos de hombres adultos, muchachos jóvenes y niños, disfrazados de diablos enmascarados, ejecutan pasos de danza hacia atrás, en actitud de penitencia, al mismo tiempo que una jerarquía de la Iglesia católica avanza hacia ellos llevando el Santo Sacramento.

El acompañamiento musical de la procesión se efectúa con instrumentos de cuerda y percusiones, mientras que los fieles hacen sonar maracas para alejar a los espíritus maléficos. En el momento culminante de la celebración, los diablos se rinden sumisos ante el Santísimo, simbolizando así el triunfo del bien sobre el mal. Los bailarines, llamados "promeseros'', son miembros perpetuos de hermandades que transmiten la memoria histórica y las tradiciones ancestrales de las comunidades.

Cada hermandad confecciona las máscaras diabólicas de sus afiliados y éstos se las ponen, llevando al mismo tiempo, cruces, escapularios y palmas benditas. Los bailarines también llevan cascabeles, sonajeros, pañuelos y cintas para protegerse contra los espíritus malignos. Las mujeres se encargan de la preparación espiritual de

[245] https://ich.unesco.org/es/RL/diablos-danzantes-de-venezuela-00639 [consultado en abril de 2019].

los niños, organizan las diferentes etapas del ritual, preparan comidas, prestan su concurso para las danzas y levantan altares a lo largo del recorrido de la procesión. En los últimos años, algunas comunidades han empezado a admitirlas a que participen como danzantes.

Impregnada de creatividad, espíritu de organización y fe religiosa, esta celebración tradicional fomenta un fuerte sentimiento de identidad comunitaria y cultural.

ii. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire[246].

Inscrito en 2013 en la Lista Representativa del PCI de la Humanidad.

Todos los años, en las pequeñas ciudades de Guarenas y Guatire, los devotos del apóstol San Pedro celebran el día de su fiesta. Los fieles entonan cantos populares en honor del santo ante cada una de las imágenes de éste expuestas en las iglesias de ambas localidades. A media noche se celebra una misa en todas ellas, y luego los participantes sacan las imágenes a la calle para recorrer las calles en procesión.

Un elemento central de la festividad es la rememoración y escenificación de la leyenda de la esclava María Ignacia, cuya hija fue curada por San Pedro. Algunos parranderos, vestidos con trajes de vivos colores minuciosamente confeccionados, representan los papeles de los personajes principales de esa leyenda, mientras que los demás agitan banderas y estandartes, tocan instrumentos musicales, bailan y cantan, improvisando melodías populares. Las mujeres participan en la preparación y celebración de la fiesta organizando reuniones para instruir a las jóvenes generaciones en la práctica de este elemento del patrimonio cultural, ornamentando las iglesias, vistiendo a las imágenes del santo y cocinando platos tradicionales. Durante la festividad, los parranderos, junto con sus familias, vecinos y otros adultos y niños de las comunidades, se reúnen para compartir todos juntos momentos de alegría.

Esas reuniones sirven para celebrar el espíritu comunitario, la energía y la satisfacción de los parranderos, así como la vitalidad de una tradición que simboliza y reafirma el espíritu de lucha contra la injusticia y las desigualdades.

[246] https://ich.unesco.org/es/RL/la-parranda-de-san-pedro-de-guarenas-y-guatire-00907 [consultado en abril de 2019].

iii. Conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua[247].

Fue inscrito en 2015 en la Lista. Los conocimientos y técnicas tradicionales vinculados al cultivo y procesamiento de la curagua abarcan un conjunto complejo de prácticas relacionadas con las maneras de cultivar esta planta y extraer de ella sus fibras blancas, caracterizadas por su solidez, resistencia y suavidad. Esas fibras se hilan para confeccionar toda una serie de objetos artesanales, entre los que destacan las hamacas, que se han convertido en el emblema característico de la región de Aguasay.

Tradicionalmente son los hombres los que se dedican a la extracción y procesamiento de las fibras de la curagua, debido a la fuerza física que exigen esas tareas. Las mujeres, por su parte, se encargan del tejido y la fabricación de productos artesanales. Las prácticas de cultivo, procesamiento y confección de artesanías tienen un papel importante en la configuración de la identidad de las comunidades del municipio de Aguasay.

Actúan como mecanismo de cohesión social que transciende las barreras étnicas, socioculturales y de género. También fomentan diversas formas de cooperación dentro de las diferentes comunidades y familias, así como entre ellas. Las mujeres asumen un importante protagonismo en las estructuras comunitarias y familiares, tanto en lo que respecta al trabajo creativo como en lo referente a la generación de ingresos.

iv. El Carnaval de El Callao: representación festiva de una memoria e identidad cultural[248].

Inscrito en 2016, el carnaval de El Callao es una práctica cultural de las comunidades de esta ciudad de la República Bolivariana de Venezuela, que guarda relación con los festejos de emancipación llamados "*Cannes Brulées*" que tienen

---

247 https://ich.unesco.org/es/RL/conocimientos-y-tecnicas-tradicionales-vinculadas-al-cultivo-y-procesamiento-de-la-curagua-01094 [consultado en abril de 2019].

248 https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-el-callao-representacion-festiva-de-una-memoria-e-identidad-cultural-01198 [consultado en abril de 2019].

lugar en las Antillas de habla francesa. Desde enero a marzo, esta festividad tradicional agrupa hasta unos 3.000 participantes que desfilan por las calles de la localidad disfrazados de personajes históricos o imaginarios al ritmo del calipso y otras músicas y danzas. Los desfiles son conducidos por mujeres que danzan engalanadas con vestidos variopintos. Son las llamadas "madamas", matronas antillanas que se consideran auténticos pilares de la identidad callaoense por ser consideradas portadoras y comunicadoras de los valores culturales de la comunidad. Otros personajes del carnaval son: los "mediopintos", jóvenes que divierten al público embadurnando con hollín a los que se niegan a contribuir con un óbolo; los "mineros"; y los "diablos", personajes enmascarados que bailan blandiendo un látigo para mantener el orden. También participan en la festividad niños y adultos con otros disfraces.

Este carnaval pone de relieve la historia de los habitantes de la ciudad y su diversidad al exaltar el legado cultural afroantillano y las influencias de otras comunidades, fortalece la identidad de los callaoenses, propicia la unidad entre ellos e incita a las generaciones más jóvenes a descubrir su patrimonio cultural. La transmisión de esta práctica cultural entre las generaciones se efectúa esencialmente en el seno de las familias y en escuelas dirigidas por depositarios de las tradiciones, en las que los niños adquieren las competencias necesarias para participar en el carnaval, componiendo melodías, tocando instrumentos musicales, cantando, bailando y fabricando máscaras.

CAPÍTULO 5

El PCI en el orden nacional argentino.

Se ha dicho que desde una visión sistémica el ambiente está formado por elementos naturales, culturales y el medio o substrato en que interactúan, todos ellos relacionados entre sí de muchas formas. Según esta concepción, la cultura forma parte del ambiente siendo un subsistema que tiene gran influencia sobre el mismo, al igual que los otros elementos o subsistemas.

La regulación del medio ambiente como objeto de tutela ha llevado anexa la necesidad tanto a nivel internacional como nacional de determinar su modo jurídico de protección. La consideración de un derecho fundamental de la persona humana que tuviese como finalidad el acceso a un ambiente apropiado, trae como lógica consecuencia la necesidad de que el Estado lleve a cabo todas aquellas acciones susceptibles de asegurarle al hombre el goce efectivo de esta libertad fundamental[249].

Pero no hay duda de que dentro de la tutela a este medio ambiente, o entorno como prefieren llamarlo algunos autores, también debe incluirse la tutela del patrimonio cultural: tal como dice Liliana Zendri, no hay desarrollo sin cultura, no hay cultura sin patrimonio cultural y no hay patrimonio cultural sin tutela jurídica[250].

Una visión totalizadora del fenómeno ambiental incluye el factor histórico-cultural como una de sus vertientes. Esa noción abarcadora está muy presente en Europa, donde la vida cotidiana tiene como telón de fondo insoslayable al arte y la historia en algunas de sus expresiones más sublimes.

Se explica así que el "Proyecto de Convención sobre la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas para el ambiente" elaborado por el Consejo de Europa incluya en la definición de ambiente a los bienes que componen el acervo cultural (art. 11). Y que en Italia, donde la tutela del patrimonio histórico y artístico está muy desarrollada, la Corte Constitucional haya elaborado en los últimos años una noción unitaria de "bien ambiental", que integra tres elementos: la salud, el

---

[249] Sabsay, Daniel Alberto y Onaindia, José Miguel, *La Constitución de los argentinos. Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994*, 1ª ed., Buenos Aires, Errepar, 1994, pág. 140.

[250] Zendri, Liliana, citada por Venini, Juan Carlos en *Tutela del Patrimonio Cultural*, Daño ambiental, Revista de Derecho de Daños, T. 2011-1, Rubinzal Culzoni, pág. 290.

paisaje y el patrimonio artístico-cultural, haciéndolos confluir en la idea de "calidad de vida" como "interés superior de la colectividad"[251].

Esta misma línea ha adoptado el derecho ambiental contemporáneo de Argentina, tal como se refleja en el art. 41 de la Const. Nacional, en la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley mendocina 5.961, entre otras normas, según se ha detallado en el Capítulo 1 de este trabajo.

a).- Evolución de la normativa de regulación de patrimonio cultural en la República Argentina antes de la reforma constitucional de 1994.

Entre el final del siglo XIX y comienzo del XX, se produjo en el país una alteración en la composición socio-cultural del pueblo argentino, derivada de la llegada de millones de inmigrantes, determinando cambios en las costumbres y una amenaza a los esquemas de poder de la sociedad tradicional, produciéndose nuevamente un choque cultural. Por ello, Estado Nacional e intelectuales intentaron atribuir legitimidad al orden social preestablecido, siendo una de las principales herramientas escogidas la educación, y dentro de ella la enseñanza de la historia nacional, es decir, se buscó mantener el *statu quo*.

Se intentó así transmitir un relato histórico en las escuelas que permitiese "argentinizar" al inmigrante, integrándolo a la sociedad. Sin embargo el carácter educativo no estuvo sólo vinculado a la historia. La arquitectura también se convirtió en herramienta idónea para la pretendida integración, a través de la construcción de un pasado arquitectónico grandioso e inventado, con el estilo Neocolonial. Este movimiento promovió la busca de un estilo propio de arquitectura nacional, estimulada por inquietudes que pretendían definir las particularidades latinoamericanas recorriendo al pasado.

En este contexto, la creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos a final de la década de 1930 derivó del encuentro de intereses tales como educación patriótica del pueblo por medio de la historia, formación de una conciencia nacional, valoración de la arquitectura nacional,

[251] Lago, Daniel H., *Patrimonio cultural y medio ambiente*, REVISTA GERENCIA AMBIENTAL Nro. 9, pág. 622, THIBAUD, LEVIS Y ASOCIADOS, 1 de noviembre de 1994, Id Infojus: DACA980175.

definición del patrimonio cultural, actitudes nacionalistas que se exteriorizaron en una articulación entre tradición y progreso[252].

- **La normativa patrimonial antes de la creación de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos.**

En el contexto mencionado, el Congreso argentino sancionó el 7 de setiembre de 1910 la Ley 7.062, por la cual declaraba a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento monumento histórico nacional, autorizaba su compra y la organización de un museo y biblioteca sobre la base de la vida y obra del ex Presidente. Se sancionaba así la ley que declaraba el primer monumento histórico nacional del país.

Los monumentos históricos nacionales entre esta primera ley y la creación de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos (1940) fueron declarados para jugar el papel de símbolos tangibles de la historia nacional y fomentar la conciencia acerca de una identidad cultural. Al decir de Conti, las declaratorias se basaron principalmente en la celebración de personajes relacionados con la independencia, la organización nacional y el proyecto de modernización, además de poner en evidencia algunos acontecimientos significativos de esos procesos. Durante ese período prácticamente no aparecen referencias en los instrumentos legales de declaración de monumentos a cuestiones artísticas o arquitectónicas[253].

En el año 1913, a raíz del éxodo de importantes objetos arqueológicos y para evitar la salida clandestina de una colección de piezas arqueológicas que estaba lista para ser vendida al exterior[254], se sancionó la Ley 9.080 que reguló lo concerniente a las ruinas y yacimientos arqueológicos. Esa ley declaró de propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científicos (art. 1), no pudiendo nadie utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin permiso del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, asesorado por la Dirección del Museo

---

[252] Uribarren, María Sabina, *La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina entre 1938 y 1946: El patrimonio cultural y la construcción de una idea de Nación*, Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 11, CIFFyH-UNC, Córdoba 2009, págs. 213/244.

[253] Conti, Alfredo, *La construcción del concepto de patrimonio en Argentina entre 1910 y 1940*, Anales LINTA 2008, Volumen IV, Número 2, 2009, págs. 23/30.

[254] Berberián, Eduardo E., *La protección del patrimonio cultural argentino: arqueológico y paleontológico. Ley nacional N° 25.743: Comentarios al texto*, 1° ed., Brujas, Córdoba, 2009, pág. 18.

Nacional Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras (art. 2). Esta ley fue reglamentada casi 10 años después.

Según Berberián, esta ley nunca tuvo cumplimiento efectivo ya que la deficiencia más importante era el sentido centralista de su articulado. No equilibraron armónicamente las relaciones, la participación y las responsabilidades de los Estados provinciales –en cuyo territorio se encuentran la casi totalidad de los reservorios arqueológicos y paleontológicos- y el Estado Nacional. El art. 2 de esta norma dejaba en manos exclusivas de un organismo radicado en la Capital Federal todo el contralor arqueológico y paleontológico, y la extensión de Argentina hacía imposible que se pudiera reprimir la explotación clandestina o supervisar las tareas de las comisiones científicas debidamente autorizadas[255].

La ley fue derogada recién en 2003 por Ley 25.743. No obstante, en 1968 la Ley 17.711 que reformó el Código Civil argentino declaró en el inc. 9 del art. 2340 del código que las ruinas y yacimientos arqueológicos de interés científicos son de dominio público del Estado nacional o provincial, según donde se encuentren (art. 2339 Cód. Civil).

Después de la declaración de la casa natal de Sarmiento y de la sanción de la Ley 9.080, se declaró monumento histórico nacional al Templete de la Casa Natal de San Martín (1915)[256] y no hubieron declaraciones de monumentos históricos nacionales hasta 1928, cuando se declararon la Basílica de San Francisco en la ciudad nueva[257], en Mendoza, y el primitivo Templo de la Merced[258], en Tucumán. Las razones de estas declaratorias respondieron a que en ambas existen imágenes de la Virgen María relacionadas con los generales José de San Martín y Manuel Belgrano. Durante la década de 1930 otros edificios relacionados con personajes o acontecimientos históricos fueron declarados monumentos nacionales: la Catedral de la ciudad de San Salvador de Jujuy (1931)[259]; el Templo y el Convento de Santo Domingo, en La Rioja (1931)[260]; el cabildo de Buenos Aires (1933)[261]; el palacio San

[255] Berberián, Eduardo E., *op. cit.*, págs. 18/19.

[256] Ley 9.655.

[257] Decreto 528/28.

[258] Decreto 687/28.

[259] Decreto 1.347.

[260] Decreto 2.056.

[261] Ley 11.688.

José, residencia del General Justo José de Urquiza (1935)[262]; el cabildo de la ciudad de Salta (1937)[263]; el colegio Montserrat de Córdoba (1938)[264] -vinculado al movimiento de la Reforma Universitaria- y ese mismo año la sede del Congreso de 1880[265], y, en 1939, la pirámide de los Libres del Sur[266] y el sepulcro de los Caídos en la Batalla de Chascomús[267], ambos en la provincia de Buenos Aires, que conmemora la denominada Revolución de los Libres del Sur.

En el año 1921 se realizó en todo el país la encuesta del Magisterio por el Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional de Educación, cuyos resultados, aproximadamente 88 mil páginas manuscritas elaboradas por maestros de escuelas nacionales primarias en todo el país, conformando la *Colección de Folklore*, están depositados en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). Este registro del relato oral argentino de principios del siglo XX ha permitido condensar por escrito aspectos de la cultura popular en toda la extensión del territorio nacional argentino. Sus materiales han sido y son usados por muchos investigadores que han realizado estudios sobre cancionero, narrativa, costumbres populares, etc.[268] Si bien no tiene ninguna declaratoria patrimonial, constituyó un gran aporte documental para el inventario de esas manifestaciones.

Asimismo, en ese mismo año 1937 la necesidad de unificar la administración y el control del patrimonio histórico cultural argentino llevó a las autoridades nacionales a crear a través del Decreto 118.588/1937 un organismo centralizado vinculado al patrimonio cultural. En aquella oportunidad se creó la Superintendencia de Museos y Lugares Históricos, la cual —tras funcionar unos pocos meses— sirvió como legado para la creación de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos[269].

---

[262] Ley 12.261.

[263] Ley 12.345.

[264] Ley 12.365.

[265] Ley 12.569.

[266] Ubicada en Dolores. Ley 12.621.

[267] Ley 12.622.

[268] García, Silvia P., *Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial. Argentina*, CRESPIAL, Cusco, Perú, 2005, pág. 21.

[269] Cassagne, Juan Carlos e Ibarzábal, Milagros, *La protección del patrimonio cultural en la ley 27.103*, RDA 2016-105-677, Abeledo Perrot., págs. 1/2.

En 1938 se promulgó el Decreto 3.990 del día 28 de abril que creó la entonces denominada Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos con el fin de unificar la administración y el control del patrimonio histórico de Argentina[270].

Dos años más tarde, con la sanción de la Ley 12.665 del 30 de septiembre de 1940, se estableció la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, modificada por la Ley 27.103 (2015), institución que se analiza a continuación.

- **La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y su continuadora: La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.**

La Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos fue creada por el Decreto 3.990 del 28 de abril de 1938, del Presidente Roberto M. Ortiz, y por la Ley 12.665 de 1940 como una dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Es el punto de partida para la protección de los bienes del patrimonio cultural en Argentina. Esta ley daba cuenta de la existencia de bienes del patrimonio cultural de propiedad de particulares y la necesidad de implementar medidas para su protección. El Decreto 84.005/1941 fue su norma reglamentaria.

Hasta el momento de su sanción, en Argentina no se había regulado la tutela de bienes del patrimonio cultural de propiedad privada, limitándose las leyes existentes a declarar los mismos de utilidad pública y sujetos a expropiación. Esto era acorde con un modelo de propiedad de separación dicotómica entre lo público y lo privado en el cual los fines públicos se cumplían exclusivamente con bienes de tal dominio. La ley mencionada fue el germen de un nuevo modelo, en el cual los objetivos del Estado pueden cumplirse a través de bienes de propiedad privada, erigiéndose el propio Estado en garante y delimitador de las facultades de los titulares dominiales[271], manifestándose de esta manera la temprana noción de que el patrimonio cultural es un bien colectivo que subyace más allá de los derechos

[270] El primer Presidente de esta Comisión Nacional de Monumentos fue el Dr. Ricardo Levene, y su Vicepresidente, el Sr. Luis Mitre. Se determinó que fuese su sede el cabildo de Buenos Aires.

[271] Levrand, Norma Elizabeth, *Normas de presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural en argentina: ¿Posibles y vigentes?*, E-rph - Revista electrónica de patrimonio histórico, n° 16, junio 2015, pp. 33-51. Disponible en : https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295665., págs. 12/13 [consultado en marzo de 2019].

individuales que puedan recaer sobre tales bienes, tal cual lo recoge actualmente tanto la Const. Nacional como el Cód. Civil y Comercial.

Tuvo vigencia hasta el año 2015, año en que se sancionó la Ley 27.103, que la sustituyó por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que, según el art. 1 era la continuadora de aquella. Pero esta nueva ley la hizo depender del organismo que determinara el Poder Ejecutivo nacional (art. 1), funcionando hoy como organismo desconcentrado del Ministerio de Cultura de la Nación. La norma quitó la palabra "Museos" del nombre del organismo, porque desde el año 1984, dichas instituciones dependen de la Dirección Nacional de Museos.

Tanto el organismo original como su continuador, tienen la misma integración: un presidente y diez (10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo nacional, que durar en sus cargos seis (6) años, pudiendo ser reelectos.

Aquella tenía la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acogieran a la ley, cuando se tratare de museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales. Actualmente los museos no están bajo su órbita, pero la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tiene atribuciones similares a aquella. A saber:

a).- Ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio provincial o municipal;

b).- Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales, y demás bienes protegidos, indicando con precisión el perímetro del área protegida;

c).- Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;

d).- A solicitud del Congreso de la Nación, designar expertos para evaluar los méritos históricos artísticos, arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen será refrendado por la comisión;

e).- Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales, asesores consultores, honorarios y eméritos;

f).- Organizar mecanismos de representación regional y federal;

g).- Establecer áreas de amortiguación en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad local las restricciones urbanísticas que correspondan;

h).- Establecer los alcances y límites de la protección inherente a cada declaratoria;

i).- Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública de los inmuebles que así lo ameriten.

La Comisión Nacional puede celebrar con los propietarios de los bienes declarados acuerdos a fin de determinar el modo cooperativo de asegurar el cumplimiento de los fines de la ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el Poder Ejecutivo debe indemnizar al propietario en su caso, y en la medida de dicha limitación.

j).- Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;

k).- Intervenir con carácter previo y vinculante en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra modificación del estatus jurídico de un bien protegido;

l).- Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material sobre los bienes protegidos;

m).- Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés público su ingreso al dominio del Estado nacional;

n).- Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las materias de su competencia;

o).- Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias;

p).- Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a la materia;

q).- Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero o en especie;

r).- Celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales.

s).- Llevar un registro público de los bienes protegidos, enunciados en las siguientes clases que, a su vez, quedan libre de toda carga impositiva:

1. Monumento histórico nacional.
2. Lugar histórico nacional.
3. Poblado histórico nacional.
4. Área urbana histórica nacional.
5. Área de amortiguación visual.
6. Bien de interés histórico nacional.
7. Bien de interés artístico nacional.
8. Bien de interés arquitectónico nacional.
9. Bien de interés industrial nacional.
10. Bien de interés arqueológico nacional.
11. Sepulcro histórico nacional.
12. Paisaje cultural nacional.
13. Itinerario cultural nacional.

La Ley 12.665 y su modificatoria establecieron que los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos a la custodia y conservación del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales.

Por otro lado, ante una iniciativa presentada en el Congreso de la Nación para declarar como protegido un bien ubicado en cualquier jurisdicción de la República Argentina, corresponde la consulta previa a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá su dictamen de carácter no vinculante, señalando la clasificación que en su opinión corresponde otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.

Los bienes protegidos no pueden ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la Comisión Nacional, quedando expresamente prohibida la salida del territorio nacional de bienes protegidos, sean bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la previa intervención y autorización de la Comisión Nacional.

Por su parte, también la Ley 12.665 establece un tipo penal consistente en el ocultamiento, omisión, destrucción, alteración, transferencia o gravamen, exportación o cualquier otro acto material o jurídico practicado sobre bienes

protegidos y sanciona el mismo con multa cuyo mínimo es el diez por ciento (10%) y el máximo es el equivalente a tres veces el valor del bien o los bienes que hayan motivado la conducta sancionada. Para la determinación de la multa se atenderá a la gravedad de la falta cometida y al carácter de reincidente del infractor.

Cabe aclarar que este tipo penal es de carácter subsidiario ya que se aplica siempre que el hecho no constituya un daño agravado (art. 184 inc. 5 del Cód. Penal).

En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio declarado monumento histórico nacional, o de una parte sustancial de cualquier otro bien protegido, el propietario, a su costo, deberá restituirlo a su estado original en plazo perentorio establecido por la Comisión Nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad, se aplicará una multa fijada a criterio de la Comisión Nacional, por cada día de demora en la reconstrucción.

El año posterior a su creación, la Comisión propuso una primera lista de monumentos a declarar, acción que continuaría, en forma creciente, en los años subsiguientes[272].

- **La normativa patrimonial después de la creación de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos: La primera constitucionalización del patrimonio cultural.**

---

[272] Conti, Alfredo, *op. cit.*, págs. 23-30. Entre las declaraciones efectuadas en el año 1941 encontramos las siguientes: Prov. de Buenos Aires: Casa del Gral. Juan M. Pueyrredón (M.H.N. Decreto 104.180); en Catamarca: Catedral de San Fernando del Valle de Catamarca, capilla del Señor de los Milagros en San José de Piedras Blancas, templo de San Francisco y capilla de Nuestra Señora del Rosario de Piedra Blanca (M.H.N. Decreto 98.076), e iglesia de Fiambalá (M.H.N. Decreto 106.844); en Córdoba: Reducción de Alta Gracia, cabildo de la Ciudad de Córdoba, capilla del Obispo Mercadillo, casa del Virrey de Sobremonte, catedral de la Ciudad de Córdoba, estancia Caroya, estancia Jesús María, iglesia y convento de San Isidro, capilla de Candonga, posta de Sinsacate y reducción de Santa Catalina (M.H.N. Decreto 90.732), finca de Saldán y capilla de San Roque (L.H.N. y M.H.N. Decreto 104.179), iglesia y convento de Santa Teresa y estancia jesuítica La Candelaria (M.H.N. Decreto 106.845); en Jujuy: las capillas de Casabindo, Huacalera, Humahuaca, Purmamarca, Santa Bárbara, Tilcara, Tumbaya, Uquía, Yavi, cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy y la casa donde fue muerto el Gral. Lavalle (todos ellos M.H.N. Decreto 95.687); en Mendoza: campo del Plumerillo, capilla del Plumerillo, ruinas del templo de San Francisco, solar de San Martín y chacra de San Martín (L.H.N y M.H.N. Decreto 107.512); en Salta: campo de la batalla de Salta, finca de Castañares, finca la Cruz que perteneciera al Gral. Güemes, posta de Yatasto, fuerte de Cobos, catedral de la ciudad de Salta, convento de San Bernardo e iglesia de San Francisco (L.H.N. y M.H.N. Decreto 95.687); en San Juan: baños del Zonda, colegio de pensionistas de Santa Rosa y convento de religiosos de San Juan de la Frontera (L.H.N. y M.H.N. Decreto 107.512); en San Luis: aguada de Pueyrredón, campamento de las Chacras y escuela de San Francisco del Monte de Oro (L.H.N. y M.H.N. Decreto 107.512) y en Tucumán: capilla de Chicligasta, capilla de San Ignacio, campo de las Carreras, casa del Obispo José E. Colombres, casa histórica de Tucumán, casa natal de Nicolás Avellaneda y catedral de la ciudad de San Miguel de Tucumán (M.H.N. y L.H.N. Decreto 98.076).

Cabe aclarar que en 1935 Argentina había suscripto el Tratado para la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, también llamado Pacto Roerich, que tuvo la importancia de ser el primer instrumento convencional, aunque a escala regional, que trató de una manera específica el problema del respeto y la protección acordados a los bienes y valores culturales y de su defensa tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra con especial atención a los supuestos de conflictos armados.

A partir de 1940 y hasta la reforma constitucional de 1994 no hubo normas generales reguladoras del patrimonio cultural en Argentina, y obviamente tampoco del PCI, más allá de las declaraciones particulares de patrimonialización que siguieron haciéndose en forma paulatina.

En el año 1949, sin embargo, Argentina aprobó una nueva Constitución Nacional que rigió hasta 1956, año en que se restableció la vigencia de la Constitución de 1853/60 que no contenía ninguna norma similar a la que a continuación se comenta. En aquella Carta Magna se incluyó el capítulo III llamado *Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura,* que contenía en el art. 37 inc. IV ap. 7 el siguiente texto:

> *"Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural, cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación".*

Este fue la primera constitucionalización del patrimonio cultural, sin embargo sus postulados no llegaron a plasmarse en ninguna norma infra constitucional[273].

Posteriormente, en el año 1957 el gobierno de facto de la Revolución Libertadora dictó el Decreto 12.088 (02/10/1957), que ratificó la *Convención Universal de los Derechos de Autor* que había sido aprobada el 06 de setiembre de

[273] López Ramón, Fernando (Coord.), *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, 1° ed., Madrid, 2017.

1952. Se argumentó en sus fundamentos que la ratificación argentina a la Convención mencionada significaría adherirse a un instrumento internacional que era el fruto de las más modernas expresiones del pensamiento mundial en la materia, como así también que la vigencia de la Convención de Ginebra debía proteger eficazmente los derechos morales y materiales de los autores y creadores de obras científicas, culturales y artísticas y acrecerá los vínculos espirituales que ligan a los países signatarios.

Quince años después, el 13 de noviembre de 1972, otro gobierno de facto – esta vez el de la Revolución Argentina- dictó la Ley 19.943 que aprobó la *Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales*, aprobada dos años antes (1970) en París.

En la misma década, esta vez en el marco del Proceso de Reorganización Nacional, se dictó la Ley 21.836 que aprobó la *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultura y Natural*, cuyo texto formó parte de esa ley y fue adoptado por la Conferencia General de la UNESCO en su 17ª reunión en París, el día 16 de noviembre de 1972.

En 1982 se dictó el Decreto 1.063, que dispuso que los funcionaros a quienes corresponda la decisión acerca del destino de los inmuebles propiedad del Estado nacional, entidades descentralizadas, empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su naturaleza jurídica, de una antigüedad de más de cincuenta años, no podrán autorizar modificación alguna en dichos inmuebles ni su enajenación sin la consulta previa de la Comisión Nacional de Muesos, de Monumentos y de Lugares Históricos y la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Artísticos, quienes deben expedirse teniendo en cuenta el valor histórico, artístico o arquitectónico de los inmuebles.

Ya en tiempos democráticos nuevamente, en 1984, se aprobó la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, llamado también Pacto de San José de Costa Rica, mediante Ley 23.054, que en su art. 26 dispuso el compromiso de los Estados partes de adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

El año siguiente, en 1985 se dictó la Ley 23.302 sobre *Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes*, aún vigente. Ella declaró en su art. 1 de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A su vez, obligó a implementar planes que permitieran la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza. Luego la reforma constitucional de 1994 incorporó pautas en tal sentido.

En el art. 14, se estableció como prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deben resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional.

En 1986 se sancionó la Ley 23.313 que aprobó el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* y el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* y su Protocolo Facultativo que, luego de la reforma constitucional de 1994 alcanzarían jerarquía constitucional al igual que la mencionada *Convención americana sobre Derechos Humanos*. El primero de ellos en su art. 15 reconoce a toda persona el derecho a participar de la vida cultural y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

En la misma década, el 20 de octubre de 1988 se promulgó la Ley 23.618 que aprobó la *Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y su Reglamentación*, que fueran adoptados 34 años antes en La Haya.

b).- La reforma de 1994: Nueva constitucionalización del patrimonio cultural en Argentina.

El derecho constitucional argentino contempla una definición amplia de ambiente a ser protegido, preservado y promovido en conjunto por la Nación y las Provincias. En consecuencia, la doctrina y la jurisprudencia –primero- sobre el derecho ambiental, y luego la paulatina legislación en la materia, proveen de las categorías de derechos colectivos e intereses difusos receptados constitucionalmente

a través del amparo colectivo, que virtualmente trasladan el interés sobre los bienes del propietario individual a la colectividad y al propio Estado. Estos conceptos engloban prerrogativas e intereses que a su vez fundarán las limitaciones en el uso y en el ejercicio de otros derechos individuales sobre la propiedad privada, elaborando mandatos especiales de conservación y protección más allá de aquellos generales que responden a la función social de la propiedad.

En los textos normativos de regulación y protección del patrimonio se da un espacio de confluencia entre estas nociones, propias del campo jurídico, con los conceptos y definiciones importados del campo patrimonial. Esto significa la modificación de sus sentidos originales, a la vez que condicionan las categorías creadas en el ordenamiento jurídico especial, dando forma y fundamento pero también límites a los mecanismos y recursos por los que el Estado interviene o puede intervenir en el ejercicio de las facultades típicas de la propiedad privada[274].

En el caso de Argentina, la Constitución Nacional en 1994 incorporó el art. 41 dentro del capítulo segundo de la primera parte, es decir, dentro de los nuevos derechos y garantías y que Rosatti cataloga como Derechos de Calidad de Vida. Este artículo dice así:

> *"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.*
>
> *Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.*
>
> *Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias*

[274] Sudar Klappenbach, L. y Ross M., *Alcances teórico-conceptuales y jurídicos en la protección legal de los patrimonios privados. El caso del Fogón de los Arrieros (Chaco, Argentina); RIIPAC*, Nº 7, 2015, págs. 1/21.

para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

Respecto de la intensidad de la tutela, es claro que la pretensión de la preservación del medio ambiente consagrada en la Constitución Nacional no constituye una mera aspiración sino un auténtico derecho con la peculiaridad de que el sujeto destinatario de la pretensión es también –de alguna manera- su agente, en la medida en que debe asumir un activo protagonismo para que tal pretensión pueda efectivamente concretarse. Al decir de Rosatti, se está en presencia de un derecho que se alimenta con el correlativo deber, teniendo como consecuencia necesaria que no solo el Estado es quien debe velar (y responsabilizarse) por el medio ambiente sano, sino todos y cada uno de sus habitantes[275].

Este art. 41 prevé, en cuatro párrafos, la tutela del ambiente y del patrimonio cultural. El primer párrafo se refiere al derecho y deber a un ambiente sano, incorporando la noción de desarrollo sustentable. El segundo párrafo establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de este derecho. En este párrafo se alude expresamente al patrimonio cultural y natural, como así también a la diversidad biológica, la información y educación ambientales. Si bien la interpretación mayoritaria entiende que la referencia a "autoridades" incluye a los tres niveles estatales existentes en Argentina, ello exige un análisis riguroso del sistema federal de competencias que rige en nuestro país.

Efectivamente, conforme al mismo, las provincias conservan para sí todo el poder no delegado expresamente en la Nación (art. 121 de la Const. Nac.). De este principio se derivan, a su vez, diversas normas específicas, como aquella que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias (art. 124 de la Const. Nac.), y la que establece como una facultad del Congreso Nacional dictar leyes que "*protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales*" (art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional). Esta última previsión aporta cierta complejidad a la división competencial en materia de patrimonio cultural.

[275] Rosatti, Horacio, *Tratado de Derecho Constitucional*, T. I, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2010, pág. 485.

El tercer párrafo del artículo analizado introduce las leyes de presupuestos mínimos de protección: un género de normas que era inexistente hasta ese momento en Argentina y que deslindan las competencias en esta materia, acordando al poder central la facultad de dictar normas mínimas de protección ambiental, y a las provincias la competencia para complementarlas[276].

- **Sustentabilidad cultural.**

Como se acaba de mencionar, el primer párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional consagra la noción de desarrollo sostenible o sustentable plasmada en el Informe Bruntland: aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

En coincidencia con Sabsay y Onaindia, puede afirmarse que si bien el primer párrafo parece referirse a que el desarrollo sostenible sólo se refiere a las actividades productivas, no caben dudas de que en realidad se apuntó a un tipo de modelo de desarrollo que haga viable la vida en el plantea en el presente y en el futuro[277]. Cabe recordar las palabras del Preámbulo cuando dice que los representantes del pueblo de la Nación Argentina ordenaron, decretaron y establecieron la Constitución con el objeto de, entre otros, promover el bienestar general para las generaciones presentes, para la posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Perspectiva que ha sido impuesta desde el orden positivo a través del desarrollo que la Ley 25.675 hace de esta materia.

A su vez, cuando se habla de necesidades no solo debe entenderse a las de contenido económico o materiales, sino también se debe incluir a las espirituales, pudiendo entenderse entonces el desarrollo sustentable o sostenible no sólo como la búsqueda de un progreso económico sostenido para que las generaciones subsiguientes vivan mejor; también debería ser interpretado como el despliegue intergeneracional del ideario de una comunidad, permanentemente enriquecido[278].

---

[276] Levrand, Norma Elizabeth, *op. cit.;* págs. 12/13.

[277] Sabsay, Daniel Alberto y Onaindia, José Miguel, *op. cit.*, pág. 143.

[278] Rosatti, Horacio, *Consecuencias culturales de la tutela constitucional del medio ambiente*, Daño ambiental, Revista de Derecho de Daños, T. 2011-1, Rubinzal Culzoni, pág. 32.

Desde esta perspectiva, la interpretación tuitiva se vincula con la protección constitucionalmente reconocida del patrimonio cultural nacional, regional y local, y aún con otros factores que permiten el reconocimiento como una comunidad histórica, tales como el nombre, el idioma o idiomas, los paisajes, las costumbres, los personajes arquetípicos, los acontecimientos históricos relevantes, la simbología y cualquier otro elemento que puede o no estar oficializado pero que se reconocen en la cotidianeidad.

Además de esto, todo país reconoce la vigencia de costumbres propias, que –cuando se vinculan con la formación o sustentación de la identidad nacional en algún momento histórico- se convierten en tradiciones que integran el acervo cultural de un país, encontrando tutela jurídica en este art. 41 CN. Rosatti concluye esta idea diciendo que la sustentabilidad presupone un inventario lúcido sobre lo que es valioso para las generaciones futuras. Este inventario no debe circunscribirse a activos o pasivos solamente materiales sino que también debe abarcar elementos culturales que hacen a la idiosincrasia y permiten la identificación como comunidad nacional[279].

- **Leyes de Presupuestos Mínimos.**

Para analizar este tema se seguirá a Levrand[280] que es muy clara en su exposición. La reforma constitucional incluyó una nueva forma de reparto de competencias, complementaria, en la cual la Nación sanciona las bases de la regulación y las provincias complementan, maximizándola. Por esta función, esta división de competencias se ha denominado competencia provincial maximizadora[281].

Ha sido discutida en doctrina la operatividad del tercer párrafo respecto del patrimonio cultural, fundando la posibilidad de sanción de normas de presupuestos mínimos culturales en una delegación de las provincias al respecto de la

[279] Rosatti, Horacio, *Consecuencias culturales*..., op. cit., pág. 33.

[280] Levrand, Norma Elizabeth, *op. cit.,* junio 2015; págs.. 12/13.

[281] La fuente en la que se basó esta norma es el art. 149.1.23 de la Constitución Española de 1978, que reserva al Estado la competencia exclusiva de dictar *"la legislación básica sobre protección del medio ambiente"* atribuyendo a las Comunidades Autónomas la competencia para dictar normas "adicionales" de protección.

consideración amplia de ambiente habilitada por la Constitución Nacional en su art. 41.

Con anterioridad a la reforma, la Nación había dictado normas de tutela del patrimonio cultural, fundadas en la competencia atribuida por la llamada "cláusula de prosperidad" o "del progreso" que establece el actual art. 75 inc. 18 de la Constitución Nacional como facultad del Congreso *"proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración [...]"*[282]. De esta manera la regulación de la tutela del patrimonio cultural se había realizado fundamentalmente desde la administración central, aunque respetando las jurisdicciones locales.

En consecuencia, existía una competencia concurrente de la Nación y las provincias respecto de la tutela del patrimonio cultural. Cada una en su ámbito de actuación, en principio, sostenía competencias para legislar a fin de preservar este patrimonio. La sanción de la reforma constitucional introduce una nueva especie de concurrencia, dado que si la Nación dicta leyes de presupuestos mínimos de tutela, las provincias tienen el deber de adecuar sus legislaciones a los mismos[283].

Así, y tal como sucede en otros ámbitos, en el caso de la legislación referida al patrimonio cultural corresponde al Congreso dictarla en sus aspectos mínimos o básicos de tutela, de manera tal que la legislación referente a este patrimonio puede ser emanada de los órganos provinciales o locales. La complejidad del deslinde de competencias en el ámbito del patrimonio cultural, y la particularidad de las regulaciones del mismo, han condicionado hasta el presente la sanción de leyes de presupuestos mínimos de protección en esta materia. No obstante, es posible individualizar algunas normas, insertas en leyes de protección general, dictadas al

[282] Esta delegación de facultades ha encontrado cabida jurisprudencial, desde antaño, en "la cláusula del progreso" en casos como "Bredeston", Ferrocarril Central Argentino v. Provincia de Santa Fe, registrado en Fallos 68-227, año 1897; Ferrocarril Central Argentino v. Municipalidad de Rosario registrado en 104-73, año 1902 en donde se ha dicho que el poder del Congreso de la Nación emanado de la "cláusula del progreso", puede ser ejercido de manera concurrente con el "poder de policía" de las provincias. Sin embargo, este poder es "desplazado" cuando su ejercicio se oponga a la legislación nacional dictada con base en la "cláusula del progreso". Este criterio cuyo origen tiene raíces en el principio "de la interferencia" de la doctrina estadounidense, se ha hecho extensivo también, en igual sentido, a las cláusulas de establecimiento de utilidad nacional y comercial. Para mayor desarrollo véase Barrenechea, María Eugenia, *Presupuestos Mínimos Ambientales*, Revista OIDLES, Vol. 2, N° 5, diciembre 2008.

[283] Levrand, Norma Elizabeth, *op. cit.*, pág. 5.

amparo de la cláusula del art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional[284], que siendo emanadas de la autoridad central, contienen lineamientos mínimos de protección que deben ser aplicados por las provincias[285].

- **Concepto y contenido de las leyes de presupuestos mínimos.**

¿Qué es una ley de presupuesto mínimo? El art. 6 de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) dice que se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

De la interpretación del artículo, surge que el Congreso Nacional será el encargado de establecer esta legislación de base, fijando principios comunes y los niveles mínimos de protección, sin alterar las jurisdicciones locales y las facultades propias de las provincias.

Previo a la Resolución 92/04 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), se generó algún debate doctrinario sobre el alcance de la palabra "norma", prevista en el art. 41 de la Constitución, en relación a lo encomendado en este a la Nación, entendiendo algunos que este no sólo incluía el dictado de leyes, sino también el dictado de decretos. La Resolución mencionada viene a despejar cualquier duda al respecto, sentando en su art. 1 que las normas de presupuestos mínimos ambientales son leyes dictadas por el Congreso de la Nación y en el mismo delimita a las complementarias diciendo que

> *"...las leyes de presupuestos mínimos pueden ser reglamentadas por las provincias de conformidad a los mecanismos que sus ordenamientos normativos prevén, en caso que éstas lo consideren necesario a los*

[284] Art. 75.- Corresponde al Congreso: 19 [...] Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

[285] Levrand, Norma Elizabeth, *op. cit.*, pág. 5.

efectos de su aplicación efectiva. La Nación, por su parte, tiene la misma facultad en el marco de su jurisdicción y en el ámbito de las competencias constitucionalmente delegadas. De la propia naturaleza jurídica de las reglamentaciones ejecutivas deriva su función de otorgar operatividad a las partes de las leyes que de por sí no la tengan, careciendo de entidad suficiente para introducir modificaciones en las mismas, ya que un reglamento no puede ir más allá de lo previsto por el legislador".

Autores como José Esaín[286] han entendido que regidos en materia ambiental por los principios de congruencia y complementariedad, en donde la competencia está desdoblada en dos funciones parciales calificadas por el instrumento normativo con el que son llamadas a concurrir de manera complementaria: la nación concurre con presupuestos mínimos, las provincias con complemento.

Por ello, los gobiernos locales serán los que, mediante el dictado de sus normas (por lo que cabría el dictado de ley, decreto, ordenanza, resolución ministerial en principio) ultimen los detalles de las políticas impuestas por leyes de presupuestos mínimos ambientales a aplicarse en su territorio. Si se diere el caso de que ya existían normas provinciales ambientales, se mantendrán vigentes si no contradicen las normas de presupuestos mínimos ambientales o deberán adecuarse a estos nuevos mandatos legales, de acuerdo al principio de congruencia, el que se encuentra ligado en estrecha relación con el principio de integración, denominado "federalismo ambiental"[287].

- **Leyes de Presupuestos Mínimos en materia de patrimonio cultural en Argentina. Posibles contenidos de *lege ferenda*.**

Como se ha visto anteriormente, el segundo párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional establece que las autoridades proveerán a la preservación del patrimonio cultural, complementando en el tercer párrafo ese deber con la asignación

[286] Esaín, José, Jurisprudencia Argentina, *El Federalismo Ambiental. Reparto de competencias legislativas en materia ambiental, en la Constitución Nacional, y en la Ley General del Ambiente 25.675*; Jurisprudencia Argentina 2004-I, pág. 776.

[287] Barrenechea, María Eugenia, *op. cit.*

a la Nación de la competencia de dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren jurisdicciones locales.

En la legislación argentina hay un desequilibrio entre la tutela del patrimonio cultural y la legislación ambiental, pues a pesar de ser esta última más reciente, su desarrollo ha sido mayor en relación a la protección ecosistémica. Mientras que hay una serie de normas de presupuestos mínimos sancionadas para la protección del ambiente en los aspectos propios del patrimonio natural, esta tarea esta aún hoy por hacerse en el caso del patrimonio cultural.

No obstante, existen versiones germinales en la legislación de protección de bienes culturales particulares. Esto lleva a la discusión doctrinaria sobre la nomenclatura de este tipo de leyes. Conforme una postura restringida[288], las leyes de presupuestos mínimos deben nombrarse de esta manera dada la relevancia de las mismas por su contenido y por constituir parte del orden público. Otro sector de la doctrina considera que las normas de presupuestos mínimos pueden estar contenidas en leyes que además posean normas de otra naturaleza[289]. Tal como sostiene Levrand, postura que se comparte, debe entenderse que es posible rastrear normas que contienen elementos, instrumentos o principios que pueden ser considerados presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural en una futura legislación en Argentina[290], tanto en el ámbito material como inmaterial, sin perjuicio de que existan elementos que pueden vincularse a un aspecto y no a otro. A continuación se verán algunos de esos elementos comunes a las dos facetas del patrimonio cultural.

i. Inventario o Registro de bienes culturales.

El Estado, los príncipes, los señores feudales, en el afán de percibir su parte y de cristalizar la base imponible que aseguraba su patrimonio, al menos en la proporción que les correspondía, inspiraron al instituto del Registro. Desde entonces

---

[288] Cafferatta, Néstor; *"Normas de presupuestos mínimos"*, *Informe al COFEMA* [en línea]. Septiembre de 2003 www.medioambiente.gov.ar/documentos/cofema/documentos/presupuesto_legislacion/informe_cafferatta.pdf- [consultado: 28/01/2014].

[289] Esaín, José, *Competencias Ambientales,* Buenos Aires, Lexis Nexis, 2008.

[290] Levrand, Norma Elizabeth, *op. cit.*, pág. 9.

hasta hoy, con innumerables variantes y un desarrollo impresionante, es una creación jurídica indispensable para sostener la seguridad y la paz social.

En la evolución internacional de la protección del patrimonio cultural, las naciones en diferentes convenios, declaraciones o cartas multilaterales, sobre todo a partir de la creación de la Sociedad de las Naciones, o bien con posterioridad, en las Naciones Unidas, dieron a los archivos, inventarios o registros, una importancia vital en esta búsqueda incesante de la seguridad del patrimonio cultural de los pueblos[291].

Por los compromisos internacionales a los que Argentina ha adherido, aprobado o ratificado, es ineludible la creación y mantenimiento de un registro nacional que debe comprender todas las registraciones, las provinciales, según bienes que se encuentren en jurisdicción de los Estados provinciales o sus municipios, o sean colecciones y objetos que se encuentren en jurisdicción nacional. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural estableció en su art. 11 inc. 1 que cada uno de los Estados Partes debe presentar al Comité del Patrimonio Mundial un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio.

Se ha discutido al respecto de la aplicabilidad de estos tratados o convenciones no obstante estar refrendados por las respectivas leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Calabrese, citando a Vanossi y refiriéndose a lo definido por el máximo Tribunal nacional sobre el tema, afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha formulado distinciones sobre la base de la operatividad de los tratados aprobados, recogiendo, en principio la doctrina extranjera sobre la materia, aunque sin establecer *obiter dicta* ningún enunciado de validez general. Es dificultoso poder distinguir cuándo un tratado es operativo y cuándo no lo es. Se puede decir que se está ante una cuestión de hecho a determinar por el contenido y la letra del tratado en examen[292].

---

[291] Calabrese, Antonio, *La protección legal del patrimonio cultural argentino: arqueológico y paleontológico*, 1ª ed., Buenos Aires, Lumiere, 2012, págs. 83/84.

Aquí este autor cita los ejemplos de la Carta de Atenas de 1931 que recomienda a los Estados defensores de la civilización que se presten una reciproca cooperación o colaboración, para lo cual emite voto para que los Estados o las instituciones creadas en ellos y reconocidas como competentes para tal fin publiquen un inventario; o la Convención de la UNESCO de 1970, aprobada por Argentina que sostiene que para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, exportación y las transferencias de propiedades ilícitas, los Estados Partes de la Convención se obligaron a, entre otras cosas, mantener al día un inventario nacional de protección.

[292] Calabrese, Antonio, *op. cit.*, pág. 29.

En el régimen interno, la Ley 25.197 crea el Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, centralizando el ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación. Establece la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación designando como autoridad de aplicación la Secretaría de Cultura nacional. A la misma le corresponde, entre otras, la facultad de coordinar con los gobiernos provinciales y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación de una red de registros comunes (art. 4 inc. 5).

Esta ley establece un registro sólo de bienes culturales de propiedad del Estado Nacional, invitando a las provincias a adherirse al régimen de la misma (art. 12) estableciendo en sus jurisdicciones un registro de bienes culturales provinciales o municipales. Esta disposición deja fuera de la categoría ley de presupuesto mínimo a esta norma ya que en estas las provincias no tienen la potestad de no adherir a ellas. Se configura entonces como "ley de adhesión". Por otra parte, de la interpretación de la ley en su conjunto no implica que las provincias tengan el deber de establecer estos Registros de Bienes Culturales en sus jurisdicciones como un presupuesto para la protección de los bienes. Y ello porque, en principio, la ley se refiere a la centralización de datos de bienes propiedad del Estado Nacional.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a la que adhirió Argentina mediante Ley 26.118, establece en su art. 12 la obligación de cada uno de los Estados Parte de confeccionar uno o varios inventarios del PCI presente en su territorio y de actualizarlos regularmente.

En Mendoza, el art. 10 de la Ley 6.034 creó el Registro de los bienes del patrimonio cultural de la Provincia de Mendoza, que contiene el registro de los bienes del patrimonio cultural de la Provincia que hayan sido declarados de conformidad con las disposiciones previstas en esa misma ley.

Si existe una institución insoslayable en la protección del patrimonio cultural, ésta es el registro. Ninguna convención multilateral sobre el tema dejó de señalar su importancia[293].

ii. Uniformidad de la legislación aplicable.

[293] Calabrese, Antonio, *op. cit.*, pág. 86.

La posición amplia respecto de la concepción de presupuesto mínimo considera que esta es una de las finalidades de tales normas. Así, el art. 7 de la Ley 25.743 establece que el Estado Nacional, las provincias y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires tienen como facultad concurrente alcanzar una legislación y organización administrativa uniforme en todo el territorio nacional.

Un primer paso para uniformar la legislación consiste en establecer terminologías estandarizadas respecto de los bienes regulados.

Por otra parte, la Ley 25.743 establece el procedimiento administrativo para obtener un permiso de investigación o prospección en yacimientos arqueológicos o paleontológicos (concesión), regulando incluso los requisitos necesarios para su solicitud (art. 23 y siguientes). Considerando que el otorgamiento de concesiones es una facultad de las autoridades locales, esta regulación detallada de los requisitos que tal organismo local debe exigir en la solicitud de permisos, parece ingresar en la delgada línea de separación de competencias nacionales y locales. Una interpretación conciliadora, utilizando el concepto de presupuesto mínimo de protección, permite despejar las dudas sobre la constitucionalidad de la norma y permitir una reglamentación local que maximice estos requisitos en su caso[294].

- **¿Puede considerarse la Ley 25.675 una ley de presupuesto mínimo de protección del patrimonio cultural?**

La respuesta es afirmativa. Según el art. 6 de esta ley, se entiende por presupuesto mínimo a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Se vio que cuando se hace referencia al ambiente, se incluyen a los recursos culturales que lo componen como un subsistema[295]. Por lo que esta ley puede

[294] Levrand, Norma Elizabeth, *op., cit.*, pág. 11.

[295] También lo ha sostenido la jurisprudencia. Ver fallo García, María Teresa vs. Municipalidad de San Isidro s. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos /// Cám. Cont. Adm., General San Martín, Buenos Aires; 13/10/2016; Rubinzal Online; 5278; RC J 7036/16. *"La actora demanda contra la Municipalidad de San Isidro por daño de incidencia colectiva en los términos de los arts. 27*

considerarse una ley de presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural, aunque pueden incorporarse los puntos mencionados anteriormente.

El art. 2 establece que la política nacional ambiental debe cumplir con el objetivo de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas y promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria.

También se establece como objetivo de la política ambiental nacional el fomento de la participación social en los procesos de toma de decisión referidos a los recursos ambientales. Esto se complementa con lo dispuesto por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que, en su art. 11 inc. b, establece como función de los Estados Parte adoptar las medidas de salvaguardia con la participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no

---

y ss., Ley 25675 (Ley General del Ambiente), solicitando se ordene a la comuna a adoptar una serie de medidas a fin de hacer cesar y recomponer el daño que se inflige al valor colectivo de democracia la denominación de las calles "Aramburu" y "Lonardi" en el partido de San Isidro, la que denegada por el juez de primera instancia motiva el recurso de apelación de la accionante. Aduce que se violó el principio de congruencia porque se analizó una cuestión distinta de la que propuso al formular su pretensión y que, por lo tanto, la conclusión a la que se arribó no constituyó una respuesta a ella, sin embargo el magistrado resolvió sobre las medidas solicitadas; ello más allá de la alusión que hiciera la actora respecto a la Ley 25675, por lo que no se considera que se haya infringido el principio, ya que -a contrario sensu de lo expuesto por la apelante- la cuestión a decidir se centraba en determinar -en definitiva- si eran conducentes, o no, dichas medidas. Asimismo, se advierte que la "democracia" como valor colectivo que se denuncia vulnerado por las ordenanzas de la Comuna de San Isidro, no resulta ser un bien jurídicamente protegido por la normativa ambiental, y en particular, por el art. 41, Constitución Nacional y por el art. 27, Ley 25675, ello sin perjuicio de dejar aclarado que los valores e instituciones democráticas se encuentran protegidos tanto por la normativa nacional como la provincial. La normativa ambiental al establecer los bienes que componen el patrimonio cultural tanto material como inmaterial, no ha buscado la protección de los valores democráticos de una nación. Si bien en relación a los bienes inmateriales su interpretación puede llegar a ser más amplia, la actora pretende inferir del texto lo que no dice. También la pretendida inconstitucionalidad de los decretos que impusieron el nombre de la calle Aramburu y de la calle Lonardi debe ser descartada, puesto que no hay suficiencia en su cuestionamiento y si bien el Tribunal puede declarar de oficio su inconstitucionalidad cuando resultan manifiestamente contrarios al orden constitucional, desde la perspectiva que apunta amén del contenido, a la génesis de las normas dictadas en períodos de facto, la inserción constitucional e infra constitucional de cláusulas y disposiciones que tutelan el sistema democrático tampoco abastece su invalidez y consecuente remoción del orden jurídico vigente. La Ordenanza 8649/2012 de la Municipalidad de San Isidro, que prohíbe la imposición de nombres a calles, avenidas, paseos y espacios públicos, plazas y monumentos que recuerden personalidades y/o funcionarios que hayan tenido participación en gobiernos de facto se refiere a la prohibición a partir de su dictado y no retroactivamente, porque si esa hubiera sido su intención así lo habría indicado en su articulado, además, implícitamente está reconociendo las normas anteriores, como es el caso del decreto de facto que impuso el nombre de la calle Aramburu y la asignación de la calle Lonardi (cuyo decreto no ha sido hallado conforme lo informado por el municipio). Ello no obsta a adherir a lo resuelto por el a quo impulsando una medida de acción positiva, la que se dirige al Concejo Deliberante, para que en caso de considerarlo arbitre los medios ejerciendo sus competencias privativas a fin de modificar los nombres de las calles Lonardi y Aramburu. Se rechaza el recurso de apelación y se confirma la sentencia en crisis".

gubernamentales pertinentes. En el mismo sentido, el art. 15 de la Convención, dispone que en el marco de sus actividades de salvaguardia del PCI, cada Estado Parte debe tratar de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.

Otro objeto de la política ambiental nacional, siempre conforme con el art. 2 de la ley, es prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo. Esto está íntimamente vinculado con la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro, ya que su apartado II punto 5 inc. b establece que debe tenerse debidamente en cuenta la importancia relativa de los bienes culturales de que se trate al determinar las medidas necesarias para salvar los bienes culturales cuando la zona en que están situados haya de ser transformada para la ejecución de obras públicas o privadas y cuando tales bienes o parte de ellos hayan de ser conservados y trasladados.

En el mismo sentido, la Recomendación dispone que las disposiciones encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deben ser preventivas y correctivas y tener por finalidad proteger o salvar los bienes culturales puestos en peligro por obras públicas o privadas que puedan deteriorarlos o destruirlos (ap. II puntos 7 y 8).

Otro argumento que funda la posición sostenida es que este objetivo de la política ambiental nacional ve su correlación en el inc. a del art. 5 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que dispone que con el objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, cada uno de los Estados Partes debe procurar la adopción de una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general, obligándose también Argentina a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural situado en el territorio de otros Estados Partes en la Convención, entre las que se encuentran actividades antrópicas que puedan afectarlo.

Otro objetivo de la política ambiental nacional es organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma. En el mismo sentido, el art. 14 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece que Argentina, como Estado Parte de la Convención, debe intentar por todos los medios oportunos asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del PCI en la sociedad; mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la Convención y promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el PCI pueda expresarse.

Por su parte, el art. 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural dispone que cada uno de los Estados Partes reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. En el mismo sentido, el art. 27 de ese instrumento legal compromete a cada uno de los Estados Partes, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural; y se obligan a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención.

Zendri opina que se debe dictar una ley marco pero respecto de los bienes del patrimonio cultural en sentido estricto, sin analizar el contenido que corresponda a la Ley 25.675. Según la autora, en el ordenamiento argentino hay falta de sistematización en la cuestión patrimonial[296]. Esta última opinión se comparte no obstante la postura expresada de que la Ley General del Ambiente funciona como una ley de presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural, brindando principios aplicables en la materia.

i. Operatividad de sus disposiciones.

[296] Zendri, Liliana, *La protección del patrimonio cultural de Argentina. De la legislación patrimonial a la consagración de un nuevo derecho.* Derecho y Ciencias Sociales. Abril 2017. Nº 16 (*Temas relativos al desarrollo regional y local), págs.* 40/55. ISNN 1852-2971. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. UNLP.

Como toda ley de presupuesto mínimo de protección ambiental, esta ley rige en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se deben utilizar para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta (art. 3).

Entre la legislación específica sobre patrimonio cultural se encuentra la Ley 21.836 que aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultura y Natural (referida, además del patrimonio natural, al patrimonio cultural material o tangible) y la Ley 26.118 que aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (referida, justamente, al patrimonio cultural inmaterial o intangible), entre otras.

Asimismo, y en el mismo sentido, el art. 3 de esta última Convención establece que ninguna disposición de ese instrumento puede ser interpretada de tal manera que modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados patrimonio mundial a los que esté directamente asociado un elemento del PCI; o afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes.

¿Esto último hace que las leyes que adhieren a las Convenciones sean de presupuesto mínimo de protección del patrimonio cultural? La respuesta es negativa[297].

c).- Legislación especial reguladora de actividades o expresiones culturales.

Como se ha visto, el régimen jurídico del patrimonio cultural es distinto a partir de la reforma constitucional de 1994 y la incorporación del art. 41 en la Carta Magna. Pero no solo esto, sino también la incorporación con jerarquía constitucional de tratados internacionales sobre derechos humanos entre los cuales se encuentran el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su

[297] La facultad de aprobar Tratados internacionales corresponde al Congreso Nacional como una prerrogativa exclusiva (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.) perteneciendo, en cambio, la facultad de dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección a la Nación (sin distinguir el Poder que pueda hacerlo) y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales (art. 41 de la Const. Nac.).

Protocolo Facultativo, que consagran derechos culturales, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.

Con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional, y con respaldo en que corresponde al Congreso Nacional el dictado de leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales (art. 75 inc. 19 de la Const. Nac.), así como dictar la protección mínima en materia ambiental (art. 41 de la Const. Nac.), aprobar Tratados (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.) y legislar en materia aduanera /art. 75 inc. 1 Const. Nac.), se dictaron diversas leyes que buscaron reglamentar o regular lo referido a algunas actividades culturales o expresiones culturales, conformando así leyes especiales, pero sin llegar al dictado de una ley que regule todo lo referido al conjunto del patrimonio cultural.

- **Ley 24.633: Regulación de la circulación de obras de arte.**

Esta ley fue sancionada el 20 de marzo de 1996, modificada por la Ley 27.444 de junio de 2018, y regula la importación y/o exportación de una serie de obras de arte de artistas argentinos o extranjeros hechas a mano con o sin auxilio de instrumentos de realización o aplicación, incluyendo aerógrafos. Esas obras de arte son:

1.- Pinturas realizadas sobre telas, lienzos, cartón, papel o cualquier otra clase de soportes con aplicaciones al óleo, acrílicos, pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta, acuarela, témpera, por cualquier procedimiento técnico, sin limitación en cuanto a la creación artística.

2.- Collage y asamblage. Cuadros matéricos con aplicación de pintura o no; cuadros que introducen objetos en su estructura proporcionando un efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de materiales; obras que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos sobre cajas y/o placas o chapas.

3.- Esculturas: las piezas de bulto o en relieve ejecutadas en piedra, metales, madera, yeso, terracota, arcilla, fibrocemento, materias plásticas u otros materiales.

4.- Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, punta seca, buriles, xilografías, litografías y demás planchas grabadas por cualquiera de los procedimientos empleados en ese arte; las pruebas obtenidas directamente en negro o en color en una o varias planchas con exclusión de cualquier procedimiento mecánico o fotomecánico, serigrafías artesanales.

5.- Cerámicas: las obras que se realizan por acción del fuego sobre cualquier clase de material, ya sean creaciones unitarias o en serie, siempre que esta última constituya una línea de reproducción hecha a mano por el artista.

6.- Arte textil que comprende técnicas tejidas y no tejidas (papel hecho a mano y fieltro), con exclusión de cualquier procedimiento mecánico o industrial hechos en serie y que además no constituyan una línea de reproducción hecha a mano por el artista ni que constituyan una artesanía.

En todos los casos, la autoridad de aplicación será quien defina el encuadre de un bien como obra de arte incluida en las categorías previamente mencionadas.

No están comprendidas en esta ley las copias, réplicas o reproducciones de obras de arte; las tallas en coral, marfil u otros materiales de lujo, ni las realizaciones artísticas a mano sobre piezas provenientes de procedimientos industriales en serie.

El Decreto reglamentario es el 1.321/97.

- **Ley 24.684: Declaración del tango como patrimonio cultural.**

Fue sancionada en agosto de 1996 y declaró al tango y todas sus manifestaciones artísticas (música, letra, danza y representaciones plásticas alusivas) como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación.

Claramente se trató de una manifestación intangible de patrimonio cultural que luego fue incorporada en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en conjunto (Argentina y Uruguay).

- **Ley 24.800: Ley Nacional del Teatro.**

Fue sancionada en abril de 1997 y fue llamada Ley Nacional del Teatro porque regula todo lo relativo a la actividad teatral que, por su contribución al afianzamiento de la cultura, es objeto de promoción y apoyo estatal. Creó el Instituto Nacional del Teatro como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral y autoridad de aplicación de la ley. Asimismo, se invitó a las provincias a adherir a la ley.

- **La Ley 24.993: Aprobación del Protocolo de Integración Cultural del Mercosur.**

Esta ley fue sancionada el 10 de junio de 1998 y promulgada el 10 de julio de 1998; aprobó el Protocolo de Integración Cultural del Mercosur, suscripto con las Repúblicas Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay.

Dicho protocolo establece en su art. I el compromiso de los firmantes de promover la cooperación y el intercambio entre sus respectivas instituciones y agentes culturales, con el objetivo de favorecer el enriquecimiento y la difusión de las expresiones culturales y artísticas del Mercosur.

Asimismo, por el protocolo establece también que el impulso por parte de los Estados Partes la cooperación entre sus respectivos archivos históricos, bibliotecas, museos e instituciones responsables de la preservación del patrimonio cultural, con el fin de armonizar los criterios relativos a la clasificación, catalogación y preservación, con el objeto de crear un registro del patrimonio histórico y cultural de los Estados Partes del Mercosur (art. VI).

- **Ley 25.197: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural.**

Esta ley fue sancionada en noviembre de 1999 y tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio que a partir de la identificación y registro del mismo será denominado Registro Nacional de Bienes Culturales (art. 1).

En el art. 2 define a los bienes culturales como todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. El universo de estos bienes constituye el patrimonio cultural argentino.

Se entiende por "bienes culturales histórico-artísticos" todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico. Siendo por ello un bien cultural histórico-artístico el que pertenezca a alguna de las siguientes categorías:

1. El producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas y paleontológicas, terrestres y subacuáticas.

2. Los objetos tales como los instrumentos de todo tipo, alfarería, inscripciones, monedas, sellos, joyas, armas y objetos funerarios.

3. Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos.

4. Los materiales de interés antropológico y etnológico.

5. Los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la historia social, política, cultural y militar, así como la vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores, científicos y artistas nacionales.

6. Los bienes inmuebles del patrimonio arquitectónico de la Nación.

7. Los bienes de interés artístico tales como:

- Pinturas y dibujos hechos sobre cualquier soporte y en toda clase de materias.

- Grabados, estampas, litografías, serigrafías originales, carteles y fotografías.

- Conjuntos y montajes artísticos originales cualquiera sea la materia utilizada.

- Obras de arte y artesanías.

- Producciones de arte estatutario.

- Los manuscritos raros e incunables, códices, libros, documentos y publicaciones de interés especial, sueltos o en colecciones.

- Los objetos de interés numismático, filatélico.

- Los documentos de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos.

- Los objetos de mobiliario, instrumentos musicales, tapices, alfombras y trajes.

Se ve que la ley está inspirada en la Convención del Patrimonio Mundial ya que acá también se recurre a la idea de valor excepcional (universal o nacional), para definir el universo que se protege mediante la centralización de su identificación y registro, en el cual deberían incorporarse aquellos bienes de "valor excepcional", de los caracteres y categorías indicadas, dedicada en especial a los bienes museológicos.

Estableció como autoridad de aplicación de la ley a la Secretaría de Cultura de la Nación, cuyas atribuciones para ello son (art. 4):

1. Efectuar el relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, de acuerdo al procedimiento que fija esta ley.

2. Realizar la catalogación de los bienes culturales de aquellos organismos que no tienen específicamente determinada esa tarea.

3. Identificar los bienes culturales que integran el Registro Único.

4. Crear un banco de datos e imágenes de bienes culturales compilados en la Nación, que debe presentar el análisis detallado de cada obra a partir de las siguientes características: título, autor, fecha, técnica, material, medidas, descripción, referencias, bibliografía, procedencia, altas y bajas, estado de conservación, localización, organismo responsable, situación jurídica y valoración económica, y se anexará una fotografía (art. 5).

5. Coordinar con los gobiernos provinciales y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la implementación de una red de registros comunes.

6. Ejercer la superintendencia sobre el conjunto de los bienes que constituyen el patrimonio histórico-cultural de la Nación.

7. Auditar la existencia y estado de conservación de los bienes culturales de todos los organismos que de ella dependan, haya o no recibido los datos de registración a que se refiere la ley (art. 7). Estos datos deben estar a disposición del público salvo aquellos relativos a la situación jurídica y valoración económica, los cuales serán facilitados con el consentimiento expreso de la autoridad de aplicación (art. 8).

8. Llevar un registro de las transmisiones de dominio que por cualquier causa se realicen de los bienes registrados (art. 10).

Esta ley establece que los museos y todos los organismos públicos nacionales a los cuales se hayan cedido obras en calidad de préstamos deben consignar los datos de sus respectivos patrimonios históricos artísticos a la Secretaría de Cultura de la Nación, a fin de constituir un inventario completo en el marco de un sistema informático (art. 6).

También en esta ley se invita a las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir, por lo que no puede considerarse una ley de presupuestos mínimos de protección.

Esta ley sólo se refiere a los bienes culturales de dominio público nacional y de carácter material, no abarcando las manifestaciones inmateriales del patrimonio.

- **Ley 25.257: Aprobación de la Convención del Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente.**

Esta ley fue sancionada en junio del año 2000 y aprobó la Convención del Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente, que fuera adoptada en Roma el 24 de junio de 1995 y que aplica para los reclamos internacionales para la restitución de objetos culturales robados y para la devolución de objetos culturales retirados fuera del territorio de un Estado Contratante en violación de las leyes que reglamentan la exportación de dichos objetos, con el fin de proteger el patrimonio cultural de ese Estado (considerando esto como un bien exportado ilegalmente).

Completa la noción de objeto exportado ilegalmente el art. 5 del Convenio cuando se refiere también a todo bien cultural que haya sido exportado temporalmente del territorio del Estado requirente para los fines de su exposición, investigación o restauración, con arreglo a un permiso expedido de conformidad con las normas de su derecho que regulan la exportación de los bienes culturales con el fin de proteger su patrimonio cultural, y que no sea devuelto de conformidad con las condiciones de dicho permiso.

A los fines de la Convención, se entiende como objetos culturales a aquellos que, por motivos religiosos o laicos, son importantes para la arqueología, prehistoria, historia, literatura, arte o ciencia y pertenecen a una de las siguientes categorías:

a).- Colecciones y especímenes exóticos de fauna, flora, minerales y anatomía, y objetos de interés paleontológico;

b).- Bienes relacionados con la historia, incluyendo la historia de la ciencia y tecnología y la historia militar y social, y con la vida de dirigentes nacionales, pensadores, científicos y artistas y con los eventos de importancia nacional;

c).- Productos de excavaciones arqueológicas (incluyendo las normales y las clandestinas) o de descubrimientos arqueológicos;

d).- Elementos de monumentos artísticos o históricos o de sitios arqueológicos que hayan sido desmembrados;

e).- Antigüedades de más de cien años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados;

f).- Objetos de interés etnológico;

g).- Bienes de interés artístico; tales como:

i).- Cuadros, pinturas y dibujos realizados totalmente a mano en cualquier tipo de soporte y material (excluyendo diseños industriales y artículos manufacturados decorados a mano);

ii).- Obras de arte originales de estatuas y esculturas en cualquier tipo de material;

iii).- Grabados, impresiones y litografías originales;

iv).- Colages artísticos y montajes originales en cualquier tipo de material;

h).- Manuscritos e incunables peculiares, libros antiguos, documentos y publicaciones de interés especial (históricos, artísticos, científicos, literarios, etc.) individuales o en colecciones;

i).- Sellos postales, estampillas fiscales y similares, individuales o en colecciones;

j).- Archivos incluyendo archivos de sonido, fotográficos y cinematográficos;

k).- Muebles que tengan más de cien años de antigüedad y antiguos instrumentos musicales.

- **Ley 25.517: Disposición de restos mortales de aborígenes.**

Sancionada en noviembre de 2001, estableció que los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen (art. 1).

Asimismo, los restos que no fueren reclamados por sus comunidades podrán seguir a disposición de las instituciones que los albergan, debiendo ser tratados con el respeto y la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos.

Para realizarse todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso consentimiento de las comunidades interesadas.

Esta ley también invitó a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la misma.

- **Ley 25.568: Aprobación de la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas.**

Fue sancionada en abril de 2002 y aprobó la ya referida Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, llamada también Convención de San Salvador que fuera adoptada en Washington en 1976.

- **Ley 25.675: Ley General del Ambiente.**

Fue sancionada en el año 2002 y se trata de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y cultural en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional, a los efectos de lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art. 1), así como también asegurarla preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos culturales.

i. Principios de la política ambiental.

La interpretación y aplicación de esta ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, están sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

Principio de congruencia: Esto significa que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la esta ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales deben atenderse en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

El derecho ambiental tiene una función evidentemente preventiva. A diferencia de las normas civiles, que procuran principalmente compensar daños, en material ambiental los menoscabos –generalmente de difícil o imposible reparación efectiva- deben evitarse. Esta función preventiva de preservación ambiental, se

cumple por la acción de la Administración y se puede hacer efectiva también por la autoridad jurisdiccional a partir de los requerimientos que los particulares insten y que brindan un remedio eficaz en el campo de la preservación ambiental preventiva[298].

La aplicación de este principio en el patrimonio cultural material también surge claramente del art. 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Allí se establece que cada Estado Parte reconoce que la obligación de proteger y conservar el patrimonio cultural que existe en su territorio le incumbe primordialmente. Debe entenderse que la protección a la que se refiere es aquella contra los efectos negativos que sobre los mismos se puedan producir. Asimismo, en el art. 5 sugiere una serie de medidas para que la protección y conservación sea eficaz, entre las que se encuentra el desarrollo de los estudios e investigación científica y técnica y perfeccionamiento de los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen su patrimonio cultural.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

La misma ley ha impuesto requisitos para la procedencia de este principio: el peligro de daño grave o irreversible y la ausencia de información o certeza científica.

Se dice que una cuestión es grave, cuando el rango de probabilidades de que un hecho exista o se produzca es muy alto. Esta altitud del rango es de apreciación subjetiva, pero se deben ponderar con criterio y prudencia las circunstancias existentes de acuerdo con los elementos obrantes a disposición del magistrado.

Pero el daño también puede ser irreversible. La expresión "o" disyuntiva de la norma indica que puede darse una u otra situación. El daño irreversible es aquel que una vez producido no puede ser solventado de modo alguno. Es decir que en principio no pueden volverse las cosas al momento anterior al daño y no puede sustituirse ese daño por una compensación de ningún tipo y que seguramente perjudica no sólo a quienes reclaman sobre este particular, sino que afecta el futuro

[298] Mathus Escorihuela (Dir.), *Derecho ambiental y de los recursos naturales*, Mendoza, 2006, pág. 36.

de los humanos. Ello sin perjuicio de las indemnizaciones que igualmente se deban a consecuencia del daño.

Tratándose de un sistema cautelar o preventivo no queda fuera del mismo la verosimilitud del derecho invocado. Claro que siendo vasos comunicantes verosimilitud y peligro en la demora, a mayor medida de uno es menor la del otro. Y en el presente caso el peligro de daño grave o irreversible se anota como un elemento de mucho peso en el peligro en la demora restringiendo a un campo menor a la verosimilitud del derecho, aunque este requisito no puede ser soslayado totalmente.

Y esta falta de información (que podrá deberse a negligencia de la parte, del tribunal o del estadio de la misma ciencia), o la falta de certeza científica (es decir que las conclusiones obtenidas no cuentan con un reconocimiento en el ámbito científico o los experimentos realizados resultan contradictorios) no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. Y esta última orden legal se le da al juez para que actúe ya sea rechazando pedidos fundados en esta exclusión o para la realización de la protección ambiental en tiempo y forma, actuando si es necesario de oficio[299].

Haciendo una interpretación amplia del art. 11.a de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, también puede surgir la presencia de este principio ya que en él se establece el deber de cada Estado parte de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del PCI presente en su territorio entendiendo que aun a pesar de la inexistencia de información o certeza científica.

Por su parte, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural considera en sus fundamentos que el deterioro o la desaparición de un bien de patrimonio cultural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo y que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleta, dada la insuficiencia de los recursos científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido. Pero se entiende que esta insuficiencia no es óbice para que se lleven a cabo las medidas tendientes a esa protección o conservación o impedir la degradación, aún cuando implique una falta de información o certeza científica dado

[299] Falcón, Enrique Manuel, *El sistema precautorio o la indeterminación en las ciencias en el campo ambiental*, RC D 526/2014.

que muchas veces esos bienes son únicos e irremplazables y cualquier demora puede ser irreversible.

La jurisprudencia tiene dicho que

> *"en el caso, estando en riesgo la conservación de un inmueble que, por su valor histórico-cultural y ubicación, ha sido objeto de un proyecto legislativo de inclusión en el catálogo del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre el cual su propietario ha presentado una solicitud de permiso de demolición, corresponde confirmar la decisión* a qua *que, en el marco de una acción de amparo, hace lugar a la medida cautelar intentada por un vecino de la ciudad para evitar tal patrimonio sea destruido. Ello así, en razón del riesgo cierto y concreto de que se produzca la pérdida definitiva e irreparable del inmueble en cuestión, en el supuesto de que el mismo fuere demolido, y por encontrarse satisfecho el requisito de verosimilitud del derecho, derivado del mencionado proyecto legislativo que incluiría al inmueble dentro de un catálogo de protección urbanística"*[300].

También que

> *"Corresponde confirmar la medida cautelar que ordenó al propietario, inquilinos o cualquier otra persona que pudiera tener acceso al inmueble objeto de autos (Confitería Richmond, declarada patrimonio cultural por Ley 3.865 de la Ciudad de Buenos Aires), que se abstengan de efectuar o continuar cualquier modificación, restauración o alteración en la estructura y frontispicio de la finca, como así también de retirar los muebles que forman parte de la misma; procediéndose, en el caso de que eso hubiese ocurrido, a su restitución, absteniéndose de disponer de ellos; y ordenándose, asimismo, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la medida dictada, en particular, el establecimiento de*

[300] Pusso, Santiago vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Otros procesos incidentales /// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 26/09/2007; Rubinzal Online; RC J 1554/08.

una custodia policial durante las 24 horas. El resguardo que la normativa le acuerda a estos bienes (Ley 3865, inc. a, art. 4, y art. 13, Ley 1227 de la Ciudad de Buenos Aires) y la aplicación del principio precautorio que rige en materia de protección ambiental natural y cultural, así como también el carácter eventualmente irreparable del daño que pudiere derivarse de la continuación de las actividades que podrían llevarse a cabo en el inmueble en cuestión, hacen aconsejable mantener los términos de la medida otorgada"[301].

En otro pasaje del mismo fallo se sostuvo que

"La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora se hallan relacionados de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la demostración del peligro en la demora y viceversa. En autos, corresponde confirmar la medida cautelar que ordenó al propietario, inquilinos o cualquier otra persona que pudiera tener acceso al inmueble sito en la calle Florida 466/68 (Confitería Richmond), que se abstengan de efectuar o continuar cualquier modificación, restauración o alteración en la estructura y frontispicio de dicha finca, como así también de retirar los muebles que forman parte de esa confitería; procediéndose, en el caso de que eso hubiese ocurrido, a su restitución, absteniéndose de disponer de ellos. Ello así, pues la declaración de patrimonio cultural por Ley 3.865 de la Ciudad de Buenos Aires, confirma la verosimilitud del derecho, y dado que la revocación de la cautelar podría generar perjuicios de carácter irreparable al momento del dictado de la sentencia definitiva (verbigracia, la definitiva alteración del inmueble), también cabe tener por acreditado el recaudo concerniente al peligro en la demora"[302].

---

[301] Lubertino, María José vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s. Otros procesos incidentales /// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 02/03/2012; Rubinzal Online; 42140/1; RC J 1565/12.

[302] Lubertino, María José vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s. Otros procesos incidentales /// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 02/03/2012; Rubinzal Online; 42140/1; RC J 1565/12.

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deben velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Particularmente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce que ese patrimonio se transmite de generación en generación (art. 2.1). Lo mismo sucede con el patrimonio cultural material: Cada uno de los Estados Partes de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural reconoce la obligación de transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural situado en su territorio (art. 4).

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

Esto implica que además de la responsabilidad ambiental que impone la prioritaria recomposición del daño (art. 41 de la Const. Nac. y Ley 25.675), pueden existir responsabilidades punitivas frente a las conductas dañinas.

Así, el art. 8 de la Ley 12.665 responsabiliza penalmente por el ocultamiento, destrucción, alteración, transferencia o gravamen, exportación o cualquier otro acto material o jurídico practicado sobre bienes protegidos y lo sanciona con multa.

Otro ejemplo de ello es el art. 184 inc. 5 del Cód. Penal que agrava el daño cuando es ejecutado en archivos, bibliotecas, museos, tumbas, monumentos o signos conmemorativos.

Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

Este principio se refleja en el contenido de la Ley 12.665 establece que los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan

sometidos a la custodia y conservación del Estado Nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales.

Asimismo, la misma ley establece que la Comisión Nacional puede celebrar con los propietarios de los bienes declarados acuerdos a fin de determinar el modo cooperativo de asegurar el cumplimiento de los fines de la ley.

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Si bien esta referido a los recursos naturales, no hay obstáculo alguno para que también sea aplicable a los recursos culturales. Especialmente cuando las modalidades de uso de los recursos naturales generalmente están impregnadas de pautas culturales (como ocurre por ejemplo con la trashumancia de los pastores andinos).

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.

La ley también establece que los distintos niveles de gobierno deben integrar en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la ley.

ii. Competencia judicial.

La aplicación de la Ley 25.675 corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.

En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

Este mismo régimen es aplicable al PCI por el carácter de presupuesto mínimo de protección ambiental de la Ley 25.675.

Lo aquí sostenido se funda también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional concerniente al patrimonio cultural material:

> *"Si el amparo interpuesto exige considerar por un lado, la Ley provincial de conservación del patrimonio cultural 1280 de la Provincia de Misiones y su decreto reglamentario y las declaraciones de patrimonio cultural de la ciudad de Posadas que tuvieron por objeto la estación ferroviaria que se pretende conservar, se trata de normas que integran el derecho público local y el hecho de que la amparista invoque el respeto de cláusulas constitucionales, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal en razón de que a la finalidad perseguida no cabe asignarle el carácter de cuestión estrictamente federal"*[303].

También

> *"Corresponde a la competencia originaria de la CSJN la acción de amparo promovida por dos comunidades pertenecientes a la etnia wichi contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional para que se lleve a cabo la demarcación de su propiedad comunitaria y la titularización de las tierras que tradicionalmente ocupan; y obtener la tutela de sus derechos constitucionales a la propiedad, a la identidad y a la diversidad, a la vida en condiciones dignas, a la salud, al medio ambiente, a la preservación de su patrimonio natural y cultural, a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás asuntos que les afecten. Ello así, al ser parte una provincia en una causa de exclusivo carácter federal. El proceso constituye una "causa indígena" que debe encuadrarse dentro del inc. 17, art. 75, Constitución Nacional, en cuanto consiste sustancialmente en que ambos estados -provincial y nacional- le reconozcan a la comunidad*

[303] Fundación SOS Comunidad vs. Provincia de Misiones s. Acción de amparo /// CSJN; 06/03/2007; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; F.1480.LXLI; RC J 12401/11

indígena su derecho de propiedad sobre las tierras ocupadas por ellos históricamente. Lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de tal precepto federal, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y, permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional que se alega. De este modo, la presunta afectación del art. 21, Convención Americana de Derechos Humanos, frente a la omisión del Estado Nacional y de la Provincia de Salta de legislar de modo concurrente sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, tal como lo ordena el inc. 17, art. 75, configura una causa federal. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remite en disidencia del Dr. Zaffaroni.)"[304].

iii. Instrumentos de la política y la gestión ambiental.

Esta ley consagra como instrumentos de la política y la gestión ambiental los siguientes: El ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental y el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

- **El ordenamiento ambiental del territorio:**

El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, debe asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales (entre los que se encuentran a los culturales), posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se debe considerar, en forma prioritaria:

a).- La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;

[304] Comunidad de San José - Chustaj Lhokwe y Comunidad de Cuchuy vs. Provincia de Salta y otro s. Amparo /// CSJN; 15/10/2013; Rubinzal Online; C.1133.XLV; RC J 17612/13

b).- La distribución de la población y sus características particulares;

c).- La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;

d).- Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

e).- La conservación y protección de ecosistemas significativos.

El ordenamiento territorial puede resultar una herramienta útil para la salvaguarda del PCI atento a que en muchos casos, este patrimonio se desarrolla en un lugar o contexto paisajístico determinado. En otras palabras: muchas veces la zona o región y sus paisajes son determinantes para la salvaguarda del PCI.

- **La evaluación de impacto ambiental y el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas:**

Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución (art. 11).

En lo que respecta al patrimonio cultural, la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro (1968) recomienda tener en cuenta la importancia relativa de los bienes culturales de que se trate al determinar las medidas necesarias ya sea para conservar el conjunto de un lugar arqueológico, de un monumento o de otros tipos de bienes culturales inmuebles contra las consecuencias de obras públicas o privadas; como así también para salvar los bienes culturales cuando la zona en que están situados haya de ser transformada para la ejecución de obras públicas o privadas y cuando tales bienes o parte de ellos hayan de ser conservados y trasladados.

Sigue diciendo la Recomendación mencionada que las disposiciones encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían ser preventivas y correctivas y tener por finalidad proteger o salvar los bienes culturales puestos en peligro por obras públicas o privadas que puedan deteriorarlos o destruirlos, por ejemplo: a).- Obras de expansión y renovación urbanísticas, en las cuales aunque se respeten monumentos registrados se modifiquen estructuras menos importantes,

destruyendo con ello las vinculaciones y el marco histórico que rodea a los monumentos en los barrios históricos; b).- Obras similares en zonas en las que conjuntos tradicionales de valor cultural puedan correr peligro de destrucción por no existir en ellos un monumento registrado; c).- Modificaciones o reparaciones inoportunas de edificios históricos; d).- La construcción o modificación de carreteras que constituyan un grave peligro para lugares, monumentos o conjuntos de monumentos de importancia histórica; e).- La construcción de embalses con fines de riego, producción de energía eléctrica y prevención de las inundaciones; f).- La construcción de oleoductos y de líneas de transmisión de energía eléctrica; g).- Los trabajos agrícolas como el arado profundo de la tierra, los de avenamiento y riegos, la roturación y nivelación del terreno y de repoblación forestal; h).- Los trabajos que exige el desarrollo de la industria y el progreso técnico de las sociedades industrializadas, como la construcción de aeródromos, la explotación de minas y canteras y el dragado y mejoramiento de canales y puertos, etc. Esto podría denominarse impacto cultural de la obra.

De la misma manera, se debería tener en cuenta la elaboración de una evaluación de impacto cultural que obras públicas o privadas o eventos de cualquier naturaleza y de gran envergadura puedan tener sobre el PCI de una comunidad.

- **La educación ambiental:**

La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos ambientales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

En consonancia con lo expuesto, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece en su art. 14 que cada Estado Parte intentará por todos los medios pertinentes: a).- asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del PCI en la sociedad, en particular mediante programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos interesados; actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del PCI, y especialmente de gestión y de investigación científica; y medios no formales de transmisión del saber; b).- mantener al público informado de

las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la Convención; y c).- promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el PCI pueda expresarse.

- **El sistema de diagnóstico e información ambiental:**

La ley establece que toda persona debe proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrolla.

Asimismo, y de acuerdo a lo normado por el art. 41 de la Constitución Nacional, todo habitante puede obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

La autoridad de aplicación debe desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible.

Tal como se ha dicho anteriormente, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su art. 14 inc. b obliga a cada Estado Parte a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la Convención. En el mismo sentido la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en el inc. 2 del art. 27.

La ley también dispone que las autoridades son responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas (art. 18) y obliga al Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, a elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe debe contener un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.

- **El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable:**

Si bien la ley no tiene contenido al respecto, hay casos en que se establece, por ejemplo, la desgravación impositiva para casos de bienes patrimoniales. Esto sucede en la Ley 12.665, previendo este beneficio en su art. 6.

iv. Participación ciudadana.

La Ley 25.675 establece en su art. 19 que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Se entiende que esto también debe alcanzar a los recursos culturales que conformar el ambiente y cuya protección se busca.

Las autoridades deben institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente (art. 20), no siendo vinculante la opinión u objeción de los participantes para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

Según la ley, la participación ciudadana debe asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (art. 21).

No obstante, estas instancias no son las únicas en que debe asegurarse la participación ciudadana. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial dice en su art. 15 que en el marco de sus actividades de salvaguardia del PCI, cada Estado Parte debe tratar de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. Esto respondiendo al objetivo de la política ambiental nacional referido al fomento de la participación social en los procesos de toma de decisión vinculados a los recursos ambientales.

El asunto de la participación ciudadana está íntimamente vinculado al acceso a los bienes culturales. Al respecto, el art. 15 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que goza de jerarquía constitucional en Argentina, establece que la Nación reconoce el derecho que toda persona tiene a participar de la vida cultural. En igual sentido el art. XIII de la Convención Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es el derecho humano a la

cultura y así lo revelan las convenciones internacionales referentes a patrimonio cultural.

En el ámbito interno, Mendoza cuenta con el Decreto 1882/2009 que en su art. 24 inc. b punto IV garantiza el acceso al patrimonio inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio.

La garantía de acceso justifica, también, la preservación de los bienes a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan gozar de ellos. El acceso se configura como una característica intrínseca de los bienes del patrimonio cultural. Por ello, la tutela del mismo como un presupuesto mínimo de protección resulta relevante.

v. Seguro ambiental y fondo de restauración.

Establece la obligación de que toda persona humana o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, contrate un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

Al referirse la ley a actividades riesgosas para el ambiente y sus elementos constitutivos, también aplica para los recursos culturales tanto materiales como inmateriales, aunque en este último caso resultaría más difícil determinar la recomposición del daño.

vi. Daño ambiental.

La Ley 25.675 define al daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos y sus normas rigen para todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva (art. 27).

Cabe recordar que el art. 41 de la Constitución Nacional ordena que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca

la ley. En este sentido, el art. 28 establece que el que cause el daño ambiental es objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción, queriendo esto decir que la culpa del agente dañador es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad (art. 1722 del Cód. Civil y Com. de la Nación), por lo que la obligación de restablecer o recomponer se efectúa con abstracción de la imputación subjetiva[305].

Al ser objetiva la responsabilidad, la exención de la misma sólo se produce acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (art. 29). Esto es consecuente con el ya referido art. 1722 del Cód. Civ. y Com. de la Nación que cierra diciendo que en caso de responsabilidad objetiva, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario, entre los cuales se aplica el caso fortuito o fuerza mayor (art. 1730 del Cód. Civ. y Com.).

La ley también dice que en caso de que no sea técnicamente factible la recomposición, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que la misma ley crea, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa, acorde al principio de responsabilidad ya expuesto.

A continuación, esta ley expresa que una vez producido el daño ambiental colectivo, tienen legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, queda legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción[306].

---

[305] Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.), *Código Civil y Comercial de la Nación Comentado*. T. VIII. 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 389.

[306] Fallo Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos vs. Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Provincia de Buenos Aires) s. Acción de amparo /// SCJ, Buenos Aires; 07/03/2007; Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires; RC J 6724/07: *"Cuando se menoscaban bienes indivisibles que no pertenecen con exclusividad a una persona o a un grupo determinado de personas, sino a grupos indeterminados de sujetos anónimos y sin ningún vínculo jurídico que los amalgame o de una vastedad tal como la sociedad en su conjunto o la humanidad toda (medio ambiente, patrimonio histórico, natural, artístico y cultural de una comunidad; la flora y la fauna de una región, etc.), se lesionan intereses difusos. De allí que la legitimación para demandar su tutela y recomposición*

Sigue diciendo que a partir de que se haya deducido demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no pueden interponerla los restantes, pero esto no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, toda persona puede solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

Conforme al art. 31, si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí, para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

Respecto a la competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente puede disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general (art. 32).

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, pueden solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez puede, asimismo, disponerlas sin petición de parte.

Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental agregados al proceso, tienen la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.

La sentencia hace cosa juzgada y tiene efecto *erga omnes*, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias (art. 33).

---

corresponda tanto a los afectados, al defensor del pueblo, a las asociaciones (si las hubiere) que propendan a sus fines e, incluso, en determinados casos, al Fiscal de Estado y al representante del Ministerio Público (art. 43, Const. Nac.). (Del voto del Dr. Roncoroni.)".

vii. Del Fondo de Compensación Ambiental.

En el art. 34 la ley crea un Fondo de Compensación Ambiental (FCA) que es administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y está destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.

Los FCA pueden definirse como instrumentos económicos de garantía financiera, que hacen posible la adecuada gestión ambiental de recursos ambientales dañados, a través del financiamiento correspondiente, cubriendo los gastos irrogados con motivo del cumplimiento de sus fines específicos[307].

Las autoridades pueden determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.

La integración, composición, administración y destino de dicho fondo son tratados por ley especial. Tal como se dijera, en caso de que no sea técnicamente factible la recomposición, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente debe depositarse en este FCA que, debe entenderse, es uno por cada jurisdicción.

- **Ley 25.743: Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.**

Esta ley fue sancionada en junio de 2003 y reemplazó a la Ley 9.080 del 26 de febrero de 1913. Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.

La propia norma distingue al patrimonio arqueológico del paleontológico, formando parte del primero las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas

[307] Iriarte, Paula, *Fondo de compensación ambiental: su presente y su futuro*, trabajo presentado en el marco de la Diplomatura de Derecho y Política ambiental. Universidad Austral. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curso lectivo 2017. https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/06/19/fondo-de-compensacion-ambiental-su-presente-y-su-futuro/ [consultado en marzo de 2019].

jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes (según el art. 2 del Decreto 1.022/2004, estás últimas épocas abarca los últimos 100 años contados a partir de la fecha de sucedidos los hechos o los actos de que se trate). Y del segundo, los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (art. 2) estableciendo pautas para su registro y condiciones de transferencia sólo con fines científicos y culturales.

Esta norma es de aplicación en todo el territorio de la Nación (art. 3), entendiendo Berberián que esta fórmula se relaciona con el ámbito espacial de validez de la norma, pero la facultad de aplicarla, es decir, ponerla en funcionamiento, corresponde a la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a las provincias según la respectiva jurisdicción donde se encuentren los vestigios del pasado. Todo esto fundado en el art. 1 del Decreto reglamentario 1.022/2004[308].

Este aspecto, da pie a que la norma pueda considerarse de presupuestos mínimos de protección ambiental, en la medida en que responde a la definición del art. 6 de la Ley 25.675 en cuanto a que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección cultural.

Sin embargo, si este fuera el caso, corresponde tener en cuenta el conflicto que encierra el art. 4 de la ley con respecto al respeto a las jurisdicciones locales, en la medida en que la norma dispone que corresponde a la Nación la tutela patrimonial, entendiendo por tal a la protección jurídica o legal de todo el patrimonio arqueológico y paleontológico del territorio nacional, más allá del derecho de dominio y de protección y preservación que corresponda a las autoridades competentes (esto según la reglamentación de la ley).

Berberián considera que esta ley debe circunscribirse a la protección de los bienes materiales muebles e inmuebles correspondientes a las entidades socioculturales que habitaron el país en épocas precolombinas o si se quiere otra terminología, en épocas anteriores al contacto con la cultura europea, dejando la

[308] Berberián, Eduardo E., *op. cit.*, pág. 49.

protección de los bienes históricos, aun aquellos que fueran obtenidos con metodología arqueológica, a las regulaciones de la Ley 12.665[309].

- **Ley 26.118: Aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.**

Fue sancionada el 5 de julio de 2006 e incorporó a derecho interno nacional la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante la aprobación de la misma sin reserva alguna.

Esta ley surgió como un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que ingresó al Senado el día 12 de abril de 2006 y obtuvo media sanción en dicha Cámara por unanimidad de los presentes (38 senadores) el día 14 de junio del mismo año. Allí, el senador Carlos Reutemann explicó que desde la Cancillería se había solicitado el tratamiento del proyecto a la brevedad porque entre el 27 y el 29 de junio de ese año se celebraría la Asamblea General de dicha Convención, en la cual se elegían los 18 Estados miembros que conformarían el comité, para lo cual Argentina debía ratificar dicho tratado a fin de ser miembro permanente y Estado parte[310].

Ya en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado sin discusión alguna el día 05 de julio de 2006[311], siendo promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional. El 08 de agosto de 2006 fue depositado el instrumento de ratificación, momento desde el cual Argentina se convirtió en un Estado parte de la Convención, adoptando para sí todas las disposiciones allí contenidas y ya analizadas.

- **Ley 26.305: Aprobación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.**

Esta ley fue sancionada el 14 de noviembre del año 2007 y aprobó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que fuera adoptada en París el 20 de octubre de 2005.

---

[309] Berberián, Eduardo E., *op. cit.*, pág. 45.

[310] Diario de sesiones del Honorable Senado de la Nación Argentina. Sesión del día 14 de junio de 2006. Al final Argentina no formó parte de la primera reunión de la Asamblea General de los Estados partes de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que tuvo lugar en la sede de la UNESCO, Sala XII, los días 27, 28 y 29 de junio de 2006.

[311] Diario de sesiones de la H.C.D.N. Sesión del día 05 de julio de 2006.

- **Ley 26.852: Día Nacional de los afroargentinos y de la cultura afro.**

Esta ley fue sancionada el 24 de abril de 2013 e instituyó el día 8 de noviembre de cada año como "Día Nacional de los afroargentinos y de la cultura afro" en conmemoración de María Remedios del Valle, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla.

d).- Autoridad de aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y demás organismos relacionados.

- **Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales**[312].

La autoridad de aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales y depende de la Secretaría de Patrimonio Cultural dentro del ámbito de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación dependiente, a su vez, del Ministerio de Cultura.

Son sus objetivos los siguientes:

- Desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales;
- Difusión y promoción del patrimonio cultural en el ámbito nacional e internacional;
- Salvaguardia del PCI;
- Asesoramientos y actividades de capacitación en Patrimonio Cultural;
- Acciones de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales;
- Circulación de Bienes Culturales;
- Otorgamiento de licencias de exportación y franquicias de importación de bienes culturales;
- Conservación y Rescate de Bienes Culturales;

312 https://www.cultura.gob.ar/institucional/organismos/direccion-nacional-de-bienes-y-sitios-culturales/ [consultado en mayo de 2019].

- Protección de los yacimientos y sitios arqueológicos terrestres y subacuáticos.

Respecto al PCI, se encarga de impulsar acciones para la salvaguardia del mismo. Organiza actividades de capacitación y participa en proyectos de cooperación técnica internacional. Lleva adelante el Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, y promueve la visibilización de las expresiones culturales inmateriales y la participación de las comunidades asociadas en la gestión y salvaguardia del PCI.

Entre sus objetivos se encuentran favorecer la identificación de las expresiones del PCI, sensibilizar a la población en general y capacitar a gestores culturales y a representantes de instituciones públicas y privadas respecto del PCI y los modos de abordarlo. Para ello, se diseñan actividades de capacitación, evalúan propuestas de reconocimiento, realizan registros audiovisuales, promueve el establecimiento de políticas específicas a nivel local, difunde herramientas para la salvaguardia, acompaña el desarrollo de proyectos específicos e interviene en las acciones locales vinculadas a organismos internacionales como CRESPIAL y UNESCO.

- **Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano[313].**

En el INAPL se realizan tareas de gestión, investigación, asesoramiento, capacitación y protección del patrimonio nacional. Fue creado el 20 de diciembre de 1943 con el nombre de Instituto Nacional de la Tradición, por iniciativa del maestro Juan Alfonso Carrizo, quien fue su primer director.

A lo largo de su existencia cambió de nombre según las distintas funciones que fue cumpliendo en la conformación de la identidad y la cultura nacionales: Instituto Nacional de Folklore, Instituto Nacional de Filología y Folklore, Instituto Nacional de Antropología y, a partir del año 1991, se le da su presente denominación.

Desde su creación, se realizan estudios e investigaciones en las áreas de antropología social, folklore y arqueología. Se llevan adelante proyectos dedicados a la recuperación, documentación y gestión del patrimonio cultural tangible e

[313] https://inapl.cultura.gob.ar/info/instituto-nacional-de-antropologia-y-pensamiento-latinoamericano/ [consultado en mayo de 2019].

intangible. También se asesora en propuestas alternativas de desarrollo socio-cultural y económico regional.

Desde 1960, el INAPL edita Cuadernos, se realizan también otras publicaciones especializadas y de difusión, como el Boletín Novedades de Antropología de aparición cuatrimestral.

Las funciones del Instituto son:

- Preservar, documentar, difundir y asesorar sobre el patrimonio cultural tangible e intangible a nivel nacional.
- Concientizar y asesorar sobre los mecanismos de protección del patrimonio cultural.
- Producir conocimientos y asesorar sobre estrategias de vida pasadas y presentes.
- Investigar, recuperar, preservar, documentar y proteger los sitios arqueológicos, terrestres y subacuáticos y con arte rupestre.
- Llevar un registro nacional de los sitios arqueológicos, terrestres y subacuáticos, y su estado de conservación.
- Rescatar y fortalecer la memoria colectiva y del reconocimiento de la identidad cultural, dentro de su diversidad y mestizaje, y el respeto por el pluralismo cultural y étnico.
- Participar y asesorar en propuestas de alternativas de desarrollo sociocultural regional y en la planificación de políticas socioculturales, evaluando las necesidades culturales de la población.
- Estudiar y difundir las culturas tradicionales, indígenas y criollas e incentivar a la comunidad a valorar su historia y su riqueza cultural.
- Intervenir en la promoción, capacitación y difusión de las artesanías tradicionales argentinas.
- Participar en la conformación de redes de información cultural.

- **Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"[314].**

Las funciones del Instituto son la producción de conocimiento musicológico, junto al resguardo y generación de fondos patrimoniales

[314] https://inmcv.cultura.gob.ar/info/el-instituto/ [consultado en mayo de 2019].

Entre los antecedentes para la formación del Instituto se puede mencionar el ingreso de Carlos Vega, en 1926, al Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". En 1931, en dicha institución se creó el "Gabinete de Musicología Indígena" que, en 1944, pasó a denominarse "Instituto de Musicología". En 1948, por decreto presidencial, dicho instituto se separó del Museo y fue dirigido por su fundador (Carlos Vega). Desde 1971 se denominó Instituto Nacional de Musicología y, en 1973, se determinó su nombre actual.

El objetivo del Instituto es el estudio de las diversas expresiones musicales, pasadas y presentes, creadas y practicadas en la Argentina y en otros países latinoamericanos. Los principales servicios que brinda el Instituto son la asistencia técnica y asesoramiento a organismos y usuarios individuales –en los ámbitos nacional e internacional– y divulga los hechos documentados y las teorizaciones que efectúan sobre ellos sus musicólogos, a través de jornadas académicas, conferencias y publicaciones.

El Instituto presta dos servicios principales: atención de consultas patrimoniales y asesoramiento patrimonial. Las consultas bibliográficas y sobre documentos musicales son prestadas por el Archivo, Biblioteca, Fonoteca y Museo de Instrumentos Musicales. La asistencia técnica y asesoramiento relativos a la investigación musicológica y al patrimonio sonoro argentino está a cargo de los investigadores y coordinadores de cada área.

- **Sistema de Información Cultural de la Argentina[315].**

El Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación y produce, sistematiza y difunde información referida a la actividad cultural. Es a la vez una herramienta de gestión y un instrumento de información pública. Trabaja con insumos provenientes de distintas fuentes, como relevamientos propios, organismos públicos, gobiernos provinciales y cámaras empresarias, entre otros.

El SInCA pone a disposición, en diversos soportes, información relativa a la producción, las prácticas y consumos culturales, y la normativa referida a temas

[315] https://www.sinca.gob.ar [consultado en mayo de 2019].

culturales. Además, desarrolla varios proyectos que intentan dar cuenta de las diversas facetas de la realidad cultural argentina, como el Mapa Cultural, la Cuenta Satélite de Cultura, y la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, entre otros.

- **Fondo Nacional de las Artes[316].**

Nació en 1958 como un organismo autárquico que depende de la Secretaría de Cultura y desde el mismo se financia y apoya el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro, así como también promover la industria cultural en todo el país.

Su acción abarca múltiples disciplinas: arquitectura, artesanías, arte y tecnología, arte y transformación social, artes audiovisuales, artes escénicas, artes visuales, diseño, letras, música y patrimonio; otorgando becas, subsidios y préstamos y organizando concursos. Además, a través de fondos concursables facilita la edición de contenidos artísticos y literarios en diferentes formatos.

En el FNA existe un amplio patrimonio artístico, una colección propia de obras de artes visuales, artesanías, filmaciones y libros. También una biblioteca y mediateca especializadas y abiertas al público.

El formato pionero de gestión fue replicado por diversas instituciones del mundo. Entre ellas, el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO, creado en 1974.

- **Instituto Nacional de Asuntos Indígenas[317].**

Este instituto fue creado mediante Ley 23.302 sancionada en setiembre del año 1985, como entidad descentralizada con participación indígena, que hoy depende la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Tiene como función el desarrollo y coordinación de políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas. También impulsa la

[316] https://fnartes.gob.ar/ [consultado en mayo de 2019].

[317] https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai [consultado en mayo de 2019].

participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus formas de organización tradicional y sus valores. Implementa también programas de resguardo y difusión del PCI de estos pueblos.

e).- Relevamiento de manifestaciones del PCI en Argentina[318].

A nivel nacional existen las siguientes declaraciones de PCI: tango[319], chamamé[320], fiesta nacional e internacional del Poncho[321], y feria de Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas[322].

Por su parte, y en el marco de la Convención que alienta a los Estados Parte a identificar, documentar, proteger y promover este patrimonio, la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales impulsa el Relevamiento de manifestaciones del PCI en Argentina que sean compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. Este relevamiento es una acción permanente. No obstante, a la fecha de elaboración del presente trabajo no todas las provincias han aportado los datos para la confección de aquel.

Vale destacar que como Argentina es un país federal, cada provincia dicta para sí el régimen de salvaguardia del PCI existente dentro de su territorio, sin perjuicio de lo dicho sobre las LPMPA.

A continuación se verán las provincias que han aportado datos.

- **Buenos Aires.**

i. **Confección de trajes tradicionales para ceremonias de candomblé.**

[318] https://www.cultura.gob.ar/relevamiento-de-manifestaciones-del-patrimonio-cultural-inmaterial_4537/ [consultado en abril de 2019].

[319] Ley 24.684.

[320] Ley 26.558 (2009).

[321] Ley 27.332 (2016).

[322] Ley 27.381 (2017).

Transmisión de conocimientos y elaboración de trajes ceremoniales, de matriz africana, que son usados por hombres y mujeres en distintas fiestas. Se categoriza en saber o práctica artesanal tradicional.

ii. El Pato.

Se trata de deporte ecuestre y amateur, donde dos equipos de cuatro jinetes se disputan un balón de cuero con asas y anotan puntos al embocarlo dentro de un aro. Lo practican personas desde los 14 a los 40 años de edad, requiere de mucha práctica y destreza y está íntimamente ligado con la vida del campo. Se practica además en Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Puede categorizarse en uso social, ritual o acto festivo.

iii. Fiesta de La Pastora.

Festival tradicional criollo que se realiza todos los años, desde 1967, el primer fin de semana de febrero. En el marco de la fiesta se desarrollan destrezas ecuestres y otras actividades hípicas, se ejecutan músicas folclóricas y danzas, se presentan payadores y se realiza una feria de artesanías. Participan habitantes locales, trabajadores rurales, jinetes, instituciones, grupos folclóricos, etc. Se desarrolla en el paraje de La Pastora, en las cercanías de Tandil, Provincia de Buenos Aires.

Se categoriza como uso social, ritual o acto festivo.

iv. Torta Argentina de Dolores.

Producto de repostería elaborado en capas. Su origen se remonta a fines del siglo XIX y la receta ha sido trasmitida de generación en generación. Tiene su propia fiesta durante los festejos del 25 de mayo, consumiéndose también en otras fechas patrias y eventos sociales de la localidad. Se ha categorizado en saber o práctica artesanal tradicional / Producto gastronómico local.

- **Catamarca.**

i. **Seda del coyoyo.**

Técnica de obtención, hilado y tejido de seda silvestre, que se desarrolla en la localidad de Ancasti y que se realiza desde tiempos precolombinos. Pertenece a la categoría saber o práctica artesanal tradicional.

- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

i. **Baile social milonguero.**

Estilo que se desarrolla en salones de baile, llamados comúnmente "milongas". Nació en las pistas concurridas de la década de 1940 por la necesidad de bailar en espacios reducidos. En este estilo "el abrazo" -la forma en que las parejas de baile se toman- es envolvente y contenedor; el varón guía; y las piernas se utilizan para desplazarse con sutiles pasos característicos del tango, mientras que el torso sirve de guía y de punto de apoyo de ambos torsos para mantener un solo eje entre la pareja. Perdura en los más viejos milongueros y quienes le siguen, no tanto en las nuevas generaciones.

A las milongas asisten bailarines asiduos o milongueros, asistentes esporádicos y turistas. Se baila predominantemente en las áreas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires, en las capitales y ciudades importantes de todas las provincias argentinas. Pertenece a la categoría música, canto, danza o representación.

ii. **Baile Salón/Tango Pista.**

Estilo de tango que se baila principalmente en milongas y ciertas competencias. A diferencia del baile social milonguero, "el abrazo" es más suelto porque cada bailarín se mueve sobre su eje y necesita espacio para hacer gala de sus destrezas cuando realiza pasos y figuras llamativas. Por lo general lo practican bailarines de tango contemporáneos que asisten asidua o esporádicamente a milongas y también turistas. Si es una competencia hay espectadores y jurados.

Se baila en capitales y grandes ciudades del país y pertenece a la categoría de música, canto, danza o representación.

iii. Baile Tango Canyengue.

Es un baile en pareja que se desarrolla desde fines del siglo XIX en las llamadas "milongas". Su peculiaridad es que las parejas bailan con sus rodillas semi flexionadas, se toman en un "abrazo" estrecho que une los laterales opuestos de sus torsos en forma de V, juntan también sus mejillas y miran en la misma dirección; el varón guía a la mujer, toma su mano y la apoya en su cintura.

La música del tango canyengue tiene un ritmo acompasado y marcado, incluye instrumentos como guitarra criolla, flauta traversa, y tuba. Participan bailarines sociales de milongas que conocen el estilo, profesionales, músicos, orquestas, cantantes. Se baila en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras.

Se categoriza en música, canto, danza o representación.

iv. Baile Tango Escenario.

Estilo de tango donde la mujer en un abrazo suelto toma del brazo al varón. Los bailarines necesitan más espacio entre sus cuerpos para realizar figuras complejas que dan cuenta de su destreza y técnica al bailar. Este estilo de baile requiere muchas horas de ensayo en pareja porque se presta especial atención a la habilidad corporal de los bailarines y su prestancia (aspecto distinguido, elegante).

Se desarrolla en shows de diversa índole y en importantes competencias como el Campeonato Mundial de Tango. También en clases, prácticas, milongas (donde aplican sus códigos). Participan bailarines profesionales, espectadores, jurados y turistas. Está abarcado en la categoría de música, canto, danza o representación.

v. Códigos de Milonga y del Baile.

Son los códigos consuetudinarios que se aplican en los espacios donde se baila y se práctica tango, llamados "milongas". Las reglas abarcan tanto al comportamiento y la presentación esperada de las personas que asisten, como a la danza en sí. Por ejemplo, las parejas solo pueden ingresar a la pista de baile por las esquinas y respetando el flujo de parejas que se desplaza en sentido inverso a las agujas del reloj, el cabeceo para invitar a bailar, no se puede hablar mientras se baila, etc. Los códigos

son desplegados por bailarines habitués de las milongas, los asistentes esporádicos y los turistas.

Los códigos tienen vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, y algunos se mantienen en algunas de las grandes ciudades del país. Categoría de música, canto, danza o representación.

vi. Tango Nuevo.

Estilo de tango en que "el abrazo" de las parejas es muy abierto para contar con suficiente espacio entre los cuerpos al realizar figuras; donde los bailarines prestan atención a sus pies y predomina la importancia de la técnica en los pasos de baile. El tipo de música es preferentemente tango electrónico o neotango. Se baila en milongas, clases, centros culturales, y certámenes específicos de este estilo de baile. También puede verse en películas.

La mayoría de los bailarines son jóvenes y extranjeros. Entra en la categoría de música, canto, danza o representación.

vii. Escritura y lectura de la Torá.

Los sábados, en las sinagogas y en las festividades de la comunidad judía se acostumbra leer la Biblia escrita sobre un pergamino con una pluma y una tinta especialmente preparada. Categoría de tradición o expresión oral / Uso social, ritual o acto festivo.

viii. Madagh.

Almuerzo tradicional de la comunidad armenia, que se lleva a cabo usualmente el 24 de abril, fecha en que se conmemora el aniversario del Genocidio Armenio de 1915, perpetrado por el Imperio turco-otomano que causó un millón y medio de víctimas. Categoría: Tradición o expresión oral / Uso social, ritual o acto festivo.

- **Corrientes.**

i. **Celebraciones de las capillas domésticas.**

Convite familiar y popular que se lleva a cabo en las casas que cuentan con capillas, donde se rezan novenas, se ofrece misa, música y danza, de acuerdo al calendario devocional católico. Categoría: Uso social, ritual o acto festivo.

ii. **Chamamé.**

Esta práctica incluye un género musical, danza y canto que acompaña diversas celebraciones; tiene raíces en la canción plegaria o rezo cantado guaraní. Involucra al "sapucay", que se emite en voz muy alta y manifiesta un sentimiento o una sensación.

Abarca las categorías de música, canto, danza o representación / Saber o práctica artesanal tradicional / Tradición o expresión oral / Uso social, ritual o acto festivo.

- **Entre Ríos.**

i. **El uso de la corneta en el Corso Popular "Matecito" de Gualeguaychú.**

Los murgueros construyen y utilizan este instrumento musical de viento durante el carnaval. Desde 1938 que la corneta se fabrica de manera artesanal, utilizando diferentes recursos técnicos que son transmitidos oralmente de generación en generación.

Categorías: Música, canto, danza o representación / Saber o práctica artesanal tradicional / Uso social, ritual o acto festivo.

ii. **Mate.**

Práctica cotidiana de diversos grupos y personas que preparan y consumen bebidas con yerba mate. Históricamente los primeros registros del consumo de yerba mate fueron por parte del pueblo guaraní. Esta costumbre se extiende por todo el territorio argentino. Comprendido en la categoría de uso social, ritual o acto festivo.

- **Formosa.**

i. **Fiesta de San Juan.**

La tradición cristiana celebra cada noche del 23 al 24 de junio el nacimiento de San Juan Bautista. Lo más característico en la provincia es el paso sobre las brasas que se lleva a cabo a partir de la medianoche, el sitio cubierto por madera incandescente es preparado por "el fogonero" quien sigue determinados pasos y es devoto del santo, lo cruza "el promesero".

En la fiesta existen otras manifestaciones rituales y juegos tradicionales como la "pelota tata", el "toro candil", el "palo enjabonado", la "paila yejerei" y el "kambuchí jejoká". La fiesta se realiza en todo el territorio de la provincia y comprende las categorías de conocimiento o uso relacionado a la naturaleza y el universo / Uso social, ritual o acto festivo / Saber o práctica artesanal tradicional.

- **Jujuy.**

i. **Arete Guasú.**

Fiesta Grande de la Nación Guaraní en las provincias de Jujuy y Salta que actualmente se festeja en las fechas de carnaval.

Es una celebración que reivindica el Ñande Reko o unidad y respeto por el Pueblo, es un reencuentro con los ancestros con quienes se comparte kawi -bebida sagrada y ceremonial-, se ejecutan diversas danzas en ronda y se utilizan máscaras. Su realización coincide con el momento en que madura el abatí (maíz).

Puede categorizarse como conocimiento o uso relacionado con la naturaleza y el universo / Música, canto/ danza o representación/ Saber o práctica artesanal tradicional/ Tradición o expresión oral/ Uso social, ritual o acto festivo.

ii. **Doctrinas de Semana Santa.**

Grupos de mujeres y niñas que acompañan durante el Viernes Santo, con cantos y sollozos, la lectura de las Sagradas Escrituras en la localidad de Yaví,

cumpliendo los preceptos religiosos de la Iglesia Católica. Las doctrinas se trasladan desde pueblos vecinos para participar en la celebración.

Las niñas desde los 12 años son preparadas por maestras que en algún momento también formaron parte de la práctica.

Música, canto, danza o representación / Uso social, ritual o acto festivo.

- **La Pampa.**

i. Asado con cuero.

Técnica de cocción a las brazas de animales vacunos semideshuesados y con el cuero adherido sobre una parrilla especial, sazonados con pimienta y salmuera, en un proceso que dura aproximadamente 10 horas.

Es tradicional en la zona norte de La Pampa y en la localidad de Falucho, cuando se hace un evento social o una fiesta. Categorías: Saber o práctica artesanal tradicional / Tradición o expresión oral / Uso social, ritual o acto festivo.

iii. La Payada en La Pampa.

Género poético, teatral y musical que tiene como principal atractivo la improvisación oral, que es acompañada con la guitarra, y que habla de la forma de vida, las necesidades, las proezas y las problemáticas del campo. Se utilizan diferentes tipos de estrofas y métricas. Se caracteriza, además, por el empleo de palabras en idioma ranquel.

Categorías en la que encuadra: Música, canto, danza o representación / Tradición o expresión oral / Métodos ancestrales de enseñanza poética.

iv. We Tripantu.

Celebración de un nuevo ciclo solar que realizan comunidades ranqueles, particularmente en Leubucó cercano al enterratorio del cacique Mariano Rosas, entre el 21 y 24 de junio. Primero se hace a nivel familiar y el día 23 se reúnen los caciques y la gente, a media noche se prende un fuego sagrado de purificación e inician las músicas, canciones y danzas tradicionales.

El fuego permanece en custodia y se espera el amanecer, a la salida exacta del sol se hace el ngillatun o rogativa. La ceremonia es dirigida por la machi quien otorga a los caciques los permisos de hacer las rogativas. Motivan su realización el fortalecimiento de las raíces, las luchas, el camino y la espiritualidad de la comunidad ranquel.

Categoría: Conocimiento o uso relacionado con la naturaleza y el universo / Tradición o expresión oral / Uso social, ritual o acto festivo.

- **Misiones.**

i. Avachikui.

Alimento tradicional de sabor dulce a base de maíz y maní, que se consume cotidianamente, elaborado por mujeres de comunidades mbya guaraní.

Se categoriza en saber o práctica artesanal tradicional / Tradición o expresión oral / Alimento.

ii. Jaguareté Korá, Chivi Korá (el corral del jaguareté).

Juego tradicional de tablero que se diagrama sobre la tierra y que practican principalmente niños y niñas en las comunidades mbya guaraní. Consiste en acorralar a un jaguareté y evitar ser atrapado y se encuadra en las categorías de saber o práctica artesanal tradicional / Tradición o expresión oral / Actividad lúdica tradicional.

iii. Mbo'y.

Collares de semillas silvestres llamadas aguay kapi'i'a, que confeccionan y usan mujeres, hombres; entre ellos, los opygua de comunidades mbya guaraní.

Categoría: saber o práctica artesanal tradicional.

iv. Petyngua, el uso y elaboración de la petynguá.

Pipa de ñau (barro) que se realiza en comunidades mbya guaraní para ser utilizada por sabias y sabios. Es una herramienta a través de la cual las comunidades mbya guaraní manifiestan su conexión espiritual con el creador.

Se ha ubicado dentro de las siguientes categorías: conocimiento o uso relacionado con la naturaleza y el universo / Saber o práctica artesanal tradicional / Uso social, ritual o acto festivo.

- **Neuquén.**

i. Cantoras del norte neuquino.

Manifestación musical realizada por mujeres campesinas que cantan tonadas, cuecas y utilizan diferentes afinaciones de la guitarra. Se realiza en contextos de ceremonias, como fiestas de santos, trillas, casamientos y velatorios de angelitos.

Las categorías dentro de las cuales están contenidas son: Conocimiento o uso relacionado a la naturaleza y el universo / Música, canto, danza o representación / Saber o práctica artesanal tradicional / Tradición o expresión oral / Uso social, ritual o acto festivo.

ii. Crianceros trashumantes de la zona norte de la provincia del Neuquén.

Actividad económica, social y cultural que implica un ciclo de movilidad anual, según las estaciones climáticas y los nichos ecológicos, consiste en el arreo del ganado mayormente caprino en busca de pasturas y agua. Se desarrolla principalmente en la región cordillerana, aunque se vislumbra con mayor intensidad en el Alto Neuquén.

Categorizado como conocimiento o uso relacionado con la naturaleza y el universo / Música, canto, danza o representación / Saber o práctica artesanal tradicional / Uso social, ritual y acto festivo.

iii. Wiñoy Tripantv – Xipantv.

Ceremonia sagrada mapuche que se realiza el 24 de junio para celebrar el regreso del sol en las cercanías del Río Limay. El pueblo se reúne y dialoga con las

energías (Pu Newen), realizan ofrendas, bailes, se comparte comida y palabras por parte de las autoridades políticas y filosófico-espirituales.

Categorizado como conocimiento o uso relacionado a la naturaleza y el universo / Uso social, ritual o acto festivo / Sitio sagrado.

- **Santa Cruz.**

i. La Quillanguería patagónica.

Técnica artesanal para la fabricación del kai tehuelche o capa en cuero de guanaco. La práctica actual tiene la finalidad de revitalizar el valor artesanal y promover el reconocimiento de la identidad cultural de las comunidades originarias.

Es un saber o práctica artesanal tradicional.

- **Santa Fe.**

i. Fiestas Patronales de Piñero.

Celebración religiosa y popular que se realiza cada 16 de agosto. La organizan la comisión de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y sus fieles, con el apoyo de instituciones y vecinos de la localidad. Las actividades incluyen la procesión con la imagen de San Roque, la Santa Misa en la parroquia local, actividades lúdicas, venta de artesanías y comidas típicas, así como espectáculos de folclore y tango.

Ha quedado comprendido dentro de las categorías de uso social, ritual o acto festivo / Saber o práctica artesanal tradicional / Tradición o expresión oral.

ii. Milonga pa' recordarte.

Lugar de encuentro, respeto y confraternidad entre personas diversas unidas por la pasión que genera el tango y que se realiza periódicamente en la localidad de Arequito o de forma itinerante.

Incluye danza, música y poesía, una pista de baile, un musicalizador y un escenario para orquesta típica. Sus principales fechas son el encuentro del Día del Amigo en julio y la Fiesta interprovincial del Tango en noviembre.

- **Santiago del Estero.**

i. Soguería tradicional criolla en Loreto.

Técnica artesanal de confección de productos en cuero crudo de vaca y que forma parte de las tareas que se realizan en el campo.

Comprendida en saber o práctica artesanal tradicional.

ii. Técnica de tejido artesanal en telar de estaca.

Hilado, ovillado, teñido, urdido y tejido con lana de oveja, que se realiza en el ámbito familiar, en la localidad de Loreto. La técnica es transmitida de generación en generación y la mujer es la encargada de enseñar.

La categoría que la comprende es saber o práctica artesanal tradicional.

CAPÍTULO 6

PCI en las provincias argentinas

Al ser Argentina un Estado federal, cada una de las provincias implementa en su territorio las medidas de salvaguardia del PCI existente en las mismas.

En este capítulo se verán las disposiciones constitucionales o legales de cada provincia referidas, no solo al patrimonio cultural, sino también al ambiente en general. Esto porque, tal como se viene sosteniendo a lo largo del trabajo y como se ha demostrado, los recursos culturales son parte del ambiente cuya protección pregona la Constitución Nacional, y su tutela particular no puede divorciarse de la protección genérica de esa categoría.

a).- Reseña de la legislación sobre PCI en cada una de las provincias.

- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires fue sancionada luego de la reforma constitucional nacional de 1994 y data de 1996. Ella establece en su art. 12 que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce la defensa activa del idioma nacional y también que protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular, así también como su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. Termina afirmando que dicha Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios.

Dentro del capítulo cuarto, se encuentra el régimen referido al ambiente que, en consonancia con el art. 41 de la Constitución Nacional, declara que es patrimonio común y que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Estatuye también que toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar conllevando, el daño ambiental, prioritariamente la obligación de recomponer (art. 26).

Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.

Por su parte, el art. 27 de la Constitución que se comenta establece que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve, entre otras cosas, la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora y la educación ambiental en todas las modalidades y niveles.

El art. 30 establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública, adquiriendo por ello rango constitucional esta evaluación que, en otras provincias, está a nivel legislativo.

Puntualmente en lo que se refiere a disposiciones culturales, la normativa constitucional porteña garantiza la democracia cultural; facilita el acceso a los bienes culturales; ejerce la defensa activa del idioma nacional; protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. Garantiza también la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios (art. 32).

La ley reglamentaria de este art. es la 2.176 del año 2006, que define a la cultura como el conjunto de manifestaciones, representaciones, procedimientos y modalidades de la creatividad humana, individual y colectiva, que incluye lo aprendido, acumulado y permanentemente enriquecido, que determina la singularidad de una sociedad o comunidad, las diversidades que la integran como totalidad histórica, situada en un espacio definido y abarca los modos de vida, las formas de vivir en sociedad o comunidad, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (art. 2).

En cuanto a la normativa infraconstitucional porteña, se encuentra la Ley 1.227 del año 2003 (reglamentada por Decreto 312/2006). Esta norma constituye el

marco legal para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las demás leyes específicas que sancione la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidas a esta materia, deben ajustarse a esta Ley (art. 1).

Define al patrimonio cultural de la Ciudad como el conjunto de bienes muebles e inmuebles, ubicados en su territorio, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles e intangibles, materiales y simbólicos, y que por su significación intrínseca y/o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes (art. 2).

Respecto al carácter de los mismos, esta norma dice que los bienes que integran el patrimonio cultural porteño, son de carácter histórico, antropológico, etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico, así como el denominado patrimonio cultural viviente, sin perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro (art. 3).

Además de establecer ciertas categorías dentro de las cuales queda comprendido el patrimonio material, puntualmente crea categorías referidas al PCI, tal como lo menciona la ley. Así, el art. 4 en su inc. j expresamente menciona la siguiente categoría: Expresiones y manifestaciones intangibles de la cultura ciudadana, que estén conformadas por las tradiciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de expresión de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigentes y/o en riesgo de desaparición.

Vale destacar que esto último, es decir, la vigencia o el riesgo de que desaparezcan esas expresiones, es el correlato de las listas representativas comprendidas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, dentro de las cuales encontramos a la Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. No obstante, el decreto reglamentario establece en su art. 3 que la enumeración tiene un carácter enunciativo, pudiendo un bien ser declarado de interés cultural aún cuando no se incluya en ninguna de ellas, siempre y cuando se corresponda con el concepto del art. 2 de la ley.

Asimismo, esta norma fija una categoría que no está incorporada ni a nivel nacional ni en la Convención del 2003: el Patrimonio Cultural Viviente que está

comprendido por aquellas personas o grupos sociales que por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del patrimonio cultural porteño (art. 5) y tiende a distinguir y promover a personas, comunidades o grupos sociales cuyas actividades o saberes permiten preservar técnicas o habilidades necesarias para la continuidad de manifestaciones que se consideren de alto valor cultural (art. 5 Decreto reglamentario).

La autoridad u órgano de aplicación de la ley es la Secretaría de Cultura de la Ciudad (art. 6), entre cuyas funciones se destacan, conforme la normativa internacional y nacional, la de difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales, integrándolos en los distintos niveles educativos formales y no formales (art. 9 inc. d).

En lo que se refiere puntualmente a PCI, está la Ley 1.535 del año 2004. Ella instituye el "Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial", que comprende el relevamiento, registro e investigación de este patrimonio, de fiestas, celebraciones y rituales que adquieren especial significación para la memoria, la identidad y la vida social de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

En su art. 2, la ley establece que la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, órgano asesor permanente de la Secretaría de Cultura, debe proceder a documentar, registrar y difundir los resultados de dicho relevamiento, mediante la creación de una base de datos y un archivo, así como de diversos tipos de publicaciones, muestras, jornadas, seminarios y toda otra actividad orientada hacia el conocimiento y difusión integral del PCI de Buenos Aires.

Asimismo, y en cuanto a la declaratoria de un elemento como integrante del PCI, el art. 3 establece que la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires puede elevar a la Secretaría de Cultura o a la Legislatura de la Ciudad, propuestas acompañadas de documentación debidamente fundamentada sobre expresiones culturales pasibles de ser declaradas bienes de interés cultural intangible o inmaterial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires acerca de las iniciativas legislativas.

También exige la ley que la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires debe hacer una reevaluación de las

expresiones culturales relevadas y registradas cada cinco (5) años a partir de la fecha de realización y culminación del último.

- **Buenos Aires.**

La Constitución de la provincia de Buenos Aires, establece en su art. 28 que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras, consagrando también el concepto de desarrollo sostenible o sustentable ya visto. El mismo artículo garantiza el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Por último, este artículo obliga a toda persona cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente, a tomar las precauciones para evitarlo.

Por su parte, y conforme el art. 36 de la Constitución, la Provincia hace un expreso reconocimiento de los derechos sociales de los indígenas. A tal fin, reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan (inc. 9).

A su vez, y de acuerdo al art. 44, la Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, protegiendo sus instituciones; disponiendo que el Estado provincial debe desarrollar políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las manifestaciones culturales, individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando ámbitos de participación comunitaria.

Consagra un capítulo (I) dentro de la sección VIII de su Constitución a la cultura y educación. En el art. 198 se consigna que ambos son derechos humanos fundamentales, teniendo toda persona derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Ello en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El art. 200 ajusta la legislación educativa al de, entre otros principios, garantizar una calidad educativa equitativa que enfatice el acervo cultural y la protección y preservación del medio ambiente, reafirmando la identidad bonaerense.

Respecto a leyes o normativas regulatorias específicas sobre PCI no existen en la Provincia, pero sí referencias a la protección del patrimonio cultural. La Ley

14.853/2016 estableció una nueva Ley de Ministerios creando el Ministerio de Gestión Cultural. Aunque en su art. 30 no se mencionó específicamente misiones y funciones referidas al patrimonio inmaterial, se detalla que es potestad del Ministerio la dirección de organismos culturales competentes entre ellos, la Dirección de Museos y Preservación Patrimonial, donde se encuentra funcionando el Centro de Patrimonio Inmaterial.

Vinculado a la protección del artesano y las artesanías provinciales existe la Ley 13.157/2003. En su art. 1 dispone la creación del Sistema de Protección y Promoción del Artesano y las Artesanías Bonaerenses (PROARBO), y en referencia a la protección específica del Maestro Artesano la Provincia cuenta con la Ley 12.456 del año 2000. En su art. 1 declara de interés provincial la actividad artesanal desarrollada por los artesanos bonaerenses como productores de elementos de significación cultural, y la preservación, promoción, difusión y desarrollo de las artesanías bonaerenses; y en su art. 2 instituye la figura del Maestro Artesano como distinción a la labor y trayectoria de aquellos artesanos que se hayan destacado por su trabajo artesanal y por haber cumplido con la misión de contribuir a la vigencia de las tradiciones bonaerenses, a través de la difusión y transmisión de técnicas o habilidades que forman parte del patrimonio cultural provincial.

En materia de patrimonio cultural material, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 10.149 que crea la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural (art. 1) que tiene a su cargo llevar a cabo la planificación, la ejecución y el control de esa ejecución, de las políticas culturales de conservación y preservación de los muebles e inmuebles, sean estos últimos sitios, lugares o inmuebles propiamente dichos, públicos provinciales o municipales o privados declarados provisoria o definitivamente como patrimonio cultural (art. 2). Regula que la declaración como bien del patrimonio cultural puede ser provisoria o definitiva debiendo, en este último caso, ser declarada por ley de la Legislatura provincial (art. 5), implicando, entre otras limitaciones, la prohibición de la destrucción, deterioro, demolición, ampliación, reconstrucción o transformación en todo o en parte de los bienes a ellas sujetos sin previa autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural (art. 6).

- **Catamarca.**

La Constitución catamarqueña data del año 1988 y en su primer artículo declara que el pueblo de la Provincia tiene asegurada la protección de su identidad cultural. No hay otra disposición en ella que haga referencia al tema estudiado.

En cuanto a la legislación, Catamarca cuenta con la Ley 4.831 del año 1995 que regula lo referente al patrimonio cultural material o tangible. Así lo consigna el art. 1 que declara de interés provincial las ruinas, monumentos y lugares históricos y todo objeto u obra cultural que constituyan el patrimonio histórico - cultural catamarqueño.

También tiene una ley general de cultura y educación. Se trata de la Ley 4.843 sancionada en 1995. Esta norma dice que el patrimonio cultural provincial está constituido por la conciencia histórica que vincula al pueblo a un pasado en común, a un presente vivido solidariamente y a un proyecto de vida que lo compromete con un mismo destino; la lengua como forma de comunicación y expresión de la idiosincrasia catamarqueña; la religión como expresión de la vivencia trascendente del hombre; las costumbres y la forma de vida con la cual se identifican los catamarqueños; el acervo popular, tradicional y folklórico en todas sus manifestaciones; las obras de sus artistas, constructores, músicos, escritores y científicos, así como las creaciones anónimas populares; las ruinas arqueológicas y restos paleontológicos, los monumentos y la arquitectura popular que permiten identificar la cultura de Catamarca; y los archivos en su diversidad de tipos, museos, bibliotecas, hemerotecas y todo otro ámbito en el que se conserva el espíritu objetivado del pasado (art. 7).

Claramente esta ley hace referencia a manifestaciones del PCI. Véase, además, que si bien es anterior a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ya contenía conceptos que esta última incorporó.

También establece los principios generales de la política cultural, mencionando que el Estado está obligado a proporcionar los medios y garantizar las condiciones que permitan al hombre un real y libre ejercicio del derecho a acceder a los bienes culturales (art. 10) y a asegurar la difusión y promoción cultural, a través de los medios de comunicación social, mediante una política de utilización racional de los mismos, procurando en un ámbito de libertad, el fortalecimiento de la identidad nacional y respetando las idiosincrasias de las comunidades locales (art. 14).

Al igual que otras provincias, Catamarca también sancionó una ley de promoción, preservación y desarrollo de las artesanías provinciales como parte integrante del patrimonio cultural provincial, y el reconocimiento del artesano como productor de bienes culturales, sociales y económicos. Es la Ley 4.992 del año 1999 y reconoció a la artesanía como manifestación cultural y como elemento de identidad provincial, regional y nacional. Al igual que las leyes de este tipo de otras provincias, también define tanto a la artesanía como al artesano. Dice, respecto de la primera, que se entiende por tal a las modalidades de producción consistente en actividades, destrezas o técnicas empíricas con permanente dinamismo resolutivo y estético, mediante las cuales se obtienen objetos no industriales, a partir de materias primas en su estado natural o procesadas industrialmente elaborados manualmente o con recursos instrumentales en los que la actividad manual sea preponderante, y que expresan las características culturales, individuales o colectivas de sus productores. Por artesano entiende a todo aquel trabajador que, de acuerdo a su oficio, sentimiento o ingenio, crea su obra por medio de la habilidad manual (art. 3).

La ley crea la autoridad de aplicación (el Instituto Catamarqueño de Desarrollo Artesanal –ICDA-), estableciendo sus funciones, el Fondo de Fomento Artesanal y el Registro Provincial de Artesanos, Organizaciones, Instituciones y Entidades vinculados a la actividad artesanal de la provincia de Catamarca.

No cuenta Catamarca con legislación marco del PCI, más allá de las normas vistas sobre manifestaciones puntuales del mismo.

- **Córdoba.**

La Constitución cordobesa es de setiembre de 2001. Contiene disposiciones de protección ambiental en general y de cultura y patrimonio cultural específicamente. Entre ellos puede mencionarse el art. 11 que declara que la Provincia resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales. Por su parte, el art. 19 consagra el derecho de toda persona en Córdoba a la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura (inc. 4), en consonancia con los pactos internacionales que gozan de jerarquía constitucional en Argentina, como así también a gozar de un medio ambiente sano, comprendiendo este derecho el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para

la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos (art. 66).

Asimismo, consagra como deber de toda persona el de resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material tanto de la Nación, como de la Provincia y de los Municipios (art. 38 inc. 4).

Otra declaración relativa a la cultura que también hace la Constitución cordobesa, se encuentra en su art. 60. Se refiere a que el Estado provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales. La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos. El Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna. A su vez, la Constitución hace responsable al Estado provincial de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad (art. 65).

Esta Provincia cuenta con una ley marco del PCI: La 9.729. Se define a través de esta ley el marco legal y técnico para la declaración de "Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la Provincia de Córdoba", a las actividades, expresiones, usos, costumbres, conocimientos, espacios culturales, etc., que se desarrollen en el territorio provincial y caractericen el sentir nacional y de los cordobeses (art. 1).

Define en el art. 2 como patrimonio cultural intangible e inmaterial de la Provincia, correlativamente a lo dispuesto por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, que se transmite de generación en generación, y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana en la provincia de Córdoba.

A su vez, establece los efectos y alcances que la declaración patrimonial tiene: Garantizar la continuidad de la actividad objeto de la declaración para el goce y disfrute de las generaciones por venir; asegurar el compromiso y la asistencia de la provincia de Córdoba para su realización, aclarando que cuando la asistencia tenga carácter económico, sólo se hará dentro de las posibilidades presupuestarias; y propender a la difusión de las actividades declaradas como "Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la Provincia de Córdoba".

Faculta al Poder Ejecutivo a efectuar la declaración de "Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la Provincia de Córdoba" y determinar sus alcances en los términos de la ley (art. 4). Esto permite inferir que la declaración patrimonial puede llevarse a cabo tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo, ya que la propia ley (Poder Legislativo) es quien hace una declaración específica: El Festival Nacional de Folklore de Cosquín en su artículo quinto. Establece como autoridad de aplicación de la ley a la Secretaría de Cultura de la Provincia (art. 6).

Pero antes de esta ley, las artesanías en Córdoba también ya encontraban protección. La Ley 7.954 del año 1990 instituyó un sistema de protección a la labor del artesano y de preservación, promoción, desarrollo y difusión de las artesanías en todo el territorio cordobés. Al igual que otras leyes provinciales de este tipo, entiende por artesanías a las modalidades de producción consistente en actividades, destrezas o técnicas empíricas o sistematizadas utilizando tecnología no industrial, mediante las cuales se crean o producen objetos elaborados manualmente o con escasos recursos instrumentales o técnicos, destinados a cumplir una función utilitaria con contenidos artísticos o culturales expresando los mismos creatividad individual, grupal o regional. Por su parte, considera como artesano al productor individual que mediante su habilidad, destreza o idoneidad, elabore objetos que puedan ser considerados artesanales, desde la preparación de los insumos hasta su acabado final y como un medio de subsistencia y de profesión habitual.

Por su parte, el patrimonio cultural material también cuenta con su marco regulatorio: la Ley 5.543.

- **Corrientes.**

La Constitución de esta provincia mesopotámica es relativamente reciente, ya que data del 08 de junio de 2007. Ya en su preámbulo la misma hace referencia a la

cultura y al ambiente, diciendo que los representantes del pueblo de Corrientes se reunieron con el objeto de garantizar la educación y la cultura e impulsar el desarrollo sostenido y preservar el ambiente sano.

En el capítulo X, referido al ambiente, es la misma Constitución la que consagra el derecho de toda persona de gozar de un ambiente sano y equilibrado y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras (art. 49) y a acceder a la información sobre el impacto que las actividades públicas o privadas causen o pudieren causar sobre el ambiente y a participar en los procesos de toma de decisiones sobre el ambiente de conformidad con el procedimiento que determine la ley, estando obligado el Estado a producir y difundir amplia y oportunamente la información relacionada con el ambiente (art. 50), siendo obligatoria también la educación ambiental en todos los niveles (art. 51).

Es interesante analizar lo dispuesto por el art. 53 de la Carta Magna provincial en relación a la política ambiental de Corrientes. La misma debe formularse teniendo en cuenta, entre otros, los aspectos sociales y culturales de la realidad local con el objeto de asegurar el uso adecuado de los recursos naturales, optimizar la producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y promover la participación social en las decisiones fundamentales relacionadas con el desarrollo sustentable provincial. Se ve acá cómo pueden jugar un rol trascendente los elementos del PCI, tal como ya se ha visto en otro capítulo, para lograr esos objetivos. Este artículo así lo manifiesta: dice que la política ambiental debe tener en cuenta los aspectos culturales de la comunidad, entre los que se encuentran los usos y tradiciones, para garantizar un uso eficiente y eficaz de los elementos naturales.

Respecto de las leyes complementarias a las de presupuestos mínimos de protección dictadas por el Congreso Nacional, el art. 56 consagra expresamente el deber de dictado de las mismas por parte del Poder Legislativo provincial.

Al igual que otras Constituciones, también esta ha jerarquizado a ese nivel la necesidad de una evaluación de impacto ambiental para todo emprendimiento público o privado susceptible de causar efectos relevantes en el ambiente (art. 57), entendiendo que ahí quedan comprendidos los recursos culturales.

No obstante estas disposiciones, la Constitución hace una declaración de patrimonio cultural: declara en su art. 66 como patrimonio natural y cultural de Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa, el ecosistema

Iberá, sus esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce, en la extensión territorial que por ley se determine. Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural.

Más allá de lo dispuesto por la Constitución provincial, Corrientes cuenta con dos normas regulatorias del patrimonio cultural: Una relativa al patrimonio material, mueble e inmueble (Ley 4.047) y otra al patrimonio inmaterial (Ley 6.193).

La segunda de ellas fue sancionada en el año 2013 y guarda correlación con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En ese sentido, declara en su art. 1 como PCI de la provincia de Corrientes a los usos, representaciones, exposiciones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- de la comunidad correntina. Entendiéndose PCI, el que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultura y la creatividad humana.

Solo se tiene en cuenta el PCI que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible (art. 2). Esto también está en conformidad con la Convención de 2003.

Conforme al art. 3, el PCI correntino comprende: a).- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma español y guaraní como vehículo del mismo; b).- Artes del espectáculo; en particular los realizados en teatros o locales oficiales provinciales o municipales; c).- Folclore (baile y música) y literatura correntina; d).- Usos sociales, rituales y actos festivos, entre ellos y sin que la enumeración sea taxativa; 1) actos en honor a la Virgen de "Itatí"; 2) actos en honor a la Virgen de la Merced; San Juan Bautista y del Milagro de la Cruz 3) actos patronales de las localidades del interior; 4) actos o fiestas populares en relación al culto popular del "Gaucho Gil" 5) Actos en honor al Gral. San Martín en su casa natal de Yapeyú; e).- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y f) Técnicas artesanales tradicionales.

La ley establece como autoridad de aplicación al Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, quien tiene como función la identificación, documentación,

investigación, preservación, protección, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos (arts. 5 y 6).

- **Chaco.**

La Constitución chaqueña data de 1994 y reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, asegurándoles la educación bilingüe e intercultural y la participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable (art. 37).

Contiene también normas referidas a la ecología y el ambiente. Consagra el derecho inalienable de todos los habitantes de la Provincia a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo (art. 38), consagrando también el deber de los poderes públicos de dictar normas que aseguren, entre otras cosas, la exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para autorizar emprendimientos públicos o privados (inc. 8).

En el ámbito procesal, legitima a toda persona para accionar ante la autoridad jurisdiccional o administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales reconocidos, explícita o implícitamente, por la Constitución y por las leyes.

Su art. 84, en los incisos 3 y 4, toca tangencialmente el tema del PCI cuando compromete al Estado a fomentar el reconocimiento y respeto a los aportes culturales de las comunidades indígenas y las corrientes inmigratorias que poblaron la Provincia. Habla de promover y proteger las manifestaciones culturales y en especial las que afirmen la identidad del pueblo chaqueño[323].

Respecto a la legislación del patrimonio cultural, la Ley 1.400-E[324] (antes Ley 5.556) define el marco regulatorio para la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico cultural y natural de la Provincia (art. 1), considerando a este como el conjunto de bienes muebles e inmuebles, tangibles e

[323] Colombres, Alfredo, *La situación actual del patrimonio cultural en Argentina*, 2010, pág. 17.

[324] Sancionada el 18 de mayo de 2005.

intangibles, materiales y simbólicos, que por su significación intrínseca o convencionalmente atribuida, definen la identidad y memoria colectiva de sus habitantes (art. 2).

Dentro de las categorías que son susceptibles de integrar el patrimonio cultural chaqueño, se encuentran las expresiones y manifestaciones intangibles: De la cultura ciudadana, que estén conformadas por las tradiciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de expresión de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigentes o en riesgo de desaparición (art. 4 inc. J), repitiendo de esta manera la fórmula contenida en la Ley 1.227 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al igual que esta, también contiene la categoría de patrimonio cultural viviente (art. 4 inc. K): Son aquellas personas o grupos sociales que por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del patrimonio chaqueño, estableciendo mecanismos para promover la transmisión de las destrezas, habilidades y técnicas tradicionales de artistas, artesanos y toda otra persona que sobresalga en la sociedad, antes de su desaparición por causa de abandono o falta de reconocimiento del saber que ésta porta.

Esta ley creó el Registro Provincial de Patrimonio Histórico Cultural y Natural, en el que se inscribirán los bienes declarados como pertenecientes al patrimonio cultural provincial. Toda información contenida en el Registro es pública y la autoridad de aplicación debe garantizar el acceso a la misma a la comunidad en general (art. 13).

También creó el Inventario del Patrimonio Histórico Cultural y Natural de la Provincia (art. 14), en el que se recopila y sistematiza la información sobre los bienes culturales existentes en cualquier tipo de fuente y que pertenezcan tanto al sector público como al de los particulares. Dicha información debe ser sistematizada a través de una base de datos que opere mediante un sistema en red. Su objetivo fundamental es el conocimiento, la difusión y el goce de los bienes susceptibles de ser declarados como pertenecientes al patrimonio cultural chaqueño.

Consagra también el deber del Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, de instrumentar los mecanismos pertinentes para la exteriorización e identificación, de manera ostensible para la comunidad, de los bienes que hayan sido declarados como Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Provincia (art. 15).

Existe también en la Provincia la Ley 562-W[325] (antes Ley 3.258), llamada también de las Comunidades Indígenas[326], que tiene como objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de esas comunidades, mediante su acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de los recursos necesarios para reactivar sus economías, la preservación, defensa y revalorización de su patrimonio cultural, su desarrollo social y su efectiva participación en el quehacer provincial y nacional.

Respecto a la cultura de estas comunidades, la ley reconoce a las culturas y lenguas toba, wichi y mocoví como valores constitutivos del acervo cultural de la Provincia (art. 14), teniendo derecho los aborígenes tobas, wichis y mocovíes a estudiar su propia lengua en las instituciones de enseñanza primaria y secundaria de las áreas aborígenes (art. 15).

Ordena que el Consejo de Educación programe acciones directas tendientes a promover el acceso del indígena a los distintos niveles educativos, sobre la base de difundir a través de publicaciones, cátedras y de los medios de comunicación social el patrimonio cultural indígena y su aporte a la cultura nacional (art. 17 inc. h).

Asimismo, el Decreto 3.236/2008 tiene por lenguas oficiales del Chaco al Qom, al Wichi y al Moqoit, lenguas de los pueblos indígenas supervivientes de la Provincia, siendo ratificado este decreto mediante Ley 1.848-W (antes Ley 6.604) del año 2010.

En materia de elementos inmateriales del patrimonio, la Provincia sancionó en el año 2011 la Ley 1.924-W (antes Ley 6.780) de Protección del Patrimonio Biocultural comunitario de los Pueblos Originarios del Chaco, entendiendo por tal al conocimiento, innovaciones, prácticas y expresiones culturales que a menudo comparten comunitariamente, que están relacionados con sus recursos y territorios tradicionales; especies y ecosistemas; valores culturales y espirituales; y derechos consuetudinarios del contexto social en el que han vivido y viven, teniendo por objeto el reconocimiento y la protección a los derechos de los pueblos originarios

[325] Sancionada el 13 de mayo de 1987.

[326] La ley entiende como comunidad indígena a los grupos de familias que se reconozcan como tales, con identidad, con cultura y organización social propias, que conservan normas, pautas y valores de su tradición, que posean o hayan poseído una lengua autóctona, que convivan en un hábitat común, en asentamientos nucleados o dispersos, rurales o urbanos, o las familias indígenas que se reagrupen en comunidades para acogerse a los beneficios de la ley (art. 2). Asimismo, se considera como indígena a toda persona que pertenezca indistintamente a las etnias toba, wichi o mocoví y que fuere de origen puro o mestizo con otra raza (art. 3).

del Chaco del conocimiento ancestral que poseen sobre las propiedades, usos y características de su patrimonio bio-cultural comunitario.

Según la ley, el reconocimiento al saber ancestral comunitario de los pueblos originarios del Chaco, comprende la protección sobre los siguientes bienes y acciones culturales: Utilización de hierbas medicinales y su aplicación terapéutica de uso tradicional; tradiciones de caza, recolección, agropecuarias y ecológicas; utilización de productos naturales y agrícolas obtenidos tradicionalmente; valores culturales, espirituales y paisajísticos; y creencias religiosas, mitos y leyendas.

Cuenta también el Chaco con una ley provincial de cultura identificada como Ley 1.690-E (antes Ley 6.255 del año 2008), que define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, comprendiendo los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, las letras y las artes. La declara como un derecho social inalienable, siendo por ello el Estado su garante indelegable.

Esta ley tiene por objeto la promoción de los derechos culturales previstos en la Constitución chaqueña, en Tratados Internacionales con rango constitucional, en leyes y otras normas que regulen la materia, asegurando la indispensable redistribución social de bienes y servicios culturales.

Consagra el acceso universal, equitativo e inclusivo a los derechos culturales de los habitantes de la Provincia del Chaco. Son derechos culturales, entre otros: Desarrollar la identidad cultural en el marco de la diversidad e interculturalidad, característica de la Provincia, respetando el origen étnico y cultural del grupo al que pertenece; preservar la lengua, identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad de los pueblos originarios; garantizar la participación de indígenas para desarrollar actividades propias de su cultura, dentro de los programas culturales del orden provincial o municipal, actuales y los que se definan a futuro; participar en la vida cultural que cada ciudadano elija y ejercer sus propias prácticas culturales, sin distinción de etnia, credo, sexo, o condiciones biopsicosocial y económica, en el marco de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Establece que las actividades culturales se basan, entre otros, en los siguientes principios: La cultura como contribución a la construcción de la paz y consolidación de los valores democráticos; la igualdad y equidad en el acceso a los diversos bienes y valores culturales; el derecho a la cultura integra los derechos

humanos, que son universales, indisociables e interdependientes; la cultura como componente de un desarrollo estratégico central, para una política de inclusión y cohesión social, orientada a la generación del empleo, al desarrollo sustentable de las nuevas formas de economía social, a la recuperación socioeconómica y a la distribución de la riqueza; la revalorización de la propia identidad cultural, sustentándose en la identidad local, regional, nacional y latinoamericana, con apertura a los procesos regionales de integración a los demás pueblos del mundo; difundir, a través de programas especiales, el patrimonio cultural de los pueblos originarios locales y su aporte a la cultura nacional, fomentando sus artesanías, consideradas como fuente de trabajo y expresión cultural, que garanticen la obtención de la materia prima, que es su condición de posibilidad; la cultura como promotora del desarrollo humano integrado al desarrollo social, económico, científico, tecnológico, educativo, artístico y deportivo; la protección del patrimonio cultural, que define la identidad y la memoria colectiva de los habitantes de la Provincia del Chaco.

- **Chubut.**

La provincia de Chubut cuenta con una Constitución sancionada en el año 2010, por lo que, al igual que la generalidad de las constituciones provinciales sancionadas con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, cuenta con normas relativas a ambiente y la cultura.

Ya su preámbulo establece como objetivo el resguardo del patrimonio cultural provincial; el art. 18 consagra el derecho de todos los habitantes de la Provincia a enseñar y aprender, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y científica y a participar de los beneficios de la cultura; y consagra también protección al derecho de autor, declarando que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley (art. 20).

Respecto a los pueblos indígenas, la Provincia reivindica la existencia de los mismos en su territorio y garantiza el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Se reconoce también a las comunidades indígenas existentes en la Provincia la posesión y propiedad

comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; la propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines de lucro; su personería jurídica; y, conforme a la ley, su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentran dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan (art. 34).

En materia ambiental, el art. 109 consagra el derecho de toda persona a un medio ambiente sano que asegure la dignidad de su vida y su bienestar y el deber de su conservación en defensa del interés común. El Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras. Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños.

Ya específicamente en materia de cultura y recursos culturales, el art. 112 establece que el Estado debe garantizar el derecho a la participación en los bienes de la cultura, con el propósito de posibilitar a todo habitante el logro de niveles humanos crecientes. Asimismo, declara que los bienes culturales, en cuanto hacen a la identidad provincial, constituyen un patrimonio social al que todo habitante tiene un acceso libre y responsable, debiendo el Estado atender a su conservación, enriquecimiento y difusión, desarrollando políticas integradoras de los valores compartidos por las distintas tradiciones (art. 113).

Chubut cuenta con la Ley XI - Nº 19 (antes 4.630) que regula en conjunto el patrimonio cultural y natural de la Provincia. Pero respecto a los primeros, sólo se refiere a la faz material del mismo, ya que en su primer artículo la ley define como patrimonio cultural al conjunto de bienes de existencia actual que así reconocidos por la comunidad, hacen a la identidad provincial por constituir el testimonio, legado y sustento de la memoria histórica y, en su art. 2, aclara que a los fines de la ley, son bienes culturales aquellos cuyo soporte material sirve como testimonio o documento para el conocimiento de procesos culturales del pasado.

Establece que la declaración de bien cultural debe ser dispuesta por el Poder ejecutivo a propuesta de la autoridad de aplicación, debiendo inscribirse el bien en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos de valor patrimonial, cultural y natural (art. 4).

Vale hacer mención que Chubut ha sancionado un Código Ambiental (Ley XI-N°35 –antes Ley 5.439) que si bien tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente de la Provincia, estableciendo los principios rectores del desarrollo sustentable y propiciando las acciones a los fines de asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones futuras (art. 1), parece que está más orientado a los recursos naturales del ambiente que a los culturales aunque, siguiendo el criterio que se viene sosteniendo en cuanto a los recursos culturales como integrantes del ambiente, podría aplicarse a ellos también.

Chubut también cuenta con la Ley V-N° 61 (antes Ley 3.657 del año 2010) de Preservación social y cultural de las comunidades indígenas.

No obstante lo dicho, Chubut no cuenta con una norma específica de PCI.

- **Entre Ríos.**

La Constitución entrerriana data de octubre de 2008 y consagra en su art. 22 que todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo como patrimonio común.

En referencia a la cultura y al PCI específicamente, el art. 26 de la Constitución declara que es un derecho fundamental y que el Estado impulsa las siguientes acciones, entre otras: la promoción, protección y difusión del folclore, las artesanías y demás manifestaciones; el reconocimiento a la identidad y respeto a la diversidad cultural, la convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el intercambio desde una perspectiva latinoamericana; la protección, preservación y divulgación de los bienes culturales, el patrimonio tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico; la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación para la producción cultural.

Contiene a su vez una cláusula novedosa: Establece que los fondos para su financiamiento no podrán ser inferiores al uno por ciento de las rentas no afectadas del total de las autorizadas en la ley de presupuesto.

Entre Ríos cuenta con una norma que, al igual que otras provincias argentinas, promociona y protege la artesanía entrerriana. Es la Ley 10.659 publicada en enero de 2019 que tiene por objeto la protección, el desarrollo, promoción, difusión y comercialización de las artesanías producidas en todo el territorio provincial, tanto en el ámbito urbano como rural; el reconocimiento del artesano y artesana como trabajadores de la cultura en tanto productores de elementos de significación cultural; y la salvaguarda de las técnicas y procesos de producción de artesanías. Al igual que las leyes de las otras provincias, también define al artesano y a la artesanía. Esta ley ya incorpora el término salvaguardia que emplea la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la define como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del PCI, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal - y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

A su vez, esta ley define al patrimonio cultural diciendo que son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este PCI, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (art. 2).

Declara de interés provincial la actividad artesanal como manifestación cultural autóctona y como elemento de identidad provincial y nacional. Crea un Registro Provincial de Artesanos.

- **Formosa.**

La Carta Magna formoseña, sancionada en 2003, consagra, al igual que muchas de las que se han comentado, el derecho de todos los habitantes a vivir en un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo, siendo obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente. Para esto, la Constitución obliga a dictar normas que aseguren la compatibilidad de

la planificación económica, social y urbanística de la Provincia con la protección de los recursos naturales, culturales y del patrimonio histórico y paisajístico (art. 38).

También dispone la Constitución (art. 79) el reconocimiento por la Provincia de la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan, reconociendo y garantizando su identidad étnica y cultural; el derecho a una educación bilingüe e intercultural y su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que la afecten. Formosa fue pionera en materia de reconocimiento de comunidades indígenas. En el año 1984 sancionó la Ley 426 denominada "Ley Integral del Aborigen" que tuvo por objeto la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de sus patrimonios y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y provincial; y su acceso a un régimen jurídico que le garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.

Dentro de la disciplina específica del Patrimonio histórico-cultural tangible existe una legislación propia establecida con la finalidad de poner a salvo dichos bienes, contribuyendo así a conservar la memoria colectiva y desarrollar una tarea didáctica dando a conocer, a través de los mismos, las costumbres, los modos de vida de una determinada comunidad, su desarrollo económico y cultural, como también sus creencias, etc.[327]

Está adherida a la Ley 12.665 por Ley 730 del 21 de febrero de 1979 para ejercer en forma conjunta, tanto la Nación, como la Provincia, la supervisión de los monumentos, museos y lugares históricos, asegurando la conservación y defensa del patrimonio.

Cuenta además con una ley de preservación y defensa del patrimonio histórico y paleontológico que es la Ley 784, sancionada y promulgada el 13 de agosto de 1979. La misma consta de 23 artículos en los cuales se detallan las normas a cumplir para no perder el patrimonio heredado, a la vez que se asegure la difusión del mismo; como así también los procedimientos a seguir en casos de incumplimiento de dicha ley.

Existe también una legislación referida a los inmuebles, propiedad del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, de una antigüedad mayor de 50 años, que

[327] https://www.formosa.gob.ar/patrimonio/sitioslugareshistoricos [consultado: junio de 2019].

determina que los mismos no podrán ser modificados, vendidos, ni enajenados sin previa consulta y autorización de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares Históricos y de Bienes Históricos.

En materia de patrimonio inmaterial, Formosa mediante Ley 1.513 del 20 de setiembre de 2007 adhirió sin reserva alguna a la Ley 26.118 que, a su vez, adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, por lo cual allí se aplica dicha norma.

- **Jujuy.**

En 1986 se reformó por última vez la Constitución de Jujuy. No obstante, y aun siendo ocho años anterior a la reforma de la Constitución nacional que introdujo normas ambientales y derechos difusos, la norma fundamental provincial estableció normas de este tipo, incluso específicamente culturales. Así, el art. 22 consagró el derecho de todos los habitantes de Jujuy a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo (inc. 1).

Respecto a los aborígenes, el art. 50 de la Constitución establece el deber de la Provincia de proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social.

Particularmente en lo que respecta a la cultura, el art. 65 establece que el Estado debe orientar su política cultural hacia la afirmación de los modos de comportamiento social que reflejen la realidad regional y argentina. Para esos fines, el Estado debe, entre otras cosas, preservar y conservar el patrimonio cultural existente en el territorio provincial, sea del dominio público o privado, y a tales efectos crear el catastro de bienes culturales. A su vez, el Estado debe ejercer el poder de policía para preservar los testimonios culturales por medio de personal capacitado en la materia y estimular, fomentar y difundir el folklore y las artesanías como factores de desarrollo personal y social mediante la legislación adecuada.

La Provincia cuenta, a su vez, con una norma que constituye el marco legal para la investigación, preservación, conservación, salvaguarda, restauración, promoción, acrecentamiento, difusión y transmisión para las generaciones futuras del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy. Esta norma regula conjuntamente el patrimonio cultural, en su faz tangible e intangible, y natural. Se

trata de la Ley 5.751 del año 2012. Cualquier otra norma que sancione la Legislatura provincial debe ajustarse a esa ley (art. 1).

Esta regulación entiende por patrimonio cultural y natural jujeño al conjunto de bienes muebles e inmuebles, saberes y prácticas pertenecientes, desarrollados o ubicados en el territorio de la provincial, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles o intangibles, materiales o simbólicos y que por su significación intrínseca o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes, o se destaquen por su valor o significación, comprendiendo su entorno social, natural y paisajístico (art. 2).

Respecto al carácter de los bienes que integran el patrimonio cultural y natural de Jujuy, la ley en su art. 3 dice que son aquellos de carácter cultural o natural definidos como tales por su valor excepcional desde el punto de vista estético, científico, de la conservación o de la belleza natural, así como el patrimonio cultural viviente.

Dentro de las categorías que con carácter enunciativo menciona la ley y que comprenden el patrimonio detallado, se encuentra la referida al PCI. La ley describe como categoría las expresiones y manifestaciones intangibles, siendo estas las tradiciones, costumbres y hábitos de la comunidad, así como los espacios o formas de expresiones de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológicos, lingüístico o de cualquier otra característica similar, sea que se encuentren vigentes o en riesgo de desaparición (art. 4 inc. j). También describe como categoría al patrimonio cultural vivo diciendo es el conjunto de prácticas culturales y sociales que dan cuentan de la diversidad constitutiva y actual de los habitantes de la Provincia, entre las que se encuentran las tradiciones, expresiones orales, rituales, costumbres, festividades populares, oficios, conocimientos, creencias y usos relacionados con la naturaleza y todas aquellas manifestaciones colectivas o con autoría que la sociedad jujeña reconozca como identificatorias de las distintas comunidades, grupos o sectores que la componen y que sean apropiadas colectivamente (art. 4 inc. q), distinguiéndolo del patrimonio cultural viviente: son aquellas personas o grupos sociales que por su aporte a las tradiciones en las diversas manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del patrimonio cultural y natural de la Provincia de Jujuy (art. 4 inc. r).

Por su parte, también expresamente declara aplicable al territorio provincial la Ley 26.118 que aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio

Cultural (art. 24), por lo que en Jujuy también es aplicable en su totalidad dicha Convención. También lo es la Ley 26.305 mediante la cual se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, sin perjuicio de la demás normativa internacional, nacional, provincial o municipal existente o que se dicte en el futuro y que se vincule con el objeto de la ley (art. 24).

La propia ley también establece un régimen de faltas e infracciones. Por falta se entiende todo hecho o acto que importe una alteración o transformación de los bienes que integran patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy (art. 15). Sin perjuicio de ello, se consideran infracciones especialmente graves (art. 16) referidas al PCI las siguientes: Que se oculte, destruya, modifique, altere en todo o alguna de sus partes, desfigure, desnaturalice, abandone o transforme algún bien, práctica o saber incorporado al patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy, sin la previa intervención de la autoridad de aplicación. Estas infracciones pueden sancionarse con multa (art. 17).

- **La Pampa**

La Constitución de La Pampa fue reformada en 1994. Al igual que muchas otras Constituciones de otras Provincias vistas, esta también contiene normas referidas al ambiente en general y a los recursos culturales que lo componen específicamente. Respecto al primero, el art. 18 dice que todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo, siendo obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida. Los poderes públicos deben dictar normas de información y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.

Puntualmente respecto a los recursos culturales que componen ese ambiente, la Constitución establece en el art. 19 que el acervo cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, documental y lingüístico de la Provincia es patrimonio inalienable de todos los habitantes, debiendo tanto el Estado como la comunidad proteger y promover todas las manifestaciones culturales, garantizando la identidad y pluralidad cultural.

En material de legitimación activa para requerir las medidas legales que tiendan a garantizar estos derechos mencionados, el art. 20 habilita tanto al Ministerio Público como a toda persona, sea esta humana o jurídica.

La Provincia cuenta con la Ley 2.083 del año 2003 que declara de interés público las acciones destinadas a valorar, recuperar, preservar, proteger y conservar, promover y difundir el patrimonio cultural de La Pampa. Al igual que otras leyes provinciales, esta también abarca las facetas material e inmaterial del patrimonio cultural ya que considera como patrimonio cultural de la Provincia al conjunto de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos valores intrínsecos los constituyen en únicos, irremplazables e insustituibles y/o que se consideran de valor testimonial o de esencial importancia para la ciencia , historia, arqueología, arte, antropología, paleontología, etnografía, lingüística, arquitectura, urbanismo y tecnología (art. 2).

Puntualmente protege las expresiones y manifestaciones intangibles de la cultura ciudadana que estén conformadas por las tradiciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de expresión de cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigente y/o en riesgo de desaparición (art. 4 inc. j).

También en el inc. k del art. 4 contempla al patrimonio cultural viviente y lo conceptualiza como aquellas personas o grupos sociales que por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del patrimonio pampeano, estableciendo mecanismos para promover la transmisión de las destrezas y técnicas tradicionales por los artistas y artesanos antes de su desaparición por causa de abandono o falta de recognición (en este caso no se protegería a la persona, sino al saber que ésta porta).

Obliga también a la autoridad de aplicación a efectuar un registro y los inventarios de todos los bienes que integran el patrimonio cultural pampeano.

No obstante lo aquí dicho, esta norma, en forma similar a la mayoría, declama la protección del PCI pero de la lectura de sus disposiciones surge que la protección está orientada casi en su totalidad a la faz material o tangible de ese patrimonio. Casi no se encuentran en esta ley, así como en las demás que han analizado, medidas de salvaguardia del PCI. Incluso de los 29 artículos con los que cuenta la norma (sin contar el artículo de forma), sólo se hayan reglamentados 7 (Decreto reglamentario 1.934/2004).

- **La Rioja.**

Esta provincia cuenta con una Constitución del año 2008 cuyo preámbulo reconoce a la familia como la célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza como ámbito natural de la cultura y la educación. También se procura consolidar los intereses históricos del pueblo riojano y vigorizar las expresiones de la cultura regional como base de la identidad popular y condición de la unión nacional y latinoamericana.

El art. 58 de la Constitución provincial dice que el Estado asegurará a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y eliminará toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural. Asimismo, deberá promover y proteger las manifestaciones culturales, personales y colectivas y aquellas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano, especialmente las que fueren de reconocido arraigo y trascendencia popular en la provincia.

En cuanto al patrimonio cultural, la propia Constitución en el mismo artículo declara como tal el acervo histórico, arqueológico, artístico y documental. No obstante, esta declaración sólo comprende al patrimonio material.

En materia ambiental, esta Constitución también consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, declamando una fórmula similar a la de la Constitución Nacional. Sigue diciendo el art. 68 que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, como así también a la información y educación ambiental, a la población en general y en particular a los educandos en sus distintos niveles.

También, y al igual que otras Constituciones, esta consagra a nivel constitucional el estudio de impacto ambiental previo para toda aquella actividad económica que altere el ambiente y las obras públicas o privadas que se desarrollen en el territorio riojano. Toda persona responsable de esos emprendimientos debe tomar los recaudos necesarios para evitar el daño ambiental, el que generará

prioritariamente la obligación de recomponer el medio ambiente como se establezca en la ley.

Si bien La Rioja cuenta con una ley de protección del patrimonio cultural (Ley 6.589 del año 1998), la misma se refiere al arqueológico, arqueológico urbano, paleontológico, antropológico e histórico. Al decir de Paula Ruarte, esta ley no contempla la tipología de patrimonio inmaterial dentro de su articulado[328].

Al igual que Salta, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, entre otras, La Rioja cuenta con una ley de protección, promoción, desarrollo y difusión de las artesanías y sus hacedores. Es la Ley 6.894 del año 2000, dentro de cuyos objetivos está el de preservar el patrimonio cultural de La Rioja (art. 9 inc. a); promover el rescate y difusión de las raíces culturales provinciales a través de la artesanía (art. 9 inc. c); impulsar la defensa y conservación de la cultura de comunidad, teniendo en cuenta como su manifestación material los productos artesanales de la misma (art. 9 inc. i) y la creación de normas jurídicas que protejan la propiedad intelectual sobre diseños y modelos tradicionales vigentes (art. 9 inc. k).

La ley define a la artesanía como una expresión sociocultural del ser humano, una modalidad económico productiva cuya expresión material es el objeto artesanal, único en su diversidad. Un bien cultural con función utilitaria u ornamental que, revalorizando permanentemente los recursos existentes o potenciales de su entorno, tanto humanos como materiales y cuyas cualidades de creatividad y diferenciación, lo convierten en algo distintivo y definitorio de su demanda (art. 2).

El art. 3 de la ley define al artesano como el creador que refleja en su obra su vida, el sentir estético, su hábitat e idiosincrasia con destreza y dominio técnico, que le permite producir, ya sea individualmente o en el marco de su familia o comunidad, objetos con predominio de trabajo manual, alto valor artístico, identidad cultural y destino socioeconómico.

Destaca también el Valor Sociocultural del Artesano, definiéndolo como aquel que identifica al mismo como portador de la expresión material de una cultura, como ser viviente cultural, aclarando que no es un personaje del pasado sino parte de la realidad actual, producto de un proceso evolutivo, representando una forma de

---

[328] Ruarte, Paula, *Patrimonio Cultural y Turismo en la región Valles del Famatina, La Rioja. Presentación preliminar de los avances de tesis*. http://sociales.unq.edu.ar/wp-content/uploads/byt2014/ponencias/eje06/RuartePaula-PatrimonioCulturalyTurismoenlaregionVallesdeFamatinaLaRioja.pdf [consultado en junio de 2019].

vida de trabajo y productividad, de autoabastecimiento y realización personal contemporáneas, tanto en áreas rurales como urbanas.

También tiene un régimen específico de promoción y fomento de la artesanía (capítulo III) y crea el Registro Provincial de Artesanos (capítulo IV). Además cuenta con normas sobre comercialización de estos productos (capítulo V), capacitación e investigación (capítulo VI) y gestión institucional (capítulo VII).

La Rioja también cuenta con una Ley de Medio Ambiente (7.801 de 2004) que, en sus arts. 70 y 71 se refiere al patrimonio cultural. Dispone que la Agencia de Cultura, en coordinación con la autoridad de aplicación, debe establecer las medidas necesarias para garantizar la preservación del patrimonio cultural asociado al entorno natural. A su vez, la conservación *in situ* de los bienes culturales se considerará priorizada a los fines de mantener la continuidad y las vinculaciones históricas con el medio ambiente.

- **Misiones.**

La Constitución misionera no contiene disposición alguna referida al ambiente o a la cultura, siendo la misma de 1958.

En esta Provincia se cuenta con la Ley VI – N° 18 (antes Decreto Ley 1.280 del año 1980) que declara de interés provincial la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de los bienes que interesan al patrimonio cultural de Misiones, entendiendo por tal los bienes de cualquier naturaleza que signifiquen o puedan significar un aporte trascendente para el desarrollo cultural misionero, que se encuentren en el territorio provincial, o ingresen a él, cualquiera fuese su propietario. Luego, a renglón seguido hace una enumeración de los bienes comprendidos en la ley, siendo estos todos objetos materiales, no considerando en la misma a las manifestaciones del PCI.

Misiones también sancionó una ley de promoción integral de las comunidades guaraníes existentes en esa Provincia fundado en el pleno respeto de sus valores culturales y espirituales y propias modalidades de vida. Para su cumplimiento, estableció la instrumentación y ejecución de planes y acciones que posibiliten la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanzas. Esta ley es la VI - Nº 37 (ex Ley 2.727).

En la Provincia rige la Ley VI-N° 110 (antes Ley 4.127 del año 2010) que promueve el rescate, protección, recreación, conservación, difusión y desarrollo de las artesanías misioneras, como manifestación visible del patrimonio cultural de Misiones y el reconocimiento del artesano como productor de obras de alta significación artística y manifestación concreta de la identidad social y cultural de la región. Crea el Consejo Provincial de Artesanos, el Registro General de Artesanos y el Fondo de Fomento Artesanal.

- **Neuquén.**

Tiene una Constitución cuya última reforma es de marzo de 2006. Como tal, también contiene disposiciones relativas al ambiente y a la cultura.

Contiene, además, normas relativas a los pueblos indígenas. Según el art. 53, también Neuquén reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. La Provincia reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas es enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura también su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promueve acciones positivas a su favor.

También reconoce que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber de preservarlo. Todo habitante de la Provincia tiene derecho, a solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas (art. 54).

En cuanto a los deberes del Estado en materia ambiental, la Constitución (art. 90) refiere que el mismo debe atender en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de los problemas ambientales; proteger y preservar la integridad del ambiente y el patrimonio cultural, garantizando la educación ambiental en todas las modalidades y niveles de enseñanza.

En garantía y defensas de sus competencias, la Constitución (art. 92) establece que corresponde a la Provincia el dictado de normas ambientales complementarias de las nacionales y de protección ambiental, de aplicación a todo su territorio, pudiendo los municipios dictar normas pertinentes de acuerdo a sus competencias. No se admite en el territorio provincial la aplicación de normas nacionales que, so pretexto de regular sobre presupuestos mínimos ambientales traspasen dichas pautas, excedan el marco de las facultades constitucionales delegadas a la Nación o menoscaben los derechos que la Constitución Nacional reconoce a las provincias.

También esta Constitución, en cumplimiento de pactos y convenciones internacionales, obliga a todo emprendimiento público o privado que se pretenda realizar en el territorio de la Provincia y que pueda producir alteraciones significativas en el ambiente, a ser sometido a una evaluación previa de impacto ambiental, la que, además, debe contemplar los mecanismos de participación. La potestad de evaluación y control ambiental alcanza a aquellos proyectos de obras o actividades que puedan afectar el ambiente de la Provincia, aunque no se generen en su territorio (art. 93).

Contiene disposiciones específicas de cultura. Dice en su art. 105 que la cultura es patrimonio del pueblo y constituye un elemento esencial de su identidad. El Estado reconoce la diversidad cultural y étnica y garantiza el derecho al disfrute de los bienes culturales. Establece políticas permanentes para la investigación, desarrollo, conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la memoria histórica, de la riqueza artística, lingüística, arqueológica, paleontológica, espeleológica, paisajística y escénica de la Provincia.

Asimismo, responsabiliza al Estado provincial de la investigación, conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, independientemente del origen de los bienes que la componen, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad (art. 105).

El Estado reconoce la interculturalidad y fomenta el desarrollo de las actividades culturales. Protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular. Contempla la participación de los creadores y trabajadores de la cultura junto a sus entidades en el diseño y evaluación de las políticas públicas (art. 107).

Respecto a la legislación provincial, Neuquén cuenta con la Ley 2.184 de Protección del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico, sancionada en

1996, pero, en cualquier caso, se trata solo de elementos materiales del patrimonio. Asimismo cuenta con la Ley 2.257 de 1998, denominada Ley de Preservación Patrimonial, pero también se refiere únicamente a los bienes muebles e inmuebles, públicos o privados (art. 1), no contando con una norma específica que regule el PCI.

- **Río Negro.**

La Constitución de Río Negro vigente es anterior a la reforma constitucional de 1994. Data de junio de 1988, pero aún así contiene normas vinculadas al tema de investigación. El art. 38 establece que el Estado fomenta la cultura.

Al igual que otras constituciones, esta también contiene normas referidas a los derechos de los indígenas y sus recursos culturales. Así, en el art. 42 el Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asiste a organizarse.

Respecto a la cultura y los recursos culturales, declara que tanto la educación como la cultura son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado (art. 60), garantizando éste, respecto a la última, el acceso a la práctica, difusión y desarrollo de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación. Promueve y protege las manifestaciones culturales personales o colectivas y aquellas que afirman la identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana. Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del pueblo, que constituyen su cultura (art. 61).

La Provincia sancionó la Ley 3.656 (2008) cuyo fin es la protección, conservación, restauración y acrecentamiento del patrimonio cultural y natural de Río Negro (art. 1), definiéndolo como el conjunto que integran, en un todo armónico, inseparable, las manifestaciones de interés y el ámbito natural, rural o urbano que ha producido el hombre, como ser social, en su permanente interacción vital con sus

circunstancias, dentro del territorio provincial. La permanencia material de ese legado conforma la base concreta que da continuidad armónica al desarrollo social y espiritual de nuestra comunidad reafirmando su identidad cultural (art. 2).

La mira de la ley está puesta sobre el patrimonio natural y cultural material, más allá de la referencia que hace en el art. 8 inc. 7 al PCI expresando que forman parte de esta calificación las creaciones del espíritu que integran el acervo cultural de la provincia y/o región, anónimas o registradas, comprendiendo las composiciones musicales, con letra o sin ella, cuentos, poemas, leyendas, adivinanzas, refranes y relatos sobre usos y costumbres tradicionales que hayan sido transmitidos consuetudinariamente. Pero ni siquiera hace referencia a la salvaguardia del mismo. Río Negro adhirió a la Ley 25.197 de Registro del Patrimonio Cultural mediante Ley 3.507 del año 2008.

También cuenta esta Provincia con su Ley 2.891 del año 2008 que declara de interés provincial la producción artesanal practicada por el pueblo y transmitida de generación en generación como protección y preservación del patrimonio cultural heredado. Se ve cómo se repite en las distintas provincias argentinas el realce a esta manifestación de PCI, regulada en todas ellas como una ley especial. También define tanto a artesanía como a artesano.

- **Salta.**

La Constitución salteña es de 1998. Esta también reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio salteño, reconociendo y garantizando el respeto a su identidad y, entre otras cosas, el derecho a una educación bilingüe e intercultural. El Estado también asegura la participación de estas comunidades en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten (art. 15).

Desde la perspectiva ambiental, consagra el deber de todos de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo. Los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias (art. 30).

Ya particularmente en materia cultural, también la Constitución salteña dispone que el Estado asegura a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura

y elimina toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural. Promueve las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquéllas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano. El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte del patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado. Las manifestaciones culturales y tradicionales de reconocido arraigo y trascendencia popular son protegidas y promocionadas por el Estado (art. 52), entendiendo que en esta última oración es donde la Constitución está reconociendo algunas manifestaciones del PCI.

Salta cuenta con una ley dedicada exclusivamente a las actividades artesanales y las artesanías, como manifestaciones de la identidad provincial y del patrimonio cultural, declarándolas de interés provincial: la Ley 7.237 del año 2003.

Define a las artesanías como aquellas modalidades de producción consistentes en actividades, destrezas o técnicas empíricas con dinamismo resolutivo y estético, mediante las cuales se obtienen objetivos no industriales a partir de materias primas en su estado natural o procesadas industrialmente, elaboradas manualmente o con recursos instrumentales en los que la actividad manual sea preponderante, y que expresan las características culturales, individuales o colectivas de sus productores. Asimismo, define como artesano a todo aquel trabajador que, de acuerdo a su oficio, sentimiento o ingenio, crea fundamentalmente su obra por medio de la habilidad manual (art. 2).

El capítulo III de la ley establece los objetos de la misma (entre los que están el fomento del desarrollo de nuevas manifestaciones artesanales y el favorecimiento de la enseñanza que permita la formación de artesanos y el desarrollo de las actividades artesanales); el capítulo IV define la autoridad de aplicación (Secretaría de Cultura provincial) y sus funciones; el capítulo V crea un Registro Provincial de Artesanos, de Organizaciones, Instituciones y Entidades vinculados a las artesanías y/o a la actividad artesanal; y el capítulo VI crea un Fondo de Fomento Artesanal.

Por su parte, el acervo paleontológico, arqueológico, artístico e histórico documental que forma parte del patrimonio cultural de la Provincia (la faz material o tangible del patrimonio) se rige por la Ley 6.649 del año 1991.

Asimismo, también existe en Salta la Ley 7.418 del año 2006 que constituye el marco legal para la preservación, salvaguardia, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la Provincia, constituido por el conjunto de bienes

inmuebles que fueren declarados de interés arquitectónico o urbanístico que en sus aspectos tangibles o intangibles, materiales o simbólicos o por su significación intrínseca o convencionalmente atribuida, definan la identidad y la memoria colectiva de los sus habitantes.

Salvo lo ya referido al régimen de fomento de las artesanías y los artesanos, no cuenta Salta con una norma que regule el PCI.

- **Santa Cruz.**

La Constitución de esta Provincia es de 1998. Consagra el derecho de toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo personal estando, tanto el Estado como los particulares, obligados al cuidado y a la preservación del medio ambiente para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, incorporando también el concepto de desarrollo sostenible. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley y se asegurarán estudios del impacto ambiental en los emprendimientos que se realicen (art. 73). No contiene disposición alguna referida a la cultura y sus recursos.

Santa Cruz cuenta con la Ley 3.138 del año 2010, que regula el patrimonio cultural de la Provincia y constituye la ley marco (art. 3). Dice en su art. 2 que el patrimonio cultural de la provincia de Santa Cruz está integrado por las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los paisajes culturales, los bienes de las comunidades originarias, que tengan un valor significativo para la Provincia y sus habitantes desde el punto de vista histórico, artístico, estético, arquitectónico, etnológico, antropológico, científico, simbólico, paisajístico, y/o ambiental, distinguiendo el patrimonio cultural tangible del intangible, tal como lo llama la ley. Respecto a este último, está integrado por los usos, representaciones, expresiones de las comunidades originarias, los conocimientos y técnicas - la lengua, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes - desarrollados por ellas, los grupos y en algunos casos los individuos, y que sean representativos de la diversidad cultural y de la creatividad humana en la Provincia.

Contiene un título que se aplica exclusivamente al patrimonio arquitectónico, urbano y rural (título II).

En cuanto a la forma de declaración, establece que los bienes de patrimonio cultural y natural de la Provincia serán declarados mediante decretos del Poder Ejecutivo y los distritos de zonificación patrimonial serán regidos por las ordenanzas municipales y de las Comisiones de Fomento conforme a las previsiones de la ley (art. 9).

Crea un Registro de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural para inscribir todas las declaratorias, estableciendo el régimen del mismo (arts. 10 y 11).

Contiene un título correspondiente a las sanciones en caso de infracción a la ley (título VI).

Al igual que otras leyes que ya comentadas, también se ve en esta una clara orientación al patrimonio tangible o material sin mayor referencia al intangible o inmaterial que la reseñada.

- **Santa Fe.**

El preámbulo de la Constitución santafesina, de 1962, establece como objeto de esta proveer a la educación y a la cultura. Es la única referencia a la cultura que contiene.

Santa Fe cuenta con su ley de patrimonio cultural, sancionada en noviembre de 2003 y publicada en el boletín oficial en enero de 2004. Es la Ley 12.208. Pero solo se refiere a los elementos materiales del patrimonio cultural ya que se refiere a los bienes culturales históricos-artísticos como todos los objetos o sitios que constituyen el testimonio de la creación humana, que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional y que constituyen el acervo cultural de la Provincia (art. 2).

La propia ley dice que aquellos son los que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: El producto de exploraciones y excavaciones arqueológicas y paleontológicas, terrestres y acuáticas; instrumentos de todo tipo, alfarería, inscripciones, moneda, sellos, joyas, armas y objetos funerarios; los elementos procedentes de desmembramientos de monumentos históricos; los materiales de interés antropológico y etnológico; los bienes inmuebles del patrimonio arquitectónico; los bienes que se refieren a la historia, las ciencias, la actividad social, política, cultural y militar, la vida de los pueblos y los dirigentes, pensadores, científicos y artistas; los bienes de interés artístico, pinturas y dibujos sobre cualquier

soporte, grabados, estampas, litografías, serigrafías, originales, carteles y fotografías, obras de arte y artesanías, arte religioso, arte estatuario, manuscritos raros e incunables, códices, libros, documentos y publicaciones de interés general, objetos de interés numismático, filatélico, documentos de archivo, mapas, materiales cartográficos, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos, objetos de mobiliarios, instrumentos musicales, tapices, alfombras y trajes.

Santa Fe también cuenta con una ley de promoción y protección de la actividad artesanal, incluyendo las artesanías tradicionales, junto a las artesanías de proyección folclórica y urbana. Se trata de la Ley 10.637 del año 1991 que excluye toda actividad que explote la producción o reproducción de bienes obtenidos mediante técnicas o procesos industriales.

Considera al artesano como un trabajador calificado, sin relación de dependencia, quien desarrolla su capacidad creativa, a través de su actividad libre, lo cual debe preservarse y estimularse. La misma ley establece que la autoridad de aplicación debe tener en cuenta como objetivo la preservación del patrimonio cultural de Santa Fe y de cada una de sus regiones.

En Santa Fe también se sancionó en el año 1993 la Ley 11.078 de comunidades aborígenes y regula las relaciones colectivas e individuales de las comunidades aborígenes de la Provincia, reconociendo su propia organización y su cultura. Entiende por comunidad aborigen al conjunto de personas que se reconozcan como tales, con identidad, cultura y organización propia, conserven normas y valores de su tradición, hablen o hayan hablado una lengua propia y tengan un pasado histórico común, sea que convivan nucleados o dispersos, en zonas rurales o urbanas.

La ley reconoce las culturas y lenguas toba y mocoví como valores constitutivos del acervo cultural de la Provincia (art. 26).

También cuenta con la Ley 11.717 del año 1999 de medio ambiente y desarrollo sustentable en la que declara que la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del medio ambiente comprende, entre otras cosas, la preservación del patrimonio cultural y el fomento y desarrollo de procesos culturales, enmarcados en el desarrollo sustentable (art. 2 inc. a).

- **San Juan.**

Esta provincia cuyana cuenta con su Constitución de 1986 que, en su preámbulo, fija como uno de sus objetos profundizar la democracia participativa en el aspecto cultural, entre otros.

Ya en el articulado de la Carta Magna provincial, se declama el derecho que tienen los habitantes a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo, correspondiendo al Estado provincial por sí o mediante apelación a las iniciativas populares, la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico. Legitima a toda persona a pedir por acción de amparo el cese de las causas de la violación de alguno de estos derechos (art. 58).

Consagra en el art. 71 que la educación y la cultura son derechos humanos fundamentales, promoviendo el Estado, tal como lo sostiene el preámbulo, la democracia cultural, estimulando el acceso y participación de los habitantes en la cultura y en la creatividad dentro de ese campo. Garantiza también el patrimonio y el pluralismo cultural (art. 72).

La ley marco cuyo objeto es regular la conservación, protección, preservación, restauración, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural y natural de la Provincia de San Juan para que los bienes que lo integren sirvan de testimonio para la memoria, el conocimiento y desarrollo cultural, social y económico de las generaciones actuales y futuras de la comunidad de la Provincia, es la Ley 6.801 de 1997.

La ley considera integrantes del patrimonio cultural y natural de San Juan, sin perjuicio de los elementos materiales, muebles o inmuebles, las representaciones inmateriales que testimonian y perpetúan el substrato cultural y natural, tanto de la provincia de San Juan, como de la región de Cuyo, todo ello conforme el art. 2.

De acuerdo al art. 3, una de las categorías en que pueden inscribirse los bienes del patrimonio cultural sanjuanino, es la de patrimonio cultural inmaterial, formando parte de la misma las creaciones del espíritu que integran el acervo cultural de la Provincia o región, anónimas o registradas, comprendiendo las composiciones musicales, con letra o sin ella, cuentos, poemas, leyendas, adivinanzas, refranes y relatos sobre usos y costumbres tradicionales que hayan sido transmitidos consuetudinariamente.

Por supuesto que también tiene un capítulo que regula la autoridad de aplicación de la ley (capítulo cuarto) y establece sus funciones. Entre ellas se encuentra la de difundir información, con una periodicidad anual como mínimo,

sobre el patrimonio cultural y natural provincial, referida a su composición, custodia, preservación, acrecentamiento y estudio, con el fin de concientizar a la comunidad sobre su valor cultural; ello conforme a las normas internacionales que rigen la materia patrimonial.

Crea también el Consejo Provincial del Patrimonio Cultural y Natural de San Juan como órgano asesor de la autoridad de aplicación (art. 9), creando también el Registro de los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan que contendrá el registro e inventario de esos bienes (art. 1).

San Juan también cuenta con la Ley 6.832 sancionada en el año 1997 (ahora Ley 580-F en el digesto sanjuanino), denominada Ley de Cultura, y tiene como fin asegurar el derecho a la cultura de los habitantes de la Provincia, considerándolo como el acceso o participación en la información, formación, modo de expresión y de comunicación que se produzca en la vida cultural de San Juan. Entiende por cultura al conjunto de caracteres y rasgos intelectuales y espirituales, afectivos y materiales de la persona humana en el contexto social de la comunidad a la que pertenece. Asimismo, su estilo de vida, valores religiosos y morales, tradiciones y sus manifestaciones artísticas, con sus modos de expresión y de comunicación, que amalgama los orígenes con el presente conformando la identidad cultural de la Provincia, la región y la Nación.

Establece que los fines y principios de las políticas culturales de San Juan son, entre otros, reconocer a la libertad y a la democracia cultural participativa y pluralista, como fundamento de las expresiones artísticas y culturales; ratificar la dimensión universal de la cultura, reconociendo y protegiendo la tradiciones, las diversidades étnicas y las particularidades que dan identidad a la cultura; preservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural incentivando su conocimiento y su desarrollo como base de la identidad y de la cultura de los pueblos; y asegurar el derecho natural e inalienable de las personas a crear, participar y disfrutar de los bienes y servicios culturales.

- **San Luis.**

San Luis cuenta en su preámbulo constitucional con objetivos referidos a ratificar los inalterables valores de la cultural nacional, proteger el medio ambiente y asegurar el acceso y permanencia en la educación y la cultura.

Cabe destacar que la Constitución de San Luis (año 1987) cuenta con una disposición (art. 11 bis) en la que reconoce todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, a los que considera un piso, por sobre el cual la Provincia puede establecer mayores derechos y garantías. También en el mismo artículo, la Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, comprendiendo sus derechos consuetudinarios preexistentes conforme a los acordados por la Carta Magna nacional y convenios internacionales.

Con respecto al ambiente, dispone que los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y, el deber de conservarlo.

En material cultural, el art. 65 establece que el Estado procura el desarrollo y afianzamiento de la conciencia y la identidad provincial y nacional en una perspectiva latinoamericana difundiendo a través de la cultura y la educación los valores genuinos del pueblo, su experiencia histórica y su patrimonio cultural. El artículo siguiente, declara que la cultura es un derecho natural y por ello, el Estado asegura a todos los habitantes el derecho de acceder a la misma, y conoce como sus principios fundamentales, el enriquecimiento espiritual e intelectual de la persona humana, la afirmación de los valores éticos, la profundización del sentido humanista, el pluralismo y la participación, la libertad, la tolerancia, la exaltación de la igualdad y la condena a toda forma de violencia, preservando la autodeterminación cultural, resguardando la identidad provincial y nacional, eliminando toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural; considerando el hombre centro del esfuerzo, destinatario y protagonista trascendente de la cultura.

El Estado promueve las manifestaciones culturales personales o colectivas, que contribuyan a la consolidación de la conciencia nacional, inspiradas en las expresiones de la cultura tradicional sanluiseña, argentina y latinoamericana y las expresiones universales en cuanto concuerden con los principios de la nacionalidad (art. 67).

Un artículo destinado al patrimonio cultural (68) dispone que las riquezas pre-históricas, históricas, artísticas y documentales forman parte de acervo cultural de la Provincia que el Estado debe tutelar, pudiendo decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de las mismas, asegurando su custodia y conservación de conformidad a las disposiciones vigentes.

También el Estado promueve y protege las manifestaciones auténticas de la cultura de San Luis, coordina las acciones culturales con la participación de las organizaciones populares y apoya a quienes facilitan su conocimiento y desarrollo y la integran a la cultura nacional (art. 69).

En adecuación al art. 68 mencionado, San Luis dictó la Ley Nº II-0526-2006 que tiene por finalidad implementar la custodia, preservación y expansión del patrimonio cultural de esa provincia, a la vez que consolidar la inescindible función social del mismo, considerando como potencialmente componentes de aquel a todos aquellos bienes inmuebles aún cuando por su conexidad configuren una unidad constitutiva de un área, paraje, sitio, yacimiento, repositorio y análogos o similares, localizados en el territorio provincial, tanto pertenecientes al dominio privado como al dominio público que revistieran un interés prehistórico, histórico, arqueológico, paleontológico, antropológico, etnológico, documental, bibliográfico, artesanal, artístico, científico y técnico, así como las simbolizaciones o representaciones inmateriales, que testimonien y perpetúen el substracto histórico - cultural de la provincia de San Luis, o de Cuyo (arts. 1 y 2). Esta ley contiene normas referidas al patrimonio cultural material, pero no inmaterial.

- **Santiago del Estero.**

Santiago del Estero tiene normas constitucionales que se refieren al ambiente y a la cultura. Su Constitución es de noviembre de 2005. En el preámbulo se consagra que uno de sus objetos es proteger a todos los habitantes de la Provincia en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones e instituciones históricas.

El art. 35, en lo relativo a la calidad de vida, reconoce el derecho de todo habitante a un ambiente sano y a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Este derecho comprende, entre otras cosas, la conservación de los recursos culturales.

En contrapartida al derecho recién consignado, la Constitución consagra el deber de todo habitante de resguardas el patrimonio cultural de la Nación y de la Provincia (art. 47).

Esta Provincia cuenta con la Ley 6.321 del año 1996 que contiene las normas generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación y mejoramiento

del amiente y los recursos naturales. Tiene por objetivo la protección, conservación, mejoramiento, restauración y racional funcionamiento de los ecosistemas humanos (urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo-Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a las generaciones presentes y futuras el cuidado de la calidad ambiental y la diversidad biológica.

A su vez, consagra a todos sus habitantes los derechos a gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico del individuo; a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general; y a solicitar a las autoridades la adopción de las medidas tendientes al logro de los objetivos de la ley mencionada y a denunciar el incumplimiento de la misma. Como contrapartida, establece para sus habitantes el deber de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos, efectuando las acciones necesarias a tal fin; y el de abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente provincial.

Dentro del título IV, denominado Disposiciones Especiales, esta norma contiene un capítulo (el VII) referido a al paisaje y al patrimonio histórico cultural, entendiendo por tal al conjunto de bienes con valor histórico, cultural, ambiental y económico, integrado por obras con jerarquía monumental o simbólica, ambiental o técnica. Dispone también que queda sujeto a las disposiciones de esta ley y la reglamentación de evaluación de Impacto Ambiental, toda obra o acción, pública o privada, que tuviere incidencia negativa sobre la calidad del paisaje y de lo declarado patrimonio histórico cultural por ley, decreto u ordenanza municipal, declarando especialmente protegidos y de interés provincial el hábitat y patrimonio histórico-cultural de los pueblos indígenas y la cultura artesanal (art. 70).

- **Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.**

La Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur data de mayo de 1991. Consagra en el art. 25 el derecho de todo habitante a gozar de un medio ambiente sano, comprendiendo este derecho el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, la conservación de los recursos

naturales y culturales y los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos.

En cuanto a los deberes, declara que todas las personas tienen el de, entre otros, resguardar y proteger los intereses y el patrimonio histórico, cultural y material de la Nación, de la Provincia y de los Municipios (art. 31 inc. 4).

Respecto a la cultura, tiene una clara referencia al PCI. Dice que el Estado Provincial promueve, protege y difunde las manifestaciones culturales, individuales o colectivas, que comprenden las costumbres, instituciones, creencias, actitudes y realizaciones del pueblo, que afirmen la identidad provincial, regional y nacional. Asimismo, y con respecto al patrimonio cultural material, la Provincia preserva, enriquece y difunde el acervo histórico, arquitectónico, arqueológico, documental, lingüístico, artístico y paisajístico, y asegura la libre circulación de las obras. Gozan de especial protección los museos estatales o privados ubicados en jurisdicción de la Provincia y la labor de difusión que realicen. Agrega también que la Provincia reconoce la tradición cultural de la fe Católica Apostólica Romana (art. 60).

Declara también en su art. 61 que, sin perjuicio de otros que hacen a la esencia misma del Hombre, se reconocen expresamente como derechos de la cultura el derecho a las identidades culturales; a la pluralidad de formas e ideas; a la integración cultural universal; a la autonomía de la creación cultural; al acceso pleno de todos los sectores sociales a la cultura; a la comunicación e información culturales; a la protección de los patrimonios culturales; al conocimiento y libre goce de todas las culturas; y a la resistencia contra las hegemonías culturales.

Tierra del Fuego cuenta con la Ley 370 del año 1997 que tiene por objeto la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de su patrimonio cultural y paleontológico, comprendiendo las siguientes categorías: Bienes arqueológicos; bienes paleontológicos; bienes históricos y arquitectónicos; bienes artísticos y artesanales. Todas las disposiciones de la ley están referidas a la faz material del patrimonio cultural, no refiriéndose al PCI.

- **Tucumán**

Esta Provincia reformó su Constitución en el año 2006, adoptando como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente que es patrimonio común. Al igual que otras Constituciones vistas, Tucumán también consagra el

derecho de toda persona a gozar de un ambiento sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras, conllevando el daño ambiental la obligación prioritaria de recomponerlo y/o repararlo.

Dentro de la esfera de sus atribuciones, la Provincia debe arbitrar los medios legales para proteger la pureza del ambiente preservando los recursos naturales, culturales y los valores estéticos que hagan a la mejor calidad de vida, garantizando el amparo judicial para la protección del ambiente. También debe promover la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, y desarrollará campañas destinadas a la concientización de la ciudadanía en general. Como ya se vio en otras normativas provinciales de esta jerarquía, también establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto.

Ya entrados en materia de patrimonio cultural, el art. 145 de la Constitución tucumana responsabiliza a la Provincia por la conservación, enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. Promueve la pluralidad cultural, estimulando la participación de los habitantes y el acceso a la cultura y a la creatividad, y protege las prácticas y productos culturales que afiancen las identidades en el ámbito de la Provincia, respetando la interculturalidad bajo el principio de igualdad y promoviendo la ciudadanía cultural y las diferentes tradiciones.

Tucumán cuenta con la Ley 7.500 del año 2005, modificada por Ley 8.645, que tiene por fin el establecimiento de un Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia, constituido por los bienes culturales existentes en la jurisdicción provincial, con el objeto de proteger, preservar, valorizar, recuperar, acrecentar, investigar, promover y difundir dicho patrimonio. Entiende como patrimonio cultural todos aquellos bienes materiales o intangibles de valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, documental, paisajístico y científico tecnológico, que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana, la evolución de la naturaleza y que sean significativos y representativos de la cultura tucumana.

El anexo I de la ley contempla como integrantes del patrimonio antropológico –cultural, las artesanías, la diversidad lingüística, las composiciones musicales, con

letra o sin ella, danzas, cuentos, poemas, leyendas, refranes y relatos o tradiciones orales sobre usos y costumbres, actividades, conocimientos y técnicas tradicionales que hayan sido trasmitidos consuetudinariamente.

Por el carácter particular que presentan estos bienes, muchos de ellos constituidos por símbolos de identidad que el pueblo preserva, crea y forma parte de la cultura viviente, sus portadores (copleras, artesanos, relatores, y otros) serán declarados Patrimonio Vivo.

En el artículo tercero la propia ley establece distintas categorías de bienes muebles, inmuebles e intangibles o inmateriales y crea el Registro Provincial del Patrimonio Cultural en el que se inscriben esos bienes. También contiene el régimen referido a las declaraciones de interés cultural (capítulo V), a la preservación de esos bienes (capítulo VI), de la denuncia de los mismos (capítulo VII), de las autorizaciones (capítulo VIII), de las penalidades (capítulo IX), de la constitución del Fondo del Patrimonio Cultural (capítulo X) e incentivos y fomentos (capítulo XI).

CAPÍTULO 7

El PCI en la provincia de Mendoza

El siglo XX fue en Mendoza un tiempo de cambios en materia cultural. Las condiciones de acceso al poder cambiaron a partir de 1912 con la denominada Ley Sáenz Peña (Ley 8.871 General de Elecciones) [329], provocando esto que un nuevo sector social se hiciera cargo de la administración provincial y municipal, y que surgiera en la clase media una renovada e intensa preocupación por la actividad intelectual. Proliferaron medios gráficos como revistas y periódicos, se abrieron nuevos espacios de entretenimiento y reunión social: la novedad del cinematógrafo y luego de la radio[330] brindaron circuitos de acceso a bienes culturales a sectores populares de la población. Los intelectuales mendocinos salieron paulatinamente del círculo provinciano y nuevas corrientes literarias se incorporaron a la producción mendocina. Asociado a estas corrientes literarias se dio un intenso despertar de las investigaciones folklóricas, dedicándose algunos músicos a rescatar lo que aún sobrevivía de la música tradicional y a divulgarlo[331].

García dice que en realidad el regionalismo literario que caracterizó a la primera etapa de la vida intelectual de Mendoza fue sólo un aspecto de todo un amplio movimiento de regionalismo cultural que abarcó las más diversas fases, entre cuyas manifestaciones se encontraron la creación de la Academia Provincial de Bellas Artes (1933), la Fiesta de la Vendimia (1936), la constitución de la Junta de Estudios Históricos (1937), los congresos de escritores y plásticos de Cuyo (1937 y 1938), el Primer Congreso de Historia de Cuyo (1938), la Academia Cuyana de la Cultura (1938), la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (1939), la Academia de Bellas Artes (1939, posteriormente

---

[329] Brachetta, María Teresa y otros; *Te contamos una historia de Mendoza: de la conquista a nuestros días*; 1ª ed. 1ª reimpresión; Mendoza; EDIUNC; 2012; pág. 115.

[330] La primera emisión de Argentina fue el 27 de agosto de 1920 en Buenos Aires.

[331] Ismael Moreno editó en 1933 su *Cancionero mendocino*; Alberto Rodríguez su *Cancionero cuyano* en 1938 y Juan Draghi Lucero su *Cancionero popular cuyano* también en 1938. García, María Inés; *Tito Francia y la música en Mendoza. De la radio al nuevo cancionero*; 1ª ed.; Buenos Aires; Gourmet Musical Ediciones; 2009; págs. 15/16.

llamada Escuela Superior de Bellas Artes), el Primer Congreso de Filosofía (1949), entre otras[332].

En la década de 1960, Mendoza fue cuna del Nuevo Cancionero que, en palabras de Tejada Gómez plasmadas en su Manifiesto, fue un movimiento literario-musical dentro del ámbito de la música popular argentina que nació como consecuencia del desarrollo estético y cultural del pueblo, siendo su intención defender y profundizar ese desarrollo y asimilar todas las formas modernas de expresión que ponderen y amplíen la música popular. Rechazó a todo regionalismo cerrado y buscó expresar al país todo en la amplia gama de sus formas musicales[333].

a).- Reseña histórica de la protección del patrimonio cultural en Mendoza.

Cabe decir que en materia legislativa, y a diferencia de otras constituciones provinciales, la mendocina no contiene norma alguna referida al patrimonio cultural, a la cultura o al ambiente en general (más allá de disposiciones sobre recursos naturales específicos). Tampoco la tuvo la Constitución de 1854 y las posteriores hasta el actual texto vigente.

No obstante, la Constitución mendocina de 1949 sí contuvo algunas referencias al desarrollo cultural: el art. 44 dispuso que cada habitante de la Provincia tenía la obligación de realizar una actividad o función que contribuyera al desarrollo cultural de la colectividad; el art. 52 dispuso que todo habitante tenía el deber de defender el desarrollo de la cultura autóctona; el art. 57 procuraba desgravar las actividades culturales; el art. 230 establecía que las leyes que organizaran y reglamentaran la educación debían sujetarse a las bases de que la educación integral tendería al perfeccionamiento de la personalidad del educando para promover la tradición nacional y de la educación regional, que consideraría especialmente el ambiente natural en que vivan los educandos y sus familias para tender a su progreso. Esta Constitución quedó sin efecto en 1956 y desaparecieron estas disposiciones, volviendo a la ausencia de referencia alguna a la cultura.

---

[332] García, María Inés, *op. cit.*, págs. 16/17.

[333] Jáuregui, Ernesto; *Manifiesto del Nuevo Cancionero. Vigencia e influencia en la carrera de Música Popular*; Clang (N.° 4), págs. 78/84, abril 2016, ISSN 2524-9215.

Respecto del régimen del patrimonio cultural, al decir de Ponte[334], tal idea no existía a mediados del siglo XX. Durante el gobierno cívico-militar de los años '70 se hizo una remodelación del Paseo de la Alameda de la ciudad de Mendoza con cierta impunidad para intervenir caprichosamente en el patrimonio urbano, y por décadas se sufrió las fatales consecuencias de las erradas decisiones que se tomaron entonces con ese Paseo.

Así era hasta comenzar la década de 1980 del siglo XX, época en que se propuso demoler el antiguo edificio de la escuela Patricias Mendocinas[335] y el jardín de infantes Merceditas, ubicados en la Ciudad de Mendoza, para construir, en lugar de eso viejo, un "nuevo y funcional edificio". Pero la pérdida de la guerra de Malvinas en 1982 trajo el descrédito del gobierno militar y la sociedad civil comenzaba a movilizarse a favor de su reemplazo por un gobierno democrático. Inesperadamente, con el Partido Demócrata cogobernando en la Provincia, desde sus propias filas, y desde las ex alumnas y ex docentes de la escuela Patricias, se comienza a organizar, por primera vez en Mendoza, una comisión para la defensa de un edificio público, más concretamente de la escuela Patricias Mendocinas y del jardín de infantes Merceditas.

Con este espíritu de contestación se conforma una comisión muy plural. Sus integrantes eran de todos los sectores políticos locales. A ella también se sumaron

---

[334] Ponte, Jorge Ricardo, *El Patrimonio Tangible de los Mendocinos*, en el libro: "Mendoza, Identidad, Educación y Ciencias", Roig, Arturo y Satlari, María Cristina (comp.); Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, págs. 49/104, 2007; Ediciones Culturales de Mendoza; https://www.academia.edu/7183712/Cap%C3%ADtulo_EL_PATRIMONIO_TANGIBLE_DE_LOS_MENDOCINOS_En_el_libro_Mendoza_Identidad_Educaci%C3%B3n_y_Ciencias_._Compiladores_Arturo_ROIG_y_Mar%C3%ADa_Cristina_SATLARI_Direcci%C3%B3n_General_de_Escuelas_de_la_Provincia_de_Mendoza_p%C3%A1gs._49_a_104_2007.Ediciones_Culturales_de_Mendoza._ISBN_987-95418-9-8?auto=download [consultado en junio de 2019].

[335] El histórico edificio de la escuela N° 1-123 Patricias Mendocinas se ideó y construyó por decisión del gobernador Arístides Villanueva en 1872, con parte del dinero que Chile y Uruguay habían donado a Mendoza tras el terremoto de 1861.

En principio, fue destinado a la formación de maestros normales, con el nombre de Escuela Sarmiento, hasta 1899. En diciembre de 1914 y por resolución número 736 de la Dirección General de Escuelas, a cargo de Manuel Antequeda, se resolvió crear una institución cuyo objetivo y principal meta fuera potenciar la cultura femenina, desarrollando en las niñas capacidades y destrezas que las prepararan para el rol de dueñas de casa y mejores madres de familia. La resolución también agregaba que a partir del 10 de mayo de 1915 funcionaría en ese lugar la Escuela de Señoritas Patricias Mendocinas con un anexo que debía destinarse al "kindergarten" (jardín de infantes).

Fueron 120 las niñas que pudieron asistir al primer año de funcionamiento de la escuela, aunque más tarde la plantilla se amplió por la demanda social. La institución funcionó hasta 1932 de primero a tercer grado. Desde ese año y hasta 1940, hasta cuarto grado; y luego comenzó con el quinto y sexto. Fayad, Federico, *La histórica escuela Patricias Mendocinas celebra sus 100 años*, Diario Los Andes, 10/05/2015.

algunos arquitectos y profesionales comprometidos en la defensa del tradicional edificio. Aparece así en la agenda pública una nueva problemática: la defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Sigue diciendo Ponte que el gobierno de la Provincia no dio ninguna instancia de revisión del proyecto del nuevo edificio y que las páginas de los periódicos de la época dieron cuenta de las numerosas notas publicadas defendiendo el edificio y en contra de su demolición. El gobierno cívico-militar de entonces (1982) no sólo no dio marcha atrás con la iniciativa sino que descalificó a las ex alumnas, a las ex docentes, a los profesionales que apoyaban la conservación del antiguo edificio, y apeló al último argumento que se usa en Mendoza para cerrar una discusión patrimonial: el edificio de la antigua escuela Patricias Mendocinas no era antisísmico. Los edificios de la escuela Patricias Mendocinas y el jardín de infantes Merceditas se tiraban porque serían "fácil presa de los sismos". Pero se debieron emplear plumas con bolas de acero para demolerlos, porque no se caían sólo con las piquetas de los obreros. Enorme trabajó les dio demolerlos. Ponte dice que este fue el inicio de la preservación en Mendoza[336].

Mendoza adhirió al régimen establecido por el Decreto nacional 1.063 de fecha 31 de mayo de 1982, mediante el Decreto provincial 3.511 del 20 de setiembre de 1982. Cabe recordar –tal como se vio en otro pasaje de este trabajo- que aquel dispuso que los funcionaros a quienes corresponda la decisión acerca del destino de los inmuebles propiedad del Estado nacional, entidades descentralizadas, empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su naturaleza jurídica, de una antigüedad de más de cincuenta años, no pueden autorizar modificación alguna dichos inmuebles ni su enajenación sin la consulta previa de la Comisión Nacional de Muesos, de Monumentos y de Lugares Históricos y la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Artísticos, quienes deben expedirse teniendo en cuenta el valor histórico, artístico o arquitectónico de los inmuebles.

Inmediatamente se comenzó a proyectar un trabajo del que resultó la formación de una Comisión Asesora de Resguardo de los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico-Cultural de Mendoza, a la que le dio forma el Decreto 2.749 del 12 de febrero de 1983.

---

[336] Ponte, Jorge Ricardo, *Mendoza, aquella ciudad de barro. Ilustrado: historia de una ciudad andina desde el siglo XVI hasta nuestros dias*, 1ª ed., Buenos Aires, CONICET, 2008, pág. 532.

En 1985 también se concluyó un inventario del patrimonio edilicio de la ciudad de Mendoza patrocinado por el CONICET[337].

En el ámbito judicial, en este entonces también pudo apreciarse esta evolución en las preocupaciones sociales, y su valoración en las sentencias, como lo demuestra el caso "UCIM c/ Municipalidad de Mendoza"[338], donde se discutía la legalidad de una reforma arquitectónica de la Plaza Independencia en la Ciudad de Mendoza, lo cual fue definido considerando para ello –entre otros elementos- el régimen de protección cultural aplicable.

En el ámbito gubernamental y por Decreto 1.355 del 12 de junio de 1989, se creó en jurisdicción de la Subsecretaría de Cultura el Comité Asesor del Patrimonio Cultural y Natural de Mendoza. Ese mismo día el Gobernador de la Provincia dictó el Decreto 1.357 que dispuso conservar los documentos que hayan cumplido el ciclo vital y estén en condiciones de ser eliminados, para que la, por aquel entonces, Dirección de Patrimonio, Museos y Biblioteca sea comunicada de ello y el Archivo Histórico proceda a evaluar y seleccionar aquellos que posean valor histórico.

De aquel Comité surgió un marcado interés en elaborar una norma legal en salvaguardia de los intereses de tantos bienes tradicionales de la Provincia ya que no existía entonces una norma marco de protección del patrimonio cultural. Así, en 1993 se sancionó la Ley 6.034 actualmente vigente, que fue modificada en 1994 por la Ley 6.133 que creó el Consejo Provincial del Patrimonio Cultural.

Ya en el año 1992, la Legislatura provincial había sancionado también la Ley 5.961 de Preservación del Medio Ambiente. De acuerdo a esta ley, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende, entre otras acciones, la creación, protección, defensa y mantenimiento de cualquier espacio que pueda contener elementos culturales o paisajes y que merezca ser sujeto a un régimen de especial gestión y administración.

Conforme al art. 16, la ley se aplica para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos y los derechos colectivos, brindando protección a esos fines al medio ambiente, a la conservación del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos y de

---

[337] Ponte, Jorge Ricardo, *El Patrimonio Tangible..., pág. 12.*

[338] Esta sentencia, de fecha 2/05/1988, se ha publicado en Rodríguez Salas, Aldo (dir), *Jurisprudencia Ambiental. 5 sentencias sobre la preservación de ambiente*, Mendoza: Gobierno de Mendoza, 1991, págs. 43/71.

cualesquiera otros bienes que respondan en forma idéntica a necesidades comunes de grupos humanos a fin de salvaguardarla calidad de la vida social. Se ve aquí que se incorpora al patrimonio cultural como objeto de protección jurisdiccional.

En octubre de 1991 se sancionó la Ley 5.754 que adhirió a la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes.

Para formalizar la solicitud de declaratorias de bienes del patrimonio cultural de la Provincia, se sancionó la Ley 6.914 del 24 de junio de 2001, que modifica el capítulo V, art. 15 de la Ley de Patrimonio, especificando los antecedentes que debe reunir la tramitación[339]. Ya en el año 2009 se dictó el Decreto reglamentario 1882/2009.

El mismo año 2001, en agosto, se sancionó la Ley 6.920 que reconoció la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de Mendoza, garantizándose el respeto su identidad cultural y *nuevamente* se adhiere a la Ley 23.302.

b).- Protección de bienes que conforman el patrimonio cultural de la Provincia de Mendoza.

- **Ley 6.034.**

Esta ley fue sancionada el 10 de junio de 1993 y publicada en el boletín oficial provincial el día 10 de agosto del mismo año. Si bien la ley se sancionó el 10 de junio de 1993, el proyecto de ley que declaraba de interés la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de todos aquellos bienes que conformaban el patrimonio cultural y natural de Mendoza, fue presentado por los entonces senadores provinciales Pedro Ferllen y María Liliana Greco el 09 de mayo de 1990.

Actualmente es la ley marco que rige la protección del patrimonio cultural de Mendoza únicamente en su aspecto material. No contiene normas referidas al PCI. Sí se refiere a él el Decreto reglamentario 1882/2009 que establece los procedimientos y condiciones para la gestión del patrimonio cultural.

[339] Ruiz, María Cristina (recop.), *Patrimonio Cultural*, Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, 2005, págs. 77/78.

i. Declaración genérica del fin legal. Objetivo de la ley.

La Ley 6.034 declara de interés provincial la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de todos aquellos bienes que conforman el patrimonio cultural de la provincia de Mendoza (art. 1), siendo la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos la responsable de ello (art. 4 Decreto reglamentario).

Tal cual está redactado el artículo, carece de sentido protectorio marco.

ii. Definición y enumeración de los bienes protegidos. Sólo patrimonio cultural material.

Se establece que todos los bienes que integran el patrimonio cultural de la Provincia, por su valor documental y cronológico, deben ser conservados como testimonio para el conocimiento y desarrollo cultural (art. 2).

En primer lugar, cabe decir que la ley indudablemente se refiere única y exclusivamente al patrimonio material ya que presupone que todos los bienes que integran el acervo patrimonial provincial poseen un valor documental y cronológico. En caso de que quiera incorporarse la protección del PCI, se considera que debe quitarse la referencia al valor documental y cronológico de los bienes patrimoniales ya que no todos implican una materialidad: el caso de las manifestaciones intangibles o inmateriales carecen de la materialidad que la palabra documento refiere, faltándole a ellas ese valor documental.

Búcolo dice que para los documentólogos, en una acepción amplia, el documento es cualquier soporte de cualquier índole, que contiene información de interés para una determinada materia. Sigue diciendo que Couture de Troismonts definió al documento como "toda base material de conocimiento, susceptible de emplearse para la consulta, el estudio o como elemento de prueba". A su vez, para los historiadores, el documento es el soporte que posee una información referida al pasado humano[340]. La Real Academia Española también destaca la materialidad como característica del documento[341].

---

[340] Búcolo, Elvira, *Patrimonio histórico-documental*, en Ruiz, María Cristina (comp.), *Patrimonio Cultural*, 1ª Ed., Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, 2005, pág. 48.

[341] Da distintas acepciones: 1.- Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos; 2.- Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo; 3.- Cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de

Por su parte, el valor cronológico también es propio de los objetos materiales y, por tener un sesgo pretérito, no puede referirse al patrimonio inmaterial o intangible. Si bien estas manifestaciones pueden está vinculadas con objetos materiales que les son inherentes, tienen como característica principal que son expresiones vivas y se transmiten de generación en generación, siendo recreadas constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y les infunde un sentimiento de identidad y continuidad. Esto no tiene nada que ver un orden y fechas de sucesos históricos o de otra época que implica la cronología.

Considera integrantes del patrimonio cultural mendocino a todos aquellos bienes trascendentes que material o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que significan o pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren en el territorio de la Provincia, o ingresen a él, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como tales por la autoridad de aplicación (art. 3).

No se entiende a qué se refiere el artículo cuando declara que los bienes deben reportar un interés en forma material o cultural. ¿Qué quiere decir culturalmente? Esta fue una modificación que introdujo la Ley 6.133 ya que tanto el proyecto original presentado por los legisladores Ferllen y Greco, como la Ley 6.034 en su redacción original, establecían, en lugar de "culturalmente", la palabra "espiritualmente". Ahí no caben dudas de que se referían a aquellos bienes que manifestaban un interés en forma inmaterial o intangible. No puede entenderse que la forma actual signifique eso como así tampoco se entiende el motivo de la modificación. Nada dice el proyecto de la ley ni tampoco el diario de sesiones de la época.

A su vez, se ve aquí que la legislación mendocina se enrola en la postura de que la declaratoria como bien integrante del patrimonio cultural es constitutiva, es decir, que es a partir de su declaración que un elemento patrimonial adquiere protección ya que dicha manifestación es la que produce su ingreso al universo patrimonial y no antes. ¿Pero quién debe hacer dicha declaración? Conforme a lo que dice la ley, no quedan dudas de que es la autoridad de aplicación que es la Dirección

---

él, especialmente del pasado; 4.- Instrucción que se da a alguien como aviso y consejo en cualquier materia.

de Patrimonio Cultural (hoy Dirección de Patrimonio Cultural y Museos), dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza. Sin embargo, no siempre es así ya que hay algunas declaraciones efectuadas por la Legislatura Provincial y otras por el Poder Ejecutivo, tal como se enumera más adelante.

En el art. 4 dice que los bienes que pueden integrar el patrimonio cultural mendocino son los siguientes:

a).- bienes inmuebles de valor arquitectónico, artístico o de importancia cultural, que posean más de cincuenta (50) años de antigüedad, monumentos, sepulcros y lugares históricos provinciales declarados;

b).- conjuntos urbanos arquitectónicos, de ámbitos históricos y/o culturales;

c).- yacimientos o sitios arqueológicos y sus áreas de influencia. Se entiende por tales a todo espacio en la superficie del terreno, en el subsuelo o bajo las aguas donde están reservados objetos arqueológicos, factibles de ser estudiados con metodología científica arqueológica;

d).- yacimientos o sitios paleontológicos y sus áreas de influencia;

e).- objetos arqueológicos, hayan sido o no extraídos, entendiéndose por a tales todo resto material, mueble o inmueble, o vestigios de cualquier naturaleza que brinde información sobre la existencia, cultura, actividades y/o relaciones producidas por el hombre en el pasado. Se asimilan a los objetos y yacimientos mencionados en el inciso "c" y "d", las manifestaciones arqueológicas de arte, los restos esqueletarios que documentan la contextura o el aspecto físico de seres humanos que vivieron en el pasado, así como su contexto de depositación;

f).- objetos de antropología, etnografía y paleontología; piezas de zoología, botánica y mineralogía;

g).- bienes muebles, manuscritos, papeles y objetos históricos, artísticos y científicos de cualquier naturaleza incluyendo instrumentos y partituras musicales, piezas de numismática, armas, imágenes y ornamentos litúrgicos, decorativos, vehículos, material técnico y de precisión;

h).- libros sueltos o formando bibliotecas, periódicos o impresos de cualquier naturaleza, impresos en la argentina o en el exterior, cartografía en general;

i).- obras de arte, pinturas, acuarelas, dibujos litográficos, grabados y esculturas, alfarería, cerámica y bienes de uso público u oficial;

j).- piezas de artesanías tradicionales (tejidos, fibra vegetal, cuero y metales);

k).- muebles de uso personal o familiar, fabricados en el país o en el extranjero.

Pueden agregarse también aquí los bienes que menciona el art. 6: todos aquellos bienes declarados dentro del territorio provincial por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Esta enunciación no deja lugar a dudas de que, efectivamente, el objeto de protección y conservación de la ley es el patrimonio cultural material. No hay lugar en esta norma para el PCI. Está claro que al momento de la sanción de esta ley la idea de PCI o intangible no estaba muy desarrollada, tal como se ha visto, pero tampoco la redacción actual de la ley permite incorporar por extensión su protección. Está claramente pensada para los objetos materiales.

También sirven para fundar esta posición los arts. 5, 7, 8, 9 y 24 que hablan de que los propietarios o poseedores de los bienes comprendidos en la enunciación mencionada deben hacer conocer la existencia y ubicación de los mismos a la autoridad de aplicación y solicitar su registro en la forma y plazo que determine la reglamentación. En caso de no hacerlo, no pueden acogerse a los beneficios impositivos que se otorgan en la ley para los bienes inmuebles y muebles registrados. Evidentemente, en relación a esta norma, sólo se puede ser propietario o poseedor de cosas que, de acuerdo al art. 16 del Cód. Civil y Com. de la Nación, sean bienes materiales. Para mayor redundancia de lo aquí afirmado, se ve cómo el régimen impositivo y fiscal sólo se refiere a los bienes muebles e inmuebles.

Se funda también la posición de que solo la ley se refiere a bienes materiales y no puede extenderse la protección al PCI, aún cuando la enumeración del art. 4 se considere enunciativa y no taxativa, en lo siguiente:

i).- El art. 10 crea el Registro de Bienes Patrimoniales de Mendoza cuyas atribuciones e instrumentación deberán ser fijadas dentro del marco constitucional del derecho de propiedad.

Respecto al dominio, el Cód. Civil y Com. dice que el mismo puede ser perfecto o imperfecto. El primero de ellos es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El segundo es cuando el dominio está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales (arts. 1941 y 1946). En cualquier caso, siempre se trata de cosas que son bienes materiales. Esto

quiere decir que las atribuciones e instrumentación del registro sólo pueden referirse a objetos materiales y nunca a intangibles o inmateriales.

A su vez, también el art. 10 dice que el Registro debe contener los bienes del patrimonio cultural de la Provincia que hayan sido declarados de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 6.034. Se vio que tanto en el art. 3 como en el 4, la ley solo se refiere a bienes materiales. No pueden incorporarse dentro del registro comprendido en la ley las manifestaciones intangibles o inmateriales.

Por su parte, el art. 10 de la reglamentación establece que en el Registro se indicará el nombre y domicilio del poseedor y que la inscripción en el Registro no implica ninguna modificación al derecho de propiedad.

ii).- Crea el Consejo Provincial del Patrimonio Cultural que tiene como función, entre otras, emitir dictamen, en todos los casos, sobre las solicitudes de registro de bienes del patrimonio cultural de Mendoza, pudiendo registrarse solamente los bienes muebles o inmuebles. Además, aclara que las funciones del mismo son con relación a los bienes mencionados en la misma Ley 6.034 (art. 10). También se vio que la ley sólo se refiere a objetos materiales y nunca a manifestaciones inmateriales. Por lo tanto, todas las funciones del Consejo a que se refiere el artículo en mención, comprenden sólo al patrimonio cultural material.

La ley se equivoca al mencionar aquí las "solicitudes de registro" ya que debió hacer referencia a las "solicitudes de declaración". Estas últimas son anteriores a aquellas y no tiene sentido que el Consejo emita dictamen sobre el registro de los bienes culturales, debiendo hacerlo en los casos de proyectos de declaración de bien patrimonial.

iii).- El capítulo VI (de la investigación y hallazgo de bienes culturales y naturales) hace referencia a los bienes incluidos en las categorías que la misma ley establece, es decir, objetos materiales. Lo mismo sucede con el art. 18 referido a hallazgos fortuitos de bienes presuntamente significativos para el patrimonio cultural de la Provincia producidos en el marco de ejecución de obras públicas y privadas. ¿Qué otra cosa puede hallarse fortuitamente si no son cosas materiales? El art. 7 inc. a del Decreto 1.882/2009 dice que se consideran hallazgos fortuitos al encuentro de objetos y restos materiales, de interés patrimonial, que se hayan producido por azar o como consecuencia de remociones de tierra, demoliciones, obras de cualquier índole y procedimientos policiales.

Sí podría aplicarse al PCI el art. 19 que establece que los organismos públicos que proyecten, inicien o ejecuten obras en el territorio provincial deberán prever la conservación del patrimonio cultural. No obstante, se ha visto que el resto de la ley excluye la aplicación de la misma a aquel tipo de patrimonio, por lo que este artículo sin duda alguna también está pensado para el patrimonio cultural material.

Esta falta de regulación específica, en la actualidad, es de alguna forma morigerada en base a la aplicación del régimen general de tutela ambiental, aunque con el déficit de eficacia que puede implicar una tutela indirecta enmarcada en la anomia que implica la falta de regulación precisa y explícita. Un ejemplo de tutela de aspectos culturales inmateriales en este sentido lo constituye la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de embalse Portezuelo del Viento, a construirse sobre el río Grande, en el Departamento de Malargüe, realizado en el marco del procedimiento que exige las leyes 25.675 y 5.961. En este caso el estudio de impacto ambiental[342] consideró dentro de las consecuencias de la obra que debían ser atendidas a la afectación de la trashumancia[343].

iv).- El capítulo VII se refiere a las limitaciones al dominio y a las transacciones de los bienes inscriptos en el registro del patrimonio cultural de la Provincia. Inequívocamente este capítulo (arts. 20 y 21) sólo puede aplicarse a objetos materiales y nunca a manifestaciones que componen el PCI.

v).- El capítulo VIII referido a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales provinciales, expresamente menciona que los poseedores o propietarios de los bienes muebles o inmuebles comprendidos en la ley e inscriptos en el registro pertinente, son responsables de la preservación y conservación de los mismos, a fin de mantener y asegurar su genuinidad e inalterabilidad.

---

[342] UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, *Manifestación General de Impacto Ambiental. Proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento, Malargüe, provincia de Mendoza.* 2017

[343] Según observa el referido estudio, "el "sistema trashumante" o "criancería" es una actividad ganadera de arraigo cultural desarrollada por productores rurales, consistente en trasladar a pie los arreos de ganado, desde los campos de invierno a los de verano y viceversa. […] La práctica ganadera de caprinos y ovinos que es desarrollada por los denominados "puesteros" o "crianceros", tiene una fuerte connotación histórica y cultural en el departamento. La forma de vida de los crianceros está estrechamente relacionada con la cría y el manejo del ganado trashumante. Este manejo es una actividad de fuerte arraigo cultural desarrollada por los productores ganaderos de la zona y consiste en trasladar a pie los arreos de ganado, desde los campos de invierno a los de verano".

La sola mención de propietarios y poseedores de bienes muebles e inmuebles excluye cualquier tipo de posibilidad de interpretación en favor de la protección del PCI.

vi).- Finalmente, el capítulo X establece el régimen sancionatorio en caso de violación a las disposiciones de la ley. Al no contemplar las manifestaciones inmateriales, jamás podría cometerse una infracción que las contemple.

- **Decreto reglamentario 1.882/2009.**

Tal como se adelantara, este decreto establece los procedimientos y condiciones para la gestión del patrimonio cultural de la Provincia. Contiene un anexo que forma parte del mismo donde se fijan esas normas. Al tratarse del decreto reglamentario de la Ley 6.034, se refiere al patrimonio cultural material, sin perjuicio de que contiene algunas normas referidas al PCI de Mendoza.

i. Sobre la aplicación de las normas para la gestión del patrimonio cultural.

Las normas para la gestión y guías de procedimientos para el patrimonio cultural que contiene el decreto reglamentario se aplican a todos los bienes que lo integran.

Esto quiere decir que sólo se aplica a los objetos materiales detallados en los arts. 3 y 4 de la Ley 6.034, porque sólo ellos pueden ser declarados bienes patrimoniales y, como la ley establece que quedan incorporados al patrimonio cultural sólo después de su declaración, no puede incluirse ninguna otra manifestación o bien que no sea declarada como tal debido a su carácter constitutivo.

ii. Definición de bien patrimonial. Solo patrimonio cultural material.

Se consideran bienes patrimoniales, además de los enumerados en el capítulo II de la Ley 6.034:

a).- Los bienes patrimoniales protegidos por el Decreto nacional 1.063/82 y el Decreto provincial 3.511/82.

b).- Los bienes considerados en las Leyes nacionales 25.743 (de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico) y 25.568 (Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas -Convención de San Salvador-).

Estos dos incisos también se refieren a objetos materiales (inmuebles los mencionados en el punto a y muebles e inmuebles en el punto b).

iii. Disposiciones específicas sobre cada tipo de bien patrimonial.

La norma contiene disposiciones específicas sobre cada uno de los bienes patrimoniales materiales que conforman el patrimonio cultural de Mendoza.

Así, el capítulo II se refiere a los bienes inmuebles, entendiendo en general como bienes inmuebles protegidos como patrimonio cultural aquellos que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen valor arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico, científico, técnico o educativo. Contiene normas relativas a los inmuebles comprendidos (art. 10), a los planes de manejo (art. 11) y a los criterios de intervención (art. 12).

El capítulo III regula lo atinente a los bienes muebles, entendiendo como bienes muebles integrantes del patrimonio cultural a aquellos que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen valor arqueológico, histórico, artístico, científico, tecnológico o educativo. También, incluye una enumeración de los bienes comprendidos (art. 13), normas relativas a la conservación (art. 14), a los criterios de intervención (art. 15), a la documentación (art. 16), préstamo y traslado (art. 17) y exposición y difusión (art. 18).

El capítulo IV del anexo I del decreto reglamentario contiene disposiciones específicas para la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, definiéndolo como los objetos, colecciones arqueológicas, restos paleontológicos e inmuebles de carácter cultural e histórico, para cuyo estudio es preciso utilizar metodología arqueológica o paleontológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o subacuáticos. También lo integran el territorio o paisaje habitado por el ser humano en época histórica y prehistórica y los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del mismo y sus orígenes y antecedentes (art. 19). Regula las responsabilidades (art. 20), las

concesiones (art. 21) y el Registro de Sitios y Colecciones Arqueológicas y Paleontológicas de la Provincia (art. 22).

El capítulo VI contiene las disposiciones específicas para la protección del patrimonio documental y bibliográfico, enunciando cuál es el comprendido (art. 26), lo referido al Archivo General de la Provincia (art. 27), las transferencias de documentos públicos (art. 28), las obligaciones de los archivos (art. 29), los archivos particulares (art. 30), las obligaciones de los propietarios (art. 31), el patrimonio bibliográfico (art. 32) y los documentos musicales (art. 33).

Como puede verse, estas disposiciones se refieren solo al patrimonio cultural de índole material. Sólo contiene un capítulo referido al PCI

- **Disposiciones específicas para la salvaguardia del PCI.**

El decreto reglamentario destina el capítulo V del anexo a regular lo referido al PCI siendo una norma dictada *praeter legem*, en la medida en que –como se observó supra- la ley reglamentada no desarrolla esta materia, es muy pobre la regulación que hace limitándose, prácticamente, a la enumeración de las manifestaciones que lo conforman y a las funciones de la autoridad de aplicación, dejando una laguna referida a la declaración de los mismos, a las medidas de salvaguardia, a los registros e inventarios, al acceso, a la participación de las comunidades, entre otras cuestiones.

i. Definición.

El art. 23 dice que forman parte del PCI, contemplado en el art. 4 inc. F de la Ley 6.034, aquellos bienes tales como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como testimonios significativos y auténticos de su cultura, luego de su declaratoria, teniendo en cuenta, y esto es en consonancia con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, únicamente el PCI que sea compatible con los instrumentos de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

Llama la atención la referencia que el decreto hace al art. 4 inc. F de la Ley 6.034 porque, como puede comprobarse, ese inciso menciona los objetos de antropología, etnografía y paleontología; piezas de zoología, botánica y mineralogía que no constituyen manifestación alguna de PCI. Por el contrario, ya se ha visto que la Ley 6.034 no contiene ni una sola norma que sea aplicable a la faz inmaterial del patrimonio cultural, por lo que la incorporación de este capítulo en el decreto reglamentario resulta aislada ya que no puede conectarse de forma alguna con la ley que busca reglamentar. Claramente se trata de una desinteligencia normativa, posiblemente debida al forzamiento de la autoridad administrativa para reglamentar aspectos que exceden la regulación expresa de la ley.

El PCI definido en el mismo decreto reglamentario, se manifiesta en particular en las siguientes áreas que la propia norma enuncia de modo ejemplificativo y no taxativo: 1. Técnicas constructivas; 2. Técnicas artesanales; 3. Tecnología y manufacturas; 4. Indumentaria y atavíos; 5. Gastronomía; 6. Medicina popular; 7. Literatura oral; 8. Música; 9. Danza; 10. Juegos y actividades lúdicas; 11. Fiestas y celebraciones; 12. Cosmovisión; 13. Usos y costumbres; 14. Toponimia.

A su vez, Bosquet[344] ha desarrollado para Mendoza una subcategorización dentro de las categorías mencionadas, aclarando que lo hace a los fines prácticos y que existen redes que van conectando estas áreas entre sí. Dentro de las técnicas constructivas, él ubica a las de habitación, esparcimiento, transporte (muebles, inmuebles), defensivas, religiosas, funerarias, entre otras construcciones; dentro de las técnicas artesanales, menciona la cerámica (alfarería), textil, cuero, madera, metal, piedra, entre otros; dentro de la categoría de tecnología y manufacturas, divide a su vez en técnicas de adquisición (caza, pesca, recolección, agricultura, cría de animales, minería) e industrias químicas (pinturas, tintas, fertilizantes, legía, jabón, explosivos, pirotecnia, entre otros); en indumentaria y atavíos se encuentra a la pintura corporal, tatuaje, masculina, femenina, infantil, mixta, ceremonial y cotidiana; en gastronomía, distribuye a la industrialización de productos agrícolas, conservación de alimentos, elaboración de comidas, elaboración de dulces, repostería y elaboración de bebidas; dentro de medicina popular, encontramos la farmacopea, terapéutica, preventiva y de higiene, de intervención, embarazo y parto; en literatura oral se encuentra, a su vez, otra clasificación: en prosa (relatos como anécdotas,

[344] Bosquet, Diego, *Patrimonio Cultural Intangible*, en Ruiz, María Cristina (comp.), *Patrimonio Cultural*, Ediciones Culturales Mendoza, Mendoza, 2005, págs. 61/67.

casos, etc., cuentos, fábulas, leyendas, tradiciones, narraciones dentro de la historia oral y oraciones), en verso (coplas, décimas, himnos, oraciones, romances y villancicos), paremiología (refranes, dichos, trabalenguas, adivinanzas, comparaciones, exageraciones y acertijos).

En música, el autor ubica a las canciones y a la danzas; en danza (entendiendo que se trata de coreografías), ubica la individual, colectiva, parejas independientes e interdependientes; en juegos y actividades lúdicas, están de adultos (deportivos, con prendas, de manos, con cartas, de acierto y encuentro, y con animales), de adolescentes, de niños (de contar y elegir, de acertar y encontrar, rondas, corros, ruedas, de correr, saltar, de acción, fuerza y resistencia, con juguetes, con agua y en el agua), entre otros. Dentro de fiestas y celebraciones, se encuentran las calendáricas (relacionadas con el tiempo), cívicas, devocionales, del ciclo vital (nacimiento, onomástico, de iniciación, relacionadas con la infancia o la niñez, muerte y entierro, conmemorativas, pubertad, nupciales, y de reproducción), del trabajo, de diversión y ferias. En la cosmovisión se encuentran la mitología (de creación, de conservación, destrucción y regeneración del universo, de pasaje y relación entre mundos, antropogénicas, etiológicas, entre otras), creencias mágico-religiosas (conjuros, exorcismos, encantamientos, magia de contacto, magia homeopática –imitativa-, magia simpática, adivinación, y seres sobrenaturales), concepciones religiosas (deidades y héroes culturales), prácticas mágicas, prácticas religiosas, rituales, sitios y materiales de culto, especialistas, chamanes y sacerdotes.

Dentro de los usos y costumbres que menciona el decreto, Bosquet subcategoriza aquellos de carácter social (saludo, visitas, etiqueta, intercambio de regalos y hospitalidad), de carácter familiar, personal, de uso y distribución del tiempo (sueño, hora de levantarse, higiene, trabajo, comidas, descanso y viajes), en relación al trabajo (individual, colectivo, división por sexos y trabajo con los niños) y, finalmente, los relacionados con el ciclo vital (prenatalidad, natalidad, infancia, pubertad, noviazgo, matrimonio, madurez, ancianidad y muerte).

ii. Autoridad de aplicación.

De acuerdo al art. 11 de la Ley 6.034, la autoridad de aplicación de la misma ley es el Ministerio de Cultura, hoy convertida en Secretaría. A su vez, el decreto reglamentario (arts. 2, 4 y 7) dispone que la Dirección de Patrimonio Cultural

es la autoridad de aplicación de las normas para la gestión del patrimonio cultural, responsable de la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de los bienes del patrimonio cultural de Mendoza y, entre otras, de la Ley 26.118 que aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

iii. Funciones de la autoridad de aplicación vinculadas con el patrimonio inmaterial.

Específicamente referida al PCI, y como autoridad de aplicación, la norma le atribuye a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la Provincia (art. 24 del anexo I del Decreto 1.882/2009) la adopción de las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del PCI presente en el territorio provincial, entendiendo por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del mismo, comprendiendo la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos (inc. a).

Para garantizar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio inmaterial presente en su territorio, es función de la autoridad de aplicación la adopción de una política general encaminada a realzar la función de este patrimonio en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación; fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio inmaterial, y en particular del que se encuentre en peligro; favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio inmaterial, así como la transmisión de éste en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión; garantizar el acceso al patrimonio inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio; y asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio inmaterial en la sociedad, en particular mediante programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al público (inc. b).

iv. Sobre los objetos materiales asociados o relacionados.

Dice el decreto reglamentario (art. 25 del anexo I) que si los bienes inmateriales declarados patrimonio estuvieran asociados a bienes materiales, muebles o inmuebles, de manera intrínseca, condicionante o simbólica a los motivos que determinaron la declaratoria se deberán incluir en la misma y se rigen por las disposiciones generales y las específicas contenidas en el decreto reglamentario para los objetos muebles o inmuebles, según se trate de unos o de otros.

v. ¿Cómo es la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales en Mendoza?

De las disposiciones analizadas, surge claramente que la legislación mendocina exige para que una manifestación sea incorporada al PCI de la Provincia, una declaración en tal sentido. En forma concordante con el sistema general que fija la ley provincial, así lo exige el art. 1 del anexo I del decreto reglamentario al decir que forman parte del PCI aquellos bienes tales como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como testimonios significativos y auténticos de su cultura, *luego de su declaratoria*. Sin duda alguna, la declaración en este sentido es de carácter constitutivo: Nada es PCI mendocino sino se lo declara como parte integrante del mismo.

Ahora bien. Ya teniendo en claro que la normativa exige una declaración que expresamente incorpore una manifestación al patrimonio cultural de Mendoza, cabe preguntarse quién debe efectuar esa declaración. En este aspecto el régimen no es claro, habiéndose dado lugar a distintas situaciones disimiles, especialmente en el ámbito del patrimonio material.

En primer lugar, cabe decir que la única norma que contiene alguna disposición referida al PCI en Mendoza es el Decreto reglamentario 1.882/2009 que, en sus disposiciones específicas sobre el tema, no hace mención alguna a la mecánica o al procedimiento de la declaratoria ni, muchos menos, a las consecuencias de esa declaración, como sí lo hace tanto el decreto como la Ley 6.034 respecto al patrimonio material.

Analizando lo normado respecto al patrimonio cultural material, se debe ver qué establece la Ley 6.034 en relación al tema. El art. 3 de esa norma dice que se consideran integrantes del patrimonio cultural de la Provincia a todos aquellos bienes trascendentes que material y/o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que significan o pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren en el territorio de la Provincia, o ingresen a él, cualquiera fuere su propietario, *luego de su declaración como tales por la autoridad de aplicación*. Como se vio, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Cultura de la Provincia y, específicamente dentro de ella, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos.

A su vez, en el capítulo V (arts. 12 a 16) de la Ley 6.034 se crea el Consejo Provincial del Patrimonio Cultural como órgano asesor del Poder Ejecutivo Provincial. Dentro de sus funciones, el art. 15 inc. a menciona la de emitir dictamen, *en todos los casos*, sobre las solicitudes de registro de bienes del patrimonio cultural de Mendoza, enunciando los requisitos de tales solicitudes. Aquí la norma equivoca el término al referirse a las solicitudes de registro cuando, en realidad debe referirse a las solicitudes de declaración. Esto es así porque lo que se registran, conforme al art. 10, son los bienes patrimoniales que, para ello, deben contar con una declaración. Es decir, que no tiene sentido que el Consejo emita dictamen sobre una solicitud de registro de un bien ya declarado, sobre todo porque en el art. 15 se establecen los requisitos que debe contar esa solicitud y, claramente, se refieren a los objetos materiales cuya declaración como patrimonio se pretende.

Por lo expuesto, según surge de la interpretación e integración de la norma, vale concluir lo siguiente: Como la Ley 6.034 se refiere únicamente a los elementos materiales del patrimonio, para que un objeto material integre el patrimonio cultural de la Provincia, debe ser declarado como tal por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, por la Secretaría de Cultura y, en última instancia como órgano jerárquicamente superior, por el Gobernador de la Provincia mediante decreto, previo dictamen del Consejo Provincial del Patrimonio Cultural. Luego de la declaración, debe registrarse en el Registro de los bienes del patrimonio cultural de la provincia de Mendoza. A pesar de que la norma marco dispone esta mecánica de patrimonialización, la realidad ha indicado que se ha seguido otro camino:

encontramos declaraciones efectuadas por leyes en sentido formal, tal como se analiza más adelante.

Si este es el mecanismo de patrimonialización de los elementos materiales, ¿cuál es el de patrimonialización de las manifestaciones inmateriales? La Ley 6.034, al referirse al patrimonio cultural material, no contiene referencia alguna al tema. Tampoco regula nada al respecto el decreto reglamentario de esa ley. Frente a esta laguna, y teniendo en cuenta que es un claro principio de interpretación que el operador jurídico debe tratar de preservar la ley y no de destruirla[345], debe aplicarse lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación que, si bien referidos a los casos del propio código, pueden aplicarse analógicamente al supuesto referido. Ellos establecen que los casos deben resolverse según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, teniendo en cuenta a tales efectos la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes en los casos que, como el presente, no están reglados legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Respecto a la interpretación de la ley, la misma debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Así, se entiende entonces que, aunque la Ley 6.034 no se refiere explícitamente al PCI, el decreto reglamentario de la misma sí lo hace. Por ello, y al no regular el mecanismo de declaración, se debe recurrir a lo normado sobre bienes materiales por la ley reglamentada como norma análoga al tema e integrar de esa manera el ordenamiento del patrimonio cultural mendocino, haciendo de esta manera un procedimiento de autointegración[346].

Por esto, para que una manifestación inmaterial integre el patrimonio cultural de la Provincia, rige el régimen del patrimonio cultural material en cuanto sea aplicable: debe ser declarado como tal por la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, por la Secretaría de Cultura y, en última instancia como órgano jerárquicamente superior, por el Gobernador de la Provincia mediante decreto, previo

---

[345] Lorenzetti, Ricardo Luis (director), *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, 1° ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014, T. I, pág. 27.

[346] Bidart Campos, Germán J., *Manual de Derecho Constitucional Argentino*, 2° ed., EDIAR, 1981, pág. 52.

dictamen del Consejo Provincial del Patrimonio Cultural, sin que en este caso sea aplicable los requisitos exigidos para las solicitudes de declaración de aquellos bienes, pero requiriendo la participación de las comunidades interesadas.

Debe entenderse que esta es una interpretación tendiente a la integración del propio ordenamiento jurídico y, en última instancia, favorable a la salvaguardia del PCI. No obstante, la falta de regulación de la norma en lo relativo al tema, ha hecho que en Mendoza las declaraciones de manifestaciones como PCI se hayan realizado de otra manera: La Ley 6.806 que adhirió a la Ley 24.684 que declaró al tango como patrimonio cultural de la Nación en todas sus manifestaciones artísticas tales como su música, letra, danza y representaciones plásticas alusivas; la Fiesta de la Vendimia fue declarada patrimonio cultural de la Provincia por Ley 6.973 del año 2002; y la Ley 7.589 que declaró como patrimonio cultural a la tonada cuyana en todas sus manifestaciones artísticas (música, letra y otras representaciones de otras disciplinas que propendan a la difusión, investigación y promoción de la misma). Ninguna de ellas contó con dictamen del Consejo Provincial del Patrimonio Cultural, como así tampoco establecieron mecanismos de salvaguardia.

vi. ¿Se aplica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Mendoza?

Vale recordar que la Ley 26.118 fue la que adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003 y, por lo tanto, la hizo parte del derecho argentino. No obstante, la propia Convención en su art. 35 dispone que en los Estados Partes que tengan un régimen constitucional federal, el gobierno federal comunicará sus disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de las provincias para que éstas las aprueben.

Si bien como principio las previsiones de los tratados internacionales rigen sin ningún tipo de restricción una vez que son aprobados por el Congreso, la técnica y contenido de esta Convención hace que deba considerarse la misma como una regulación internacional que obliga a la República Argentina en aspectos que hacen a la jurisdicción federal, pero en los que dependen de la jurisdicción local es necesaria la aceptación o adhesión por tal jurisdicción.

Mendoza no ha adherido ni aprobado en forma explícita esta norma y, por esto, llama la atención lo expresado en el art. 7 del Decreto reglamentario 1.882/2009

que dice que la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos es la autoridad de aplicación de esa ley. ¿Qué efecto produce esta disposición entonces? Ninguna. Se trata de otra desinteligencia normativa, especialmente porque una norma reglamentaria no puede adherir a la legislación nacional que aprueba la Convención, sino que es necesaria la intervención de la Legislatura. Debe haberse previsto la adhesión en algún momento, pero nunca se llevó a cabo, por lo que en Mendoza no es aplicable la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en aquellos aspectos que no son de jurisdicción federal, dado que -como el mismo instrumento lo ordena- no ha sido aprobado por la Provincia.

vii. Efectos de la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales de la cultura.

Como se ha dicho, la Ley 6.034 se refiere únicamente al patrimonio cultural material de Mendoza y allí contiene toda su regulación. Lo propio hace el Decreto 1.882/2009 que principalmente reglamenta aquella. Estas normas contienen todo el régimen jurídico de regulación y, por ello, se sabe qué efectos produce la patrimonialización de los objetos culturales materiales en Mendoza. ¿Se puede decir lo mismo sobre el patrimonio cultural inmaterial?

Ya se analizó supra cómo puede darse el mecanismo de patrimonialización de las manifestaciones inmateriales y también que ninguna de las dos normas contiene regulación alguna sobre los efectos que tal incorporación produce. ¿Cómo saber entonces cuáles son los efectos de esa patrimonialización? Al igual que con el mecanismo de declaración, se deben ir haciendo procesos de autointegración y heterointegración conforme se irá desarrollando a continuación.

Si bien se refiere a los bienes materiales, el art. 10 de la Ley 6.034 creó un registro donde deben inscribirse todos los bienes integrantes del patrimonio cultural. Esta norma puede integrarse al régimen del PCI, por lo que a partir de su declaración, las manifestaciones inmateriales deben registrarse para que, en consonancia con lo dispuesto por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y lo dispuesto por el art. 24 inc. a del anexo del Decreto 1.882/2009, puedan identificarse y definirse los distintos elementos del PCI presentes en el territorio provincial, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Por supuesto que esto hace que la autoridad de

aplicación deba llevar a cabo las funciones que el propio decreto le otorga con respecto al PCI ya vistas.

Por otro lado, como consecuencia de la declaración patrimonial, se le aplica al patrimonio en sus ámbitos material e inmaterial las disposiciones contenidas en el régimen general de tutela ambiental, lo que incluye la obligación genérica de preservar y el deber de las autoridades de proveer a su tutela, así como la obligación prioritaria de recomposición. En el derecho mendocino, la Ley 5.961 ha desarrollado procedimientos para la prevención y recomposición correspondiente en tal materia.

- **Ley 5.961 de Preservación del Medio Ambiente.**

Esta ley fue sancionada el 26 de agosto de 1992 y publicada en el boletín oficial el 25 de febrero de 1993. Tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público (art. 1), entendiendo por ambiente, entorno o medio al conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados (art. 4 inc. a).

Dentro de sus normas se protege a los recursos culturales patrimonializados en tanto integrantes del ambiente o entorno.

i. Principios de política ambiental.

Tal como dice Rodríguez Salas, esta ley contiene principios de política ambiental que se imponen al Poder Ejecutivo y a los municipios[347] y que, relacionados con el patrimonio cultural, son los siguientes:

i).- El uso y aprovechamiento del ambiente debe ser realizado de forma tal de no producir consecuencias dañosas para las generaciones presentes y futuras;

ii).- El ordenamiento normativo provincial y municipal y los actos administrativos deberán ser aplicados con criterio ambientalista;

[347] Rodríguez Salas, Aldo, *El derecho ambiental en Mendoza. Evolución y perspectiva de un paradigma*. Revista del Foro, Suplemento Ambiental, N° 111, págs. 91 y ss.

iii).- Los organismos públicos deberán utilizar un enfoque científico inter y multidisciplinario al desarrollar actividades que, directa o indirectamente, puedan impactar al medio ambiente;

iv).- Los habitantes de Mendoza tienen derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

ii. La defensa jurisdiccional del patrimonio cultural.

La Ley 5.961 se aplica para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos y los derechos colectivos, brindando protección a esos fines al medio ambiente, a la conservación del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos; y a cualquier otro bien que responda en forma idéntica a necesidades comunes de grupos humanos a fin de salvaguardarla calidad de la vida social (art. 16). Puede verse así que el PCI encuentra protección jurisdiccional implícita dentro de estas normas.

Cuando por causa de hechos u omisiones se generare lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos y derechos colectivos que produzca o pueda producir desequilibrios ecológicos o de la sustentabilidad ambiental o afecten valores estéticos, urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos u otros bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de las personas, pueden ejercerse ante los tribunales correspondientes dos acciones:

i).- la acción de protección para la prevención de un daño grave e inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse;

ii).- la acción de reparación de los daños colectivos para la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, teniendo lugar siempre que sea posible reparar en especie al menoscabo. En particular, consistirá en la adopción de las medidas idóneas para recomponer el equilibrio de los valores ecológicos y otros bienes comunes a la colectividad perjudicada.

Sin perjuicio de ello, las acciones de protección de los intereses difusos y derechos colectivos procederán, en particular, a los fines de paralizar los procesos de emanación o desechos de elementos contaminantes del medio o cualesquiera otras consecuencias de un hecho, acto u omisión que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen valores estéticos, históricos, artísticos,

arqueológicos, paisajísticos y otros bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de grupos o categorías de personas.

Si bien la ley legitima para interponer estas acciones a las autoridades provinciales o municipales, en especial el Fiscal de Estado, y las agrupaciones privadas legalmente reconocidas, constituidas para la defensa de los intereses colectivos, con una antigüedad no menor de un año y adecuadamente representativas del grupo o categorías de interesados, debe incorporarse como legitimados al Defensor del Pueblo y al afectado (art. 43 de la Const. Nac.).

Esto último, en cuanto como Rodríguez Salas aclara, debe tenerse presente en la aplicación de estas normas que las mismas son anteriores a la reforma de la Constitución Nacional, por lo que deberán integrarse con los requisitos constitucionales del amparo colectivo (art. 43 de la Constitución Nacional)[348]. Este artículo textualmente expresa que

> *"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley [...].*
>
> *Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización [...]".*

iii. El patrimonio cultural y la evaluación de impacto ambiental en Mendoza.

¿La Evaluación de Impacto Ambiental regulada en la legislación ambiental mendocina alcanza al patrimonio cultural?

[348] Rodríguez Salas, Aldo, *op. cit.*

Conviene empezar por definir la evaluación de impacto ambiental. Se trata de un procedimiento jurídico administrativo cuyo objeto consiste en identificar, predecir e interpretar los impactos ambientales de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente, a los efectos de su aceptación, modificación o rechazo por parte de la autoridad de aplicación[349]. Específicamente, la Ley 5.961 no habla de ambiente en general si no que se refiere puntualmente a las consecuencias o efectos que las acciones o proyectos puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia de Mendoza (art. 26).

Esta ley contempla que todos los proyectos públicos o privados de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deben obtener una declaración de impacto ambiental, expedida por la autoridad ambiental provincial o por las municipalidades de la provincia, quienes son la autoridad de aplicación de esa ley, según la categorización de los proyectos que establezca la reglamentación y el Anexo I de la ley (art. 27). Cabe destacar que la declaración de impacto ambiental es un acto administrativo de la autoridad ambiental provincial o municipal, según corresponda, que a partir de la consideración de los antecedentes producidos durante el procedimiento puede resolver en tres sentidos: a).- autorizar la realización del proyecto tal como fue presentado; b).- autorizarlo pero condicionado al cumplimiento de las instrucciones que se establezcan como resultado de las observaciones técnicas y de las consultas públicas; c).- negar la autorización para que se ejecute el proyecto[350], conforme lo establece el art. 36.

Como puede verse, la norma está orientada a la protección de los recursos naturales pero siguiendo la redacción del art. 27, nada obsta a que pueda aplicarse a la protección de los recursos culturales tanto materiales como inmateriales, ya que ellos quedan implicados en la noción de ambiente tal como se ha sostenido a lo largo del presente trabajo. Esto es así porque aunque la normativa que regula la protección del patrimonio cultural analizada no contempla ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, en principio resultaría exigible en materia de recursos culturales

[349] Cámara Argentina de Pescadores de Monte Hermoso y otro vs. Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s. Acción de amparo - Recurso de inaplicabilidad de ley /// SCJ, Buenos Aires; 03/10/2012; Rubinzal Online; Ac. 71421; RC J 9173/12

[350] Rodríguez Salas, Aldo, *El derecho ambiental en la provincia de Mendoza*, en Revista de Derecho Ambiental, T. 2010-I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, págs. 251/252.

materiales e inmateriales por resultar una especie dentro del género regido por el derecho ambiental.

No obstante, se entiende que si bien en tales procedimientos de evaluación ambiental la declaración de impacto ambiental debe ser expedida por la autoridad ambiental con competencia sobre los mismos, ello debe ser previa sustanciación a través de la autoridad de aplicación de la Ley 6.034 de los dictámenes previstos en esta última norma[351].

Vale recordar que, aunque referidas a los bienes culturales materiales, la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro establece como principios generales que debería tenerse en cuenta la importancia relativa de los bienes culturales de que se trate al determinar las medidas necesarias para conservar el conjunto de un lugar arqueológico, de un monumento o de otros tipos de bienes culturales inmuebles contra las consecuencias de obras públicas o privadas; y para salvar los bienes culturales cuando la zona en que están situados haya de ser transformada para la ejecución de obras públicas o privadas y cuando tales bienes o parte de ellos hayan de ser conservados y trasladados. También que las disposiciones encaminadas a conservar o salvar los bienes culturales deberían ser preventivas y correctivas con la finalidad de proteger o salvar los bienes culturales puestos en peligro por obras públicas o privadas que puedan deteriorarlos o destruirlos.

Otro tema fundamental que la Ley 5.961 contempla es la participación ciudadana en la toma de decisiones referidas al ambiente a través de una figura central: La audiencia pública. Establece que la autoridad ambiental o el municipio correspondiente deben convocar a audiencia pública a las personas de cualquier tipo potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación de los valores ambientales que la ley protege (art. 31). La finalidad de este procedimiento es la participación de todo aquel habitante que quiere hacer valer su opinión frente a la autoridad convocante. Esto responde a lo establecido por la ley de presupuestos mínimos de protección

[351] El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental regulado en la Ley 5961 y sus reglamentos contemplan la necesaria solicitud de Dictámenes sectoriales a los organismos con competencias conexas al tema en estudio. La técnica regulatoria reciente ha estipulado el dictamen necesario de ciertos organismos específicos en el trámite de EIA, lo que potencia el debate participativo, la transparencia y la diversidad en la opinión independiente para la conformación técnica de la voluntad administrativa (conf. Pinto, Mauricio, "Instituciones de gestión de calidad del agua en Argentina, en Guevara Gil, A., Obando Licera, W. y Segura Urrunaga, F., La gestión de la calidad del agua en el Perú, PUCP: Lima, 2019, p. 101).

ambiental 25.675 en su art. 19 referente a que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general, debiendo las autoridades institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente (art. 20).

Asimismo, la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (art. 21), siendo esta instancia de participación obligatoria y no facultativa[352].

Como corolario de lo hasta aquí analizado, debe tenerse en cuenta que jurídicamente la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento cuyo producto final es la declaración de impacto ambiental, la cual es un acto administrativo que encierra complejidad y cuyo objeto es determinar, mediante un procedimiento específico, la viabilidad ambiental de un proyecto público o privado[353], por lo que la falta de evaluación de impacto ambiental quebranta la juridicidad urbano-ambiental, afectando a los ciudadanos, por privarlos de un instrumento esencial para que hagan valer sus derechos a gozar de un ambiente sano[354].

Por esto, la Ley 5.961 establece la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Así, se desprende la exigencia de la audiencia pública con carácter general y obligatorio para todas las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que puedan producir un impacto ambiental de relevante efecto, dentro de los cuales se encuentra, sin lugar a duda, al patrimonio cultural. Así, la protección y salvaguardia del patrimonio cultural

---

[352] Falbo, Aníbal José, *El procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la participación del público*, Revista de Derecho de Daños, T. 2008 3 Daño ambiental, RC D 1967/2012.

[353] Departamento General de Irrigación vs. Municipalidad de Godoy Cruz (Mendoza) s. Conflicto de competencia /// SCJ, Mendoza; 04/11/2009; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Mendoza; 89169; RC J 28/11.

[354] Dougherty, Cristian y otros vs. Municipalidad de La Plata s. Amparo /// SCJ, Buenos Aires; 31/03/2004; Rubinzal Online; 64464; RC J 1706/04.

tanto material como inmaterial no puede ser completa si no queda alcanzada por la evaluación de impacto ambiental de toda acción o proyecto que los pueda afectar.

iv. Educación ambiental.

Los fines de la educación ambiental referidos al patrimonio cultural –que no se enuncia como tal-, obligatoria y sistemática en todos los niveles de educación provincial, son, entre otros la formación de ciudadanos conscientes e integrados al medio ambiente total y sus problemas asociados, mediante la enseñanza y aplicación de los conocimientos adquiridos, la concientización de actitudes, motivaciones y compromiso y el fomento de las aptitudes para trabajar en forma individual y/o colectiva para la solución de los problemas actuales y la prevención de los futuros; lograr en el educando una clara percepción de lo que es el medio ambiente, considerado globalmente, y de la estrecha y permanente interdependencia entre sus dos conjuntos básicos: el medio natural y el medio cultural; la captación de los problemas ambientales provocados por causas naturales o derivadas de las actividades humanas; y la asunción de las responsabilidades relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente.

- **Ley 6.045 de Protección de Áreas Naturales provinciales.**

Resulta necesario mencionar esta ley por la importancia de las áreas naturales y sus recursos en el desarrollo cultural de las comunidades.

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que rigen las áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres (art. 1) que constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio-económica, por lo que se declara de interés público su conservación (art. 3). Dos de sus finalidades son las de instituir el funcionamiento organizado de un sistema de áreas naturales provinciales que, comprendiendo el conjunto de ambientes naturales con valores notables, de excepción y significación ecológica existentes en el territorio de la provincia de Mendoza, en beneficio de la población y de las futuras generaciones, se declaren comprendidos por las disposiciones de la presente legislación; y establecer los regímenes de conservación de dichos ambientes y sus recursos, para contribuir al

desarrollo social, económico y espiritual de la vida humana con ellos relacionada (art. 2 incs. b y c).

La propia ley establece como uno de sus objetivos generales el de conservar determinados ambientes naturales sometidos a diversos grados de transformación por el hombre, áreas con valores culturales y naturales asociados, o ciertas estructuras artificiales, por su interés agrario, científico turístico, antropológico o histórico (art. 5 inc. g). Entiende por conservación la sabia administración y uso de los ambientes silvestres, recursos naturales y fuentes productivas, sobre bases científicas y técnicas dirigidas a lograr su estabilidad, permanencia, productividad y rendimiento sostenido, a través de su estricta protección, manejo preservacionista y diversas modalidades de aprovechamiento (art. 6 inc. a).

Esta conservación de áreas naturales involucra a todo el conjunto de sus ambientes y recursos, particularmente flora y fauna silvestre, rasgos fisiográficos, bellezas escénicas -y en su caso, los reservorios culturales, históricos y arqueológicos- propendiendo a perpetuarlos sin detrimento y estableciendo un uso que respete su integridad (art. 7).

En las áreas naturales constituidas de conformidad a esta ley, se permiten y promueven, entre otras, las actividades de investigación que conducen al conocimiento de sistemas naturales y de aspectos culturales, en su caso, para aplicarlos al manejo y uso de los valores naturales e históricos de la región; y las orientadas a enseñar lo relativo al manejo, utilización y aprovechamiento de los elementos y características existentes en los ambientes naturales, y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas naturales e históricas y valores propios de una región o territorio y la necesidad de conservarlos (art. 17 incs. a y b).

Hace una clasificación de los ambientes naturales en distintas categorías basadas en la efectuada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): categoría 1: reserva científica o reserva natural estricta; categoría 2: parque nacional o provincial; categoría 3: monumento natural; categoría 4: reserva natural manejada o santuario de flora y fauna; categoría 5: reserva de paisaje protegido; categoría 6: reserva de recursos; categoría 7: reserva natural-cultural; categoría 8: reserva de uso múltiple; categoría 9: reserva de biosfera; categoría 10: sitio de patrimonio mundial (natural); categoría 11: vías panorámicas; categoría 12: reservas hídricas naturales; y categoría 13: reservas recreativas naturales (art. 20).

De esta clasificación y categorización, en lo que hace al objeto del presente trabajo, cabe destacar la quinta categoría (reserva de paisaje protegido), la séptima categoría (reserva natural-cultural) y la décimo primera categoría (vías panorámicas).

Respecto a la primera de ellas, el carácter de las zonas que forman parte de esta categoría es muy diverso debido a la gran variedad de paisajes seminaturales y culturales existentes en nuestro país, dignos de ser preservados en su condición tradicional o actual. Se pueden diferenciar dos tipos de áreas dentro de esta categoría: a) zonas aprovechadas por el hombre de manera intensiva para esparcimiento y turismo. Aquí se incluirán zonas naturales o modificadas, situadas a lo largo de zonas lacustres o fluviales, de rutas, en zonas de montañas o periurbanas, que presenten panoramas atractivos, siempre que no sean netamente urbanas; y b) paisajes que por ser el resultado de la interacción entre el hombre y la naturaleza, reflejan manifestaciones culturales especificas (costumbres, técnicas de uso y manejo de la tierra, organización social, infraestructura o construcciones típicas). Dadas las características de estas áreas, los esfuerzos deben estar dirigidos a mantener la calidad del paisaje mediante prácticas de ordenamiento adecuadas (art. 33).

La reserva natural-cultural incluye aquellas áreas naturales en las que se encuentran comunidades aborígenes interesadas en preservar sus propias pautas culturales, las tierras y recursos vivos que poseen. En ellas hay una estrecha dependencia del hombre con respecto al medio natural, ya sea en cuanto a su alimentación, abrigo u otras necesidades materiales para su subsistencia (art. 35).

Por último, la vía panorámica son las áreas lineales que corren a lo largo y a los costados de caminos, carreteras, rutas, senderos, canales o ríos, que por su alto valor escénico, cultural, recreativo o de los forestales que la integran, merecen ser protegidas para fines recreativos, de educación ambiental y preservación (art. 39).

- **Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial.**

A continuación se analizarán las disposiciones contenidas en esta norma referidas al patrimonio cultural. En primer lugar, vale decir que esta ley fue sancionada en el año 2009, es complementaria de la Ley 5.961 y estableció como uno de sus fines el de asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza, en congruencia con los principios de equidad social y equilibrio territorial tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sustentable (art. 1 inc. a).

Define al ordenamiento territorial como la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ambiental e instrumento de planificación y gestión. Es de carácter transversal y afecta las normas de carácter básico o general y todas aquellas que tienen que ver con el funcionamiento y administración del territorio, siendo sus principios básicos la coordinación y subordinación de las políticas sectoriales, destinada a configurar, en el corto, mediano y largo plazo la organización y uso del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y necesidades de la población y los objetivos de desarrollo sustentables, como principio rector.

Se concibe como un procedimiento administrativo y un proceso continuo y permanente que sirve de base a las decisiones del sector público, del sector privado y de la comunidad en general, con el objeto de lograr metas y fines predefinidos, facilitar el control de las acciones y redireccionar el proceso de desarrollo territorial cuando así convenga. Se concreta con una visión integradora, en concordancia con las estrategias de desarrollo que se definan tanto en lo referente a los aspectos económicos, sociales como ambientales, para lograr el desarrollo sustentable.

El proceso de ordenamiento territorial se lleva a cabo en el contexto de la participación social, como un medio para garantizar la satisfacción de las necesidades, intereses y demandas de la comunidad en su conjunto y crear conciencia de la responsabilidad social frente al desarrollo y la preservación del territorio. Por su parte, conceptualiza al ambiente como el conjunto de elementos naturales y antrópicos que interactúan sistémicamente en un tiempo y territorio determinado.

En ese contexto esta ley tiene como uno de sus objetivos generales conciliar el desarrollo económico y social, actual y futuro, con la conservación del ambiente fortaleciendo la organización territorial; propiciando la reducción de la vulnerabilidad ante peligros naturales, ambientales y tecnológicos tanto en los oasis como en las zonas no irrigadas, preservando el patrimonio y la diversidad natural, histórica y cultural (art. 3 inc. c), y como dos de sus objetivos específicos el de prevenir y controlar los impactos producidos por el efecto invernadero, los cambios climáticos y el incremento de las situaciones de riesgos por causas naturales y antrópicas, que ponen en peligro a la población y sus bienes; aumentar, conservar, mantener, y proteger las áreas, espacios o sitios considerados de valor ambiental, histórico, cultural, paisajístico, productivo o de recreación, a los fines de lograr el uso racional armónico y equilibrado de los mismos; y reconocer el valor patrimonial,

económico, ambiental y paisajístico de los entornos rurales locales, fundamentalmente los amenazados o vulnerables por su proximidad geográfica a centros urbanos en expansión y que por su especificidad ambiental, no son reproducibles en otras áreas (art. 4 incs. c, d, i).

Respecto a la participación de la comunidad en el ámbito de aplicación de la ley, la propia norma establece la consulta pública (art. 44) y las audiencias públicas (art. 48). ¿Qué entiende la ley por participación? Interactuar o ser partícipe responsable en determinada actividad con el fin de construir y sostener el bien común, en forma pro-activa, a través del aporte de información, colaboración en la toma de decisiones y recursos que permitan la identificación, la ejecución y el control de acciones y proyectos de interés público.

La primera de aquellas tiene por objeto garantizar la participación y el derecho a la información mediante un procedimiento que contribuya a la toma de decisiones por parte de la autoridad de aplicación. Pueden participar en el procedimiento toda persona humana o jurídica, privada o pública que invoque un interés legítimo o derecho subjetivo, simple o difuso, las organizaciones de la sociedad civil cuya tarea guarde relación con la temática a tratar, reconocidas por la autoridad administrativa correspondiente, organismos o autoridades públicas nacionales, provinciales o municipales, y todos los organismos de protección de intereses difusos.

Respecto a las segundas, la norma establece que se deben celebrar con un plazo mínimo de diez (10) días hábiles posteriores a la finalización de la consulta pública y en forma previa a resolver sobre temas que, por su significación y evaluación, tengan trascendencia permanente y general para la población de la Provincia o del lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto.

El régimen de las audiencias públicas establecido para el ordenamiento territorial complementa pero no reemplaza el régimen de audiencias para la evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley 5.961, a fin de otorgar celeridad, eficacia y eficiencia a los procedimientos.

- **Manifestaciones concretas de PCI en Mendoza.**

Si bien no ha sido incluida en el relevamiento de manifestaciones del PCI que ha efectuado la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, Mendoza cuenta con un PCI declarado y otro en vías de declaración.

i. Tango.

Fue declarado como integrante del PCI mediante Ley 6.806[355] que adhirió a la Ley 24.684 que declaró al tango como patrimonio cultural de la Nación en todas sus manifestaciones artísticas tales como su música, letra, danza y representaciones plásticas alusivas.

ii. Fiesta Nacional de la Vendimia.

Se trata de un homenaje a la vitivinicultura de Mendoza y nació oficialmente en 1936 y a lo largo de los años se ha convertido en un fenómeno cultural con creciente convocatoria e indiscutido atractivo turístico internacional. A lo largo de su historia la Vendimia continúa evolucionando y suma capítulos y actividades paralelas. No obstante, año a año se repiten gestos, sonidos, frases, acciones, episodios y presencias. Estas manifestaciones ya se han vuelto costumbre, algo así como rasgos propios y únicos que le dan personalidad y configuran la identidad de la fiesta, conformando parte del patrimonio intangible de los mendocinos[356].

No solo comprende el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia (desarrollado en marzo) sino que en los meses previos se festejan las fiestas departamentales con la elección de las reinas departamentales de la Vendimia que luego compiten por la corona nacional.

Esta Fiesta de la Vendimia fue declarada patrimonio cultural de la Provincia por Ley 6.973 del año 2002[357], comprendiendo a su vez todas las manifestaciones: Fiestas tradicionales barriales, distritales, departamentales, bendición de los frutos, carrousel, vía blanca de las reinas y acto central. Cabe destacar que el carácter de

[355] Sancionada el 26 de julio de 2000 y publicada en el boletín oficial el 25 de agosto de ese año.

[356] Sevilla, Ariel y Sevilla, Fabián, *La vendimia para ver: 1936-2016*, 1ra. ed., Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 2017, págs. 8 y 182.

[357] Esta declaración es anterior a la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

nacional se dio en el año 1972 a través de la Resolución 137/72 del 28 de diciembre de ese año emanada por la Secretaría de Turismo de la Nación, declarando que a partir del año siguiente sería nacional[358].

iii. Tonada cuyana.

Fue declarada integrante del patrimonio cultural de Mendoza mediante Ley 7.589[359] en todas sus manifestaciones artísticas (música, letra y otras representaciones de otras disciplinas que propendan a la difusión, investigación y promoción de la misma). Igualmente toda documentación, objeto y lugares que guarden relación específica con sus expresiones. Asimismo, la edición literaria, musical o audiovisual, cualquiera sea su soporte técnico.

iv. Festa in Piazza.

Fue declarada integrante del PCI de la Provincia de Mendoza mediante ley 9.306 (de marzo de 2021). Se trata de una fiesta celebrada por la colectividad italiana en la plaza Italia de la Ciudad de Mendoza en la cual hay espectáculos artísticos y puestos gastronómicos representativos de las distintas regiones italianas.

v. Otras manifestaciones en carpeta.

Existen otras manifestaciones que buscan ser incluidas dentro del PCI de la Provincia. Entre ellas se encuentra a la librería Gildo D'Accurzio[360]; a la gran fogata de San Pedro y San Pablo del distrito de Fray Luis Beltrán en Maipú[361]; al Cuerpo Consular de Mendoza[362]; a la banda municipal de música Blas Blotta del

---

[358] Sevilla, Ariel y Sevilla, Fabián, *op. cit.*, pág. 92.

[359] Sancionada el 20 de setiembre de 2006 y publicada en el boletín oficial el 24 de octubre de ese año.

[360] Proyecto de ley presentado por la diputada provincial Analía Jaime el 10 de abril de 2018.

[361] Proyecto de ley presentado por los diputados provinciales Emiliano Campos y Gladys Sánchez el 21 de febrero de 2017.

[362] Proyecto de declaración presentado por el diputado provincial Néstor Parés el 28 de octubre de 2016 y sancionada como Resolución 1046 del 02 de noviembre del mismo año.

departamento de Rivadavia[363]; a la banda militar de música Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11[364]; a las bandas de música Cabo 1° Gustavo Ramet de la Policía de Mendoza y Felipe Rodríguez Servín de la Policía de Mendoza regional sur[365] y a la celebración de la fiesta del parlamento sanmartiniano[366].

vi. Alcances de las declaraciones.

Como puede apreciarse, hay manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural de Mendoza, ya que han sido declaradas como tal. Pero en estos casos cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿qué autoridad las declaró? y ¿qué alcances tienen esas declaraciones?

Al respecto del primer interrogante, sencillamente puede contestarse que han sido declaradas integrantes del PCI de Mendoza por ley formal de la Legislatura provincial y, los proyectos, también están dentro del ámbito del Poder Legislativo. Ya se ha visto que la única norma que contiene alguna disposición referida al PCI en Mendoza es el Decreto 1.882/2009 que, en sus disposiciones específicas sobre el tema, no hace mención alguna a la mecánica de la declaratoria ni, muchos menos, a las consecuencias de esa declaración, como sí lo hace tanto el decreto reglamentario como la Ley 6.034 respecto al patrimonio material.

Al no contar con normativa específica, estas manifestaciones no se han hecho conforme lo establecido por ley de patrimonio cultural material sino que se han hecho mediante ley. ¿Son válidas esas declaraciones? Se considera que sí, no solo porque es obvio que la Legislatura puede legislar con posterioridad al régimen previsto en la norma ya dictada, sino porque además la falta de regulación provoca una laguna que necesariamente debe completarse con los usos y costumbres: de los casos analizados, la práctica indica que las declaraciones suelen hacerse con mucha frecuencia mediante una ley formal, siendo innegable la legitimidad democrática de

[363] Proyecto de ley presentado por los diputados provinciales Liliana Pérez, Jorge Sosa y Ricardo Mansur el día 28 de setiembre de 2016 y que tuvo media sanción de la Honorable Cámara de Diputados el 17 de mayo de 2017.

[364] Proyecto de ley presentado por el diputado provincial Daniel Rueda el 09 de setiembre de 2016 y que obtuvo media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza el 17 de mayo de 2017.

[365] Proyecto de ley presentado por la diputada provincial María José Sanz el 18 de agosto de 2016 y que obtuvo media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza el 05 de octubre de 2016.

[366] Proyecto de ley presentado por el senador provincial Ernesto Mancinelli el 02 de agosto de 2017.

la autoridad legislativa para expedirse en la materia. Es imperiosa la necesidad, sin embargo, de regular el tema para poder contar con normativa eficaz de protección y que no se quede en meras fórmulas declarativas, o de difícil implementación procedimental –como es el trámite de ley-.

Contestado el segundo interrogante, corresponde analizar cuál es el alcance de las declaraciones mencionadas.

La Ley 6.806 (que declara al tango como patrimonio inmaterial) es una norma de dos artículos: en el primero estableció la adhesión de Mendoza a las disposiciones de la Ley nacional 24.684, proclamando al tango como patrimonio cultural. El segundo es de forma. A su vez, la ley nacional declaró como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación a la música típica denominada tango, comprendiendo a todas sus manifestaciones artísticas, tales como su música, letra, danza y representaciones plásticas alusivas.

También declaró en su segundo artículo de interés nacional las actividades que tengan por finalidad directa la promoción y difusión del tango, entendiéndose comprendidas entre ellas las siguientes: los estudios e investigaciones artísticas, científicas o históricas; la enseñanza y divulgación; la conservación de documentos, objetos, lugares y monumentos que guarden relación significativa con sus expresiones y con sus más destacados creadores e intérpretes; la edición literaria, musical o audiovisual, cualquiera sea el soporte técnico de las mismas, de obras artísticas o científicas vinculadas; las exposiciones de artes plásticas; los festivales musicales o espectáculos promocionales; y la construcción de instrumentos musicales característicos. Autorizó también al Poder Ejecutivo nacional para que desgrave o exima de contribuciones impositivas a estas actividades.

En su tercer artículo, exigió a las dependencias del Estado nacional encargadas de la promoción y difusión de la cultura y del turismo en el exterior, incluir en sus programas y material informativo referencias acerca de la República Argentina y al tango como una de las expresiones culturales típicas del país.

Autorizó también al Poder Ejecutivo nacional a establecer un régimen preferencial aduanero a fin de otorgar las máximas facilidades a la circulación y transporte de los instrumentos musicales y equipo de solistas o conjuntos que viajen al exterior para ejecutar programas de tango; y de materiales y publicaciones referidas al tango.

Sin duda, de las leyes provinciales que han patrimonializado expresiones culturales inmateriales esta es la que mayor alcance establece ya que la regulación está contenida en la norma nacional. La ley nacional contó con la participación activa de la Academia Nacional del Tango y, en su momento, el por entonces vicepresidente del organismo, doctor Ricardo Ostuni, destacó lo valioso de la ley porque "no prohíbe nada ni obliga nada. Protege el patrimonio y promociona la difusión". Añadió que esta norma es importante, además, "por cuanto abre la posibilidad de una nueva legislación"[367].

No obstante lo expuesto, y más allá de adherir, la ley provincial podría haber incorporado medidas concretas de fomento y salvaguardia. Se debe reconocer también que la ley es anterior a la Convención del año 2003. Una ley que sirve como ejemplo de las medidas concretas de salvaguardia y que amplía el alcance de la salvaguardia del tango es la Ley 130 de la Ciudad de Buenos Aires, promulgada en 1999. Ella exige que la Ciudad incluya en sus programas y material educativo referencias acerca de la Ciudad de Buenos Aires, el tango y sus manifestaciones artísticas como una de las expresiones culturales identificatorias de la ciudad y el país. Reclama también que el Gobierno de la Ciudad promueva especialmente el valor turístico del tango, diseñando actividades dirigidas a ese mercado y garantizando la intangibilidad del patrimonio cultural del tango, en lo que respecta a emplazamientos arquitectónicos y urbanísticos emblemáticos. Asimismo debe contribuir por los medios apropiados a tareas y actividades tendientes a ambientar espacios públicos de la Ciudad, a fin de plasmar una estética urbana propia a través del imaginario del tango.

También la Ley 130 impone al Gobierno de la Ciudad que resguarde especialmente el patrimonio que representan los instrumentos musicales que pertenecieran a grandes intérpretes del tango, debiendo promover la preservación de bandoneones en la Ciudad y estimular su fabricación local. Asimismo, se le impone al Gobierno la tarea de estimular, promover y difundir las corrientes de vanguardia del tango (música, letra, interpretación y danza) como una manera de asegurar su desarrollo histórico.

[367] https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/el-tango-con-todas-las-de-la-ley-nid173210 [consultado en julio de 2019].

Por otra parte, la misma ley creó la Fiesta Popular del Tango pensada para la exposición, promoción y difusión de todos los productos artísticos, culturales y científicos relativos al género tango[368].

Con respecto a la Fiesta Nacional de la Vendimia, se mencionó que fue declarada PCI de la Provincia mediante Ley 6.973 (2002), norma que lo único que hace es declarar como patrimonio cultural de Mendoza a tal evento en todas sus manifestaciones (fiestas tradicionales barriales, distritales, departamentales, bendición de los frutos, carrousel, vía blanca de las reinas y acto central). No contiene ninguna disposición referida a las medidas de salvaguardia.

A lo largo de los años, y esto también se mencionó, si bien hay manifestaciones que le han ido dando identidad a la celebración y que son indiscutidas (la vía blanca y el carrousel, utilizado también para reclamos sociales, son dos escenas ya clásicas), hay expresiones que se han ido agregando (ceremonias interreligiosas, vendimia para todos -que es la celebración del colectivo homosexual, transgénero, intersexual, bisexual y demás-), y otras que están cuestionándose a partir de otros valores sociales recientes (denominación de "reinas" a las representantes vendimiales de cada uno de los Departamentos, acento católico apostólico romano a la celebración, entre otros). Estas últimas seguramente desaparecerán con el tiempo y la fisonomía de la celebración mutará, cambiando la expresión cultural que hoy refleja esta festividad.

Con relación a la tonada cuyana, que tal como se viera, fue declarada PCI por Ley 7.589, esta ley únicamente dispone como medidas de salvaguardia establece el deber genérico de la Secretaría de Cultura de elaborar programas y acciones que apoyen la promoción y difusión de la tonada en el ámbito provincial, nacional e internacional.

---

[368] Hoy se realiza un evento de categoría internacional: el Tango Buenos Aires que incluye el Festival y en el Mundial de Baile. Miles de bailarines y público de todo el mundo llegan a la Ciudad para participar de las diversas actividades que ofrece esta celebración que tiene ya su fecha consagrada en el mes de agosto. De igual modo, pero con carácter local y dentro del ámbito de las milongas, todos los años se realiza el Campeonato de Baile de la Ciudad, que recorre los barrios porteños y cada noche la competencia se concreta en una milonga distinta. En forma previa al Mundial de Baile también se efectúan preliminares en más de 20 ciudades de Argentina y del exterior. Los campeones resultantes de estas instancias se suman luego a las semifinales y final (como es el caso del Campeonato europeo) del Mundial. Cada vez más actividades y eventos vinculados al Tango robustecen la agenda cultural porteña y enriquecen este bien que resume lo más singular y genuino de las manifestaciones artísticas mostrando los rasgos distintivos de la cultura porteña. Consultado en http://festivales.buenosaires.gob.ar/2018/tangofestivalymundial/es/acerca#acercadeelmundial [consultado: julio de 2019].

c).- Valoración integral del régimen de protección del PCI en Mendoza.

Como corolario de lo hasta aquí dicho, se está en condiciones de afirmar respecto al régimen jurídico del PCI en la provincia de Mendoza que la Constitución provincial a lo largo de su evolución nunca contuvo referencia alguna al patrimonio cultural, a la cultura o al ambiente en general, sin perjuicio de las disposiciones sobre recursos naturales específicos, con la sola excepción de la Constitución de 1949 –vigente hasta 1956- que sí contuvo algunas regulaciones para al desarrollo cultural, aunque sin patrimonialización alguna.

Por su parte, la legislación infraconstitucional mendocina con la Ley 6.034 a la cabeza enrola en la postura de que la declaratoria como bien integrante del patrimonio cultural es constitutiva, es decir, que es a partir de su declaración que un elemento patrimonial adquiere protección, ya que dicha manifestación es la que produce su ingreso al universo patrimonial y el régimen tutelar diferencial que ello implica. No obstante, esta ley contiene graves defectos que afectan negativamente el sistema protectorio del patrimonio cultural material y, mucho más, el de salvaguardia del PCI por lo siguiente: al referirse exclusivamente a bienes con valor documental y cronológico, limita el acervo patrimonial cultural de la Provincia únicamente a los bienes materiales, dejando fuera de su regulación a las manifestaciones intangibles o inmateriales que carecen de materialidad y son expresiones vivas que transmitidas de generación en generación son recreadas constantemente con un sentimiento de identidad y continuidad por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.

No obstante esta deficiencia legal, el Decreto reglamentario de la Ley 6.034, el N° 1.882/2009 aparece como la única norma en Mendoza que contiene alguna disposición referida al PCI, aunque presenta grandes falencias de contenido y técnica regulatoria en cuanto no hace mención alguna a la mecánica de la declaratoria patrimonial ni, muchos menos, a las consecuencias de esa declaración, déficit que no se observa –en cambio- en relación a los bienes materiales regulados por la misma norma.

Esto hace que existan desinteligencias normativas entre el decreto mencionado y la ley reglamentada, de modo que el régimen reglamentario remite a preceptos legales que no guardan relación con dicha materia, situación que puede deberse a que la Ley 6.034 no contiene norma alguna que sea aplicable a la faz

inmaterial del patrimonio cultural, haciendo que el desarrollo reglamentario referido resulte aislado y –por su naturaleza *praeter legem*- sin conexión real con el texto legal.

Por ello, las deficiencias y falencias observadas en la Ley 6.034 y el Decreto reglamentario 1.882/2009 exigen recurrir a una interpretación tendiente a la integración del propio ordenamiento legal y, en última instancia, favorable a la salvaguardia del PCI, mediante procesos de autointegración y heterointegración del régimen jurídico; de modo de cubrir situaciones de anomia sobre aspectos elementales del PCI a partir de lo normado en relación a bienes materiales por la ley reglamentada como norma análoga. Aun así, dicha norma es muy pobre, dejando una laguna referida a la declaración de los mismos, a las medidas de salvaguardia, a los registros e inventarios, al acceso, a la participación de las comunidades, entre otras cuestiones.

Una interpretación que integre el régimen del patrimonio cultural, supliendo lagunas existentes en materia de PCI, permite identificar y definir los distintos elementos del PCI presentes en el territorio provincial, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, dando lugar a la declaración de su patrimonialización y registro, así como a su ulterior tutela, logrando así la autoridad de aplicación llevar a cabo las funciones que el propio decreto le otorga con respecto al PCI.

Este esfuerzo interpretativo es coincidente con las obligaciones legales asumidas por la República Argentina a través de la Ley 26.118 que adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, especialmente la de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del PCI presente en su territorio que en el caso de un país federal como Argentina, la mayoría de las manifestaciones de PCI suceden en ámbitos territoriales de las provincias, tal como se ha visto.

Por su parte, el patrimonio cultural -material e inmaterial- se encuentra sometido a las disposiciones contenidas en la legislación genérica en materia ambiental. A nivel nacional es la Ley 25.675 y a nivel provincial mendocino a la Ley 5.961, y sus regulaciones sobre política y preservación del entorno, tanto a partir de regulaciones administrativas como de procesos judiciales de tutela.

En Mendoza, la Ley 5.961 establece la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a todo emprendimiento público

o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Así, se desprende la exigencia de la audiencia pública con carácter general y obligatorio para todas las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que puedan producir un impacto ambiental de relevante efecto, dentro de los cuales se encuentra, sin lugar a duda, al patrimonio cultural tanto material como inmaterial. En dicho procedimiento, es necesario que la autoridad ambiental satisfaga la participación y coordinación de las autoridades culturales mediante el dictamen correspondiente que satisfaga las previsiones de la Ley 6.034. Esto no sucede en la actualidad, siendo una de las grandes falencias en la materia ambiental.

Por lo aquí expuesto, se comprueba entonces que el régimen jurídico en la Provincia de Mendoza contiene contradicciones y vacíos que hacen que no sea efectivo para la protección del PCI mendocino, ya sea por la forma de la declaración como así también por los efectos que las declaraciones irregularmente formuladas producen ya que ni la norma marco ni las especiales los contemplan.

CONCLUSIONES

Del análisis del trabajo efectuado pueden extraerse las siguientes conclusiones:

PRIMERA

La cultura forma parte del ambiente y se refleja en elementos materiales e inmateriales con capacidad para construir la identidad de una comunidad determinada. Dentro de la cultura, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles o manifestaciones intangibles heterogéneos, generalmente únicos, que una comunidad determinada reconoce como aptos para su identificación a raíz del valor que representan y que se manifiestan y consolidan con el transcurso del tiempo, a partir de su reconocimiento como tal por autoridad competente, sea esta administrativa, legislativa o judicial.

SEGUNDA

El patrimonio cultural presenta una fuerza simbólica que genera gran sentido comunitario de pertenencia, aportando a la cohesión y estabilidad social y a la consecución del desarrollo sostenible. Las prácticas sociales, los rituales y los eventos festivos estructuran la vida de las comunidades y colectivos, y pueden desempeñar un papel fundamental en su tejido social para generar una comunidad inclusiva.

TERCERA

La protección de los bienes que integran el patrimonio cultural de cada comunidad procura asegurar los valores generadores de la identidad social representada en tales bienes, siendo que la desaparición de los mismos implicaría el menoscabo a la cultura de dicha sociedad y, en algunos casos, de todos los pueblos del mundo.

CUARTA

El primer conjunto coherente de normas que sirvió de punto de partida hasta llegar a la normativa vigente sobre patrimonio cultural, fue el de las normas aplicables en caso de conflicto armado surgidas en el Derecho Internacional contemporáneo. Estas regulaciones procuraban evitar la destrucción material e indiscriminada y consolidaron algunos principios generales que trascendieron el ámbito específico de los conflictos armados para ser aplicados igualmente con el fin de proteger los bienes culturales en tiempo de paz como expresión del fenómeno de la cooperación internacional.

QUINTA

En el transcurso del referido proceso de formación de la normativa aplicable en caso de conflicto armado surgió la tendencia progresiva de desvincular el problema de la protección de los bienes culturales de su condición jurídica en función del Derecho interno, teniéndose en cuenta cada vez en menor medida la tradicional división entre propiedad pública y propiedad privada a los efectos de la tutela.

SEXTA

En el marco institucional internacional desarrollado para la protección de los bienes culturales ocupa un lugar central la UNESCO, organización internacional con el mandato general de asegurar la conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural y particular sobre los bienes en concreto otorgado por cada uno de las Convenciones. Esto se ve complementado con la función que cumplen las Organizaciones No Gubernamentales de estudio y promoción de iniciativas que contribuyen a la revalorización y difusión del patrimonio cultural, cooperando estrechamente con la UNESCO.

SÉPTIMA

Dentro del patrimonio cultural, las prácticas consideradas PCI resultan aquellas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. El PCI se caracteriza por ser inevitablemente frágil.

OCTAVA

La elaboración del concepto de patrimonio inmaterial es resultado de una larga evolución que ha partido de la inexistencia de la noción de bienes patrimoniales inmateriales, pasó por la aparición y afianzamiento de la noción de patrimonio de la humanidad, luego enfocó hacia la faz inmaterial de la cultura, virando del folclore al PCI hasta, finalmente, llegar –en el ámbito internacional- al dictado de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y sus normas complementarias. Hasta el momento de su aprobación, no existía en la comunidad internacional un instrumento multilateral de carácter vinculante destinado a salvaguardar el PCI y fue enmarcada en los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos y reconoce la importancia que reviste el PCI como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible.

NOVENA

El PCI es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización y su importancia estriba en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado.

DÉCIMA

Uno de los problemas más evidentes en lo que respecta al PCI se da en el caso de los conflictos o choques culturales provocados por los diferentes factores sociales propios de la humanidad: la migración, la globalización, la propia evolución de las comunidades, los cambios de paradigmas sociales, entre otros. Estos choques culturales tienen como efecto la denominada confluencia cultural y afectan la idiosincrasia de las comunidades, siendo necesario compatibilizar el dinamismo cultural con los valores que necesariamente deben ser preservados.

DECIMAPRIMERA

Más allá del régimen internacional, el dinamismo del PCI hace necesario que el régimen jurídico local establezca mediante una norma explícita qué prácticas proteger y el método o procedimiento para ello, el que debe ser lo más amplio posible; aunque sin exceso en la casuística para evitar que el ordenamiento legal quede obsoleto por la misma evolución dinámica del PCI. En este marco tutelar, debe atenderse que el régimen jurídico internacional rechaza la patrimonialización de conductas que sean contrarias a la noción de derechos humanos y a los valores universalmente aceptados por la comunidad internacional; ello sin perjuicio del resguardo cultural que puedan presentar en la comunidad en que se desarrollen.

DECIMOSEGUNDA

En cada uno de los países de América Latina se observan múltiples experiencias de promoción, salvaguardia, investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial, lo que ha dado lugar a trayectorias nacionales diferenciadas en relación a las políticas estatales de salvaguardia del PCI. En algunos casos, a lo largo de décadas, estas experiencias han conformado tradiciones nacionales de política cultural (como es el caso del Brasil) o estilos de tratamiento vinculados a arraigados esfuerzos de investigación, sistematización y conocimiento del patrimonio (tal como ocurre en Colombia o Perú).

DECIMOTERCERA

Un rasgo general de las regulaciones desarrolladas en los países de la región latinoamericana, es que la mayor parte de los esfuerzos han tenido al patrimonio monumental o material como principal objeto de las tareas de salvaguardia. Sin embargo, aunque sin conformar necesariamente políticas nacionales, se pueden registrar valiosos y pioneros esfuerzos de investigación o sistematización del PCI en sus diversas expresiones (sobre todo música, tradición oral y conocimientos tradicionales).

DECIMOCUARTA

En los distintos países analizados en esta investigación se registra un avance importante hacia la formulación de un cuerpo de legislación específica para el tratamiento del PCI. En algunos casos, la normatividad referida a la protección y puesta en valor de aquel es de rango constitucional, pero en otros casos se han diseñado normas sectoriales que promueven la salvaguardia del PCI por su vinculación con determinados sectores.

DECIMOQUINTA

El impacto en los países latinoamericanos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 ha sido significativo, lo que se avizora por la rapidez del proceso de la ratificación de dicha Convención por parte de los Estados miembros, fortaleciendo trayectorias previas de política estatal referida a la protección del PCI y/o brindando un impulso importante para su consolidación o implementación.

DECIMOSEXTA

Uno de los aspectos más importantes para un diagnóstico de la situación de las políticas nacionales de salvaguardia del PCI y de las perspectivas abiertas a partir de la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 tiene que ver con el componente conceptual de las políticas de salvaguardia. Un avance significativo al respecto ha sido la expansión de la noción de PCI en los regímenes de los diversos países analizados.

DECIMOSÉPTIMA

Si bien la Ley 26.118 adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, la propia Convención en su art. 35 dispone que en los Estados Partes que tengan un régimen constitucional federal, el gobierno federal comunicará sus disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de las provincias para que éstas las aprueben. Mendoza –en

forma similar a las restantes provincias- no ha adherido ni aprobado esta norma, lo que pone en cuestionamiento su eficacia local y el alcance real del art. 7 del Decreto reglamentario 1.882/2009 que dice que la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos es la autoridad de aplicación de esa ley.

DECIMOOCTAVA

A nivel nacional, en la normativa vigente en la República Argentina la esencia de la protección jurídica es el art. 41 de la Constitución Nacional, norma que estipula la garantía del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano sostenible y obliga a las autoridades a proveer este derecho y a la preservación del patrimonio cultural. Esto muestra con claridad cómo la Ley Suprema vincula el patrimonio cultural como parte de un ambiente en el que debe darse un desarrollo sostenible.

DECIMONOVENA

El art. 41 de la Constitución Nacional establece –junto al deber de las autoridades proveer a la preservación del patrimonio cultural- la competencia de dictar normas nacionales que contengan presupuestos mínimos de protección ambiental, las que deben ser complementadas por normas provinciales, sin que aquellas alteren jurisdicciones locales. Sin embargo, en la legislación dictada en consecuencia hay un desequilibrio entre la tutela del patrimonio cultural y la tutela del patrimonio natural, pues a pesar de ser esta última más reciente, su desarrollo ha sido mayor, no existiendo una norma reguladora de la protección cultural en forma sistémica con alcance nacional.

VIGÉSIMA

Aunque existen diversos desarrollos normativos nacionales, los mismos son parciales y con una técnica jurídica confusa en cuanto a su alcance y naturaleza, proponiéndose de *lege ferenda* que las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia cultural contengan, como un piso regulatorio a nivel nacional, algunos institutos imprescindibles: el inventario o registro de bienes culturales; el

establecimiento de terminologías estandarizadas respecto de los bienes regulados; el ordenamiento territorial como herramienta útil para la salvaguarda del PCI -atento a que, en muchos casos, este patrimonio se desarrolla en un lugar o contexto paisajístico determinado-; la evaluación de impacto ambiental; el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas; y por último, la participación ciudadana en la toma de decisiones referidas al ambiente en su aspecto cultural.

VIGESIMOPRIMERA

Las provincias argentinas presentan un régimen local de protección jurídica del patrimonio cultural muy disímil, pero es una constante que se da en todos los casos que esta protección está fuertemente orientada a los elementos materiales del patrimonio cultural, dándose, en muchos de los casos, una inexistencia en normas jurídicas de salvaguardia del PCI.

VIGESIMOSEGUNDA

En la provincia de Mendoza, a diferencia de otras constituciones provinciales, la Carta Magna no contiene norma alguna referida al patrimonio cultural, a la cultura o al ambiente en general (más allá de disposiciones sobre recursos naturales específicos). Tampoco la tuvo la Constitución de 1854 y las posteriores a esta, con excepción de la Constitución provincial de 1949 –vigente hasta 1956- que sí contuvo algunas regulaciones para al desarrollo cultural, aunque sin patrimonialización alguna.

VIGESIMOTERCERA

La legislación infraconstitucional mendocina se enrola en la postura de que la declaratoria como bien integrante del patrimonio cultural es constitutiva, es decir, que es a partir de su declaración que un elemento patrimonial adquiere protección, ya que dicha manifestación es la que produce su ingreso al universo patrimonial y el régimen tutelar diferencial que ello implica.

VIGESIMOCUARTA

La ley 6.034 de Mendoza contiene graves defectos que afectan negativamente el sistema protectorio del patrimonio cultural material y, mucho más, el de salvaguardia del PCI. Al referir exclusivamente a bienes con valor documental y cronológico, limita el acervo patrimonial cultural de la Provincia únicamente a los bienes materiales, dejando fuera de su regulación a las manifestaciones intangibles o inmateriales que carecen de materialidad y son expresiones vivas que transmitidas de generación en generación son recreadas constantemente con un sentimiento de identidad y continuidad por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.

VIGESIMOQUINTA

Aunque el Decreto reglamentario 1.882/2009 es la única norma en Mendoza que contiene alguna disposición referida al PCI, presenta grandes falencias de contenido y técnica regulatoria en cuanto no hace mención alguna a la mecánica de la declaratoria patrimonial ni, muchos menos, a las consecuencias de esa declaración, déficit que no se observa –en cambio- en relación a los bienes materiales regulados por la misma norma.

VIGESIMOSEXTA

Existen diversas desinteligencias normativas entre el decreto reglamentario del PCI y la ley reglamentada, de modo que el régimen reglamentario remite a preceptos legales que no guardan relación con dicha materia, situación que puede deberse a que la Ley 6.034 no contiene norma alguna que sea aplicable a la faz inmaterial del patrimonio cultural, haciendo que el desarrollo reglamentario referido resulte aislado y –por su naturaleza *praeter legem*- sin conexión real con el texto legal.

VIGESIMOSÉPTIMA

Las deficiencias y falencias observadas en la Ley 6.034 y el Decreto reglamentario 1.882/2009 exigen recurrir a una interpretación tendiente a la

integración del propio ordenamiento legal y, en última instancia, favorable a la salvaguardia del PCI, mediante procesos de autointegración y heterointegración del régimen jurídico; de modo de cubrir situaciones de anomia sobre aspectos elementales del PCI a partir de lo normado en relación a bienes materiales por la ley reglamentada como norma análoga. Aun así, dicha norma es muy pobre, dejando una laguna referida a la declaración de los mismos, a las medidas de salvaguardia, a los registros e inventarios, al acceso, a la participación de las comunidades, entre otras cuestiones.

VIGESIMOOCTAVA

Una interpretación que integre el régimen del patrimonio cultural, supliendo lagunas existentes en materia de PCI, permite identificar y definir los distintos elementos del PCI presentes en el territorio provincial, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, dando lugar a la declaración de su patrimonialización y registro, así como a su ulterior tutela, logrando así la autoridad de aplicación llevar a cabo las funciones que el propio decreto le otorga con respecto al PCI.

VIGESIMONOVENA

El patrimonio cultural, sea material o inmaterial, se encuentra sometido a las disposiciones contenidas en la legislación genérica en materia ambiental, en particular en la Provincia de Mendoza a la Ley 5.961, y sus regulaciones sobre política y preservación del entorno, tanto a partir de regulaciones administrativas como de procesos judiciales de tutela.

TRIGÉSIMA

En Mendoza, la Ley 5.961 establece la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Así, se desprende la exigencia de la audiencia pública con carácter general y obligatorio para todas las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que puedan producir

un impacto ambiental de relevante efecto, dentro de los cuales se encuentra, sin lugar a duda, al patrimonio cultural tanto material como inmaterial. En dicho procedimiento, es necesario que la autoridad ambiental satisfaga la participación y coordinación de las autoridades culturales mediante el dictamen correspondiente que satisfaga las previsiones de la Ley 6.034.

TRIGESIMOPRIMERA

La ley 5.961 es complementada por las Leyes 6.045 y 8.051, las que regulando las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial completan la tutela ambiental general y el patrimonio cultural específicamente.

En función de tales conclusiones, se comprueba la hipótesis formulada en relación a que el actual régimen jurídico de la provincia de Mendoza no garantiza una protección efectiva del PCI, situación que exige una adecuación normativa para satisfacer la manda constitucional de proveer a su protección.

En tal sentido, y satisfaciendo los objetivos planteados, se observa que a lo largo del desarrollo del presente trabajo se ha dado cumplimiento al objetivo general propuesto, consistente en el análisis pormenorizado de la conceptualización del patrimonio cultural inmaterial como bien jurídico tutelado y las herramientas jurídicas que existen a nivel internacional, nacional y provincial para lograr la protección efectiva del PCI.

Del mismo modo, respecto a la exposición de posibles estrategias de desarrollo normativo que resulten necesarias para superar falencias en las regulaciones de tutela que se planteó también como objetivo, se pueden mencionar las siguientes: la adhesión normativa de la Provincia de Mendoza a la Convención para la Salvaguardia del PCI (conclusión 17); el dictado de una norma de presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural con institutos imprescindibles (conclusiones 19 y 20); y el dictado de una nueva ley provincial que sustituya a la actual Ley 6.034 con los institutos imprescindibles para la protección y salvaguardia del PCI como así también un nuevo y consecuente decreto reglamentario de esa ley sin desinteligencias entre ambas (conclusiones 24, 25, 26 y 30).

BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Ábalos, María Gabriela, *Municipio y participación política: Análisis histórico, normativo y jurisprudencial,* 1° Ed., Mendoza: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo –EDIUNC- 2006.

Abrisketa Uriarte, Joana, *Hitos del Derecho de la Guerra en el siglo XX: Se consolida y evoluciona*, ISSN: 1133-0937 DERECHOS Y LIBERTADES Número 26, Época II, enero 2012.

Abrisketa, Joana, *Derechos Humanos y Acción Humanitaria*, ed. Alberdania S.L., Bilbao, noviembre de 2004.

Albiol, Claudia Ingrid, *Análisis de las precipitaciones de Mendoza entre 1970 y 2010: variabilidad, tendencia y comportamiento cíclico*. https://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2014/04/trabajo-albiol.pdf

Alonso Hierro, Juan y Martín Fernández, Juan, *Activos culturales y desarrollo sostenible: la importancia económica del Patrimonio Cultural*, Política y Sociedad, Vol.50 Núm. 3 1133-1147, 2013.

Armagnague, Juan Fernando, *Constitución de la Provincia de Mendoza anotada, concordada y comentada*, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2006.

Aruani, Susana (dir.), *Identidad, conciencia histórica y su relación con el patrimonio cultural*, 1ª ed., Mendoza, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 2007.

Augsburger, Alberto E., *La Convención Universal sobre Derecho de Autor en el ámbito de los países de América Latina y el Caribe*, boletín de Derecho de Autor, Unesco, 1987, nro. 3.

Badenes Casino, Margarita, *La protección de los bienes culturales durante los conflictos armados. Especial referencia al conflicto armado en el territorio de la antigua Yugoslavia*, ed. Universitat de Valencia, 2005.

Baldoni, María Clarisa y Cippitelli, Orlando Daniel, *"Protocolo de San Salvador". Un avance hacia la recuperación de los derechos económicos sociales y culturales plasmados en la constitución de 1949*, www.infojus.gov.ar, Id Infojus: DACF140139, 2014.

Barrenechea, María Eugenia, *Presupuestos Mínimos Ambientales*, Revista OIDLES, Vol. 2, N° 5, dic. 2008.

Bello, Ariadna; Cepeda, Marcelo; Piastrellini, Laura Emilia; Ramallo, Cecilia. (2007). *Artes populares latinoamericanas producciones estéticas de Chile, Bolivia y Argentina*. Monografía. Mendoza, Dirección URL del informe: http://bdigital.uncu.edu.ar/5775. Fecha de consulta del artículo: 10/06/15.

Beltrán, Lina Constanza, *La Gran Guerra y el nuevo sentido de la valoración del patrimonio cultural,* http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-306/la-gran-guerra.

Beltrán, Lina Constanza, *La Gran Guerra y el nuevo sentido de la valoración del patrimonio cultural*, www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-306/la-gran-guerra.

Benhamou, Françoise, *Economía del patrimonio cultural*, trad. Heber Ostroievsky, ed. Ariel, 2014.

Berberián, Eduardo E., *La protección del patrimonio cultural argentino: arqueológico y paleontológico. Ley nacional N° 25.743: Comentarios al texto*, 1° ed., Ed. Brujas, Córdoba, 2009.

Bidart Campos, Germán J., *Manual de derecho constitucional argentino*, 2ª ed., Buenos Aires, EDIAR, 1981.

Bidart Campos, Germán J., *Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T. VI La reforma constitucional de 1994*, Buenos Aires, EDIAR, 1995.

Brachetta, María Teresa y Ots., *Te contamos una Historia de Mendoza (de la conquista a nuestros días)*, 1 ed., Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo - EDIUNC, Mendoza, 2012.

Bugnion, Francois, *Génesis de la protección jurídica de los bienes culturales en caso de conflicto armado,* Revista Internacional de la Cruz Roja, 30//2004.

Caamiña Domínguez, Celia M. *La protección internacional de los bienes culturales en tiempo de guerra*, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 3, junio, 2004, pp. 73-107 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. Disponible en www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400302.

Cafferatta, Néstor "Normas de presupuestos mínimos", *Informe al COFEMA* [en línea]. Septiembre de 2003 [consulta: 28/01/2014]. – www.medioambiente.gov.ar/documentos/cofema/documentos/presupuesto_legislacion/informe_cafferatta.pdf-

Calabrese, Antonio, *La protección legal del patrimonio cultural argentino: arqueológico y paleontológico*, 1ª ed., Buenos Aires, Lumiere, 2012.

Calabrese, Antonio, *La protección legal del patrimonio cultural argentino: arqueológico y paleontológico*, 1era edición, Buenos Aires, Lumiere, 2012.

Camps Mirabet, Núria, *La protección internacional del patrimonio cultural*, tesis doctoral, Universitat de Lleida, Departament de Dret Públic, programa de Doctorat, Lleida, 5 de mayo de 2000.

Cano, Guillermo J., *Régimen Jurídico Económico de las aguas en Mendoza durante el período intermedio (1810-1884)*, Mendoza, Librería de la Universidad E. García Santos – Editor, 1941.

Cassagne, Juan Carlos e Ibarzábal, Milagros, *La protección del patrimonio cultural en la ley 27.103*, RDA 2016-105-677, Abeledo Perrot.

Castelli, María E. E., *Protección Jurídica del Patrimonio Cultural de la Humanidad*, Bias Editora, Buenos Aires, 1987.

Castellucci, Oscar J. y D'Amico, Juan Carlos (Recop.), *Compilación de Legislación Cultural Argentina*, Buenos Aires, Dirección de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación de la República Argentina, 1998.

Cevasco, María Elisa, *Diez lecciones sobre estudios culturales*, 1ª ed., Buenos Aires, la marca editora, Trilce, LOM, 2013.

Chiavazza, Horacio, *Las antiguas poblaciones de las arenas. Arqueología en las tierras áridas del noreste mendocino*, Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 2001.

Choay, Françoise, *Alegoría del patrimonio*, Arquitectura Viva, Nº 33, Madrid, 1993.

Cirino, Julio A. y Hubeñak, Florencio F., *Manual de la Historia de la Cultura Occidental*, 2da. ed., AZ editora, Buenos Aires, 1985.

Clarke, J.R., Analytical Archaeology, Methuen Ed. Londres, 1968, p.19, citado por M. PAOLA GONZÁLEZ CARVAJAL, *Régimen jurídico de protección del patrimonio cultural y de los pueblos indígenas en la legislación chilena*, inédita.

Conti, Alfredo, *La construcción del concepto de patrimonio en Argentina entre 1910 y 1940*, Anales LINTA 2008, Volumen IV, Número 2, 2009. pp. 23-30.

CRESPIAL (Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de América Latina),

- *Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial*, 1ª ed., Cusco, 2008.

- *Experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural en América Latina*, 2010.

Daifuku, Hiroshi, *Museos y Monumentos: el papel motor de la UNESCO*, Museum Internacional N° 197 (Vol L, n° 1, 1998) MUSEUM International: quincuagésimo aniversario, UNESCO, París.

Damsky, Isaac Augusto, *La protección del patrimonio cultural de Buenos Aires. Cinco elogiosas piezas judiciales y un pentagrama en blanco para la discusión pendiente*, publicado en: Sup. Adm. 2010 (agosto), 290, Cita Online: AR/DOC/5297/2010.

De Marco, Miguel Ángel, *La guerra del Paraguay*, 2ª ed., Buenos Aires, Booket, 2013.

Delgadillo Polanco, Víctor Manuel, *La dimensión económica del patrimonio cultural*, THROSBY, D. (2008), Economía y cultura, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Volumen 7, número 14, septiembre-diciembre, 2010.

Diario Los Andes, *El Pasaje San Martín cumple 75 años* (11/11/2001).

Ekmekdjián, Miguel Ángel, *Tratado de derecho constitucional. Constitución de la Nación Argentina, comentada, y anotada con legislación, jurisprudencia y doctrina, T. III (1995) y T. IV (1997)*, Ed. Depalma, Buenos Aires.

Esaín, José, *Competencias Ambientales*. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2008.

Esaín, José, Jurisprudencia Argentina, *El Federalismo Ambiental. Reparto de competencias legislativas en materia ambiental, en la Constitución Nacional, y en la Ley General del Ambiente 25.675*, artículo en prensa, Lexis Nexis.

Fach Gómez, Katia, *Algunas consideraciones en torno al convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente*, 2004.

Falcón, Enrique Manuel, *El sistema precautorio o la indeterminación en las ciencias en el campo ambiental*, RC D 526/2014.

Fernández Liesa, Carlos R., *Normas Consuetudinarias y Convencionales de Derecho Internacional en Materia de Restitución* en DICCIONARIO JURÍDICO DE LA CULTURA, coord. Margarita Fuenteseca; www.diccionario-juridico-cultura.com/voces/normas-consuetudinarias-y-convencionales-de-derecho-internacional-en-materia-de-restitucion.

Fiorani, Flavio, *II Guerra Mundial*, Trad. Elena del Amo, Tikal ediciones, titulo original Storia illustrata della Seconda Guerra Mondiale, Madrid.

Follet, Ken; *El invierno del mundo*; 4ª ed.; Buenos Aires; P&J; 2016.

Follet, Ken; *La caída de los gigantes*; 11ª ed. 1ª reimp.; Barcelona; Penguin P&J; 2017.

Francesc Josep de Rueda Roigé, *La protección internacional del patrimonio cultural en caso de conflicto armado*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Art, 1998-1999.

Freland, François-Xavier, *Captar lo inmaterial. Una mirada al patrimonio vivo,* París, UNESCO, 2009

Frigo, Manlio, *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2007.

García, María Inés; *Tito Francia y la música en Mendoza. De la radio al nuevo cancionero*; 1ª ed.; Buenos Aires; Gourmet Musical Ediciones; 2009.

García, Silvia P., *Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial. Argentina*, CRESPIAL, Cusco, Perú, 2005.

Gasparini, Lucia, *Il patrimonio culturale immateriale. Riflessioni per un rinnovamento della teoria e della pratica sui beni culturali*, Milano, Vita e Pensiero, 2014.

Gioja, Rolando I., *Planeamiento territorial y ciencias sociales*, 1ª ed., Buenos Aires, El Ateneo, 1979.

Gobierno de Mendoza, Dirección de Patrimonio, Museos y Bibliotecas, Archivo Histórico, *Monumentos y lugares históricos relacionados con la gesta sanmartiniana*, Serie: Investigaciones N° 4, Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, 1990.

Gómez Lee, Martha Isabel, *Protección de los conocimientos tradicionales en las negociaciones TCL*, 1ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004.

González Monfort, Neus, *El valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural*, Universitat Autònoma de Barcelona, consultado en http://pagines.uab.cat/neus.gonzalez/sites/pagines.uab.cat.neus.gonzalez/files/praxis_neusgonzalez.pdf.

González, Ariel W., *La Argentina y el esquema de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado: un desafío singular*, publicado en "Derecho internacional humanitario y temas de áreas vinculadas", Lecciones y Ensayos nro.

78, Gabriel Pablo Valladares (compilador), Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, págs. 165 a 184. CICR, ref. T2003.49/0003.

Henríquez Ureña, Pedro, *Historia de la cultura en la América Hispánica*, 1ra. ed., 8va reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1970.

Iriarte, Paula, *Fondo de compensación ambiental: su presente y su futuro*, trabajo presentado en el marco de la Diplomatura de Derecho y Política ambiental. Universidad Austral. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curso lectivo 2017.

Jáuregui, Ernesto; *Manifiesto del Nuevo Cancionero. Vigencia e influencia en la carrera de Música Popular*; Clang (N.° 4), pp. 78-84, abril 2016 ISSN 2524-9215.

Lacoste, Pablo (Comp.); *Mendoza. Historia y perspectivas. Aportes para el estudio de una ciudad fundada en 1561*; Mendoza; Diario Uno/Universidad de Congreso; 1997.

Lago, Daniel H., *Patrimonio cultural y medio ambiente*, REVISTA GERENCIA AMBIENTAL Nro. 9, pág. 622, THIBAUD, LEVIS Y ASOCIADOS, 1 de noviembre de 1994, Id Infojus: DACA980175.

Levrand, Norma Elizabeth, *Normas de presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural en argentina: ¿Posibles y vigentes?*, E-rph - Revista electrónica de patrimonio histórico, n° 16, junio 2015, pp. 33-51. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295665.

Lo Prete, Octavio (2013). *Tutela del patrimonio cultural: marco jurídico estatal* [en línea], Anuario Argentino de Derecho Canónico, 19. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/tutela-patrimonio-cultural-juridico.pdf

Löhr, Hanns Christian, *El mercader de la muerte: Goering y el robo de obras de arte durante el nazismo*, 1ª ed., Buenos Aires, Edhasa, 2012.

López Bravo, Carlos, *El derecho al patrimonio cultural*, tesis doctoral, Departamento de filosofía del derecho, moral y política, Universidad de Sevilla, 1997.

López Ramón, Fernando (Coord.), *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*, Instituto Nacional de Administración Pública, 1° ed., Madrid, 2017.

Lorenzetti, Ricardo L., *La protección jurídica del ambiente*, en la L.L. 1997-E-1463, citado por López Alfonsín, Marcelo A. en *Aspectos constitucionales del ambiente y de la responsabilidad por daño ambiental en el nuevo Código Civil*, en Revista de Derecho Público, 2015-1, ed. Rubinzal Culzoni.

Lorenzetti, Ricardo Luis (director), *Código Civil y Comercial de la Nación Comentado*. Tomo VIII. 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015.

LOUVRE. Las 300 obras maestras, ed. Museo del Louvre/Hazan.

Luna, Félix, *Confluencias*, ed. Sudamericana, Buenos Aires, 3ª ed., 1998.

Mariano, Mercedes Mariano y Endere, María Luz, *Reflexiones acerca de la protección del patrimonio intangible a nivel internacional, regional y su proyección en Argentina,* Conicet/Incuapa-Patrimonia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Martínez, Pedro Santos (Coord.), *Contribución para la historia de Mendoza*, 1ª ed., Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 1969.

Martínez, Pedro Santos, *Anotaciones históricas sobre el riego en Mendoza durante la década 1852-1862*, en Estudios en honor de Alamiro de Ávila Martel, AUCh, 5ª Serie, Nº 20 (1989).

Mathus Escorihuela, Miguel (Dir.), *Derecho y Administración de Aguas*, 1ª ed., Mendoza, 2007.

Mathus Escorihuela, Miguel (Dir.); Furlotti, Silvina; González del Solar, Nicolás; Lago, Daniel; Ruiz Freites, Santiago; Moyano, Amilcar; Pinto, Mauricio; Martín, Liber; Torchia, Noelia, *Derecho Ambiental Y De Los Recursos Naturales*, Mendoza 2006.

Milia, Juan Guillermo, *El gran genocidio. Primera Guerra Mundial 1914-1918*, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Dunken, 2015.

Murillo Castillo, Sebastián Alberto, *Protección jurídica al patrimonio cultural urbano en Chile, memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales*, Santiago de Chile, 2013.

Núñez, Marta, (Comp.); *Conflictos Ambientales en Tierras Regadías. Evaluación de impactos en la cuenca del río Tunuyán, Mendoza, Argentina*; Primera Edición: Mendoza; 2002; Ed. UNCuyo – Coeditores: FONCYT.

Ochoa Jiménez, María Julia, *América Latina y el concepto de cultura en el orden jurídico internacional*, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLV, núm. 135, septiembre-diciembre de 2012, pp. 1221-1238.

Ortiz Scilipoti, Pablo Darío, *Reseña histórica de la protección internacional del patrimonio cultural. Desde la Antigüedad hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial,* trabajo monográfico, abril 2016, S/E.

Ozollo, Javier y Repetur, León (Comp.), *Instrumentos de navegación en política y gestión cultural*, 1ª ed., Mendoza, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo-EDIUNC, 2011.

Pajuelo Teves, Ramón (coord.), *Experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina / Experiência e Políticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Inmaterial na América Latina*. Cusco, Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), 2010.

Parker, Philip, *Historia Mundial*, ed. El Ateneo, 2010, trad. Antón Corriente y José Luis López.

Peretti, Enrique, *Ambiente y propiedad*, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014.

Pérez Ghilou, Dardo, *Ensayos sobre la historia política institucional de Mendoza*, Secretaría Parlamentaria, Comisión de Cultura, Dirección Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, 1997.

Pinto, Mauricio Esteban (Coord.) y otros, *Ley de Aguas de 1884 comentada y concordada*, 1ª ed., Irrigación Edita, Mendoza, 2006.

Pinto, Mauricio, *"Instituciones de gestión de calidad del agua en Argentina"*, en Guevara Gil, A., Obando Licera, W. y Segura Urrunaga, F., La gestión de la calidad del agua en el Perú, PUCP: Lima, 2019, pp. 97-118

Ponte, Jorge Ricardo, *De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias. Cinco siglos de historia de acequias, zanjones y molinos*, 1ª ed., Mendoza, Unidad ciudad y territorio INHIHUSA-CONICET, 2005.

Ponte, Jorge Ricardo, *Historia del regadío. Las acequias de Mendoza, Argentina.* Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (07). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-07.htm> [ISSN: 1138-9788].

Ramila, Janire, *España en ruinas. Dos siglos de expolio del patrimonio artístico*, en Clio. Revista de Historia, año 12 N° 137, MC ediciones, Madrid.

Rey, Gonzalo H., - *La tutela del patrimonio cultural en la Constitución Nacional*, en La Ley Sup. Act. 06/08/2009, 1 cita online AR/DOC/2664/2009.

Riera, Pere, *Manual de Valoración Contingente*, 1994.

Rodríguez Bernal, Antonio Pedro, *La Convención de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 y su segundo protocolo de 1999. Aproximación, utilidad e implementación en España*, ed. Rodríguez Bernal Abogados. S/año Edición.

Rodríguez, Carlos Aníbal, *Derecho Ambiental. Patrimonio cultural e histórico*, en La Ley, 08/01/2014, 1.

Rodríguez Salas (dir), *Jurisprudencia Ambiental. 5 sentencias sobre la preservación de ambiente*, Mendoza: Gobierno de Mendoza, 1991.

Romero, José Luis, *La ciudad occidental: Culturas urbanas en Europa y América*, 1ª ed. 1ª reimpresión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013.

Rosatti, Horacio, *Consecuencias culturales de la tutela constitucional del medio ambiente*, en Revista de Derecho de Daños, T. 2011-1 Daño Ambiental, Ed. Rubinzal Culzoni.

Rosatti, Horacio, *Tratado de derecho constitucional*, 2 tomos, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2010.

Ruiz Freites, Santiago, *Legislación y Administración de Aguas en Mendoza*, en *Derecho y Administración de Aguas* (Miguel Mathus Escorihuela director), Ed. Privada Miguel Mathus Escorihuela, 2007.

Ruiz, María Cristina (Comp.), *Bienes Patrimoniales. Legislación de Declaratorias de Bienes del Patrimonio Cultural de la Pcia. De Mendoza*, Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 2001.

Ruiz, María Cristina (Comp.), *Patrimonio cultural*, Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 2005.

Sabsay, Daniel Alberto y Onaindia, José Miguel, *La Constitución de los argentinos. Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994*, 1ª edición, Buenos Aires, Errepar, 1994, pág. 140.

Sánchez, Víctor M. (Dir.) y ots. *Derecho Internacional Público*, Huygens Editorial, 2ª ed., Barcelona, 2010.

Schávelzon, Daniel, *La conservación del patrimonio cultural en América Latina. Restauración de edificios prehispánicos en Mesoamérica: 1750-1980*, Buenos,

Aires, Facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 1987.

Seghesso de López Aragón, M. Cristina, *Historia Constitucional de Mendoza*, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Mendoza, 1997.

Sevilla, Ariel y Sevilla, Fabián, *La vendimia para ver: 1936-2016*, 1ra edición, Mendoza, Ediciones Culturales de Mendoza, 2017.

Stabile, Simonetta, *Tutela e circolazione dei bieni culturali: Modelli internazionali, comunitari e nazionali*, tesis doctoral, Scuola Dottorale in Scienze Politiche XX Ciclo, Sezione "Studi Europei e Internazionali".

Steel, Danielle, *The Award*, 2017, Ed. Dell Random House, U.S.A.

Sudar Klappenbach, L. y Ross M., *Alcances teórico-conceptuales y jurídicos en la protección legal de los patrimonios privados. El caso del Fogón de los Arrieros (Chaco, Argentina). RIIPAC*, nº 7, 2015.

Sudar Klappenbach, L. y Ross M., *Alcances teórico-conceptuales y jurídicos en la protección legal de los patrimonios privados. El caso del Fogón de los Arrieros (Chaco, Argentina),* RIIPAC, Nº 7, 2015, páginas 1-21 [en línea: http://www.eumed.net/rev/riipac]

The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy, Lilian Goldman Law Library, Yale Law School, www.avalon.law.yale.edu/

Topete Lara, Hilario y Amescua Chávez, Cristina (coord.), *Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Cuernavaca, 2013.

UNESCO, *Carpeta de información sobre el patrimonio mundial*, París, Centro del Patrimonio Mundial, UNESCO, 2009

UNESCO, *La protección del patrimonio cultural de la humanidad. Lugares y monumentos*. París, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1969.

UNESCO, Revista El Correo de la UNESCO. Una ventana abierta al mundo, febrero-marzo 1979, año XXXII.

UNESCO, Revista El Correo, París, enero, 1967 - año XX.

Uribarren, María Sabina, *La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina entre 1938 y 1946: El patrimonio cultural y la*

construcción de una idea de Nación, Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 11, CIFFyH-UNC, Córdoba 2009.

Velasco, Honorio M., *Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio cultural inmaterial*, UNED, Departamento de Antropología Social y Cultural, Anales del Museo Nacional de Antropología XIV: 10-19, 2012.

Venini, Juan Carlos, *Tutela del patrimonio cultural*, en Revista de Derecho de Daños 2011-1, ed. Rubinzal Culzoni.

Vitali, Galileo, *Hidrología Mendocina. Contribución a su conocimiento.* Mendoza, 1940.

Weber, Alfred, *Historia de la Cultura*, 1ra ed. argentina, trad. Luis Recasens Siches, Argentina, 1980.

Zarini, Helio Juan, *Constitución Argentina comentada y concordada*, 1ª edición 6ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 2012.

Zendri, Liliana, *Dimensión económica del patrimonio cultural: Necesidad de adecuadas políticas en materia preservacionista*, en La Ley Online AR/DOC/2961/2001.

Zendri, Liliana, *La protección del patrimonio cultural de Argentina. De la legislación patrimonial a la consagración de un nuevo derecho,* Derecho y Ciencias Sociales. Abril 2017. Nº 16 (*Temas relativos al desarrollo regional y local)* Págs. 40- 55. ISNN 1852-2971. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. UNLP.

Jurisprudencia citada

Cámara Argentina de Pescadores de Monte Hermoso y otro vs. Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s. Acción de amparo - Recurso de inaplicabilidad de ley /// SCJ, Buenos Aires; 03/10/2012; Rubinzal Online; Ac. 71421; RC J 9173/12.

Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos vs. Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Provincia de Buenos Aires) s. Acción de amparo /// SCJ, Buenos Aires; 07/03/2007; Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires; RC J 6724/07.

Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos Anexo Biblioteca Popular vs. Municipalidad de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) s. Amparo - Medida

cautelar /// SCJ, Buenos Aires; 08/07/2008; Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires; A 68080; RC J 9232/10.

Comunidad de San José - Chustaj Lhokwe y Comunidad de Cuchuy vs. Provincia de Salta y otro s. Amparo /// CSJN; 15/10/2013; Rubinzal Online; C.1133.XLV; RC J 17612/13

Departamento General de Irrigación vs. Municipalidad de Godoy Cruz (Mendoza) s. Conflicto de competencia /// SCJ, Mendoza; 04/11/2009; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Mendoza; 89169; RC J 28/11.

Dougherty, Cristian y otros vs. Municipalidad de La Plata s. Amparo /// SCJ, Buenos Aires; 31/03/2004; Rubinzal Online; 64464; RC J 1706/04.

Figarsky v. Historic District Commission of City of Norwich, 368 A.2d 163; https://law.justia.com/cases/connecticut/supreme-court/1976/171-conn-198-2.html

Fundación SOS Comunidad vs. Provincia de Misiones s. Acción de amparo /// CSJN; 06/03/2007; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; F.1480.LXLI; RC J 12401/11

García, María Teresa vs. Municipalidad de San Isidro s. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos /// Cám. Cont. Adm., General San Martín, Buenos Aires; 13/10/2016; Rubinzal Online; 5278; RC J 7036/16.

Lubertino, María José vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s. Otros procesos incidentales /// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 02/03/2012; Rubinzal Online; 42140/1; RC J 1565/12.

Mendoza, Silvia Beatriz y otros C/ Estado Nacional y otros S/ Daños y Perjuicios" (pronunciamiento de apertura en competencia originaria); CSJN; Fallos: 326:2316.

Orden Público c/ 'Cien Bar - Café' - Propietario Luis Daniel Bravo - Infracción a los arts. 7, 8, 10 y 11 de la Ley Prov. N° 7.196 y 98, 99, 143 y 162 Ley Prov. N° 7.819. F-1.220 (J.P.L. de Jáchal Nº 5.001/11).

Palacio de Lois, Graciela (Ex. Feria N° 10/1998) vs. Poder Ejecutivo Nacional (PEN) s. Amparo - Ley 16986; 13/02/2001; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Cita: RC J 100061/09.

Pusso, Santiago vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Otros procesos incidentales /// Cám. Cont. Adm. y Tribut. Sala I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 26/09/2007; Rubinzal Online; RC J 1554/08.

Quesada, Ricardo C/ Municipalidad de Buenos Aires; La Ley, 1980-D-130.

Stessens, Ángel Bernardo A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Queja por denegación del recurso de Inconstitucionalidad; 14/12/2010; Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Páginas web consultadas

http://avalon.law.yale.edu/

http://ec.aciprensa.com/wiki/Iconoclasia.

http://festivales.buenosaires.gob.ar/2018/tangofestivalymundial/es/acerca#acercadeelmundial

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222986e.pdf.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-306/la-gran-guerra.

http://www.diccionario-juridico-cultura.com/voces/normas-consuetudinarias-y-convencionales-de-derecho-internacional-en-materia-de-restitucion

http://www.imc-cim.org/

http://www.imc-cim.org/

http://www.minculturas.gob.bo/es/articulo/3-organigrama

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400302

http://www.sigpa.cl/patrimonio-chile/

http://www.unesco.org/education/pdf/VALDERRA.PDF

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/the_index_translationum_always_at_the_forefront_of_innovatio/

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/.

https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/06/19/fondo-de-compensacion-ambiental-su-presente-y-su-futuro/

https://ich.unesco.org/es/RL/conocimientos-tecnicas-y-rituales-vinculados-a-la-renovacion-anual-del-puente-qeswachaka-00594

https://ich.unesco.org/es/RL/conocimientos-y-tecnicas-tradicionales-vinculadas-al-cultivo-y-procesamiento-de-la-curagua-01094

https://ich.unesco.org/es/RL/diablos-danzantes-de-venezuela-00639

https://ich.unesco.org/es/RL/el-arte-textil-de-taquile-00166

https://ich.unesco.org/es/RL/el-baile-chino-00988

https://ich.unesco.org/es/RL/el-candombe-y-su-espacio-sociocultural-una-practica-comunitaria-00182
https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-barranquilla-00051
https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-el-callao-representacion-festiva-de-una-memoria-e-identidad-cultural-01198
https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287
https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-oruro-00003
https://ich.unesco.org/es/RL/el-circulo-de-capoeira-00892
https://ich.unesco.org/es/RL/el-cirio-de-nazare-procesion-de-la-imagen-de-nuestra-senora-de-nazaret-en-la-ciudad-de-belem-estado-de-para-00602
https://ich.unesco.org/es/RL/el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102
https://ich.unesco.org/es/RL/el-filete-porteno-de-buenos-aires-una-tecnica-pictorica-tradicional-01069
https://ich.unesco.org/es/RL/el-mariachi-musica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575
https://ich.unesco.org/es/RL/el-patrimonio-oral-y-las-manifestaciones-culturales-del-pueblo-zapara-00007
https://ich.unesco.org/es/RL/el-pujllay-y-el-ayarichi-musicas-y-danzas-de-la-cultura-yampara-00630
https://ich.unesco.org/es/RL/el-punto-01297
https://ich.unesco.org/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-putchipuui-palabrero-00435.
https://ich.unesco.org/es/RL/el-tango-00258
https://ich.unesco.org/es/RL/fiesta-de-san-francisco-de-asis-en-quibdo-colombia-00640
https://ich.unesco.org/es/RL/frevo-arte-del-espectaculo-del-carnaval-de-recife-00603
https://ich.unesco.org/es/RL/ichapekene-piesta-la-fiesta-mayor-de-san-ignacio-de-moxos-00627
https://ich.unesco.org/es/RL/la-ceremonia-ritual-de-los-voladores-00175
https://ich.unesco.org/es/RL/la-charreria-tradicion-ecuestre-en-mexico-01108
https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400
https://ich.unesco.org/es/RL/la-cosmovision-andina-de-los-kallawayas-00048
https://ich.unesco.org/es/RL/la-danza-de-las-tijeras-00391
https://ich.unesco.org/es/RL/la-danza-del-wititi-del-valle-del-colca-01056

https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-la-virgen-de-la-candelaria-en-puno-00956
https://ich.unesco.org/es/RL/la-huaconada-danza-ritual-de-mito-00390
https://ich.unesco.org/es/RL/la-lengua-la-danza-y-la-musica-de-los-garifunas-00001
https://ich.unesco.org/es/RL/la-parranda-de-san-pedro-de-guarenas-y-guatire-00907
https://ich.unesco.org/es/RL/la-peregrinacion-al-santuario-del-senor-de-qoylluriti-00567
https://ich.unesco.org/es/RL/la-pirekua-canto-tradicional-de-los-purhepechas-00398
https://ich.unesco.org/es/RL/la-romeria-de-zapopan-ciclo-ritual-de-la-llevada-de-la-virgen-01400
https://ich.unesco.org/es/RL/la-rumba-cubana-mezcla-festiva-de-baile-y-musica-y-todas-las-practicas-culturales-inherentes-01185
https://ich.unesco.org/es/RL/la-samba-de-roda-de-reconcavo-de-bahia-00101
https://ich.unesco.org/es/RL/las-expresiones-orales-y-graficas-de-los-wajapi-00049
https://ich.unesco.org/es/RL/las-fiestas-indigenas-dedicadas-a-los-muertos-00054
https://ich.unesco.org/es/RL/las-parrandas-de-la-region-central-de-cuba-01405
https://ich.unesco.org/es/RL/las-procesiones-de-semana-santa-de-popayan-00259
https://ich.unesco.org/es/RL/la-tradicion-del-boyeo-y-las-carretas-00103
https://ich.unesco.org/es/RL/la-tradicion-del-teatro-bailado-rabinal-achi-00144
https://ich.unesco.org/es/RL/la-tumba-francesa-00052
https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupari-00574.
https://ich.unesco.org/es/RL/los-parachicos-en-la-fiesta-tradicional-de-enero-de-chiapa-de-corzo-00399
https://ich.unesco.org/es/RL/lugares-de-memoria-y-tradiciones-vivas-de-los-otomi-chichimecas-de-toliman-la-pena-de-bernal-guardiana-de-un-territorio-sagrado-00174
https://ich.unesco.org/es/RL/musica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-region-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099
https://ich.unesco.org/es/RL/recorridos-rituales-en-la-ciudad-de-la-paz-durante-la-alasita-01182
https://ich.unesco.org/es/RL/sistema-tradicional-de-jueces-de-agua-de-corongo-01155

https://ich.unesco.org/es/RL/tejido-tradicional-del-sombrero-ecuatoriano-de-paja-toquilla-00729
https://icom.museum/en/
https://icom.museum/es/
https://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2014/04/trabajo-albiol.pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdljk.htm.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
www.aquabook.agua.gob.ar
www.bibliotecadigital.uca.edu.ar
www.cabildonacional.cultura.gob.ar
www.charlesbabbage.edu.ar
www.charlesbabbage.edu.ar/Imagenes/BanderaPaz/Pacto%20Roerich%20y%20BP.pdf
www.ciudaddemendoza.gov.ar
www.crespial.org
www.cultura.gob.ar
www.fondoambiente.it/chi-siamo/
www.lanacion.com.ar/espectaculos/el-tango-con-todas-las-de-la-ley-nid173210
www.medioambiente.gov.ar
www.medioambiente.gov.ar/documentos/cofema/documentos/presupuesto_legislacion/informe_cafferatta.pdf-
www.nationaltrust.org.uk
www.nationaltrust.org.uk
www.oas.org
www.rubinzal.com.ar
www.scielo.org.mx
www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-07.htm
www.un.org
www.unesco.org
www.ushmm.org